

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Enero 2012

Editada en junio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Affers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 106

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Juan Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.
Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, La Opinión, Mapuexpress y Radio Cooperativa.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile
Cronología del conflicto social
Enero de 2012

Domingo 1

Habitantes de Puerto Natales, convocados a través de redes sociales, llenan la sala de audiencia del Tribunal de Garantía, donde expresan a viva voz su indignación por el daño causado al Parque Torres del Paine y del cual responsabilizan al turista israelí Rotem Zinger. Es acusado por provocar el incendio que ha arrasado con gran parte de éste, delito que es castigado sólo con una pena de cuarenta a 60 días de reclusión. A la salida del tribunal, unas 50 personas, en su mayoría trabajadores de empresas turísticas de la zona, intentan agredirlo, pero el personal policial que lo custodia logra ponerlo a salvo en el interior de su vehículo. Mientras Zinger evita enfrentar a la población, en la ciudadanía crece la indignación por el daño que está causando el incendio. Paola Gómez, operadora turística, manifiesta su enfado por las bajas sanciones que podría enfrentar el turista. “Entiendo que no fue intencional, pero no se imaginó el daño colateral que trae esto. No sirve que llegue a estar 60 días en la cárcel o que pague una multa. Se necesita de un castigo ejemplar para que nadie tenga la ocurrencia de prender fuego”, señala. A su vez, el Juzgado de Garantía decreta para el turista israelí arraigo regional, mientras dure la investigación. Esto significa que al menos tres meses deberá permanecer en Puerto Natales.

En Santiago, los alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), que mantienen el establecimiento tomado desde el 6 de junio –hace ya más de 6 meses– con el fin de exigir mejoras en el sistema educacional, deciden pasar la fiesta de año nuevo al interior de la toma. Alrededor de 15 personas se suman a las celebraciones: padres, madres y hermanos comparten un asado y les muestran su apoyo a sus hijos.

Grupos violentos realizan dos ataques violentos: el primero se realiza al vertedero de Boyeco, a sólo 13 kilómetros de Temuco, IX Región de La Araucanía; el segundo ocurre en un centro de acopio de madera en Cañete, VIII Región del Biobío. El más grave ocurre cuando un grupo de encapuchados armados reduce a dos ciudadanos del vertedero de Temuco, tras obligarlos a tenderse en el suelo bajo amenazas de muerte, rocían combustibles a cuatro máquinas y a la oficina de la administración para luego encenderle fuego, tras lo que los agresores huyen realizando disparos al aire. El atentado es reivindicado por la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), según panfletos encontrados en el lugar. En el segundo ataque, en Cañete, desconocidos queman una garita de madera y un camión-grúa estacionado en un centro de acopio que presta servicios a la forestal Volterra, en el Paicaví, a 5km al sur de Cañete. Las pérdidas entre los dos ataques son similares a un millón de dólares.

Lunes 2

Luego de 6 meses de tomas y desalojos se empieza a escribir un nuevo capítulo entre los alumnos de los liceos de Providencia y la municipalidad de la Región Metropolitana. La vocero del Liceo Carmela Carvajal, Danae Díaz, asegura que a ella y otras seis estudiantes les han cancelado la matrícula. Una situación similar enfrentan los liceos Lastarrias, Tajamar y N° 7 de Niñas. “Nos

dijeron explícitamente que no podremos estudiar aquí el próximo año, así que apelaremos y, de ser necesario, iremos a la justicia”, asegura Díaz, quien condiciona la entrega del recinto a que se revoque la medida.

Martes 3

Se da inicio a las actividades en conmemoración por los cuatro años del asesinato por la espalda del comunero mapuche Matías Catrileo. Se comienza en el Cementerio del Sendero de Temuco, donde se realiza un *llellepuni* –oración realizada por las machis sabias que protegen a la gente de la tierra. Posteriormente de la rogativa mapuche, la familia Catrileo Quezada, junto a centenares de hermanos y hermanas mapuches, y adherentes a la causa de los derechos humanos, realizan una marcha desde la Plaza Teodoro Schmidt por el centro de Temuco. La marcha se realiza en forma pacífica, concluyendo a las puertas de la sede del gobierno regional, en la Intendencia de la Araucanía. Luego de ingresar pacíficamente al edificio y desplegar un lienzo desde la azotea, Fuerzas Especiales de Carabineros procede a detener a los manifestantes, en forma violenta, resultando detenidas la madre y la hermana de Matías Catrileo, Mónica Quezada y Catalina Catrileo, junto a otros manifestantes, entre los que se encuentra el *werken* –mensajero– de la Federación Mapuche de Estudiantes (FAMAE), José Anacleto. Se registra que son alrededor de dieciséis los detenidos.

Miércoles 4

No más de 20 personas se reúnen en el paseo Ahumada para marchar, sin autorización, en recuerdo del cuarto aniversario de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo. Sin embargo, en alrededor de una hora, despliegan una inusitada violencia, y actuando de manera fulminante dejan una estela de fuego y destrucción por las céntricas calles de Santiago. La marcha comienza a desplegarse desde Ahumada por Compañía hasta llegar a Merced con San Antonio, y crece en número. Posteriormente, los manifestantes atacan a una carabinera que se encuentra de pie junto a su *scooter*. Por tener luz roja al frente, el grupo lanza una molotov hacia el cuerpo de la policía, quien logra esquivarla, suscitándose que la bomba incendiaria da de lleno en la moto. La turba compuesta luego por un centenar de manifestantes se dirige a la Alameda, donde levanta barricadas que logran interrumpir el tránsito por minutos. Rápidamente, los encapuchados se dirigen hacia Eleuterio Ramírez con San Ignacio, detienen un bus del Transantiago, bajando al conductor y a los pasajeros, rocían la máquina con combustible, y, según testigos, la incendian con bombas molotov. El bus –de la empresa Subus, la misma que perdió otra máquina en un atentado similar en avenida Grecia–, atravesado completamente en la calle, arde hasta alcanzar el tercer piso de la fachada de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago (UTEM), la que resulta con daños parciales. Carabineros vestidos de civil que llegan hasta el lugar logran aprehender a un joven de 21 años, encapuchado, que según la policía habría tenido participación directa en la quema del bus y supuestamente también en el ataque a la carabinera en moto.

Un atentado incendiario relacionado con la causa mapuche afecta esta madrugada al fundo Traipo, en la localidad de General López, en la comuna de Vilcún, a 20 kilómetros al Oriente de Temuco. Desconocidos ingresan al predio, propiedad del agricultor Tomás Echavarri, y proceden a quemar un galpón en cuyo interior hay una gran cantidad de material agrícola, como tractores, secadores de cereal, un camión tolva y otras maquinarias. Las pérdidas son evaluadas preliminarmente en tres

millones de pesos. En el lugar se encuentra un lienzo que dice “Matías Catrileo renace”.

La intencionalidad de los incendios forestales que han arrasado a 25 mil 100 hectáreas en la Región del Biobío, y una serie de ataques incendiarios en La Araucanía, mantienen en alerta a las empresas forestales, que evalúan acciones legales contra los presuntos responsables. En altas fuentes del gobierno se maneja la hipótesis de una serie de ataques planificada desde la cárcel donde cumplen condena los mapuches, que la fiscalía ha indicado como líderes de la CAM. La seguidilla – vinculada al cuarto aniversario de la muerte de Matías Catrileo en un enfrentamiento con carabineros– comenzó con la quema de un helicóptero que apagaba incendios forestales, la semana pasada. En esta línea, Inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) apuntan a un plan estructurado que atribuyen a la CAM por los atentados armados e incendiarios en La Araucanía y la Región del Biobío. Hasta ahora se han registrado seis, con pérdidas por cuatro mil millones de pesos, que la CAM se adjudica mediante lienzos, panfletos y un comunicado.

Jueves 5

Familiares de los Presos Políticos Mapuche (PPM) pertenecientes a la CAM difunden un comunicado-denuncia, donde informan que el módulo donde se encuentran los presos mapuches en la cárcel de Angol es allanado por personas de gendarmería y civiles no identificados, fotografiando y requisando documentación. Esto bajo el contexto de los últimos sucesos ocurridos en la región de La Araucanía, donde autoridades de gobierno han señalado tácitamente a la CAM como la responsable de los incendios forestales de la zona y que lleva al ministro Hinzpeter a invocar la Ley Antiterrorista por la denuncia que interpuso en el Tribunal de Carahue –por el incendio registrado en la zona el 31 de diciembre–, pese al rechazo de diferentes sectores sociales y de la comunidad mapuche.

Viernes 6

El presidente Sebastián Piñera lamenta el fallecimiento de siete brigadistas durante el combate a los incendios ocurridos en Carahue, región de La Araucanía. A su vez, el mandatario reitera la decisión del gobierno de invocar la Ley Antiterrorista para perseguir a los autores de los siniestros. “El gobierno tiene la información y la evidencia que detrás de muchos de estos incendios no están sólo el azar y la naturaleza, sino que también está la mano perversa que no trepida ante nada por causarles daño a otros chilenos y chilenas, destruir vidas, destruir viviendas, destruir bosques y destruir parques”, indica el mandatario. Además, agrega que tanto los incendios como la quema de un bus y de la moto de una carabinera en Santiago “refleja una actitud criminal y muy irresponsable de aquellos que creen que para lograr sus objetivos pueden simplemente sacrificar vidas, sacrificar propiedades o sacrificar sueños”.

Unos 30 encapuchados, que se separa de un grupo mayor que levanta barricadas y provoca desórdenes frente a la Universidad de Santiago de Chile (USACH), ataca la sede Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, en las inmediaciones de la casa de estudio. Los desconocidos lanzan dos bombas molotov al interior del inmueble, lo que provoca el incendio que destruye al menos tres oficinas. En el momento del ataque, ocho funcionarios trabajan en el lugar, los que tienen que huir de las llamas. Bomberos se hace presente en el lugar para controlar el fuego, que no alcanza a propagarse a los pisos superiores. Los encapuchados se dan a la fuga.

Representantes de movimientos sociales, organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, judíos y minorías sexuales protestan contra la Unión Demócrata Independiente (UDI), por la permanente oposición de la mayoría de los parlamentarios de ese partido al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. Esto luego de que días antes 35 parlamentarios de la UDI, nueve de Renovación Nacional (RN) y uno de la Democracia Cristiana (DC) presentaran al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento contra la inclusión de la diversidad sexual en la ley antidiscriminatoria, en trámite en el Congreso Nacional desde 2005. En el frontis de la UDI, los manifestantes despliegan banderas, lienzos, megáfonos y carteles donde se lee que “¿Los gay en la UDI salen del clóset y defienden su dignidad?”, “UDI, unión de intolerantes”, “La UDI y los derechos humanos como el agua y el aceite”, “Ayer apoyaron la dictadura y hoy la discriminación” y “Con este partido no hay libertad”, entre otras frases. Con megáfonos en mano, acusan además al partido de ser una sede del Vaticano que no representa a los chilenos y chilenas, y de crear artimañas para imponer a toda la ciudadanía sus creencias religiosas y valores, violentando de paso los derechos humanos de todos los sectores discriminados, no sólo de lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Junto al Movimiento de Liberación de Integración Homosexual (MOVILH) y al Movimiento de la Diversidad Sexual, protestan la asociación judía Anajnu –nosotros–, la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (AFAPS), el Movimiento de Mujeres por la Interrupción Legal del Embarazo (MILES) y la Corporación Humanas, instancias que resaltan que el proyecto antidiscriminación beneficiará a la mayoría de los chilenos y chilenas.

Sábado 7

Un número indeterminado de individuos quema dos casas y un galpón en la parcela N° 18 del fundo La Marina, en Villa Pidima, a 3 kilómetros de la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. Las llamas consumen la casa patronal y un galpón pertenecientes a Juan Torres Casas, y la vivienda del cuidador, identificado como Luis Rosas, quien se encuentra presente cuando su hogar y el de su patrón son atacados. Al lugar llegan bomberos para combatir el incendio. Ninguna organización se ha adjudicado el supuesto atentado.

La CAM es la organización mapuche que se ha adjudicado diversos hechos de violencia en el Biobío y La Araucanía. Sólo en las últimas semanas el grupo ha confirmado la autoría de cinco ataques a predios, instalaciones y maquinaria agrícola. La agrupación está en la mira porque en círculos del gobierno e inteligencia se sospecha que está tras el incendio que terminó con la vida de los siete brigadistas forestales. Los antecedentes disponibles –señalan fuentes de investigación– tienen que ver con elementos de contexto más que con pruebas directas que relacionen a algún cabecilla de la CAM, la mayoría de ellos en la cárcel. En los últimos atentados, la CAM se ha adjudicado la autoría en comunicados de internet o enviados a la prensa. Sin embargo, no se ha pronunciado respecto del siniestro de Carahue. Según fuentes policiales y judiciales consultadas, este caso es de una envergadura demasiado grande y no cualquiera querría cargar con siete muertos. Por lo mismo, que la CAM no haya enviado un comunicado deja de ser determinante para los investigadores. Según el análisis de fuentes de inteligencia, la quema de un helicóptero de Masisa, el 30 de diciembre, habría pretendido dar una señal potente que se enfoca hacia los incendios forestales. Otro factor analizado es la zona del fuego. El lugar donde mueren los brigadistas ha sido atacado con fuego hace más de una década por grupos violentos, según la policía. El área de Casa Piedra colinda con Puerto Choque y Lleu Lleu, en la Región del Biobío, donde la CAM tiene presencia. Pese a esto el alcalde de Carahue, Pedro Vera, ha negado que la agrupación tenga presencia en su comuna y rechaza que el incendio se vincule con el conflicto mapuche.

Estudiantes de universidades del Consejo de Rectores y de planteles privados participan de la primera reunión del año. En la primera reunión de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), realizada en Santiago, los estudiantes discuten sobre la proyección que tendrá el movimiento estudiantil este año. El presidente de la Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, explica que hay un llamado “a todo el mundo social que se movilizó el 2011 a realizar un balance de lo que hicimos el año pasado para aprender de los errores y comprender los aciertos y en conjunto poder proyectar las movilizaciones que van a continuar durante este 2012, porque entendemos que el gobierno no ha dado respuesta a nuestra demandas centrales”. Con esa reflexión explica el dirigente que estarán listos para enfrentar un nuevo año. El primer acto masivo está pensado para el 15 de marzo, aunque no detallan qué tipo de manifestación será. “Es un segundo tiempo de movilizaciones, porque entendemos que es necesario presionar al gobierno si queremos realizar cambios”, indica el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Noam Titelman. Otras de las resoluciones que toman los estudiantes en la reunión, que se extiende por casi diez horas, es exigir la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. José Anacleto, vocero de la FAMAE, explica que se toma esta resolución “por las irresponsabilidades policiales que cometió durante el 2011 con la ley Hinzpeter y lo que pasa hoy día con las comunidades mapuche, donde se está responsabilizando al pueblo de los incendios sin un juicio y sin un debido proceso”.

Domingo 8

Se realiza un gigantesco allanamiento a la comunidad Cacique José Guiñón, del sector de San Ramón, en la comuna de Ercilla. El allanamiento es dirigido por el general de la novena zona de carabineros, Ivan Bezmalinovic, quien además golpea personalmente a los detenidos. Este allanamiento se realiza con al menos 200 miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes han ingresado con armas cortas y largas, arrojando bombas lacrimógenas directamente a los domicilios de los comuneros, teniendo como resultado a dos personas heridas y a una mujer embarazada hospitalizada en Victoria. Los hechos tendrían relación con un ataque incendiario que afectó la casa principal propiedad de Juan Torres Casas, ex funcionario del ejército, además de contra la vivienda del cuidador y dos galpones en el fundo La Marina. Hay que recordar que recientemente la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso que ordena a Carabineros de Chile a abstenerse de realizar actos de violencia contra mujeres y niños y de lanzar bombas lacrimógenas en los patios de las viviendas particulares de la comunidad indígena ya referida.

Lunes 9

De los 16 liceos de Santiago que durante 2011 estuvieron en toma, sólo seis se mantienen aún ocupados. Sin embargo se espera que con la entrega del Instituto Nacional Barros Arana comience la desocupación del resto de los establecimientos, lo que no debería ir más allá del 20 de enero. En Provincia, la entrega comenzará con el Liceo Carmela Carvajal, siguiendo el Tajamar, que se llevará a cabo dentro de la semana. El José Victorino Lastarria y el Alessandri serían entregados a más tardar el 20. Paralelamente, los estudiantes del José Toribio Medina, uno de los tres liceos que permanecían en toma en la comuna de Ñuñoa –de los siete que estuvieron a lo largo del año–, deciden terminar con la medida de fuerza. Así, sólo siguen la toma en la Escuela República de Argentina y en la Brígida Walker. En el resto del país, sólo Puerto Montt y Concepción mantienen establecimientos en toma, mientras que en Tarapacá, Copiapó, Valparaíso, O'Higgins, Talca y

Coihaique ya han sido devueltos.

Mediante un comunicado, el vocero de los PPM, Héctor LLaitul, indica: “La Coordinadora Mapuche Arauco Malleco comunica al pueblo nación mapuche, a las familias de los jóvenes trabajadores fallecidos” y a la opinión en general “que frente a las acusaciones emitidas por personal del actual gobierno y parlamentarios de derecha señalamos, enfáticamente, que la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en el Fundo Casa Piedra en Carahue. Que, sin embargo, reivindicamos dicho predio como territorio ancestral mapuche usurpado por el empresario forestal, razón por la cual responsabilizamos a estos como los únicos causantes de esta tragedia, en tanto su insistencia en seguir explotando y depredando el *wallmapuche* [territorio], a cualquier precio, inclusive a costa de la vida de personas, como ha quedado demostrado en este caso. Que lamentamos, profundamente, la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores víctimas, también, del sistema económico, que laboraban en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las más mínimas medidas de seguridad y que fueron enviados al choque para defender los intereses económicos de una de las familias más ricas de Chile. Denunciamos que este montaje mediático obedece a una estrategia política, que busca justificar ante la opinión pública la aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM. Junto con lo anterior advertimos que dicha estrategia busca consolidar la Ley Antiterrorista como herramienta válida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbran mayores movilizaciones y luchas”.

Martes 10

Alumnas del Carmela Carvajal deponen toma, terminando con 216 días de ocupación. La encargada de recibir el inmueble es su directora, Rosa del Valle, quien no es bien recibida por las alumnas. Gritos, caceroleos, insultos y reclamos sobre “cancelación” de matrículas la acompañan durante todo el recorrido. Danae Díaz, vocera del liceo, explica que una de las razones de la entrega es la evaluación que tienen las alumnas en el sentido de que, una vez que se cierra el año académico –15 de enero–, la toma deja de ser una medida de presión efectiva. Aún así, destaca que “logramos consolidarnos como actores sociales críticos”. Sobre las 10 alumnas a las que se les “canceló la matrícula” dice que seguirán las acciones legales correspondientes. Dos alumnas son encargadas de descolgar el lienzo que, a la entrada del liceo, dice “Señoritas en toma”. Dos más se ocupan de llevar el que dice “La educación necesita sostén, no sostenedores” y de dirigir una marcha hasta la Municipalidad de Providencia como acto de cierre. Frente al edificio, las alumnas y un grupo de apoderados que las acompañan se manifiestan quemando algunos uniformes escolares.

Los siniestros forestales en tres regiones, entre el Maule y La Araucanía, ya han arrasado 35 mil 280 hectáreas. Uno de los últimos, iniciado en la zona del lago Lleulleu con 15 focos simultáneos, según denuncia la empresa forestal CMPC, es investigado por el mismo equipo de fiscales a cargo de aclarar los recientes atentados incendiarios en Cañete y Tirúa, los que se adjudican a la CAM. Paralelamente, a través de un comunicado público, firmado por Héctor LLaitul, la CAM rechaza ser la autora del incendio de Carahue y acusa gobierno de realizar “un montaje” para justificar la aplicación de la Ley Antiterrorista a las comunidades mapuches. La respuesta no tarda y el vocero Andrés Chadwick señala que “algunos incendios los reivindica y otros dice que no participa. El gobierno ha actuado con seriedad, ha pedido que se investigue, para poder determinar quiénes son los responsables”.

Un grupo de encapuchados bloquea la carretera 5 Sur de la Cantera de Metrenco, cercano a la comuna de Temuco, específicamente en el kilómetro 681. Ahí los manifestantes encienden barricadas, cortando el tránsito. Luego de esto se hace presente personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes lanzan bombas lacrimógenas, para posteriormente hacer ingreso a los sectores aledaños a la carretera, en donde se inicia la búsqueda de los responsables de los cortes. Carabineros realiza allanamiento a la comunidad José Gineo Ñanco, la que actualmente realiza movilizaciones en contra del proyecto de construcción del aeropuerto en su territorio. Mediante un comunicado, las comunidades del territorio denuncian que efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y carabineros ingresaron sin orden judicial a cuantas casa quisieron, rodeando la comunidad con dos helicópteros y doscientos agentes policiales. Detienen a dos mujeres que se encontraban protegiendo sus viviendas de las bombas lacrimógenas y de los disparos perpetrados por carabineros a sus animales: se trata de Guillermina Painevilu y Jessica Guzmán. Las mujeres reciben golpes en el rostro y en diversas partes del cuerpo. Estos atropellos se realizan en el interior de sus patios, a su vez que arrancan de los brazos de su madre a un niño de un año y medio. Francisco Painevilu, miembro de esa comunidad, indica que ambas mujeres no tuvieron participación en los incidentes.

Miércoles 11

Un grupo de manifestantes encabezado por la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) causa problemas de tránsito debido a cortes de calles en diversos puntos de la capital. Se trata de la segunda gran manifestación protagonizada por la FENAPO. La primera se realizó el 13 de diciembre de 2011 con resultados similares. Tal como pretendían los manifestantes, se producen atochamientos y la alteración del funcionamiento de algunas líneas del Metro. El objetivo es llamar la atención de la gente, y sobretodo del gobierno, ante las problemáticas causadas por el alza injustificada en los puntajes de la Ficha de Protección Social (FPS) –que impide a muchos ciudadanos acceder a uno de los sesenta y tres programas dispuestos por el Estado–, y el abandono en que se encuentran las familias damnificadas luego de que se cumplan casi dos años del terremoto del 27 de febrero. En ambos casos, se han prometido soluciones y, hasta la fecha, no se han cumplido.

Viernes 13

Los alumnos del INBA dan por finalizada la toma del establecimiento tras siete meses de movilización, en el marco de las demandas estudiantiles de los secundarios. El presidente del centro de alumnos, Diego Mellado, declara que “las condiciones y el nivel de consecuencia son características importantes dentro de nuestra comunidad, por lo tanto esto no termina aquí. Existe la nostalgia del proceso que quedó abierto y tenemos por misión terminar”. Agrega que el objetivo para este año es seguir movilizados para lograr que la educación sea gratuita. Mellado destaca que los estudiantes entregan el establecimiento sin daños, “lo que demuestra que nosotros no vinimos a jugar, esto no es un motel, esto es una forma de movilización y de generar conciencia”.

Diez alumnas del Liceo Carmela Carvajal, de Providencia, son notificadas de que, definitivamente, no podrán seguir estudiando en dicho establecimiento. Entre las expulsadas figura Danae Díaz, quien fue vocera de la toma del liceo que se prolongó por más de seis meses. La notificación es entregada por la directora del establecimiento, Rosa del Valle. Por lo menos a tres de las expulsadas

se les esgrime su participación en los incidentes acaecidos en la toma parcial del ex Congreso Nacional, en Santiago, cuando el entonces ministro del ramo, Felipe Bulnes, participaba en una reunión de la Comisión de Educación del Senado, para analizar el presupuesto 2012 de la cartera. Otra causal es la participación en la toma misma del liceo y una protesta a la Universidad Andrés Bello. La vocera de la toma, Danae Díaz, señala a *El Mercurio* que las causales invocadas son “sólo un pretexto”, que la decisión es tomada “desde arriba” y que se trata de “una persecución política”. Paralelamente, los padres y apoderados de las alumnas presentan una apelación a esta medida, que no es recogida por las autoridades pertinentes. Ante estos acontecimientos anuncian que estudiarán acciones legales.

Unas 500 personas, entre estudiantes, apoderados y profesores, se congregan en la Plaza Ñuñoa para protestar contra del alcalde de RN Pedro Sabat, por haber calificado de “puterío” a la toma del Internado Nacional Femenino. Se tiene como resultado de la jornada dos detenciones, y se registra también que la estudiante Natalia Torres, de diecisiete años de edad, fue alcanzada por una roca tras las escaramuzas entre estudiantes y carabineros.

Sábado 14

Satisfacción hay en el rostro de la directora del Liceo N° 1 de Niñas de Santiago, Julia Alvarado, quién dice “las estudiantes no sólo devuelven el colegio tras siete meses de toma, sino que además lo hacen en excelentes condiciones”. El interior del establecimiento está limpio, todos los vidrios se encuentran intactos, las sillas están ordenadas sobre las mesas en todas las salas y las oficinas de la dirección han permanecido cerradas durante su ocupación. “Siempre creí en mis alumnas. El 13 de junio nosotros firmamos un acta donde la presidenta del Centro de Alumnas, junto con su equipo, dejan establecido que iba a haber cuidado, y en este momento estamos comprobando que es así. Estoy tremadamente agradecida por eso”, afirma Alvarado tras recibir el establecimiento. La directora explica además que todas las estudiantes, incluyendo quienes repitieron de curso por su propia voluntad, tendrán matrícula en el colegio durante 2012. Las alumnas afirman que retomarán las movilizaciones este año, pero que se evaluarán los distintos caminos a seguir. “Entendemos que la toma ya terminó su proceso y vamos a buscar nuevos métodos para movilizarnos y organizarnos”, afirma la presidenta del Centro de Estudiantes, Daniela Serrano.

Acompañadas por miembros de su comunidad y bajo los auspicios del abogado Jaime Madariaga, Guillermina Painevilu y su hija Susana Guzmán llegan a las oficinas centrales de la Fiscalía Militar de Temuco. Presentan una querella criminal contra los responsables de la golpiza y detención ilegal de que fueron objeto el pasado martes 10 de enero en su comunidad, mientras observaban desde el patio de su casa una manifestación que fue disuelta por las Fuerzas Especiales de Carabineros. La acción legal busca procesar y condenar a los autores, cómplices y encubridores de los delitos de violencia innecesaria con los resultados de lesiones, detención ilegal y vejación injusta de que han sido víctima las denunciantes y sus hijos, según señala el escrito presentado.

Jueves 19

La primera arteria del país sufre daños a la propiedad publica y privada en actos de violencia espontánea, esto debido a la realización de marchas convocadas en redes sociales que no fueron debidamente autorizadas en el centro de Santiago. La primera de ellas se genera en la puerta

principal de la USACH. En esta espontánea convocatoria no se refleja un objetivo claro: en las manifestaciones participan alumnos y elementos ajenos al recinto académico. Como no tienen los permisos necesarios, actúa Fuerzas Especiales de Carabineros para disolverlos. El vicepresidente de la federación Felipe Salgado, niega cualquier vínculo de la federación universitaria o de algún dirigente de la misma con esta convocatoria, que culmina con la Alameda cortada entre Matucana y General Velásquez. Los enfrentamientos entre los manifestantes –que lanzan a la policía balones de gas, piedras y otros objetos contundentes– y las Fuerzas Especiales de Carabineros, concluye con 16 detenidos. A su vez, otra banda a rostro cubierto se toma calle Dieciocho a la altura de una de las sedes centrales de la UTEM. Ahí tampoco con un fin definido, cerca de 50 manifestantes paralizan el flujo vehicular y comienzan a levantar barricadas de escombros, a las que prenden fuego. Algunos encapuchados se trasladan hacia el parque Almagro. Después de una hora de refriega con la policía –donde los antisistémicos intentan hacer explotar balones de gas, que están presente al igual que en la USACH– son arrestados cinco individuos.

Con la intervención de carros lanza aguas y lanza gases, carabineros frustra la primera marcha callejera del año que intenta protagonizar un grupo de estudiantes en Valparaíso. Los incidentes se inician cuando un centenar de estudiantes intenta marchar desde la Plaza Sotomayor hacia la sede del Congreso Nacional, sin contar con el permiso correspondiente de la Gobernación Provincial. Carabineros procede de inmediato a disolverlos, pese a lo cual un grupo de 50 jóvenes, especialmente de enseñanza media, continúa con la protesta. A su vez, algunos de los manifestantes atacan con piedras a las fuerzas policiales en las inmediaciones de la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso. En total hay seis detenidos. La convocatoria a la frustrada marcha es hecha por estudiantes secundarios y universitarios, demandando mejoras en la educación y rechazo al proyecto de ley que busca controlar las manifestaciones masivas.

Viernes 20

Fuerzas Especiales de Carabineros realiza un allanamiento en la comunidad José Guiñón, ubicada en la zona Pidima, comuna de Ercilla, que deja como saldo un detenido. Carabineros confirma el operativo, en el cual se hace uso de bombas lacrimógenas, sin embargo no ha especificado la cantidad de efectivos, ni los motivos por los cuales se realiza esta acción policial. Según la versión de la comunidad, el allanamiento es violento, y el personal policial se lleva teléfonos celulares, una motosierra y herramientas de trabajo propios del campo, junto con algunas prendas de vestir.

Sábado 21

Se realiza una cabalgata, caminata, maratón, marcha y cicletada desde la Aldea Intercultural de Curarrehue hasta Flor del Valle, uno de los sectores más cordilleranos de la comuna, en defensa de la vida y el territorio amenazado por las grandes empresas. Una de las manifestantes, Anita Epulef, indica que “lo que pasa es que aquí en Curarrehue le están dando muchas solicitudes de agua a las empresas, pero a la gente que está solicitando agua de consumo, no se le está dando”. En la comuna existen más de ocho solicitudes de estudios de agua para instalar centrales de paso y pisciculturas, que se sumarían a las centrales proyectadas en los ríos Trancura y Panqui.

Lunes 23

En La Araucanía, dirigentes estudiantiles de la CONFECH se reúnen con comunidades mapuche de Ercilla, como un primer acercamiento que busca crear un vínculo a futuro. La primera de dos reuniones tiene lugar en la comunidad José Guiñón, en donde los dirigentes estudiantiles pueden conocer de boca de las propias familias la realidad que viven estas cada vez que se producen allanamientos por parte de la policía. Tras eso, se trasladan hasta el sector de Pailahueque, también en la comuna de Ercilla, para entrevistarse con familias de Loloko que mantienen tomado un predio que consideran ancestral. José Ancalao, dirigente mapuche que, a la vez, integra la CONFECH, indica que las conversaciones se centran en la Ley Antiterrorista y en los abusos que las familias indígenas sufren cada vez que se realizan operativos policiales al interior de sus comunidades.

Martes 24

Estudiantes secundarios entregan el Liceo Arturo Alessandri –el último ocupado de la Región Metropolitana– ubicado en la comuna de Providencia. La toma duró doscientos seis días, y su entrega está marcada por la tensión. En las graderías del patio, cerca de cincuenta estudiantes encapuchados y gritando consignas en apoyo al movimiento estudiantil esperan a la directora del establecimiento, Henna María Parada. Parada se niega a ingresar al recinto, indicando que “yo no entro donde hay encapuchados”. Posteriormente, los escolares marchan a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, sigla en inglés) para “entregar las llaves del liceo, como muestra de la desocupación”, dice su vocero, Moisés Paredes. Posteriormente, la directora ingresa al recinto estableciendo que las pérdidas son de 3 millones de pesos. Carmen Lacalle, directora de la Corporación de Educación de Providencia, señala que “indudablemente hay muchas pérdidas”. Al ser consultada sobre las dependencias, agrega que “este es uno de los peores [colegios]” que recibe tras las tomas.

Alrededor de 30 personas se toman las oficinas de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en Temuco. El grupo mantiene un áspero dialogo con el director del Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Los manifestantes exigen que se les entregue el dinero total de los programas de desarrollo territorial.

Alrededor de 446 trabajadores del *Call Center* Unísono se toman tres de los recintos de la empresa que funcionan en Santiago, ubicados en Apoquindo 4775, Portugal 1184 y Alameda 3322. Los trabajadores, quienes realizan una votación para hacer efectivas las medidas de presión, exigen un reajuste salarial líquido del 7% y un bono de término de conflicto de 200 mil pesos, entre otras demandas, y anuncian que estarán en paro de actividades hasta mañana. Isolina Acosta, trabajadora del *Call Center* –Centro de llamados– y dirigente nacional del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas (SINTRAC), asegura que en una jornada de 45 horas recibe un sueldo que bordea los 320 mil pesos con incentivo variable del 6%. “Nosotros –asegura– exigimos una remuneración fija y el traspaso del 100% del variable sin discriminación”. Sin embargo, –explica– la empresa ofrece sólo un reajuste salarial del 2%, que se materializa en un sueldo fijo de 303 mil pesos, “es decir, nos están ofreciendo 17 mil pesos menos”, reclama Acosta. Los trabajadores exigen, además, un reajuste según el Índice de Precios al Consumo (IPC) a partir de enero de 2012 y no de 2013, fuero complementario de 120 días adicionales, un bono trabajador-estudiante de 50 mil pesos, un bono de antigüedad laboral de 20 mil pesos por año, una asignación de locomoción de mil 900 pesos diarios y 2 mil 300 pesos a trabajadores de fuera de la zona urbana,

una asignación de colación de 2 mil pesos diarios y mejoras en las condiciones de higiene y seguridad y en la calidad de vida de los trabajadores para que todos puedan descansar 2 días seguidos con turnos de 5x2.

Miércoles 25

La comunidad Xapilwe, en la Región de La Araucanía, denuncia que sufren un nuevo allanamiento por parte de carabineros. Fuerzas Especiales de Carabineros ingresa a la comunidad disparando lacrimógenas y perdigones en las casas. Los comuneros se encuentran en ese momento trabajando en sus hortalizas, cuando se percatan del fuerte contingente de policía militarizada, que sin exhibir orden alguna, ingresa violentamente a las casas, rompiendo puertas, muebles y utensilios. Los *weichafe* –guerreros– de la comunidad, al darse cuenta de la agresión, se reúnen para hacer frente a la represión, por lo que se produce un fuerte enfrentamiento por cerca de media hora, hasta que logran expulsar a las fuerzas represivas.

Jueves 26

Una veintena de vecinos de Barrio del Cerro Alegre, de Valparaíso, protesta por el retraso de obras de remodelación. Acusan que los trabajos de remodelación están quedando mal y que la empresa a cargo de las faenas no avanza, por lo cual las calles aún siguen cortadas. El proyecto, que se realiza con fondos del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso y que fue encargado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), está destinado a mejorar zonas turísticas tanto del cerro Alegre como de su vecino cerro Concepción. Los trabajos consisten básicamente en la reposición de pavimentos y adoquines en 14 vías, además de la renovación de redes de agua potable y alcantarillado que presentaban daños evidentes. Los vecinos, que se reúnen en la calle Almirante Montt con Lautaro Rozas para protestar, señalan que reconocen la buena intención del proyecto, ya que su barrio, que se ha convertido en uno de los más visitados por los turistas, presentaba grandes falencias. “Nosotros no estamos molestos por el cierre de las calles ni estamos apurados para que se terminen luego. Estamos molestos porque se están realizando mal las obras, sin ninguna calidad y sin supervisión, por lo que vemos evidente que van a tener que realizarse de nuevo los trabajos”, explica el arquitecto Patricio Caorci, residente del cerro. El director del Programa de Recuperación Urbana de la ciudad, Roberto Barría, llega hasta el lugar de la protesta. Ahí afirma que buscarán comprobar las denuncias y que, de ser efectivas, se tomarán las medidas que correspondan.

Alrededor de quince encapuchados atacan con armas de fuego a efectivos de Fuerzas Especiales que retiran las barricadas que bloquean la Ruta 5 Sur, en el sector de Quepe, a 15km de Temuco. Luego de los enfrentamientos, el grupo huye disparando. Durante el ataque, uno de los carabineros queda herido con perdigones. Se trata del cabo primero Jorge Fuenzalida Moraga, quien recibe un impacto en una de sus manos y debe ser atendido en el Hospital Regional. “La mitad de los delincuentes están identificados, tenemos fotografías, videos. Sabemos quiénes son, dónde viven y qué hacen”, afirma el gobernador de Cautín, Miguel Mellado. Sin embargo, enseguida explica que la falta de pruebas ha dilatado su detención. “Tenemos que prácticamente detenerlos con las armas en la mano, disparando a matar, para convencer al juez y no los deje libres”, enfatiza. Los bloqueos de la Ruta 5 Sur en esa zona se han realizado en protesta por la construcción del nuevo aeropuerto regional que se levanta en ese sector y que grupos mapuches reclaman afectará a su entorno.

Sexto día de reivindicación territorial cumplen los integrantes de la comunidad Loloko que temen un desalojo de Carabineros. El Prefecto de Malleco descarta tal procedimiento asegurando que la presencia policial busca salvaguardar el bienestar de manifestantes y conductores. Quienes componen la comunidad Loloko inician lo que denominan un proceso de recuperación del fundo Santa Margarita, cercano a la Ruta 5, en el sector Pailahueque, por un predio que la Corporación Nacional de Derecho Indígena (CONADI) compró, pero que por trabas burocráticas –asegura el *werkén* Hugo Melinao– no se les ha entregado. Los manifestantes indican que no se moverán del lugar hasta que la CONADI les dé una respuesta sobre los terrenos que beneficiarían a los cerca de cuarenta habitantes de su colectividad.

Los trabajadores del *Call Center* Unísono no dan su brazo a torcer y continúan con el paro de actividades que iniciaron el martes 24 de enero, cuando se tomaron las tres sucursales de la Región Metropolitana. Los manifestantes desalojan voluntariamente las sucursales de Portugal 1184 y de Alameda 3322 y la empresa da orden de cerrarlas, no así las gerencia general de la empresa, ubicada en Apoquindo 4775, que está tomada por un par de horas por cerca de 15 trabajadores. Cuarenta carabineros, tres retenes móviles y dos patrullas se mantienen apostados en avenida Apoquindo. Los manifestantes denuncian que lanzan bombas lacrimógenas al interior para desalojar a quienes se encuentran en su interior. El gas tóxico repele a un grupo de trabajadores que son golpeados una vez que desalojan el recinto. Afuera de la empresa, aproximadamente 350 personas continúan manifestándose, sosteniendo lienzos y realizando cánticos. Isolina Acosta, dirigente nacional del SINTRAC, señala que la entrada de la gerencia general de Unísono está bloqueada por fuerzas especiales. Por ello, cortan la intersección con Coronel Ferreira por 15 minutos, para que carabineros despeje el lugar y un grupo de compañeros pueda ingresar y tomarse el recinto como forma de ejercer presión. Y así lo hacen. Luego, carabineros intentan ingresar al recinto para desalojarlo, pero los trabajadores burlan nuevamente a la policía uniformada. El lugar –aseguran– queda desocupado e inhabilitado para trabajar. Los trabajadores continúan manifestándose afuera y seguirán haciéndolo mientras no reciban alguna respuesta de parte de la empresa.

Viernes 27

Cerca de cuatrocientos trabajadores del SINTRAC y de la Coordinadora Sindical Unísono protestan en la entrada de Estación Central en Santiago. Los manifestantes, apoyados por trompetas, pancartas y cánticos, demuestran su descontento en su cuarto día de paro. A su vez, cinco trabajadores del *Call Center* Unísono suben cerca de 25 metros de altura en la entrada principal de la Estación Central, para manifestarse en contra de la transnacional española en demanda de un reajuste salarial y mejores condiciones laborales.

Dos manifestaciones simultáneas se dan por el mismo conflicto: el derecho a vivir en condiciones dignas. Por un lado, una veintena de pobladoras, que viven sobre un antiguo basural en Puente Alto, se toman la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Medioambiente; por otro lado, vecinos de Maipú, desde el otro lado de la ciudad, que esperan los terrenos para sus proyectos habitacionales, ingresan a dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todos son desalojados y detenidos por Fuerzas Especiales y conducidos hasta la 3^a Comisaría de Santiago.

Domingo 29

La FAMAE critica la eliminación de los contenidos de historia sobre los pueblos indígenas para las mallas curriculares de 5º y 6º año de educación básica. José Ancalao, *werkén* de la FAMAE, critica la decisión de la Unidad de Currículum del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) y acusa que este hecho vulnera los tratados nacionales e internacionales –como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo– y considera que es una burla en la cara para la pretensión de estos pueblos de poder incorporar sus temáticas en escuelas y colegios del país. El dirigente universitario lamenta el hecho, pues, dice, que dentro de las demandas del movimiento estudiantil está el incorporar las temáticas de historia, cultura y costumbres de los pueblos indígenas para avanza en la interculturalidad del país.

Lunes 30

En demanda de agua potable, comunidades mapuche pehuenches se toman la municipalidad de Lonquimay en respuesta a la negativa por parte del concejo municipal y del mismo alcalde de la comuna, Guillermo Vásquez, de patrocinar un proyecto de abasto de agua, necesario para cinco comunidades pehuenches, cuya licitaciones ya estarían hechas y que fue rechazado el pasado 26 de enero por la administración comunal. “Somos cinco comunidades las que hace 25 años que no tienen agua potable y que estamos siendo afectados por la sequía. Acá viven más de doscientas personas, a 75 kilómetros de Lonquimay. Necesitamos del agua. Es por eso que decidimos tomarnos la municipalidad”, señala Gerónimo Nahuelcura, dirigente mapuche.

Martes 31

Cerca de cien trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAPUAL) –con filiales en todo Chile– cumplen su octavo día de paro legal en demanda de un aumento de sueldo y mejoras en las condiciones laborales. Los manifestantes instalan un campamento de verano en la Alameda, a la altura de San Ignacio –lugar donde está ubicada la sede central de la empresa–, para demostrar que los empleados de la empresa se encuentran “desnudos ante el sistema y el empresariado”. Carabineros llega hasta el lugar e impide que continúen con la *performance*. Los trabajadores reciben un sueldo de 250 mil pesos mensuales, lo que, según la presidenta del sindicato en negociación, Claudia Galamdes, no corresponde a la cantidad de trabajo que realizan. Por ello, exigen un reajuste salarial del 10% que permita alcanzar los sueldos de mercado que tienen las demás cooperativas, considerando que CAPUAL es la segunda empresa del rubro más grande del país, reclama la dirigente. Galamdes sostiene que la empresa no cuenta con una escala de remuneraciones –evidenciando profundas desigualdades entre los sueldos de los trabajadores, así como una alta rotación en los puestos–, ni con un lineamiento de responsabilidad, ni con un convenio efectivo de seguros complementarios de salud ni de salas cunas que abarque a todo el territorio nacional. Por ello, exigen una política de recursos humanos, ya que hasta el momento no existe ninguna. La empresa rechaza todas las demandas de los trabajadores y solamente ofreció mantener las actuales condiciones de trabajo por 4 años más, lo que, en definitiva, es lo mismo que rechazan los manifestantes. En esa misma línea, la empresa CAPUAL decide descontar 7 días de sueldo a los manifestantes, siendo que llevan 4 días movilizados. Ante esta injusticia –como la califican los trabajadores–, se dirigen hasta la Inspección del Trabajo para poner la denuncia, que es considerada por la entidad, por lo que la empresa deberá pagar a los trabajadores el sueldo por los 7

días trabajados, señala el tesorero del sindicato, Braulio Cid Jorquera.

Glosario de siglas

AFAPS	Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos
CAM	Coordinadora Arauco Malleco
CAPUAL	Cooperativa de Ahorro y Crédito
CONADI	Corporación Nacional de Derecho Indígena
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
DC	Democracia Cristiana
FAMAE	Federación Mapuche de Estudiantes
FECH	Federación de Estudiantes Universidad de Chile
FENAPO	Federación Nacional de Pobladores
FEUC	Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
FPS	Ficha de Protección Social
GOPE	Grupo de Operaciones Policiales Especiales
INBA	Internado Nacional Barros Arana
INDAP	Instituto de Desarrollo Agropecuario
MILES	Movimiento de Mujeres por la Interrupción Legal del Embarazo
MINEDUC	Ministerio de Educación de Chile
MOVILH	Movimiento de Liberación de Integración Homosexual
PDI	Policía de Investigaciones
PPM	Presos Políticos Mapuche
SEREMI	Secretaría Regional Ministerial
SERVIU	Servicio de Vivienda y Urbanismo
SINTRAC	Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas
RN	Renovación Nacional
TC	Tribunal Constitucional
UDI	Unión Demócrata Independiente
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura
USACH	Universidad de Santiago de Chile
UTEM	Universidad Tecnológica Metropolitana

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización: Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, La Opinión, Mapuexpress y Radio Cooperativa.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Febrero 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 108

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Juan Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera. Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile
Cronología del conflicto social
Febrero de 2012

Jueves 2

En Santiago, cerca de medio millar de personas participan de una marcha para advertir que el movimiento estudiantil sigue en vacaciones. Carabineros ingresa a las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) con el objetivo de detener a los jóvenes, en su mayoría encapuchados –rostro cubierto–, que protagonizan serios incidentes en la Alameda. Luego de varios minutos de enfrentamiento, la policía uniformada ingresa a la USACH con carros lanza aguas, gases y a caballos, tras la orden dada por el rector Juan Manuel Zolezzi, deteniendo a varios de los manifestantes. Sin embargo, varios jóvenes logran salir y los incidentes se trasladan a la Alameda, frente a la Estación Central, lo que provoca la suspensión del tránsito. Al lugar llegan alrededor de 300 personas para participar en la segunda marcha de la época estival del movimiento estudiantil. La convocatoria llama a recordar a la sociedad que los estudiantes siguen en la lucha por una educación digna, de calidad y garantizada por el Estado. Los carteles también suman el rechazo a la Ley Hinzpeter, que coarta el derecho a la manifestación social y criminaliza el convocar a una marcha o tomarse un establecimiento educacional. Por su parte, las Fuerzas Especiales de Carabineros suman gases lacrimógenos más potentes a los tres carros lanza agua, cinco lanza gases, escuadrones de policías a caballo, cinco radiopatrullas, furgones y tres micros llenas de policías, situados en el lugar. Tras el actuar de carabineros se registran alrededor de treinta y dos detenidos.

Viernes 3

En Isla de Pascua, medio centenar de isleños grita consignas alusivas a la reivindicación de tierras ancestrales y en contra de la familia Shiess, dueña del Hotel “Hanga Roa”. Protestan de forma pacífica a las afueras del hotel. La vocera isleña, Marisol Hito, manifiesta su descontento y acusa la nula voluntad política del Ejecutivo para paliar la problemática y las nulas gestiones del Estado para recuperar los terrenos donde se sitúa el inmueble que, informa la vocera, pertenece a su familia. La vocera, al explicar el motivo que los lleva a protestar, hace hincapié en que los trámites siguen estáticos, por lo que se han visto en la necesidad de movilizarse frente al complejo, el cual está copado de turistas que contemplaban la protesta, desplazándose varias patrullas de carabineros, lo que acusa gran expectación. Marisol Hito reitera que se movilizarán todos los días, si es necesario, frente al hotel Hanga Roa, hasta que sean escuchados por las autoridades del Estado.

Martes 7

Inédita alianza se forma en Aysén para iniciar un proceso de movilización general. Pescadores artesanales, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Movimiento Ciudadano Patagonia Unida - Patagonia sin Represa (MCPU-PSR), junto a otras organizaciones, se unen en torno a reivindicaciones regionales. Entre sus planteamientos, convocan a “una gran movilización aysenina” para “generar las condiciones para

imponer un cambio en nuestro decadente desarrollo regional”. Uno de los primeros puntos es que se realice una “evaluación en justicia y equidad para establecer un mecanismo que amortigüe el alto costo del combustible (petróleo, bencina) que afecta a todos quienes vivimos en la región de Aysén”. Además se pone énfasis en la situación de los servicios básicos en su globalidad, las deficiencias en salud y, en general, el alto costo de la vida. En particular, los pescadores artesanales reclaman “tomar medidas urgentes para no permitir que siga sucumbiendo la pesca artesanal, producto de políticas públicas erradas que benefician esencialmente a los grandes industriales y extermen nuestros recursos hidrobiológicos, además de entregar derechos de pesca en propiedad y recursos bentónicos para los 3 mil pescadores de la región de Aysén”, todo lo cual se encuentra en petitorio de 19 puntos. Se registra que queman neumáticos sobre una embarcación que cruzan a la entrada del Puente “Presidente Ibáñez”, en Puerto Aysén, interrumpiendo el tránsito. Por otra parte, la CUT exige el establecimiento de un “sueldo mínimo regionalizado respetando el acuerdo de la Mesa Pública Privada con relación al 889”. Los productores de leña, la elaboración de una “política pública para la incorporación en igualdad de condiciones de los pequeños productores y distribuidores al proceso de leña de calidad, y apoyo para el incentivo del consumo de leña de calidad”. La ANEF, “estabilidad laboral y asignación de zona”. En tanto, el MCPU-PSR plantea “generar un procedimiento vinculante (plebiscito, consulta) para que sea la región la que decida sobre dos temas esenciales: la construcción de represas y el respaldo a Aysén como reserva de vida”.

Jueves 9

En Santiago Centro, pobladores agrupados en el movimiento ciudadano Aquí la Gente protestan contra la colusión de las farmacias, contra el indiscriminado alza de las tarifas de transporte y la revelación de documentos que acreditan que la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, ha evitado pagar contribuciones hace 30 años, rechazando además el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los manifestantes se congregan en Paseo Ahumada con Huérfanos, una de las esquinas más concurridas de la capital. Payas, ventas de diarios y libros, además de breves charlas y recolección de firmas contra la colusión de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y contra HidroAysén, entre otras demandas, es lo que acontece. Un alto número de personas se hace presente en la jornada de reclamo ciudadano.

Sábado 11

Unas 500 personas, según informan las organizaciones, se congregan en el paseo Mahuén de Puerto Aysén, respondiendo así al llamado que hizo el Movimiento Social por la Región de Aysén para hacer un cacerolazo en la localidad. La actividad incluye familias completas golpeando ollas por un cambio estructural en el tipo de desarrollo regional, y es un nuevo paso dentro de las actividades que se vienen organizando en tal sentido. En los últimos días, paulatinamente, diversos gremios y agrupaciones se han adherido a la convocatoria que el movimiento hizo hace algunos días atrás. Además de los pescadores, la CUT, Patagonia Unida, Patagonia sin Represas, la ANEF y sindicatos, se confirma en la comuna de Aysén la adhesión de los colectiveros, de distintas juntas de vecinos, de los comerciantes, los camioneros y de las agrupaciones de trabajadores, entre otros referentes.

Lunes 13

Alrededor de 50 personas se quedan sin poder volar entre Puerto Montt y Melinka, luego de que un grupo de 20 pescadores artesanales se tomara el aeródromo ubicado en isla Ascensión, archipiélago de las Guaitecas, en el norte de Aysén. Los trabajadores llegan al lugar en horas de la mañana, y en la tarde instalan una barricada en la pista y amenazan con interrumpir el transporte marítimo. Según explica el dirigente Marcos Silva, la protesta se debe a que “el gobierno quiere presentar una Ley de Pesca que afecta a todos los pescadores. Se está haciendo a espaldas de nosotros”. Además, acusa promesas no cumplidas por la intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, como la instalación de una planta procesadora. La gobernadora de Aysén, Claudia Alvayai, afirma que los proyectos están en marcha y que el gobierno tiene toda la disposición para reunirse y trabajar. No obstante, condena la toma.

Martes 14

Cerca de 50 pescadores se toman la carretera que une Puerto Aysén con Puerto Chacabuco, en apoyo a una protesta que el lunes iniciaron sus pares de Melinka, donde se tomaron el aeropuerto. La nueva manifestación impide que un grupo de turistas salga a Puerto Chacabuco, donde abordaría un crucero a la laguna San Rafael. Los pescadores reclaman por el aumento de la cuota de extracción de la merluza, el incumplimiento de proyectos prometidos por las autoridades y la colocación de posicionadores satelitales a embarcaciones de la X Región, para controlar su acceso a las aguas aiseninas, entre otros. El intendente de Aysén, Néstor Mera, afirma que el gobierno está abierto a dialogar y a trabajar en varios proyectos para la zona.

Más de 30 organizaciones sociales agrupadas en el movimiento “Aysén, tu problema es mi problema” toman la ruta 240 de la Región de Aysén, impidiendo el ingreso y la salida de turistas al puerto. Se reúnen en el sector de calle Kalstorm, frente a la cárcel porteña y en el acceso a Puerto Chacabuco, donde cortan el tránsito y encienden barricadas. El objetivo: que las autoridades regionales escuchen y se hagan cargo de las demandas que están exigiendo los habitantes de la región. Personal de carabineros llega hasta el sector donde se realizan las protestas y comienza a disparar a los manifestantes con bombas lacrimógenas y carro lanza agua, afectando a los habitantes que se encuentran en las viviendas cercanas del enfrentamiento. Los manifestantes responden la represión lanzando piedras en contra del aparataje anti manifestaciones de la policía uniformada. Un pescador resulta herido y es trasladado al Hospital de Puerto Aysén. Según los dirigentes sindicales y miembros de distintas agrupaciones regionales, las autoridades de gobierno han demostrado una “falta de compresión con el sector pesquero artesanal”. Pero cabe destacar que esa es sólo una de las diez exigencias que ha consensuado la agrupación. Algunos medios de comunicación insisten en señalar que estas manifestaciones sólo responden a las demandas del sector pesquero. No advierten que el movimiento “Aysén, mi problema es tú problema”, pretende iniciar un “proceso de movilización general permanente y de largo aliento, con el fin de gatillar un cambio en el desarrollo regional”, que convoca a diversas organizaciones dispuestas a plantear demandas y soluciones a las problemáticas que trascienden a los diversos sectores sociales. Entre las reivindicaciones regionales, se encuentra bajar el precio de los combustibles y el costo de la canasta básica, garantizar equidad y calidad en la salud, implementar en la región una universidad pública de alta calidad y formación académica, regionalizar los recursos naturales y generar un procedimiento vinculante para que la ciudadanía decida si quiere o no que se construyan represas, facilitar rutas de acceso para pequeños y medianos campesinos, otorgar una pensión regionalizada a los adultos mayores y discapacitados y, por último, tomar medidas urgentes para impedir el decaimiento de la pesca artesanal.

Mandados por la Intendencia Regional, carabineros de fuerzas especiales desalojan y destruyen las viviendas de 18 familias en Alto Hospicio, Iquique. El hecho se produce en la intersección de las calles Polonia con Gladys Marín, sector La Pampa. Pese a que un centenar de pobladores oponen resistencia a la destrucción de sus viviendas, carabineros, junto con personal de la Dirección de Aseo y Ornato del municipio, terminan por tumbar las mediaguas. Los terrenos pertenecen al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y la acción policial es mandada por la Gobernación Provincial de Iquique, que justifica la acción en que la ocupación del predio, en pleno desierto, es ilegal. Según los pobladores, la acción de carabineros es muy violenta.

Miércoles 15

Luego de la paralización de las actividades portuarias del día 30 de enero –en los puertos de Iquique, Mejillones, Antofagasta, Arica, Caldera, Chañaral, Tocopilla, Huasco, Coquimbo, San Vicente, Lirquén, Coronel y Schwager–, la cual respondía a la negativa por parte del gobierno de resolver la demanda histórica de los trabajadores portuarios, la Unión Portuaria de Chile convoca a una segunda jornada –de 48 horas– de detención de las faenas, la cual no desestima extenderse si no hay respuesta del Ejecutivo. La doble jornada de paralización de las faenas portuarias, responde a 30 años de cobro indebidos de impuestos a la renta por parte del Estado. Estudiantes y sindicatos del *retail* solidarizan con esta causa, advirtiéndole al gobierno de un 2012 que estará marcado por las movilizaciones de obreros y estudiantes. Según José Agurto, vocero de la Unión Portuaria del Bío Bío, la paralización de las faenas en su primer día, ya tiene al 100% de la actividad de la VIII Región detenida, mientras que a nivel nacional se ha llegado a un 80%.

Los habitantes de Aysén agrupados en el movimiento social “Aysén, mi problema es tu problema” continúan con sus movilizaciones. Se toman nuevamente el aeródromo de Melinka, el muelle y las instalaciones de Sernapesca en Guaitecas. La carretera Puerto Aysén - Chacabuco y la ruta que une Coyhaique con el aeropuerto Balmaceda están bloqueadas. El gobierno responde enviando policías militarizados a la región. Iván Fuentes, dirigente pesquero, indica que mil pesos cuesta el litro de gasolina en Puerto Aguirre, o sea, 300 pesos más que en otras ciudades del país, además de que un kilo de merluza cuesta 800 pesos, “o sea, el pescador debe extraer dos kilos de merluza para pagar un litro de combustible”.

Jueves 16

Un grupo de pobladores de la junta de vecinos de Afquintue, en la unidad vecinal N° 10 de la comuna de Loncoche, IX Región de La Araucanía, realiza una protesta pacífica frente al municipio de Loncoche con el objetivo de manifestar su rechazo al comportamiento desinteresado y prepotente de forestal Mininco, que nuevamente ha destruido los caminos vecinales por el paso constante de sus camiones madereros, sin siquiera acercarse a los dirigentes territoriales. Los vecinos de Afquintue, a través de su presidenta Verónica Pincheira San Martín y la directiva, manifiestan en una carta dirigida al alcalde de Loncoche, sr. Ricardo Peña Riquelme, que “Forestal Mininco ya hace un buen tiempo se encuentra realizando trabajos forestales en nuestro sector, conllevando un deterioro acelerado y excesivo del camino rural y principal acceso a nuestra comunidad, como también en los accesos laterales”. Establecen que han realizado gestiones para mejorar los caminos, razón por la que indican que “no podemos permitir, ni creemos posible que todo nuestro esfuerzo, y sacrificio para hacer de ella, una mejor y más llamativa localidad, sean

malgastados en reparar lo que la Empresa Forestal Mininco a destrozado. Lo más coherente frente a esta problemática sería que ellos se hicieran cargo por el maltrato de estos caminos”.

Tras cumplirse el cuarto día de movilización en la Región de Aysén, los pescadores de Melinka deponen la toma del aeródromo y el muelle de dicha localidad luego de aceptar el compromiso del gobierno regional a solucionarles un petitorio de once puntos. Marcos Silva, presidente de la Federación de Pescadores de la localidad, indica que “nosotros con esto damos por finalizado el conflicto. [...] Valoramos que las autoridades hayan venido hasta la isla y limado las asperezas”. Por su parte, Iván Fuentes indica que “Melinka es una parte de la región, nosotros –el movimiento “Aysén, mi problema es tú problema”– está representando a toda la zona. [...] Estamos hablando de rebajas de combustibles, de universidad pública de calidad, de equidad laboral, estamos hablando de regionalización de los recursos. [...] Si ellos han depuesto la manifestación, ningún problema; si han conseguido algo local, está bien, pero un pueblo con una intendenta no va a conseguir reformas de fondo”. Por ende, las movilizaciones continúan. Habitantes de la región participan en el sector alto de la ciudad manifestándose, exhibiendo banderas negras y chilenas, y haciendo sonar trompetas acompañadas de cánticos.

Viernes 17

Cientos de habitantes de la región de Aysén se manifiestan afuera de la Gobernación Provincial a la espera de que finalice la reunión entre los dirigentes del movimiento social y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Lejos de lograr un acuerdo –como el suscitado entre los pescadores y las autoridades de gobierno en Melinka–, las conversaciones, esta vez, no llegan a buen puerto. “El hombre no traía nada, no tenía ánimos de arreglar las cosas, no le habían informado acerca de las demandas que sostiene el movimiento. El hombre vino a gastar pasaje de bus, comida y todo eso, pagado por los chilenos. Lo que vino a hacer Ubilla es recoger el papel que la intendenta –Pilar Cuevas– le tendría que haber presentado 15 días atrás y no haber esperado cuatro días de movilización en la calle”, acusa Honorino Angulo, dirigente de los pescadores artesanales de Puerto Aysén. Mientras los ministros analizan la posibilidad de presentarse en la región, las movilizaciones en la zona continúan. Las carreteras hacia Puerto Chacabuco, Coyhaique y Puerto Cisne, y la vía de ingreso a la ciudad, el Puerto Ibáñez, siguen cortadas. En Chacabuco están ocupadas las dos puertas. El aeródromo de Puerto Aguirre permanece tomado al igual que el muelle y el aeródromo de Caleta Andrade. A varios kilómetros de Coyhaique, en la zona rural de Mañiguales, los vecinos se toman el acceso a la carrera Austral. Producto de los bloqueos, el combustible y otros insumos básicos son cada vez más escasos. “No vamos a dejar pasar combustible hasta que las autoridades solucionen nuestros problemas”, advierte Honorio Angulo. Otro grupo de 300 manifestantes mantiene la toma de la carretera que une Balmaceda con Coyhaique. Los vecinos de Chile Chico, también comienzan a movilizarse. El alcalde de la localidad, Luperciano Muñoz, del Partido por la Democracia (PPD), apoya la protesta social.

Desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste inician una huelga de hambre líquida, en el marco de la Jornada de Solidaridad Internacional para apoyar a estos tres imputados por el asalto al Banco Security. El 18 de octubre de 2007 es asaltado el Banco Security en el centro de Santiago, donde –tras un enfrentamiento a balazos– termina muerto el cabo de Carabineros Luis Moyano, quien intentara repeler el atraco. Del robo se acusa a Juan Manuel Aliste Vega, Carlos Gutiérrez Quiduleo, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Frey Fuentevilla Saa. A los dos últimos se les acusa de dar muerte al policía. Luego de una intensa

búsqueda, en diciembre de 2009, Villarroel –ex Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Lautaro– y Fuentevilla –ex Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)– fueron entregados por la justicia argentina a la chilena, tras haber sido condenados por el país transandino a tres años y medio por porte de armamento de guerra. Éstos, junto a Aliste –ex MAPU Lautaro–, permanecen desde ese momento en el CAS de Santiago. Sólo Carlos Gutiérrez permanece prófugo y en la clandestinidad. “Después de casi 4 años, la investigación sigue abierta y se funda en la declaración de una persona. Esta declaración, vigilada y monitoreada por la policía uniformada a través de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR), Investigación de Organizaciones Criminales (OS9), y Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR), se instala como su prueba científica. Ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Interior, ni los bancos querellantes, siquiera las policías, tienen los elementos necesarios para condenarnos, y eso es porque simplemente no existen”, han declarado desde la cárcel los acusados. Indican que las razones de la huelga no contemplan ninguna demanda de corte reivindicativa intracarcelaria. Es más bien un gesto de resistencia ofensiva anticapitalista.

Sábado 18

Fuentes de La Moneda señalan que informaciones de inteligencia revelan la presencia de activistas anarquistas, ajenos al movimiento, en las manifestaciones, algunos de los cuales portarían armas de fuego. Las mismas fuentes indican que dirigentes estudiantiles se estarían trasladando a la zona y que con ello se podría radicalizar el movimiento, con protestas más activas y violentas.

Domingo 19

La confirmación de que los gremios de transporte –camiones y colectivo– de Coyhaique adhieren a las demandas que exige el Movimiento Social por la Región de Aysén (MSPRA), y en especial a la necesidad de que este lunes lleguen a la región los ministros de Salud, Hacienda y Energía, es el resultado de una asamblea realizada en la ciudad. En ésta participan unos cien dirigentes de organizaciones sociales, productivas, estudiantiles y de trabajadores, que expresan el apoyo incondicional de la ciudadanía de la comuna a los 11 puntos presentados este jueves al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. Se mantienen los cortes de rutas entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco y Coyhaique. Está tomado el Camino Longitudinal Austral a la altura de Puerto Cisnes, donde también está ocupado el muelle. Además, está bloqueada la emblemática ruta en los accesos de entrada y salida a Puyuhuapi, y a la altura del puente Rosselot de acceso a La Junta en el norte de la región. En Coyhaique se han organizado varias caravanas de vehículos y hay un bloqueo en el ingreso a la capital por parte de taxistas colectivos. Las tomas de muelles y caletas se están dispersando a lo largo de todo el litoral aisenino, como Puerto Aguirre, Estero Copo y Andrade. En Chile Chico están bloqueados los accesos a la minera Cerro Bayo y a la localidad. Por lo pronto, se informa que llegarán de Puerto Aguirre unos 300 pescadores artesanales con el fin de apoyar las movilizaciones.

Lunes 20

Antisociales vuelven a tomarse las calles de Coyhaique. La Intendencia y otros edificios son atacados a piedrazos, lo mismo que un servicentro Copec. Además, la distribuidora Adelco es

saqueada nuevamente. Posteriormente, casi la mitad de la ciudad queda sin luz. Hay diez detenidos por robos y desórdenes y cuatro carabineros lesionados. En tanto, en Santiago, 15 detenidos y un carabinero atropellado es el saldo de una marcha a favor de las exigencias de la comunidad de Aysén, la que deriva en disturbios. La actividad congrega a unas 300 personas.

Martes 21

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, más de un centenar de personas marchan por las calles de Temuco para demandar medidas políticas concretas para revitalizar la lengua mapuche. La colorida marcha cruza las principales calles céntricas de Temuco cantando y lanzando consignas en *mapuzugun*, provocando la sorpresa y admiración de los transeúntes que circulan por el centro. Entre las medidas solicitadas se encuentran la integración del *mapuzugun* al sistema educativo en la región, modificación de nombre de plazas y calles que ofenden la memoria histórica, el avisaje bilingüe en los terminales de buses de la región y que la señalética pública sea bilingüe en la región. La marcha concluye con un acto artístico cultural en la céntrica Plaza Leftraru, donde participan diversos artistas.

El puente Presidente Ibáñez, ícono de Puerto Aysén y espina dorsal de 210 metros de largo que une las dos mitades de la ciudad, cruzando el río Aysén, es escenario de una de las jornadas más violentas desde que hace 11 días se iniciaran las movilizaciones sociales en la IX Región. Unos 800 manifestantes –algunos encapuchados– cortan con barricadas el paso por ese monumento histórico, y atacan a los carabineros con piedras y bombas molotov. Carabineros logra despejar el puente usando gases lacrimógenos y balines. Los manifestantes denuncian que la policía usa balines de metal, llegando incluso a lanzar los gases irritantes a las casas aledañas al fogón. Según informaciones recibidas, nueve personas resultan heridas y cinco detenidas, entre los que se encuentran los hijos de Iván Fuentes y Misael Ruiz, dirigentes del movimiento “Aysén: Tu problema es mi problema”. Algunos de los manifestantes heridos en los enfrentamientos acuden al hospital de Puerto Aysén, pero rápidamente se van, debido a que carabineros comienza a detener a las personas que llegan heridas. Por ello, vecinos con conocimientos médicos, atienden a los lesionados en sus respectivos hogares, según indican los manifestantes.

Miércoles 22

Dirigentes sociales y sindicales se toman una comisaría de Coyhaique en rechazo a la intensa represión policial sufrida el día anterior en el sector, donde aproximadamente nueve heridos y cinco detenidos es el saldo que deja la represión efectuada por las fuerzas especiales. En el lugar, exigen los manifestantes, que este lunes esté listo el sumario por la violencia innecesaria contra los habitantes de Aysén y que cese la represión policial. Se informa además que siete de las diez municipalidades pertenecientes a Aysén se suman al paro indefinido. Paralelamente, en la Plaza de Armas de Coyhaique, cientos de personas participan de un cacerolazo en apoyo al movimiento regional. También hay cortes de luz en algunos sectores de la ciudad.

Alrededor de cuatro encapuchados emboscan y atacan a una caravana compuesta por cuatro vehículos de la empresa forestal Cerda, uno de los cuales resulta destruido por las llamas. El atentado ocurre cerca del fundo Centenario, en el sector de San Ramón, a unos 12 kilómetros al poniente de la ciudad de Ercilla, IX Región de La Araucanía, cuando el grupo de delincuentes

armados con escopetas bloquea el camino con troncos y obliga a descender a los trabajadores del primer vehículo y luego procede a quemarlo. El incidente no deja heridos. Hasta el lugar del ataque concurren bomberos de Ercilla y personas del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Ambas policías también realizan un operativo en el sector, pero no hay detenidos.

Jueves 23

Unas 20 personas se toman de manera pacífica por más de una hora la Intendencia regional de Aysén con parches en la boca, carteles que piden parar con la represión policial, banderas negras y lienzos con mensajes como “tu problema es mi problema”. En tanto, unos 20 habitantes de Villa O’Higgins, en la zona sur de la Región de Aysén, ocupan momentáneamente la pista del aeródromo en apoyo al movimiento regional. La movilización, que se prolonga por más de seis horas, impide la operación de aeronaves, entre ellas un aparato del empresario Andrónico Luksic, de vacaciones en la zona. El avión trasladaría a Santiago a seis pasajeros, amigos del empresario. Luksic intenta conversar con los manifestantes de que despejen la pista para permitir el despegue, pero la negociación no prospera, lo que obliga al grupo a retornar a la estancia Las Margaritas.

En Viña del Mar, alrededor de 30 estudiantes se han apostado en las afueras del hotel Sheraton Miramar para protestar de manera pacífica gritando consignas alusivas a la reforma educacional y el conflicto de Aysén. Los estudiantes reclaman porque, mientras la gente disfruta el festival de Viña del Mar, en la Región de Aysén hay violencia y represión por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros, además de que se olvidan los temas de educación que se impusieron en la opinión pública durante gran parte del año pasado.

Viernes 24

Unos 200 pescadores artesanales ocupan el sector Tres Puentes, el primer acceso a Punta Arenas, XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, para expresar su apoyo a quienes protestan en Aysén y su rechazo a la Ley de Pesca. Con vehículos y barricadas, los manifestantes bloquean durante seis horas el tránsito vehicular. Luego de una reunión con el intendente Arturo Storaker en el mismo lugar, la ruta es despejada. Fernando Carmona, dirigente de los pescadores artesanales, dice que estas medidas de fuerzas se multiplicarán en otras regiones “como un efecto dominó”.

Sábado 25

Unos 400 manifestantes cortan el flujo vehicular en la ruta 5 Norte a la altura del sector Quebradilla de la comuna de La Ligua, V Región de Valparaíso. El hecho genera un taco de proporciones y da paso al actuar de carabineros, quienes en un número aproximado de sesenta efectivos la emprenden en contra de hombres, mujeres y niños que protestan pidiendo a las autoridades solución inmediata al conflicto. La convocatoria por solucionar la grave sequía afectada a la provincia de Petorca pudo haber terminado en tragedia debido al actuar represivo de carabineros de las fuerzas especiales, pocas veces visto en la zona. Los manifestantes deben enfrentar los gases lacrimógenos y el accionar de carros lanza aguas. La dirigente social de Petorca Ondina Figueroa es golpeada hasta quedar inconsciente, y luego arrastrada por más de 15 metros por efectivos de Fuerzas Especiales de

Carabineros. Particulares que se encuentran en el lugar la trasladan de urgencia al Hospital de La Ligua, donde es atendida con diagnóstico de contusiones múltiples. El gobernador provincial Andrés Leiva se compromete con los dirigentes del movimiento a iniciar una investigación con el objetivo de determinar responsabilidades ante el uso excesivo de fuerzas por parte de carabineros.

El clima de tensión que desde hace dos semanas se instala en la XI Región tiene una tregua. Tras las propuestas de solución a sus demandas entregadas por el Movimiento Social por Aysén al gobierno, sus principales dirigentes deciden dar una “señal de amistad” para retomar las negociaciones con el Ejecutivo. Esto se materializa en una flexibilización del bloqueo de rutas, lo que permitiría que tanto Puerto Aysén como Coyhaique reciba su primer abastecimiento de abarrotes, verduras, carne, lácteos y combustible. Sin embargo, el vocero del movimiento, Iván Fuentes, aclara que se trata de una medida transitoria y que su objetivo es no afectar a los propios habitantes de la zona. “La movilización sigue mientras no haya señales de que el gobierno a nivel nacional tomará en serio las demandas”, indica.

Domingo 26

Cerca de 80 vecinos y propietarios del edificio Central Park, en Santiago, se congregan para protestar por los retrasos y la falta de apoyo del gobierno en la restauración, ya que fuera inhabilitado por la dirección de obras después del último terremoto. Los vecinos levantan barricadas en protesta por los retraso en los arreglos. El edificio Central Park, de 19 pisos y 170 departamentos, está ubicado en Balmaceda 2150 y se encuentra inhabilitado desde hace 2 años. El edificio tenía seis años de antigüedad al momento del terremoto de febrero de 2010, que ocasionó un colapso de pilares y daños estructurales que derivaron en el decreto de inhabitabilidad por parte de la municipalidad de Santiago. Los propietarios se organizaron y lograron que la empresa se comprometiera a pagar 6 meses de arriendo y mudanza, mientras que a los arrendatarios se les pagó mudanza y bodegas, plazo que se ha extendido de acuerdo a la demora de las reparaciones. La inmobiliaria propuso un proyecto de reparación, en tanto los vecinos contrataron a un calculista que informó que a pesar de las fallas estructurales en la construcción, de diseños y materiales, es posible de reparar. A más de un año del terremoto, es un caso que aún no se resuelve. El ingeniero indica que el edificio puede ser reparado en un período de seis meses. Sin embargo, la Inmobiliaria IGSA no tiene contemplada esta solución y prefiere la recompra de la totalidad de los departamentos del edificio, requiriéndose para ello una aprobación del 80% de parte de la comunidad de vecinos. En este aspecto, la inmobiliaria desea que la recompra se realice al valor en el año 2003, mientras los propietarios consideran que el valor debe ser reajustado de acuerdo al actual valor de la UF y que las pólizas de seguro no deben entregarse a la empresa.

Tras el anuncio realizado el sábado por el Movimiento Social por Aysén, respecto de que a partir del domingo se permitiría el paso de suministro a la zona, en Coyhaique las bencineras amanecen con filas de vehículos de hasta dos kilómetros esperando cargar combustible tras más de una semana de desabastecimiento. Pero éste nunca llegó. La señal de “buena voluntad” para retomar las negociaciones que pretendía dar el movimiento chocó con la decisión del gremio del transporte, que endureció su postura. El dirigente Javier Rozas es uno de los primeros en afirmar que no se permitirá el paso de ningún camión, hasta que no exista una respuesta “clara y concreta” del gobierno respecto de una rebaja al combustible. Esto obliga a los principales líderes del movimiento social, encabezados por Iván Fuentes, a viajar desde Puerto Aysén a Coyhaique para intentar convencer a los transportistas de que depongan la medida. Posteriormente se reúnen en la sede de la

ANEF en Coyhaique, indicando Iván Fuentes que “faltaba este encuentro, de piel a piel con todos los gremios”. Finalmente, deciden apoyando la decisión de los camioneros respecto del bloqueo. Tras esto, el presidente de los transportistas, Nelson Ramírez, califica las diferencias como “un problema de información”, indicando que permitirán sólo el paso de combustible para los vehículos de emergencia, como los de Carabineros, ambulancias y los de Bomberos, además de que se permitirá el paso de vehículos de gas para Puerto Aysén.

Lunes 27

Tal como todas las noches desde hace dos semanas, vecinos de Aysén y Coyhaique levantan fogatas familiares y barricadas como señal de protesta ante la ausencia de respuesta de las autoridades a sus demandas. Todo es pacífico hasta que llegan efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros a la población O’Higgins, quienes vuelven a lanzar gases lacrimógenos entre medio de las casas. Según los vecinos, una joven de 15 años, con cinco meses de embarazo, resulta con complicaciones producto de los gases, y dos menores resultan golpeados por la policía luego de haber sido atropellados por un vehículo de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Tras la convocatoria de movilización a través de las redes sociales y mediante una declaración pública de las Juventudes Comunistas, a movilizarse por las calles de Santiago, carabineros dispersan nuevamente con carros lanza agua a cientos de manifestantes que pretenden marchar por el centro de Santiago en apoyo a las demandas de los pobladores de la Patagonia. “Aysén es Chile”, “Que nadie apague ni la voz ni el descontento del pueblo”, “Aysén, grito de Revolución”, rezan los carteles portados por los manifestantes. La primera marcha se inicia desde el Paseo Ahumada hacia la Alameda, donde Fuerzas Especiales de Carabineros impide el avance de los cerca de quinientos manifestantes, iniciándose los incidentes. Una segunda columna de 400 personas avanza desde Plaza Italia hacia la principal arteria capitalina. Allí la protesta es reprimida por carabineros con carros lanza agua y lanza gases. Grupos de personas se dirigen al Parque Bustamante, dando lugar a enfrentamientos. Los disturbios producen la interrupción del tránsito en distintos puntos de la Alameda y sectores aledaños. Posteriormente, a través de redes sociales, los manifestantes difunden testimonios de la violencia policial que han sufrido, indicando que un joven de 17 años sufre una fractura de cráneo y lesiones graves tras el actuar de carabineros.

En el marco de una marcha en apoyo a la Región de Aysén en Plaza Victoria de Valparaíso, una carabinera es agredida por un manifestante y resulta con un tobillo fracturado. Los hechos se originan cuando Valeska Ramírez, quien trabaja para las fuerzas especiales, intenta aprehender a Juan Carlos Tapia, de 21 años, tras la ocupación de la calzada por manifestantes, el cual le fractura el tobillo. Seis personas son detenidas tras la marcha, la cual no había sido autorizada.

Martes 28

Hasta el número 485 de la Plaza de Armas, en el centro de Coyhaique, se dirige el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, tras aterrizar en Balmaceda. Luego de evadir a cerca de 300 personas congregadas en la plaza, el secretario de Estado –designado para llevar la respuesta del gobierno al petitorio de los dirigentes locales– ingresa a la Intendencia de Aysén. En el interior de la sede del gobierno regional, el ministro dice: “Traemos respuesta a todo el petitorio que se entregó”. Se refiere también a los hechos de fuerzas ocurridos desde que comenzó el conflicto –hace 15 días– y

hace un llamado al orden y a acabar “con toda forma de violencia” en la zona.

Miércoles 29

En Santiago, una toma de las oficinas en el edificio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, deja como saldo treinta y nueve personas detenidas –entre ellas un menor– luego del desalojo de los mismos solicitado por funcionarios de dicha repartición. Los representantes de las asambleas populares, en palabras de Catalina Castillo, indican que se “aburrieron de esperar” respecto de una serie de demandas que han expresado en las últimas semanas. Según informa el coronel de carabineros Víctor Tapia, a cargo del operativo, los funcionarios reportan destrozos dentro del edificio, lo que será objeto de investigación.

Glosario de siglas

AFP	Administradoras de Fondos de Pensiones
ANEF	Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
CAS	Cárcel de Alta Seguridad
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DIPOLCAR	Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros
ISAPRE	Instituciones de Salud Previsional
LABOCAR	Laboratorio de Criminalística de Carabineros
MAPU	Movimiento de Acción Popular Unitaria
MCPU-PSR	Movimiento Ciudadano Patagonia Unida - Patagonia sin Represa
MIR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MSPRA	Movimiento Social por la Región de Aysén
OS9	Investigación de Organizaciones Criminales
PDI	Policía de Investigaciones
PPD	Partido por la Democracia
SERVIU	Servicio de Vivienda y Urbanización
USACH	Universidad de Santiago de Chile

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización: Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Marzo 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Affers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 1106

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Juan Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera. Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile
Cronología del conflicto social
Marzo de 2012

Jueves 1

En Santiago, cerca de 400 trabajadores de supermercados *Tottus* marchan hacia a la Dirección del Trabajo para presentar una denuncia de demanda laboral contra la empresa. Sin embargo, no reciben ninguna respuesta. En cambio, son reprimidos por carabineros, registrándose un total de 30 detenidos. Desde la madrugada del miércoles 29 de febrero, los trabajadores comenzaron actividades con el apoyo del 72% de los empleados de los seis supermercados *Tottus* en las siguientes ubicaciones: Nataniel Cox, Estación Central, El Bosque, Puente Alto I y II y otro en Talca. En total, son 507 trabajadores contratados por la empresa perteneciente al holding *Falabella* –del *Grupo Solari*–, que permanecen paralizados. Los trabajadores reciben un sueldo de entre 210 y 220 mil pesos, considerando jornadas completas y horas extras. Exigen un reajuste del 10% del sueldo líquido y también consideran el costo de locomoción –que en promedio son cuatro pasajes diarios. Exigen que los trabajadores sean recalificados, ya que algunos llevan laborando cinco o seis años y continúan recibiendo el mismo sueldo. Además, piden que se aplique un fúero complementario de tres meses para evitar despidos luego del conflicto. Por último, un bono de término de negociación de 400 mil pesos. De parte de la empresa *Tottus*, la oferta es de ningún reajuste y 300 pesos de locomoción. Además, ofrecen un convenio colectivo que para Sergio Alegría, presidente del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas (SINTRAC), es “una de las pillerías de esta empresa”. Se trata de un acuerdo entre los gerentes de la empresa y los trabajadores –que ellos mismos escogen. De esa manera suscriben un acuerdo legal ante un inspector del trabajo que involucra “solo intenciones de mejorar las relaciones laborales. De sueldo líquido, nada. El trabajador no tiene ninguna representación”, advierte Alegría, quien agrega que si el trabajador presenta cualquier inquietud, lo despiden.

En Santiago, los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Hospital de Carabineros protestan en las afueras del centro hospitalario en rechazo al anuncio de las autoridades de un centenar de posibles despidos, debido a la crisis económica interna del recinto. La presidenta de éstos, Loreto Aguilar, señala “que serían notificados entre 80 y 100 trabajadores de su despido, y que la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile considera –a partir del 2013– poner fin al pago de las asignaciones por modernización institucional y colectiva que reciben trimestralmente los funcionarios públicos, de acuerdo a la Ley N° 19.553”. En la manifestación, que es apoyada por los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), consiguen que en los próximos días se reúnan con el director de Previsión. Según la secretaria general de los funcionarios, los trabajadores están decididos a radicalizar las medidas de presión si la Dirección del Hospital no se pronuncia claramente sobre el futuro de los trabajadores.

Mientras la atención de gran parte del país está centrada desde hace casi tres semanas en la región de Aysén, más de 3 mil 200 kilómetros al norte, en la ciudad de Calama, Tercera Región de Antofagasta, se incuba otro foco de conflicto social, esta vez por la exigencia de que parte de los recursos que genera el cobre queden en la zona. En la capital de El Loa, dos hechos aumentan la expectación de sus 140 mil habitantes ante el inicio de manifestaciones para presionar al gobierno

para que dé una real definición. El primero es la quema de neumáticos en el puente Dupont, en el acceso sur de la ciudad. En segundo lugar, se realiza una reunión de la asamblea de ciudadanos de Calama, instancia formada en agosto de 2009 y que integra a autoridades, empresarios, trabajadores, estudiantes, representantes de iglesias y dueños de casas, entre otros. El grupo ya paralizó en dos ocasiones a Calama el año pasado, en ambas ocasiones durante 24 horas y con más de 20 mil personas en las protestas y manifestaciones callejeras, en demanda por recursos del cobre para la zona. En la reunión definen parte de su calendario de movilizaciones y se reitera el emplazamiento al Ejecutivo. Una de sus primeras resoluciones es programar una marcha para el 20 de marzo, en la semana que se celebra el aniversario de la ciudad. También dan el ultimátum a La Moneda de que si el sábado 31 de marzo no hay respuesta, las protestas se intensificarán. Entre las demandas, que reiteran, está que el 5% de las utilidades generadas por la extracción de cobre en la comuna quede en la zona en forma permanente, para invertir los recursos en obras de infraestructura vial y mejoramiento urbano. Mencionan entre otros asuntos, la pavimentación de las calles y la instalación de parques, universidades y complejos deportivos, además de la declaración de zona extrema.

Viernes 2

En Santiago, alrededor de 140 trabajadores de supermercados Tottus marchan hasta la empresa Falabella, ubicada en Rosas con Manuel Rodríguez, para exigir una mesa de diálogo con la gerencia de recursos humanos. “Dijeron que andaban fuera de la región y por tanto no podía recibirnos”, explica Sergio Alegría, presidente de SINTRAC. Por ello, algunos trabajadores deciden colgarse del puente del río Mapocho. Inmediatamente llega Fuerzas Especiales de Carabineros y detiene a más de 50 trabajadores.

Eduardo Rojas, trabajador portuario de San Antonio, cumple 60 días en huelga de hambre en los cuales ha perdido 22 kilos. Ante la licitación de la Terminal Costanera Espigón, el Estado decide entregar un beneficio a los trabajadores portuarios que cumplen ciertos requisitos, como antigüedad y turnos, mediante un bono de mitigación o “indemnización”. Eduardo Rojas y otros seis trabajadores –además de otra decena de no sindicalizados– han quedado fuera del proceso, por lo que exigen el pago del bono de migración del que fueron excluidos por parte de la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA). El huelguista se rehúsa a recibir cualquier tipo de atención médica. Solo detendrá la medida cuando el bono sea cancelado. El bono de migración es una medida que adoptó la estatal EPSA –y a la que debieron acogerse todos los trabajadores portuarios– luego de que el 8 de noviembre de 2011 se concretara el traspaso de El Espigón –de ESPESA– a Puerto Central, compañía privada, filial de Puerto Lirquén –ligada al grupo *Matte*– encargada de operar, construir, mantener y explotar durante 20 años el área de concesión. Para los trabajadores portuarios, “se cambiaron las reglas del juego”, porque se entregó un sitio estatal a una empresa privada y quedó la incertidumbre de si esta medida los iba a afectar positiva o negativamente. “El Estado decidió mitigar o indemnizar a los portuarios como una forma de amortiguar los eventuales riesgos que esto podría acarrear, como pérdida de la fuente laboral”, asegura Alejandro Rojas, dirigente del Sindicato de Empleados Marítimos y Portuarios Especializados de San Antonio (SEMPA). Y señala que los trabajadores que laboraban en la empresa Report y Ultraport –antes Ultramar– fueron despedidos, tras concretarse la adjudicación de El Espigón a la privada Puerto Central.

El puerto Presidente Ibáñez es el centro neurálgico de las protestas del movimiento social de Aysén,

que es despejado en el marco de clima de distensión que quieren propiciar los manifestantes, en tanto que sus parlamentarios dialogan con el gobierno de Santiago. El “gesto” se manifiesta en el retiro de las barricadas y vehículos quemados que bloquearon la ruta, lo que permite reponer el tránsito entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. El viaducto, que fue ocupado por los manifestantes el 14 de febrero, comienza a ser utilizado por los vehículos, lo que marca la vuelta a la normalidad en ambas riberas. Una normalidad aparente, porque ahora falta que lleguen los alimentos y el combustible, lo que, a juicio de los pobladores de la zona, se ve bastante difícil antes de que se resuelva el conflicto.

Desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste dan término a la huelga de hambre que iniciaron el 17 de febrero en el marco de la Jornada de Solidaridad Internacional para apoyar a estos tres imputados por el asalto al Banco Security, acción sucedida el 18 de octubre de 2007 en el centro de Santiago, donde, tras un tiroteo, terminara muerto el cabo de carabineros Luis Moyano, quien intentó repeler el atraco. Del robo se acusa a Juan Manuel Aliste Vega, a Carlos Gutiérrez Quiduleo, a Marcelo Villarroel Sepúlveda y a Frey Fuentevilla. A los dos últimos se les acusa de dar muerte al policía. Luego de una intensa búsqueda, en diciembre de 2009, Villarroel –ex Mapu Lautaro– y Fuentevilla –ex MIR– fueron entregados por la justicia argentina tras haber sido condenados por el país transandino a tres años y medio por porte de armamento de guerra. Estos, junto a Aliste –ex Mapu Lautaro–, permanecen desde ese momento en la CAS de Santiago. Sólo Carlos Gutiérrez permanece prófugo y en la clandestinidad. “Después de casi 4 años, la investigación sigue abierta y se funda en la declaración de una persona. Esta declaración, vigilada y monitoreada por la policía uniformada a través de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR), [la unidad de] Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR), se instala como su prueba científica. Ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Interior, ni los bancos querellantes, siquiera las policías, tienen los elementos necesarios para condenarnos, y eso es porque simplemente no existen”, han declarado desde la cárcel los acusados. Indican que las razones de la huelga no contemplaron ninguna demanda de corte reivindicativa intracarcelaria. Es más bien un gesto de resistencia ofensiva anticapitalista.

Sábado 3

La comunidad Juan Ignacio Llanquileo, del sector Rucañanko, señala que inicia un proceso de recuperación del territorio que comprendía el antiguo espacio del lonko –autoridad máxima– Juan Ignacio Llanquileo, y de Juana Millahual, en la ribera del lago Lleu Lleu, cuya extensión era de 10 mil hectáreas, territorio ancestral actualmente ocupado por empresas forestales y particulares. En este contexto, la comunidad comienza con la recuperación de una extensión de 80 hectáreas que actualmente están en manos del latifundista Francisco Ulloa, quien mantiene ocupada gran parte del territorio ancestral. Al momento de hacer ingreso a estas tierras, diez vehículos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros irrumpen violentamente en contra de la comunidad, cuyos miembros resisten el desalojo.

“Las condiciones para dialogar que ha reiterado el gobierno al movimiento y a los patagones, a través de su vocero, no son aceptables. Bajo esas circunstancias, la movilización general continúa”, declara el vocero del Movimiento Social por la región de Aysén, Iván Fuentes, para informar sobre las propuestas que el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, tiene como respuesta a las 11 demandas de la región de Aysén. Esto significa, en concreto, que mantienen “el estado de movilización

vigente y en tranquilidad, cumpliendo de todas formas nuestro compromiso –materializado por el gremio de los camioneros– de terminar a las seis de la tarde el bloqueo total de las rutas de Coyhaique a Balmaceda y Coyhaique Alto, y dejarlas en apertura cada dos horas para vehículos particulares”. “Ofrecimos una salida al gobierno para sentarnos a conversar y desde Santiago, una vez más, no acogieron nuestros planteamientos. Aysén no se humillará” puntualiza. Iván Fuentes solicita a nombre de la región, “como un gesto de buena voluntad, como los que nosotros hemos hecho con mucha humildad, a retirar de las calles las Fuerzas Especiales, que han generado un clima de violencia y temor en nuestra gente; vecinos, jóvenes, campesinos, obreros, que han sido reprimidos con una violencia inusitada”.

Domingo 4

Falta de condiciones adecuadas para el inicio del año académico es una de las justificaciones para el aplazamiento de la entrada de los escolares a las aulas. La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Gobierno, a través de su informe diario sobre la situación de la región en diversas materias, señala que se mantiene postergado en la región de Aysén el inicio de clases a raíz de las movilizaciones. Según expresiones recogidas de diversos personales públicos, las clases se normalizarán una vez culminado el conflicto que se suscita en la región desde hace ya tres semanas, medida justificada en el hecho de que no se puede asegurar la realización de clases normalmente al no contar con toda la implementación necesaria, como alimentos y combustible, sobre todo por las raciones alimenticias que entrega la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

Lunes 5

En la región Metropolitana, la amenaza de cancelación de matrículas anunciada en 2011 por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se hace realidad. Siendo un total de 104 alumnos de los cinco liceos emblemáticos de Providencia, se les cancela la matrícula, lo que provoca manifestaciones estudiantiles que marcan el inicio del año escolar. El encadenamiento de alumnas en el frontis del Liceo Carmela Carvajal, el bloqueo del ingreso a clases en el Liceo Arturo Alessandri Palma y las manifestaciones realizadas por los estudiantes y apoderados de los cinco liceos de Providencia –Tajamar, Liceo 7, Arturo Alenssandri, José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal de Prat– frente a la municipalidad, demuestran el descontento estudiantil luego de que se les caducara la matrícula. Elióska Zárate, vocera del Liceo Lastarria, establece que Cristián Labbé ordenó explícitamente a los directorios de cada establecimiento “cortar cabezas”, dentro de lo cual los consejos de profesores no tuvieron incidencia. Cristina Femenías, vocera del Liceo 7, indica que “estas acciones son por represión política a quienes participamos de las movilizaciones del año pasado”.

Martes 6

Tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el gobierno aprovecha la oportunidad de justificar la eventual aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado si los manifestantes no desbloquean los caminos. El poder central da un plazo hasta hoy para lograr algún alcance con los dirigentes. En tanto, los representantes de más de cien organizaciones sociales adhieren al Movimiento Social por Aysén llegando hasta La Moneda para entregar una carta exigiendo al gobierno una solución

inmediata a las reivindicaciones de la Patagonia. Entre las organizaciones presentes están la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la ANEF, la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (CONFUSAM), Acción Ecológica, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud (FENATS), la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Miércoles 7

En la región Metropolitana, los 2 mil 500 internos de Colina 1 han decidido realizar una huelga de hambre de carácter indefinido, exigiendo las siguientes reivindicaciones: 1) Que se acaben los tratos inhumanos y vejámenes que gendarmería realiza constantemente contra los familiares en los días de visita. 2) Que se apliquen correctamente los beneficios intrapenitenciarios. 3) Que se apliquen los beneficios de salida –dominicales, de fin de semana y controladas– para quienes tengan dos tercios de su condena cumplida, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 518 art. 96. 4) Que se aplique un sistema evaluativo justo para la postulación a beneficios. 5) La devolución de meses de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.856, por causa de la observación de la buena conducta. 6) Que el presupuesto sea gastado de acuerdo a las necesidades del penal, tendiente a la implementación de talleres y a la adquisición de materiales y herramientas adecuadas para el desarrollo del trabajo al interior del penal. 7) Que se apersone el Ministro de Justicia para que dé cumplimiento a las peticiones. 8) Que se comprometan las autoridades a no llevar a cabo ningún tipo de represalia para quienes participan de la huelga.

De negro y con diversas pancartas en apoyo al movimiento social “Aysén, tu problema es mi problema”, se realiza una marcha que congrega a centenares de mujeres que caminan hasta la Plaza de Armas de Coyhaique en apoyo a las demandas ayseninas y haciendo diversas reivindicaciones femeninas. El acto central se realiza en el principal paseo público coyhaiquino, el cual cuenta con la presencia mayoritaria de las familias, las cuales disfrutan del espectáculo brindado por diversos artistas regionales. Edilia Naiman, coordinadora territorial del movimiento social “Aysén, tu problema es mi problema”, señala que la marcha “tiene un contexto especial, se conmemora el Día Internacional de la mujer. La lucha que dieron las obreras en esos tiempos, el sacrificio de sus vidas por el cual se recuerda este día, no tiene mucha diferencia con lo que nosotros estamos peleando como paragones”, a lo que agrega que “estamos peleando por dignidad, por quedar al nivel del resto del país. Queremos que nos nivelem la vida como está el resto del país”.

Jueves 8

En el Día Internacional de la Mujer, alrededor de treinta mujeres pertenecientes al Partido Igualdad, a la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA) “Chile a Luchar”, a Lucha Democrática y a la Federación de Pobladores, se toman el edificio del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), junto a mujeres mapuches, transgénero y estudiantes. La toma se produce debido a que las pobladoras que conforman los movimientos antes mencionados reclaman que la ministra Carolina Schmidt no las ha recibido para atender las demandas y denuncias sobre los despidos de las funcionarias públicas, la violencia a las mujeres mapuche y la alta discriminación laboral, las cuales suman una deuda histórica con las mujeres. Según Marcela Díaz, representante del Frente de Cultura del Partido Igualdad, “Fuerzas Especiales agrede a algunas mujeres que se

encuentran dentro del edificio. Esa es la ministra que tenemos, quien en vez de dar la cara y hablar, trae la violencia a nuestras mujeres". Posteriormente, cerca de cien efectivos de carabineros desalojan el edificio, tomando detenidas a 14 mujeres. El teniente general Marcelo Teuber argumenta que la toma del inmueble se realiza de manera violenta y con provocación de destrozos. La ANEF critica el accionar de la fuerza policial y apoya las demandas y acciones de las mujeres que realizan la manifestación.

En Santiago, más de 5 mil personas marchan desde Plaza Italia por la Alameda en dirección al Paseo Bulnes por el Día Internacional de la Mujer. Autonomía y libertad sexual, cese de violencia y discriminación hacia las mujeres, lesbianas, bisexuales y transexuales, igualdad de salario y salud, no a la privatización de los recursos naturales y servicios públicos, soberanía alimentaria y energética, son algunas de las consignas que sustentan la marcha. La manifestación finaliza con enfrentamientos entre Fuerzas Especiales de Carabineros, que dejan un saldo de al menos 32 personas detenidas, la mayoría mujeres. Además, una joven recibe un perdigón en la cabeza por parte de fuerzas especiales y otro menor resulta lastimado por un objeto lanzado desde edificio.

Sábado 10

Con un lienzo que dice "Magallanes apoya Aysén" pintado por la comunidad puntarenense y aisenina, la Asamblea Ciudadana de Magallanes expresa públicamente su adherencia a las demandas de los patagones, quienes llevan más de 20 días sin que el gobierno responda efectivamente a sus demandas. En la Plaza de Armas de Punta Arenas, la Asamblea Ciudadana de Magallanes, las organizaciones que la integran y ciudadanos que adhieren a esta acción despliegan el lienzo para posteriormente recorrer las principales calles del centro de la ciudad, bloqueando momentáneamente las principales vías de circulación.

Una marcha de carácter pacífico se realiza en Coyhaique, la cual recorre diversas arterias de la capital, cita que congrega a unas 500 personas. La caravana de personas y de vehículos parte tanto de la sede de la junta de vecinos de El Mirador como del Parque las Lumas, para luego encontrarse en la intersección de calles Alfonso Serrano y Bilbao, para partir en bloque hasta el centro de la ciudad. El punto final de la manifestación se desarrolla en el frontis del edificio de la Intendencia Regional, lugar donde quienes participan de la cita proceden a gritar consignas a favor del movimiento social "Aysén, tu problema es mi problema", en repudio también contra el actuar policial del gobierno y la gestión de la primer autoridad regional, Pilar Cuevas Mardones.

Domingo 11

Los habitantes de Chile Chico desarrollan una manifestación de carácter pacífico por las diversas calles de la comuna, en apoyo a las demandas realizadas por el movimiento ciudadano "Aysén, tu problema es mi problema". Unas cuatrocientas personas realizan una marcha, la cual está marcada por las consignas y pancartas a favor de las demandas ciudadanas. La convocatoria parte del cerro, hasta llegar a las calles de la ciudad. El carácter pacífico de la jornada es el protagonista de esta marcha, en la cual las familias en pleno asiste a la manifestación, las cuales se unen en una caravana multicolor que culmina en el centro de la ciudad. En la jornada se piden prontas soluciones al pliego petitorio de 11 puntos que plantea el movimiento que tiene paralizada a toda la región, en el cual no se visualizaron soluciones debido a la postergación por parte de los dirigentes que negociaron en

Puerto Aysén en las conversaciones con el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, y la intendenta regional, Pilar Cuevas.

En una nueva jornada de movilizaciones, un millar de personas participa de una nueva marcha en apoyo al movimiento social “Aysén, tu problema es mi problema”, la cual se realiza en Coyhaique y que congrega a un número estimado de mil personas, las cuales se desplazan desde la sede comunitaria El Mirador, en Errázuriz con Laguna del Desierto. Otra columna de esta manifestación se reúne en la intersección de las calles Bilbao con Prat, lugar en el cual se realiza una pequeña barricada, de forma pacífica, que es disuelta por efectivos de fuerzas especiales. Al lugar llega el carro lanza gases y un bus con 30 policías, quienes se retiran una vez que los manifestantes, que venían desde la sede El Mirador, llegan a ese punto. Pobladores, dirigentes vecinales y diversas agrupaciones de la capital regional adhieren a la convocatoria, en un recorrido que no llega como habitualmente se hacía hasta el centro de la ciudad, sino que se desplaza por calle Bilbao, para luego doblar por calle Sargento Aldea, finalizando hasta el Parque Las Lumas, ubicado en Las Lengas. Estas movilizaciones se realizan en la víspera de una nueva jornada de negociaciones entre los dirigentes del movimiento social y el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, y la intendenta regional, Pilar Cuevas.

Lunes 12

El trabajador portuario Eduardo Rojas ha perdido ya 25 kilos y su estado de salud es cada vez más delicado. Los trabajadores del SEMPA están viendo la posibilidad de trasladarlo a Santiago para que reciba los cuidados médicos en algún centro asistencial. Sin embargo, descartan la posibilidad debido a que las altas temperaturas que hay en la capital podrían ser perjudiciales para su salud. El huelguista sufre su cuarta descompensación y se encuentra en la sede de la CUT de San Antonio bajo el cuidado de los demás trabajadores portuarios que apoyan la causa, y un médico particular que de manera voluntaria ha prestado sus servicios. Eduardo Rojas inició la huelga de hambre en protesta por la marginación del pago del bono de migración del que fue excluido por parte de la empresa estatal EPSA.

En Santiago, la Unión Portuaria de Chile, junto a diversos sectores sociales se congregan en la Plaza de la Constitución –aproximadamente cuarenta personas– en apoyo a los trabajadores portuarios del país. El objetivo es entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, la cual informa las demandas de sus trabajadores. Representantes de la CONFECH, la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), estudiantes secundarios y algunos diputados del Partido Comunista (PC) apoyan a los portuarios en la entrega de la carta que establece las siguientes demandas: 1) Recuperación del impuesto a la renta mal habido por el fisco desde 1981. 2) Solución a la situación de desamparo de los trabajadores de puertos licitados –o por licitar–, como Arica, Coquimbo, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas y El Espigón de Valparaíso e Iquique. 3) Reforma en seguridad e higiene portuaria, a través de la creación de una entidad nacional especializada que cuente con un departamento en el ámbito portuario. 4) Perfeccionamiento del sistema de seguridad social, reconociendo el trabajo de alto riesgo. 5) Creación de un fondo de emergencia para eventos catastróficos, como crisis y terremoto. 6) Correcto cumplimiento de la legalidad laboral. 7) Claridad legal en el concepto de “trabajador portuario” y “recinto portuario”. 8) Perfeccionamiento del sistema de calificación y evaluación de enfermedades laborales. Los trabajadores esperan por más de 50 minutos que los reciba algún personero de gobierno, lo cual no ocurre.

Martes 13

A una semana de huelga de hambre llegan las personas privadas de libertad en el penal de Colina 1. La censura de gendarmería y la omisión de los medios masivos han silenciado la protesta iniciada desde el 7 de marzo. Ahora los huelguistas denuncian que la torre cuatro, epicentro de la huelga, es desalojada violentamente y se golpea a los internos sin mediar ninguna provocación por parte de ellos. Por otra parte, denuncian que sus familiares han sido brutalmente golpeados y atacados con perros fuera de la Corte Suprema mientras realizaban una protesta pacífica, resultando dos mujeres heridas con mordidas de los perros policiales. Indican que pese a todo seguirán levantando la voz, pues la represión de la que son víctima, ellos y su familia, no acallará sus deseos de luchar por sus derechos hasta las últimas consecuencias.

Sin éxito culmina una vez más el intento de acuerdo entre el gobierno y el Movimiento Social por Aysén “Tu problema es mi problema”, luego de que estos últimos rechazaran la propuesta del Ejecutivo en orden a negociar en más de una mesa de diálogo. Al respecto, el dirigente Iván Fuentes señala que el movimiento social mantiene la disposición al diálogo, siempre que éste se realice en la ciudad de Puerto Aysén, y no en Coyhaique, ni en mesas divididas por sectores. “Nosotros estamos trabajando todavía, vamos a esperar aquí al gobierno con todo el cariño del mundo. Queremos llegar a una solución, queremos que el gobierno sea parte. El gobierno puede hacer algo muy importante. Si bien es cierto hay cosas que vienen desde hace muchos años estancadas, que no lo han hecho otros, bueno, hagámoslo con ustedes, señor Sebastián Piñera, este es el minuto para marcar una historia con nosotros, lo invitamos a eso y no a andarnos haciendo trampas en el camino, nosotros estamos dispuestos”, indica el dirigente. El dirigente además dice que el escenario sería distinto si el gobierno hubiese enviado desde un principio al ministro de Hacienda, Felipe Larraín. “Si de entrada nos hubieran enviado a Hacienda, hoy día el efecto sería diferente”, puntualiza.

Se produce un rechazo masivo ante el nuevo estancamiento de las negociaciones entre el gobierno y los dirigentes del movimiento ciudadano “Aysén, tu problema es mi problema”, el cual se ve reflejado con una manifestación espontánea, ocurrida a las afueras de la Intendencia regional, la que produce incidentes entre manifestantes y políticos que salen de estas dependencias. Con la salida del subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, se producen las primeras muestra de rechazo al actuar del gobierno en la negociación con los dirigentes del movimiento, por lo cual el personero recibe insultos y agresiones por parte de las personas que se agolparon hasta una salida contigua a la intendencia, por lo cual este tiene que ser socorrido por personal policial. Los incidentes se acrecientan a la salida del lugar del ex parlamentario e integrante de la Corporación Aysén por Aysén, Baldemar Carrasco, quien, a juicio de los manifestantes, está negociando junto a otros “a espaldas de la gente”, por lo cual fue insultado, lo que provoca la intervención de efectivos de Fuerzas Especiales, quienes llevan al político hasta un bus de carabineros, en el cual pudo salir del lugar. La situación más delicada ocurre a la salida del ex alcalde de Coyhaique, Eduardo Santelices, y del empresario de la construcción Héctor Rodríguez, quienes deben ser fuertemente protegidos por carabineros, tras ser increpados duramente por los manifestantes, que reclaman la representatividad de estas personas para negociar con el gobierno. Los empresarios son insultados y golpeados con diversos objetos, mientras que carabineros, en todo momento, los resguarda, en una tensa caminata que los lleva por las calles 21 de Mayo y Eusebio Lillo, hasta donde otro piquete de efectivos de fuerzas especiales procede a dispersar a los manifestantes y a llevar a quienes son insultados por estos hasta las dependencias de la comisaría de Coyhaique, provocándose conatos entre manifestantes y efectivos policiales.

Miércoles 14

Desde Puerto Aysén comienza el traslado de pescadores y algunos dirigentes del gremio hacia la ciudad de Coyhaique, esto con el objetivo de apoyar y levantar más a la ciudadanía en el apoyo al movimiento social de Aysén. Iván Fuentes indica: “estamos dispuestos siempre a dialogar, pero con respeto, y no a través de los medios de comunicación, y menos aún con la intención que tiene el gobierno de dividir la mesa de dirigentes que representa a más del 95% del pensamiento de los aiseninos”. Misael Ruiz, dirigente del Movimiento Social por Aysén que representa a los pescadores de la zona, enfatiza que “todas las medidas ofrecidas por el gobierno ya las conocemos, puesto que esas medidas en el papel parecen una solución. Sin embargo, para nosotros son sólo migajas”. A su vez, en la Plaza de Armas, Renato Flores, representante de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Puerto Aysén, comenta que “venimos a darle ánimo a la gente de Coyhaique ya que hemos notado que ha bajado el ánimo de la ciudadanía, esto ya que la autoridad no quiere ir a dialogar con nosotros. Es por esto que trasladaremos la movilización hasta Coyhaique junto con la mesa, esto para que nuestros dirigentes puedan, como quiere la autoridad, que sea en Coyhaique en donde se sienten a conversar”, señala acompañado de una cincuentena de pescadores quienes se congregan en los alrededores de la Plaza de Armas de Coyhaique. Posteriormente, los 24 dirigentes ingresan a la intendencia para retomar el diálogo con el gobierno. Una vez dentro la mesa de dirigentes, es el turno de los colectiveros para demostrar su apoyo al movimiento, por lo que cerca de setenta vehículos del rubro se acercan a la Plaza de Armas tocando sus bocinas y estacionando sus automóviles en los alrededores de ésta; sin embargo, y ante la amenaza de funcionarios policiales de efectuar partes empadronados por obstaculizar el libre tránsito de los vehículos, son obligados a efectuar giros alrededor de la plaza.

Jueves 15

Pobladores aiseninos denuncian a radio Santa María que en la madrugada Carabineros atacó con gas lacrimógeno y balines a las poblaciones Pedro Aguirre Cerda, Villa España y a un sector de Turbio. Los aiseninos indican que los dirigentes que participan de las conversaciones con el ministro Álvarez fueron engañados. Son citados a un lugar donde nunca llegó ninguna autoridad, mientras efectivos de Fuerzas Especiales atacan a la población. Indican que esperaron a las autoridades en la escuela Pedro Quinta Mancila, en Coyhaique, sin obtener respuesta. Se calcula que hay unos diez heridos producto de los balines lanzados por carabineros y las bombas lacrimógenas.

Desde el 13 de febrero se especulaba la posible aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en la región de Aysén, situación que finalmente ocurre, luego de que se quemó un bus de Fuerzas Especiales –que se vuelca producto de una mala maniobra de su conductor–, se dañe un carro lanza agua y un avión de carabineros que llevaba un niño enfermo, acciones que, según el Ejecutivo, motivan la decisión de impulsar querellas centralizadas a veinte manifestantes –involucrados en estos actos– por medio de esta ley. Esta situación, a juicio del gobierno, es inaceptable, es “violencia grave que altera por completo la paz social y la tranquilidad de la región de Aysén”, sentencia el vocero de gobierno, Andrés Chadwinck. La Ley de Seguridad del Estado N° 12.027 (LSE), publicada durante la dictadura, tipifica los delitos contra la soberanía nacional, el orden público y la normalidad de las actividades del país. Esta normativa permite que los tribunales de justicia aceleren los procesos de las personas condenadas por estos delitos, pudiendo dictar sentencia con mayor rapidez. La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, avala la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, argumentando que las y los manifestantes no han medido las

consecuencias de sus actos.

En la región Metropolitana, integrantes de las Juventudes Comunistas (JOTA) realizan una toma en la sede de la Unión Democrática Independiente (UDI), en Providencia. Ya en el interior, los manifestantes despliegan un lienzo y gritan consignas contra el gobierno. Con el paso de los minutos, otros miembros de la JOTA se unen a la protesta. Entre ellos, la dirigente estudiantil y ex presidenta de la FECH Camila Vallejo. “Estos dos años de gobierno de la derecha han sido dos años de un gobierno de las mentiras”, reclama Vallejo. Aunque desde el PC se defiende el carácter “pacífico” de la acción, dirigentes de distintos partidos rechazan la toma. Por ejemplo, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, comenta: “Tomarse la sede de otros partidos no es una buena forma de expresar desacuerdos. En democracia, hay muchas otras formas más válidas de hacerlo claro”. Los activistas, unos sesenta en total, permanecen cerca de una hora en la sede de la UDI. Al lugar llegan carabineros, pero la acción culmina sin detenidos. La intendente Cecilia Pérez adelanta que se evaluará la presentación de una querella.

En Santiago, se realiza la primera marcha estudiantil del año. La convocatoria, realizada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), y que no cuenta con el permiso de la intendencia –por solicitarlo fuera de plazo– busca reivindicar las demandas del movimiento y exigir la reincorporación de los escolares que fueron expulsados durante 2011. En Santiago, los incidentes, que se extienden por Vicuña Mackenna y las calles aledañas a los parques Bustamante y Almagro, son las postales de la marcha. Los mayores incidentes, al igual que el año pasado, son provocados por encapuchados que se enfrentan a carabineros, logrando cortar el tránsito en diversas oportunidades y atacan durante 40 minutos una automotora ubicada en las cercanías del Parque Almagro, sin que se registren detenidos. Los daños a la propiedad privada una vez más son millonarios. Mientras los convocantes cifran en 10 mil los asistentes, la Intendencia asegura que son 5 mil, cifras inferiores a las cerca de cien mil personas que se registran en algunas marchas del 2011. Posteriormente, cuando los incidentes son aislados, un grupo de jóvenes se refugia en la sede de la FECH, donde miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros golpea a los manifestantes y lanza bombas lacrimógenas al interior del recinto, según reporta el titular de la federación, Gabriel Boric. Más tarde, miembros de la Mesa Social, compuesta por representantes de padres y apoderados, el Colegio de Profesores, estudiantes secundarios y universitarios, reunidos en la CONFECH, llegan hasta el frontis del Ministerio de Educación para leer una declaración pública exigiendo que el titular de la cartera, Harald Beyer, “garantice el derecho a la educación a los niños y jóvenes que están siendo discriminados”, en alusión a la cancelación de matrículas, antes de ser dispersados por carros lanza agua.

El llamado de los estudiantes para salir a las calles tiene eco en varias regiones del país. En Valparaíso, 3 mil personas marchan desde la Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia, rayando las murallas que están al paso. Unos 50 encapuchados lanzan piedras a carabineros, quienes reaccionan con carros lanza agua y lacrimógenos. Un policía resulta con lesiones leves y hay 56 detenidos. En Concepción, la marcha autorizada por gobernación reúne a 2 mil personas y se realiza de forma pacífica. Sin embargo, cuando la marcha culmina se registran incidentes afuera de la Universidad de Concepción, donde escaramuzas entre encapuchados y carabineros terminan con 35 detenidos. Alrededor de mil estudiantes, entre secundarios y universitarios, recorren en calma las calles de La Serena, en la región de Coquimbo. Unas 800 personas hacen lo propio en Puerto Montt. Allí, pescadores se unen a los estudiantes llevando sus botes a la Costanera de la capital de Los Lagos. En Valdivia, región de Los Ríos, 600 estudiantes universitarios y secundarios marchan en orden desde la Plaza Simón Bolívar. Más al norte, en Temuco, 500 jóvenes marchan por el centro de la

capital de La Araucanía sin que se registren incidentes, salvo una cincuentena de estudiantes que realizan un mitin –intervención– en las esquinas de Montt con Caupolicán, obligando a desviar momentáneamente el tránsito vehicular. En Arica se reúnen 300 estudiantes y un niño de 12 años es detenido por lanzar botellas con pintura a la policía uniformada. En el centro de Antofagasta, en tanto, la marcha realizada por cien estudiantes, según carabineros, deja cinco detenidos por desórdenes y a un estudiante con heridas leves.

Sábado 17

Durante cinco horas, medio centenar de mapuches de la comunidad Maica Nahuelpán ingresa al fundo Palermo, de Padre las Casas, propiedad del empresario agrícola Emilio Taladriz, reivindicando el territorio. Posteriormente se retiran pacíficamente tras un llamado telefónico del intendente de IX La Araucanía, Andrés Molina, quien les compromete una entrevista y agilizar la compra de lo demandado. Los comuneros argumentan que poseen títulos de merced que acreditarían que sus tierras fueron usurpadas, y que las 15 familias que componen la organización requieren contar con tierras para satisfacer las necesidades de casi un centenar de personas.

Domingo 18

Luego de que el gobierno quebrara el diálogo y anunciara la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la comunidad aysenina sale a marchar. Más de 250 vehículos y más de 5 mil personas protestan en apoyo a los 22 aiseninos procesados por el dictamen del ministro Hinzpeter. La marcha contra la represión que circula por las calles de Puerto Aysén sale en el Paseo Mahuén hacia la Gobernación Provincial. En ella participan vecinos y 50 colectiveros que llegan desde Coyhaique para hacer entrega de alimentos no perecibles. Los alimentos son entregados a la asociación de pescadores de Puerto Aysén. A su vez, la CONFECH llama a una movilización nacional en apoyo a las demandas del movimiento en Aysén, denominada “Chile marcha con Aysén”. La cita es este miércoles 21, en las diversas ciudades del país. Paralelamente, el gobierno envía más carabineros a la región. Carabineros confirma que se aumenta la dotación de policía en Coyhaique en un 50%, quienes serían de la Escuela de Suboficiales.

Lunes 19

La encargada ministerial de educación en Aysén, Teresa Calvis, indica que el inicio de las clases se concretará en forma diferenciada en cuanto a las fechas. “Hemos solicitado a los sostenedores que ellos nos propongan una fecha de inicio y que el Ministerio de Educación en la región autorizará mediante resolución exenta, previo chequeo del cumplimiento de condiciones básicas previamente concordadas, [que son] contar con alimentación, seguridad al interior del establecimiento y en su entorno cercano y compromiso de comunicar a la autoridad cualquier intento o acción de fuerza que afecte al establecimiento, toma u ocupación”. Teresa Calvis señala que “deseo transmitirle a la comunidad escolar: a los padres, apoderados y alumnos nuestra invitación a que en aquellos lugares donde existan las condiciones, iniciemos un nuevo año escolar con la mejor disposición a trabajar todos juntos por la educación y futuro de nuestros hijos. Creemos que la escuela es el lugar donde nuestros niños y jóvenes deben estar hoy y le deseo pleno éxito a todas y todos”. Indica que este lunes inician sus clases la escuela municipal de Melinka y de Repollal, en la Comuna de Guaitecas;

mientras que en Coyhaique lo hacen los colegios El Camino, Alianza Austral, Campos de Hielo y Diego Portales, el Centro de Educación Integral de Adultos Josefina Méndez y la escuela Xavier Butiña. En tanto, en la comuna Chile Chico inician el Liceo Luisa Rabanal Palma, la Escuela Básica, la Escuela Túlio Burgos de Mallín Grande, la Escuela Bernardo O’Higgins de Guadal y la Escuela de Puerto Bertrand. En el caso de la Comuna de Ibáñez, inicia sus clases la escuela Aonikenk de Ibáñez, la Escuela Carretera Austral de Murta, la Escuela Gabriela Mistral de Puerto Tranquilo, la Escuela Rural de Cerro Castillo y, en Puerto Sánchez, la Escuela María Antonieta Parra; por último, en Tortel, comienza el ciclo lectivo la Escuela Comandante Luis Bravo.

Martes 20

La Asamblea Ciudadana de Calama y miles de loíños protestan en las calles para exigir nuevamente al gobierno que un porcentaje de las riquezas producidas por la minería de la zona se quede en la región. El Ejecutivo, por su parte, prometió el viernes pasado el envío del proyecto de ley del Fondo de Desarrollo del Norte y Comunas Mineras (FONDENOR), que dará recursos especiales a todas las comunas con actividad minera para costear inversiones de desarrollo, lo que, sin embargo, es visto con cautela por los nortinos en espera de conocer los detalles. Paralelamente, decenas de organizaciones sociales se congregan en el Parque Loa, en una de las primeras manifestaciones en la zona de este año, luego del movimiento iniciado a fines de junio del año pasado. La asamblea de la ciudad está compuesta por un centenar de dirigentes de organizaciones sociales, juntas de vecinos, colegios profesionales, jóvenes, agrupaciones indígenas, de mujeres y otros gremios. Recordemos que el año pasado se convocó a dos paros comunales que sacaron a 20 mil personas a las calles y paralizaron casi por completo el comercio, la locomoción colectiva, los centros de salud y establecimientos educacionales.

Organizaciones y habitantes de la región de Aysén, al sur del país, inician una campaña de recolección de firmas para solicitar la renuncia de la intendenta de la región, Pilar Cuevas. La iniciativa responde a la excesiva violencia policial en la zona y a la inoperancia política de las autoridades, representadas en su figura. Los organizadores se presentan en el Paseo Horn, frente a la Plaza de Coyhaique, para recolectar las firmas. Se establece que la recolección de firmas se realizará hasta el viernes 23 de marzo aproximadamente.

La llegada de más Fuerzas Especiales de Carabineros a la región de Coyhaique ya deja estragos. Desde la barcaza Don Baldo desembarcan dos carros laza aguas, y un bus de Fuerzas Especiales para apoyar la represión en Aysén. Una barrera humana de Puerto Cisnes, integrada por cerca de un centenar de personas, intenta impedir el paso de Carabineros hacia Puerto Aysén. La respuesta de los carabineros es lanzar gases lacrimógenos al cuerpo de los lugareños. Los carabineros, al no acceder a Puerto Aysén, toman rumbo a Coyhaique, donde la resistencia copa las calles y el puente Presidente Ibáñez de la ciudad para impedir el acceso a la policía, instalando troncos y barricadas. Unas mil 500 personas están en el puerto de Coyhaique a la llegada de los carabineros, los cuales son violentamente dispersados por la policía enviada desde Santiago. Posteriormente se registra que carabineros, a su llegada a la capital regional, Coyhaique, ataca la sede regional de la ANEF. Según el presidente de la ANEF regional, Julio López, Carabineros los golpea brutalmente. Además, un menor de 17 años es alcanzado por balines de goma lanzados por la policía. Un camarógrafo de radio Santa María, Víctor Hugo, es golpeado y detenido, luego de denunciar que la golpiza al dirigente de la ANEF fue propinada por ocho funcionarios policiales. Auditores de radio Santa María acusan que los carabineros golpean a mujeres e incluso tiran bombas lacrimógenas en las

cercanías del hospital de Coyhaique. Un conteo provvisorio estima en 50 a los heridos producto de la acción de los carabineros.

Decenas de dirigentes y personas ingresan a la sala de reuniones del gobierno de Aysén, en donde se realiza el Consejo Regional (CORE), instancia en la que la intendenta Pilar Cuevas expone setenta medidas del Ejecutivo para el desarrollo de la región –las cuales aún no son entregadas al Movimiento por Aysén. El motivo de la interrupción de la sesión es la manifestación en apoyo a las y los veintidós pobladores querellados por la LSE, que se invocó la semana pasada en Aysén. Según establece un comunicado enviado por el Movimiento por Aysén, el consejero regional y militar de la UDI, Eduardo Vera, golpeó en el cuello a Rosa Cárcamo, manifestante que se acercó a increparlo durante la intervención.

Miércoles 21

Serios disturbios y múltiples daños provoca la llegada de más refuerzos de Fuerzas Especiales a la región de Aysén. Los hechos más graves se producen en el centro de la ciudad, donde se suceden millonarios destrozos al comercio. Diecisiete hombres y tres mujeres son detenidos tras los serios enfrentamientos que se produjeron tras la llegada de los refuerzos de maquinarias y contingentes de Fuerzas Especiales de Carabineros a la región, en la cual comenzaron los enfrentamientos en las localidades de Puerto Cisnes y Villa Mañihuales, para finalizar en Coyhaique. El caso más llamativo es la detención de un camarógrafo de un medio local, el cual es liberado posteriormente, sin ser formalizado. Se trata de Víctor Hugo Gómez, quien según detalla sufre varios golpes en su detención. Marcelo Rodríguez, abogado, luego de entrevistar a parte de los detenidos, quienes aun se encontraban en la comisaría, señala que “algunos sostienen haber visto a personas encapuchadas, quienes se encontraban actuando de manera activa en los hechos, las cuales llegan a la comisaría, sacándose las capuchas y se transformaban en personal uniformado de carabineros. O sea, esto es gravísimo para nuestra democracia, el hecho de tener personal de civil actuando de manera infiltrada en las manifestaciones y provocando daño, cuestión que deberemos denunciar para que se investigue la situación”.

Más de 3 mil personas se congregan en la Plaza de Armas de Santiago, respondiendo a la convocatoria que hizo la organización Democracia para Chile, en conjunto con la CONFECH y la Organización de Estudiantes de la Patagonia. Bajo la consigna “Chile marcha con Aysén. Tu lucha es mi lucha”, la actividad se realiza en varias regiones del país: Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Coyhaique, en apoyo a las demandas sociales de Aysén. La concentración en Santiago es autorizada por la Intendencia Metropolitana. La ACES también se manifiesta en apoyo a las demandas que las y los habitantes de la XI región sostienen hace más de 35 días: deciden marchar rumbo a La Moneda, retirándose de la concentración en la Plaza de Armas. Indica Mauricio Rojas, vocero de la coordinadora de secundarios, que “no están de acuerdo con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, y no se requiere de un permiso para marchar y manifestarse”. Posteriormente, Fuerzas Especiales de Carabineros dispersa a los manifestantes en la Plaza de Armas y a los que se dirigen a La Moneda, con carro lanza agua y lacrimógeno.

Veinte pobladores pertenecientes a las asambleas populares de la comuna de Maipú y Puente Alto, de la región Metropolitana, se toman el doceavo piso del Ministerio de Hacienda en respuesta a un conjunto de determinaciones y demandas de ambas organizaciones. Una de las determinaciones de las asambleas es apoyar al pueblo de Aysén, condenando la represión proporcionada por la fuerza

policial en contra de las y los habitantes de la región. Por otro lado, ambas asambleas denuncian el “cierre de puertas” por parte del gobierno, respecto a dialogar sobre el tema de sus viviendas, las cuales presentan problemas en la construcción –en ambas comunas– y haber sido edificadas sobre un basural, en Puente Alto. Minutos después, gritos y consignas se escuchan desde el subterráneo del edificio, cuando Fuerzas Especiales de Carabineros suben a la veintena de mujeres a un vehículo policial, deteniéndolas y trasladándolas a la Tercera Comisaría de Santiago.

Viernes 23

Representantes de la Mesa del Movimiento Social por Aysén entran a una reunión en La Moneda con el Ministro del Interior y actual vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, y personeros de gobierno, para negociar la salida para la querella que el Ejecutivo emprendió en contra de 22 patagones, y para poder comenzar a destrabar las conversaciones interrumpidas y retomar las negociaciones que puedan llevar a los acuerdos que la región necesita. Previamente al ingreso al palacio presidencial, el vocero Iván Fuentes señala que “venimos con las manos abiertas y vamos a poner el corazón en la mesa” para llegar a un acuerdo. El dirigente enfatiza que el movimiento busca que el Estado haga una política “más de hermanos, más igualitaria”, destacando parte del petitorio del movimiento, entre lo que se encuentran reformas a la pesca y más acceso a la educación para la región. Además, valora el reconocimiento hecho por carabineros de un eventual exceso en el uso de la fuerza en las manifestaciones de las últimas jornadas, y señala que “los valores humanos pasan por reconocer nuestros errores y el que no reconoce sus errores nunca crece. Si hemos perdido el camino en este último tiempo, recompongámoslo. Chile necesita buenos carabineros y no necesita carabineros que se pasan de la raya y que se las dan de matones”.

Sábado 24

Un cargamento de insumos para primeros auxilios como alcohol, gasa y guantes, entre otros, arriba a la región de Aysén proveniente de la República Argentina, como ayuda solidaria a la población de Aysén de parte de los trabajadores del Estado argentino, agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). A la sede de la ANEF de Aysén llega una avanzada, encabezada por los directores nacionales de la ATE Mario Muñoz y Darío Orellano, quienes indican traer la solidaridad de los trabajadores estatales y del pueblo argentino a la justa causa del pueblo aisenino, luego de que tras tres días de viaje desde Buenos Aires arribaran sin contratiempos a Coyhaique, donde son recibidos por el dirigente de la ANEF local, Hernaldo Saldívia, que junto con agradecer la ayuda enviada informa que los insumos médicos serán distribuidos en las distintas localidades de la región por el equipo de coordinación que para estos efectos tiene la organización de los trabajadores públicos chilenos en la región.

Diversas agrupaciones de Coyhaique organizan una marcha con el fin de hacer un llamado a la *paz social* y retomar la tranquilidad en la región de Aysén, que durante más de 30 días sufre de bloqueos, barricadas, saqueos, y actos vandálicos. Padres, hijos, abuelos y familias completas recorren diversas calles de Coyhaique, desde el monumento El Ovejero hasta la plaza de armas, llevando letreros que piden “Paz para Aysén”, “Aysén sin barricadas” y portando banderas blancas haciendo un llamado a retomar la normalidad de la región, y condenando la violencia entre patagones. La marcha concluye con un acto cultural en el que los participantes de la marcha por la paz bailan y disfrutan de música típica de la Patagonia.

Domingo 25

Tras la reunión en la casa de gobierno entre dirigentes del Movimiento Social por Aysén, los parlamentarios regionales y el gobierno central, la cual, y como ha sido la tónica a lo largo de todo el desarrollo de estas complejas conversaciones, no estuvo exenta de tensiones, finalmente se disipa con la firma de un preacuerdo que establece, como puntos principales, la decisión de establecer una zona franca regional para Aysén, dadas las “características de condiciones únicas de aislamiento de la región”, según anuncia el secretario de la Presidencia, Cristián Larroulet. Adicionalmente, se anuncia que el Ejecutivo modificará la bonificación de contratación adicional a la mano de obra para que el trabajador reciba de forma directa su sueldo. Se logra un acuerdo con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, para el subsidio de la leña. Ese bono de leña va a priorizar de manera muy especial a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. A su vez, de manera paulatina, carabineros inicia el retiro de funcionarios pertenecientes a esta rama, luego de que el diálogo con el gobierno central diera paso a desbloqueos de caminos, lo que permite que vuelva la normalidad a la región.

Lunes 26

En la región Metropolitana, un grupo de 30 encapuchados quema un bus oruga del Transantiago afuera del ex pedagógico, en la comuna de Ñuñoa. Los encapuchados también instalan barricadas en el sector Juan Gómez Milla, lo que impide la labor de cuerpos de bomberos, que llegan al lugar para apagar las llamas del bus. La empresa operadora, Alsacia, condena el hecho, informando además que el conductor y los pasajeros de la máquina alcanzaron a escapar del ataque. Posteriormente, la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, anuncia una querella criminal en contra de los responsables del ataque. La autoridad señala que hay tres personas detenidas por el hecho, y se realizan diligencias para encontrar al resto de los involucrados.

Martes 27

Estudiantes de la Universidad Central se toman las dependencias del *campus* Parque Almagro, ubicado en el centro de Santiago, en rechazo a que no participarán en las elecciones de decanos, pese a que dicha participación fue un acuerdo alcanzado en las movilizaciones del 2011. Según cuentan los estudiantes que participan de la ocupación, el año pasado habían llegado al acuerdo de que para la elección del decano habría triestamentalidad, o sea que los estudiantes igual votarían, pero ahora la dirección de la universidad no quiere que participen los alumnos. Los estudiantes se movilizaron en abril del 2011 exigiendo más participación en la toma de decisiones al interior del plantel y en rechazo a una directiva ligada a la Democracia Cristiana.

Jueves 29

Tras nueva jornada del Día del Joven Combatiente se registran disturbios en la capital como en regiones. El balance oficial es de 228 detenidos y 22 personas heridas a lo largo del país, entre las cuales se encuentran siete carabineros. En la región Metropolitana, se registran 23 puntos de incidentes, como por ejemplo en avenida Grecia, la población Lo Hermida, La Pintana, La Pintana y Villa Francia, donde manifestantes realizan barricadas enfrentándose posteriormente con los

carabineros. Además, la jornada en capital deja un saldo de doscientos seis buses dañados y uno parcialmente quemado. La mayoría de los buses es atacada por turbas y apedreada. Una mujer resulta lesionada al recibir un piedrazo al interior de un recorrido B20, en la zona norte de Santiago. No obstante, en la comuna de San Bernardo, se reportan dos ataques con armas de fuego contra los vehículos, sin que se registraran heridos. En Villa Francia y La Pintoya se suceden los mayores enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. En Villa Francia se realiza una marcha y una velatón para conmemorar el 27º aniversario de la muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, ocurrida durante el régimen militar en esa población de Estación Central. Posteriormente, manifestantes atacan con disparos, piedras y bombas molotov a carabineros, quienes responden con bombas lacrimógenas. En la población La Pintoya, en Huechuraba, se registran fuentes enfrentamientos entre carabineros y manifestantes, a unos 800 metros de la 54ª Comisaría. En la zona se instalan barricadas y se escuchan disparos de armamento automático.

Protestas nocturnas en las ciudades de Concepción, Valdivia y Puerto Montt rompen la tranquilidad en las otras regiones del país. En el frontis de las universidades de Concepción y del Biobío, encapuchados levantan barricadas y atacan a carabineros, que detienen a 28 manifestantes por desórdenes en la vía pública. En Valdivia, alumnos de la Universidad Austral cortan el tránsito y levantan barricadas, las que luego queman. También lanzan proyectiles a la policía, que debe utilizar gases disuasivos para restablecer el orden público. En Puerto Montt, violentistas lanzan piedras contra el edificio de la intendencia y quiebran algunos vidrios. Tres adultos y cuatro menores son detenidos. También se registran incidentes afuera de la Universidad de Tarapacá, en Arica, y en el centro de Valparaíso.

El dirigente del movimiento social por Aysén, Misael Ruiz, confirma que se llega a un acuerdo en materia educacional con el gobierno, tras la reunión que sostienen los miembros de la mesa con el subsecretario de Educación, Fernando Rojas. Dentro del acuerdo, uno de los puntos es que se imparten carreras profesionales de cuatro o cinco años en la región, que los aranceles sean los mismos que en el resto del país y que se entreguen becas. Además, también se pide que en las localidades aisladas, como Melinka y Puerto Aguirre, la enseñanza llegue hasta primero o segundo medio.

Viernes 30

Cientos de personas participan de una marcha en homenaje a Daniel Zamudio, el joven de 24 años fallecido de un brutal ataque en el parque San Borja el pasado 3 de marzo, por un grupo de aparentes neonazis. Los manifestantes recorren el centro de Santiago por avenida Santa Rosa, pasando por Plaza Italia, y culminan en el Parque San Borja, lugar donde fue golpeado el adolescente por su supuesta tendencia homosexual, quien murió luego de agonizar durante 25 días en la Posta Central. La marcha es organizada espontáneamente por las redes sociales, oportunidad en la que también se pide por una ley antidiscriminación, iniciativa a la que el Ejecutivo le puso urgencia. El Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) cifra en 7 mil personas a la asistencia. Posteriormente, los manifestantes intentan llegar a La Moneda, pero en Paseo Ahumada con Alameda son recibidos por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros, a los que basta una arremetida con el carro lanza agua para que los protestantes se dispersen por el centro.

Dos camiones madereros y un cargador frontal para montar los rollizos –troncos– en los acoplados son quemados en el fundo Santa Alicia, que pertenece a la empresa forestal Mininco, tras una

violenta y sorpresiva incursión armada de seis encapuchados que emboscan a los trabajadores que operan las tres máquinas. La violenta acción ocurre en el mismo predio en donde el 7 de noviembre de 2002 murió el joven mapuche Alex Lemún, de entonces 17 años, en medio de escaramuzas entre indígenas que reclamaban la propiedad de la tierra y personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. El predio está ubicado en la comuna de Ercilla, IX Región de La Araucanía. El prefecto de Malleco, Iván Vega, califica a la acción armada e incendiaria como “concertada y premeditada” y dice que, tras intimidar con armas de fuego a los trabajadores, los delincuentes procedieron a quemar los camiones y escapar. Los dueños de los camiones que prestan servicios a la forestal lamentan la pérdida de su capital de trabajo y los operarios también rechazan el ataque y la pérdida de su fuente laboral. Los testigos indican que los encapuchados gritan consignas en apoyo a la causa mapuche de “recuperación de tierras”.

Sábado 31

Desconocidos atacan a tiros la casa patronal del fundo Centenario, ubicado en Ercilla, IX Región de La Araucanía. Este es el atentado número 46 que afecta al predio, de propiedad de Juan de Dios Fuentes y que cuenta con un resguardo policial permanente. Fuentes destaca que “las armas que están usando incluso tienen [mira] láser, lo que hace más peligrosa las cosas, en especial para mi familia”. Agrega que los atacantes, que se presupone son mapuches que reclaman sus tierras, tras 40 minutos de baleo prenden fuego a un bosque de pinos y luego huyen. Fuentes señala que “esto es responsabilidad de las autoridades que no aplican mano más dura como la Ley de Seguridad del Estado o la Ley Antiterrorista, porque todos saben quiénes son los que están atacando”.

Desde el terminal de buses parte una marcha por la no discriminación en Puerto Montt organizada por la Agrupación Cultural de Minorías Sexuales de Puerto Montt (MISEX), la cual es realizada para homenajear a Daniel Zamudio. También en la actividad se hace un llamado a seguir luchando para que se acaben con todo acto de discriminación.

Glosario de siglas

ACES	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
ANDHA	Asociación Nacional de Deudores Habitacionales
ANEF	Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
ATE	Asociación Trabajadores del Estado
CAS	Cárcel de Alta Seguridad
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFUSAM	Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada
CORE	Consejo Regional
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DIPOLCAR	Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros
EPSA	Empresa Portuaria de San Antonio
FEC	Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FENATS	Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud

FENPRUSS	Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
FONDENOR	Fondo de Desarrollo del Norte y Comunas Mineras
GOPE	Grupo de Operaciones Policiales Especiales
JOTA	Juventudes Comunistas
JUNAEB	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
LABOCAR	Laboratorio de Criminalística de Carabineros
LSE	Ley de Seguridad del Estado
MISEX	Minorías Sexuales de Puerto Montt
MUMS	Movimiento por la Diversidad Sexual
OS9	Investigación de Organizaciones Criminales
PC	Partido Comunista
PPD	Partido por la Democracia
SEMPA	Sindicato de Empleados Marítimos y Portuarios Especializados de San Antonio
SEREMI	Secretaría Regional Ministerial
SERNAM	Servicio Nacional de la mujer
SINTRAC	Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas
UDI	Unión Demócrata Independiente

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización: Roccio Silva Suárez, en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Abril 2012

Editada en julio 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Affers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 112¹

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Juan Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.
Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur, El Diario de Aysén.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile
Cronología del conflicto social
Abril de 2012

Lunes 2

Cientos de trabajadores se suman a la convocatoria de sus dirigentes sindicales y protestan contra la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en las ciudades de Santiago, Los Andes, Valparaíso, Chillán y Concepción. En Santiago marchan encabezados por los dirigentes Raúl de la Puente, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Cristian Cuevas, de la Confederación de trabajadores del Cobre (CTC), y Luis Messina, de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios. Cerca de quinientas personas se reúnen en la Plaza de Armas para denunciar el fracaso del sistema de AFP, que en la práctica ha generado pérdidas enormes de los fondos previsionales a los trabajadores chilenos y grandes riquezas a un par de decenas de grupos económicos. Cristian Cuevas señala: “Hoy los trabajadores están exigiendo poner fin al fraude legal más grande que existe en Chile, que es el sistema de AFP, haciéndose necesario volver a un verdadero sistema de seguridad social, un sistema basado en la solidaridad entre trabajadores activos con los que ya no están en condiciones de trabajar. No es posible permitir un sistema en el cual un trabajador, al jubilar, quede pobre automáticamente percibiendo menos de un tercio de lo que ganaba como sueldo”. La marcha se realiza por el paseo Ahumada en la que los diversos manifestantes gritan consignas como “AFP, AFP, otra herencia de Pinochet”. Gonzalo Cid, economista de Fundación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), hace ver que “las AFP están recaudando el 100% de las cotizaciones haciendo creer que es un sistema privado eficiente, pero la verdad que el 60% de las pensiones que ellos han pagado durante toda su historia se hace con fondos públicos que reciben por medio de diversos subsidios estatales. Esto es una vergüenza para el país y una gran estafa para los trabajadores y trabajadoras”. El acto termina sin incidentes en Alameda con el Paseo Ahumada.

Efectivos de las fuerzas especiales de Carabineros llegan hasta la comunidad Wente Winkul Mapu, ubicada en la comuna de Ercilla, IX Región de La Araucanía, para realizar allanamientos, según informan comuneros víctimas del mismo. Los dirigentes de la comunidad denuncian que las tanquetas y buses policiales mantienen bloqueados los accesos del perímetro del lugar, impidiendo el ingreso. El prefecto de Malleco no se ha referido aún a la situación. La acción tiene como saldo tres comuneros detenidos y la destrucción de gran parte de ocho viviendas allanadas. Además, se registra que al finalizar el operativo un carabinero resulta herido.

Martes 3

Entre lienzos, cantos y gritos, la III Región de Atacama se hace presente frente a los Tribunales de Justicia, esto para solicitar ser parte de los alegatos en el proceso de apelación que lleva a cabo la empresa MPX, el Consejo de Defensa del Estado y la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, ante la Corte Suprema de Santiago, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinara que la autoridad había procedido de manera ilegal y arbitraria en la aprobación de la Termoeléctrica Castilla, y que por lo tanto debían revocarse los permisos indebidamente otorgados. Junto con hacerse parte en los alegatos, la comunidad solicita una medida precautoria basada en la

contundencia del fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que busca detener las obras y los procedimientos que puedan consolidar el proyecto, en tanto dure el proceso de apelación en la corte suprema. Por otra parte, mediante una carta al presidente de la corte suprema, manifiestan su malestar frente a las declaraciones de prensa de diversas autoridades del poder ejecutivo, tendientes a “presionar indebidamente a nuestro máximo tribunal de justicia, trasgrediendo gravemente la independencia y separación de los Poderes del Estado y, en particular, la del Poder Judicial”, esto en referencia a los dichos del ministro de Economía, Pablo Longueira, y del ministro subrogante de Energía, ex gerente de Termoeléctrica Guacolda, Sergio del Campo. Las comunidades, acompañadas por diversas organizaciones de Santiago, transitan luego a las dependencias del Ministerio de Economía para entregar productos del pueblo de Totoral al ministro Longueira, luego de que el mismo se negara a acceder a una audiencia solicitada con dos semanas de antelación por la junta de vecinos de Totoral. A pesar de los 800 kilómetros recorridos por la delegación de cuarenta y cinco representantes de organizaciones y comunidades de Atacama, la negativa del ministro es rotunda, y la delegación de Totoral no es atendida.

Luego de nueve horas de agonía y de haber sido sometido a una intervención de más de dos horas en el Hospital de Temuco, el sargento segundo de carabineros Hugo Albornoz Albornoz fallece a la edad 39 años, esto a raíz de una falla multiorgánica y una anemia aguda causada por la herida de bala que recibió en el cuello durante un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), efectuado en la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu, en la comuna de Ercilla, el día lunes del presente mes. Se indica que el disparo, procedente de un cerro al interior de la comunidad, se produjo luego de que efectivos del GOPE allanaran dos de las ocho casas de la comunidad por orden del fiscal Luis Chamorro, quien investiga un atentado ocurrido en 2011 en el fundo Centenario. El operativo fue respaldado por una tanqueta, un bus y tres carros laza gases. Participaron 40 policías, los que detuvieron a tres personas e incautaron una escopeta y municiones.

Miércoles 4

La semana pasada, la mayoría de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Jumbo aprobó la moción de comenzar una huelga legal para exigir a Cencosud –dueños de la cadena de supermercados– mejoras en sus condiciones laborales. Ahora, lideran una manifestación al interior del los malls Alto Las Condes, Arauco Maipú y Bilbao para oficializar el inicio de sus movilizaciones. Entre sus principales demandas exigen turnos fijos para las madres con hijos menores de cinco años y señalan que “nuestras madres trabajadoras deben encargar a sus vecinas que lleven a sus hijos a la sala cuna, ya que la empresa emplea los llamados ‘turnos rotativos’”. Además piden un pago mínimo de mil 500 pesos por hora al personal de tiempo parcial –que rondó en un 40% según el sindicato– y la remuneración de 215 mil pesos para el personal de planta. Además, los trabajadores exigen mejoras en las condiciones de locomoción, almuerzo y aguinaldos. Al respecto, en un comunicado sobre el inicio de la huelga, expresan: “¿Sabía usted que el sueldo base de un part time es de 3 mil pesos? ¿Sabía usted que a nuestras cajeras no las dejan tomar agua para que no vayan al baño? ¿Sabía usted que los trabajadores de esta cadena son alimentados habitualmente con pan, té y mermelada? ¿Sabía usted que nuestra colación cuesta 760 pesos, que es un jugo pequeño y un paquete de gallegas integrales? ¿Sabía usted que Horst Paulmann está construyendo la mayor torre de América latina y comprando cadenas en otros países y su mesa negociadora dice no tener dinero para estas simples peticiones?”. “Estas demandas no tienen un gran costo para la empresa, estamos exigiendo que se nos respete como trabajadores y que se respeten las condiciones laborales presentes en la legislación vigente. El señor Paulmann no respeta

ni siquiera a las autoridades”, expresa Alderas Vargas, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Jumbo.

Tras un fallo dividido de 3 votos contra 2, la Corte Suprema da a conocer el rechazo de los siete recursos de protección presentados por ambientalistas que pretendían paralizar la construcción del proyecto Hidroaysén. “No hay perturbación o amenaza a las garantías constitucionales que se habían alegado y hoy por resolución de la Tercera Sala de la Corte se confirma el rechazo”, expresa el vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz. La decisión se da a conocer a una semana de la renuncia del presidente del directorio de Hidroaysén, Juan Antonio Albarrán. Mientras la vía legal para frenar el proyecto parece haberse agotado, aún está en manos del gobierno poder pronunciarse respecto a la instalación definitiva de Hidroaysén, a través de un consejo de ministros. Sin embargo, Marcelo Castillo abogado del Consejo de Defensa de la Patagonia, ya anunció que acudirán a tribunales internacionales. Por su parte, el secretario ejecutivo de Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, declara a *CNN Chile* que aún quedan muchos obstáculos para el proyecto, entre ellos la situación respecto a las líneas de transmisión que permitirían el funcionamiento de la hidroeléctrica. En tanto, Matías Asún, director de *Greenpeace* en Chile, afirma: “Hidroaysén acaba de llegar a la mitad de cancha. Queda el tendido [...] y la voluntad de todo un país para denunciar esta locura”. La información coincide con los resultados de una nueva encuesta de la consultora Adimark, que señala que los recuentos de aprobación del presidente Sebastián Piñera bajaron a un 29%, registrando la segunda marca más baja desde el comienzo de su mandato. Piñera, tras las movilizaciones en Aysén, ya alcanza un 64% de desaprobación en el país.

La comunidad mapuche Wente Winkul Mapu, lugar donde se vivió el allanamiento policial el día lunes 2 de abril, expresa su desconocimiento sobre la procedencia de la bala que tras un confuso hecho terminó con un carabinero fallecido a causa de ésta. “No sabemos de dónde provino esta bala, pero nosotros como comunidad estamos tranquilos, aunque también preocupados por la situación”, comenta Daniel Melinao, vocero de Wente Winkul Mapu. En tanto, el gobierno presentará una querella contra quienes resulten responsables del disparo a Hugo Albornoz. El intendente de La Araucanía, Andrés Molina, confirma que el abogado Alexander Schneider ingresó la querella al Juzgado de garantía de Collipulli. Además, Molina establece que las personas que, según Schneider, protagonizaron la emboscada, no se encuentran identificadas, precisando que “aquí nadie puede asegurar que puedan o no ser mapuches. Este tema hay que dejarlo claro, pero al mismo tiempo esto sucede en una zona donde constantemente está reivindicando o haciendo llamados al tema mapuche”. El Ejecutivo, por su parte, envía al vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, a la zona, para analizar los hechos que derivaron en la muerte de Albornoz. En tanto, el mismo fiscal que ordenó el allanamiento de la comunidad el día lunes –Luis Chamorro–, es designado por Francisco Ljubetic, fiscal regional de La Araucanía, para llevar a cabo la investigación.

Jueves 5

La Comisión Nacional de Pescadores Artesanales, presidida por el dirigente de la VIII Región del Bío Bío, Nelson Estrada, se declara en estado de alerta y exige al gobierno que retire del parlamento el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura, argumentando que su ejecución significaría “la muerte” de la pesca artesanal, porque entrega en propiedad los recursos de todos los chilenos al sector empresarial y profundiza la desigualdad social. Dirigentes de esta agrupación de las regiones de Aysén y Magallanes exponen sus demandas ante la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados en la ciudad de Santiago. En la cita, los pescadores demandan además la

presentación de un proyecto de ley exclusivo del sector artesanal y el cierre de las cinco millas marinas de Chiloé al sur a los barcos industriales, y que sea declarada como un área de protección de los recursos pesqueros. En la exposición ante los diputados, el presidente de la Comisión Nacional Sur de Armadores y Pescadores Artesanales de Magallanes, Fernando Carmona, dice que “estamos exigiendo el retiro del proyecto de ley de pesca porque privatiza los recursos pesqueros en desmedro de los intereses del sector artesanal y de las comunidades costeras”. Para el dirigente, “esta iniciativa debe ser discutida a nivel regional porque no se puede trabajar detrás de un escritorio. Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, la pesca artesanal muere en menos de dos años”. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Pescadores Artesanales, Nelson Estrada, señala que “vamos a convocar a un paro nacional si no se acoge la demanda del sector de retirar el proyecto de ley de pesca para poder consensuar una ley que sea exclusiva para el sector de la pesca artesanal. Este proyecto es un traje a la medida de los industriales”.

Un grupo de al menos seis personas, al que podría añadirse una larga lista a la luz de las declaraciones de testigos, está siendo investigado por el fiscal de Collipulli, Luis Chamorro, a raíz del asesinato del sargento segundo de carabineros Hugo Albornoz, abatido durante el allanamiento a la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu, en la comuna de Ercilla. Chamorro, quien trabaja en calidad de fiscal exclusivo para capturar a los responsables del asesinato, decreta el secreto de investigación por treinta días. La imposibilidad de entregar información al respecto se extendería a la investigación por el ataque ocurrido en octubre de 2011 al fundo Centenario de Ercilla, proceso por el cual se realizó el allanamiento en que fallece el policía. Chamorro selecciona a un equipo de doce investigadores para llevar adelante las pesquisas, compuesto por seis detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y seis carabineros.

Domingo 8

Como “efervescencia social” califica el alcalde de Malloa, Luis Barra, al conflicto de Pelequén, ubicado dentro de su comuna y 41 kms al suroeste de Rancagua. Sus habitantes inician una escala de protestas contra una planta de residuos orgánicos que los lleva a cortar la Ruta 5, lo que causa un taco –expresión que en Chile significa “tránsito pesado o casi detenido”. Los vecinos afirman que desde hace dos años reclaman contra los malos olores, las plagas de moscas y ratones e incluso por los problemas digestivos en los niños que atribuyen a la planta de lodos de la empresa Colhue. Dicen no haber sido escuchados por las autoridades. “La gente reclama por una causa justa. Las autoridades no hacen lo que tienen que hacer, y la gente no ha sido escuchada. Por eso protestamos”, dice Luis Arellano, vecino del lugar. Los vecinos exigen el cierre de la empresa.

Martes 10

Los pescadores artesanales de caletas Queule y La Barra esperaron al intendente, Andrés Molina, con el fin de continuar el diálogo para solucionar los problemas por los que atraviesa el sector. El encuentro, que se iba a realizar en Queule, había sido agendado por la propia autoridad regional. Sin embargo, es Freddy Rivas, director regional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), quien toma el lugar de Molina en el diálogo, tras llegar a la caleta con cuatro horas de atraso. Digno es de subrayar que al consultárseles telefónicamente sobre la hora en que la autoridad llegaría a la caleta, desde el gobierno regional respondieron que el intendente hubo olvidado la cita. Además, como se preveía, Rivas llega sin propuestas concretas a la reunión, lo que

termina por molestar a los pescadores, quienes deciden romper el diálogo con el gobierno regional e iniciar movilizaciones. “Hoy nos dimos cuenta que el intendente ni siquiera leyó las propuestas que le hicimos la vez pasada en La Barra, y que son propuestas que él mismo pidió por escrito”, señala Aldo Ulloa, presidente del sindicato de pescadores artesanales de dicha caleta. En tanto Patricio Olivares, dirigente de Queule, indica: “Quedó demostrado que al intendente no le interesan los pescadores artesanales. El habla que hay que dejar de darle la espalda al mar pero la verdad, no le importa. Este era un tema de voluntad que pasaba por él; donde él tenía que tomar decisiones, así que las relaciones se han roto”. Ambos dirigentes indican que es necesario pasar a una etapa de movilizaciones, que comenzará en los siguientes días. Los pescadores artesanales de Queule y La Barra habían desarrollado, ya en marzo pasado, un documento de trabajo con el gobierno regional que señala, entre otros puntos, la elaboración de una política regional para el sector, la creación de un instituto de investigación regional pesquero, así como el rechazo a la construcción de un puerto en la zona de Nigue y mejoras en infraestructura portuaria y caminera, y financiamiento para estudios que desarrolle la actividad de un modo sustentable.

En la comuna de Providencia, en Santiago, un grupo de ex alumnos del Liceo Arturo Alessandri Palma intenta tomarse el recinto. Diez días llevaba el ex vocero del liceo, Moisés Paredes, planteando la ocupación del establecimiento, junto con un centenar de alumnos y ex alumnos. Los jóvenes quieren dar a conocer la lentitud con que ha tratado la justicia los recursos de protección que buscan la restitución de sus matrículas, luego de que les fueran caducadas por participar en las tomas de 2011. De los 49 alumnos expulsados, 28 mantienen su situación pendiente, 15 desistieron y seis fueron reincorporados. Si bien la toma pretendía extenderse por 24 horas, el rechazo de los alumnos –que hacen ver su deseo de ingresar a clases– determina que sólo dure cinco horas. El ministro de Educación, Harald Beyer, repudia la manifestación insistiendo en que éste “tiene que ser un año de diálogo” y llama a esperar las resoluciones de la justicia.

Miércoles 11

Más de 2 mil personas se reúnen en la Plaza de Armas de Santiago para exigir “¡Patagonia, sin represas!”. La marcha sin autorización con destino a la Plaza de la Ciudadanía se inicia acompañada por cientos de carabineros y fuerzas especiales. Minutos más tarde, sin provocación, un carabinero acciona el motor del carro lanza agua, iniciando la lluvia de agua con químicos tóxicos. Carabineros intimida las dos horas que dura la marcha, no dejando que la ciudadanía llegue a la Plaza de la Ciudadanía, la cual está bien vigilada. No se registran detenidos.

La Corte de Apelaciones de Santiago acoge los recursos de protección de siete alumnas del Liceo Carmela Carvajal, a las que se les canceló la matrícula por haber participado en protestas a las clases del plan “Salvemos el año escolar”, del Ministerio de Educación, y por no inscribirse en dicho programa durante el 2011. En fallo unánime, los integrantes de la Cuarta Sala, la ministra Soledad Melo, el fiscal judicial Daniel Calvo y la abogada integrante Paola Herrera determinan que no hay antecedentes para suponer que el colegio respetó el debido proceso cuando se les expulsó. Se constata que no existió una investigación de por medio y que sólo se las llamó para notificarles de la decisión tomada por la directora Rosa del Valle Pérez. El fallo ordena que se reintegre inmediatamente a las estudiantes a las clases regulares.

La empresa Colhue detiene de manera voluntaria la operación de la planta de lodos de Pelequén, la que fue cuestionada por los vecinos del sector por acusar malos olores y una plaga de moscas.

Mediante una declaración pública firmada por Germán Prado, presidente de Colhue, se explica que el receso permitirá “la autoevaluación de los procesos productivos, la más rigurosa revisión de la observancia de las normas y condiciones establecidas en la resolución de calificación ambiental y, si fuera preciso, formular eventuales propuestas de modificación de dicha resolución”.

Jueves 12

Las siete alumnas del Liceo Carmela Carvajal que, tras un fallo de la Corte de Apelaciones, serían reincorporadas este jueves, llegan hasta la 19º Comisaría de Carabineros de Providencia para estampar una constancia por el desacato del establecimiento a lo decidido por la justicia. Las estudiantes se dirigen hasta el recinto policial acompañadas de sus padres y apoderados, luego de que la directora del liceo prohibiera el reingreso de las alumnas, contrariando la orden judicial. Cabe destacar que a dicha constancia se sumará una denuncia por parte del abogado Cristián Zúñiga ante los tribunales, contra el actuar de la directora de no acoger a las jóvenes. A su vez, las alumnas del establecimiento inician un paro interno para exigir la reincorporación de las estudiantes. La medida se toma luego de una asamblea realizada por las alumnas para analizar la situación de sus compañeras y evaluar las acciones a seguir.

“En la comuna los fallos, aunque no sean los definitivos, se aceptan. Por lo tanto los alumnos pueden incorporarse al colegio, las puertas están abiertas”, indica el director de la corporación de educación de Ñuñoa, Raúl Fernández, al enterarse del fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó al liceo Augusto D’Halmar, de esa comuna, reintegrar a clases a los treinta y un alumnos expulsados en enero pasado por su participación en la toma del establecimiento en 2011. La afirmación del funcionario de Ñuñoa marca un contrapunto con la decisión del alcalde de Providencia Cristián Labbé, de no acatar un fallo similar y reincorporar al liceo Carmela Carvajal a siete alumnas. Aunque el liceo Augusto D’Halmar dejará sin efecto las sanciones aplicadas, la corporación aclara que apelara ante la Corte Suprema para revertir la medida.

Alrededor de cien integrantes de la Federación Nacional de Pobladores “Ukamau” se manifiestan en el sector de la Alameda a la altura del Terminal de Buses Sur en Santiago, por temas habitacionales. Según los propios participantes de la protesta, exigen que se promulgue el nuevo Decreto de Vivienda que esperan desde 2011. “Desde septiembre del año pasado que no hay política social para los más pobres de este país, y no pueden postular a su vivienda propia”, añade Doris González, vocera del movimiento. Doria agrega que “estamos cansados de esperar que el gobierno haga oídos sordos y [de que] no nos lleve a una política social adecuada”. Además, sentencia que están aburridos de que los senadores “se sigan subiendo el sueldo. Una vergüenza”. Por último, cabe destacar que los manifestantes son escoltados por carabineros durante su marcha, por lo que el tránsito vehicular no se vio muy afectado.

Viernes 13

La Corte de Apelaciones de Santiago acoge un recurso de protección a favor de ocho alumnos del colegio Alain de la comuna de La Florida, y ordena al establecimiento reintegrar a los estudiantes. El abogado de la Defensoría Popular, Sergio Marabolí, explica que a los jóvenes se les había cancelado la matrícula de manera arbitraria y que a partir del lunes ya pueden regresar al liceo particular subvencionado. Agrega que los recurrentes habían sido parte de los 25 alumnos que el

año pasado fueron expulsados del recinto, situación que también se normalizó mediante un recurso de protección.

Aproximadamente 35 alumnas del Liceo “Carmela Carvajal” llegan al frontis de la municipalidad de Providencia para participar de una protesta contra el alcalde Cristian Labbé, acción que pretende respaldar a siete estudiantes de la institución a las que se les negó su matrícula para este año, pese al fallo de la Corte de Apelaciones metropolitana, que ordena su reincorporación inmediata. Danae Díaz, vocera de las estudiantes del liceo, indica que la protesta tiene un sentido simbólico, de repudio hacia la acción del alcalde, quien –asegura– “parece ser un dictador dentro de la comuna de Providencia”. Asimismo, comenta que Labbé se dio cuenta de que no cuenta con el apoyo ciudadano, a diferencia del respaldo con el que gozan las escolares. En cuanto a la directora del establecimiento, Rosa del Valle, Díaz señala que “se está lavando las manos”, y que espera que finalmente tenga la voluntad de matricularlas. Respecto al paro interno que se desarrolla dentro de la institución a modo de apoyo, la vocera comenta que al parecer no sigue, ya que las jóvenes están siendo perseguidas y viven a diario un tenso ambiente.

Lunes 16

Los alcaldes de las comunas mineras del norte, encabezados por el jefe comunal de Calama, Esteban Velásquez, junto a representantes de la Asamblea Ciudadana de esa ciudad, llegan a Santiago para exigir al gobierno el cumplimiento de la promesa de mandar al Congreso el Fondo de Desarrollo del Norte (FONDENOR), un proyecto para financiar del desarrollo en esas zonas. Los acompaña en la manifestación el presidente de los subcontratados del cobre, Cristian Cuevas, quien insiste en que la única solución viable a los problemas de centralización y de abandono de las regiones es la renacionalización del cobre, el agua y otros productos básicos, así como la democratización del Estado. Velásquez dice que hasta ahora el gobierno no ha entregado información alguna del proyecto de FONDENOR, y demanda el derecho de las comunidades a conocer y participar de su contenido. Sin embargo, lamenta que el presidente no haya querido recibirlos, delegando en funcionarios subalternos un debate de la mayor importancia para Chile. “Calama es la comuna más importante de América Latina”, dice Velásquez, aludiendo a las riquezas mineras de la cercana Chuquicamata. De esas riquezas, “por décadas, en la ciudad no quedó nada”, agrega.

La Corte de Apelaciones de Santiago desecha la acción judicial presentada por siete alumnas que solicitaban ingresar inmediatamente a clases en el Liceo “Carmela Carvajal” antes de que su situación sea resuelta por la Corte Suprema. La Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, en forma unánime, declara “inadmisible por improcedente” la orden de no innovar interpuesta por el abogado defensor de las estudiantes, Cristián Zúñiga. El profesional pretendía que esta sala le permitiera el ingreso a clases de las alumnas, las cuales habían obtenido un fallo a favor en el recurso de protección que considera ilegal y arbitrario que se les haya cancelado la matrícula por participar en movilizaciones el año pasado. De esta manera las estudiantes sólo podrán retomar sus estudios en el mencionado establecimiento si la Corte Suprema rechaza la apelación interpuesta por la municipalidad de Providencia.

Miércoles 18

Los sindicatos Forum y Escasa, pertenecientes al banco BBVA, se toman las dependencias de la entidad ubicadas en la calle Huérfanos 1234 para luego hacer lo mismo en la sede de la calle Bandera, en Santiago Centro. A veintiún días de comenzado el paro de actividades que demanda mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas, aún no tienen respuesta de la dirección de la empresa. A lo menos cincuenta trabajadores de ambos sindicatos, conjunto a personas de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, se toman ambas dependencias del banco español debido a que las negociaciones con la empresa se encuentran “en un punto muerto”. Nelson Vera, trabajador de BBVA, establece que la entidad bancaria no ha manifestado soluciones ni menos flexibilizado su postura, al contrario de las y los trabajadores, quienes han disminuido la cantidad de demandas. Sin embargo, han constatado que BBVA ha puesto avisos en diversos medios para buscar personal de trabajo mientras las y los trabajadores se encuentran movilizados.

Jueves 19

La Coordinación de Organizaciones de Pescadores Artesanales y del Borde Costero de la Comuna de Toltén, en Temuco, sostiene una serie de encuentros con representantes estudiantiles de la Universidad de La Frontera (UFRO) y de la Universidad Católica. Durante la jornada, ambos sectores definen líneas de acción para rechazar la actual Ley de Pesca que se tramita actualmente en el congreso. Cabe destacar que la iniciativa legal ha generado el rechazo de numerosas agrupaciones de pescadores artesanales en todo el país, pues en el caso de que la normativa sea aprobada, entregaría el control de los recursos marinos por 20 años al sector industrial, produciendo graves impactos sobre los recursos marinos y el ecosistema. “La aprobación de la Ley de Pesca está propiciando una crisis alimentaria en el país al entregar los pocos recursos que quedan a los grupos que controlan las cuotas de pesca”, alerta Patricio Olivares, representante de la coordinación de organizaciones de pescadores y del borde costero de la comuna de Toltén. En ese contexto, es fundamental la construcción de alianzas con el movimiento estudiantil y otros sectores sociales. “Pensamos que estas alianzas son necesarias, fundamentalmente para nosotros como pescadores artesanales. Es importante que nuestra actividad sea reconocida en Chile, porque la mayor parte de lo que producimos va en beneficio de la alimentación del país”, manifiesta Patricio Olivares. En ese marco, los pescadores artesanales de Toltén también recuerdan que el gobierno regional de la Araucanía no quiso seguir escuchando las demandas que en su momento le fueron planteadas por los pescadores, dando nulo cumplimiento al compromiso que en el mes de marzo asumió el intendente Andrés Molina para revisar las demandas que le hizo sector artesanal de Queule y caleta la Barra, donde el tema principal era solicitar al presidente Piñera el retiro inmediato del proyecto de Ley de Pesca. Por su parte, los estudiantes de las universidades de La Frontera y Católica de Temuco, respaldan la propuesta de los pescadores artesanales, comprometiéndose a apoyar el rechazo que se mantiene contra la actual Ley de Pesca y las próximas movilizaciones en torno al tema. “Es muy importante que los pescadores eviten esta ley, pues promueve un modelo que no les está permitiendo trabajar. Como estudiantes estamos viendo nuestra vinculación con los otros sectores que se están movilizando en Chile, pues perfectamente un padre de nosotros puede ser un pescador y la aprobación de la actual ley significa la extinción de la pesca artesanal, generando graves impactos para todo Chile”, concluye Felipe Valdebenito, presidente de la Federación de Estudiantes de la UFRO.

Una inusual protesta realizan los choferes que pertenecen a la empresa La Araucaría del

Transantiago, quienes salen a conducir en calzoncillos por los recorridos G03 y G15, que van hacia La Pintana. Son cerca de 850 trabajadores los afectados por el no pago de imposiciones, seguro de cesantía y caja de compensación, informan los manifestantes. La medida la toman porque “están al desnudo”, según acusan, a causa de los problemas laborales que llevan con La Araucaría, empresa que no habría pagado como corresponde las imposiciones.

Nuevamente, la Plaza de Armas aloja el rechazo a un megaproyecto energético que pone en peligro todo el territorio que está al sur de Chile, hasta la Patagonia. La manifestación contra el nefasto Hidroaysén comienza con el grito “¡Patagonia sin represas!”. La manifestación pretende caminar por el Paseo Ahumada, pasar por la Alameda y llegar a La Moneda, pero fuerzas especiales y Carabineros cortan la vía peatonal con vallas papales y con decenas de estos funcionarios que se apostan a bloquear el camino de los asistentes, antes que la marcha avanzara. Según los manifestantes, comienza una brutal intimidación, y carro lanza aguas y lanza gases dispersan a los manifestantes. “Esta situación da cuenta de lo viciado que está nuestro sistema democrático, en que lejos de abrir espacios, se vuelven a cerrar. Este es un gran paso para la dictadura y la violencia, un retroceso para la humanidad, una vergüenza para Chile”, señala uno de los asistentes.

Viernes 20

De forma pacífica se manifiestan alrededor de 300 secundarios y apoderados en la Plaza de Armas de Santiago, para apoyar a los alumnos expulsados y a los profesores despedidos tras participar en las movilizaciones del año 2011. “Queremos protestar por la no reintegración de los compañeros y por la persecución que están sufriendo los que están en clases y participaron del movimiento el año pasado”, dice la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloisa González. Denuncia, además, que la creación de los Centros de Alumnos ha sido boicoteada fuertemente en algunos colegios. “La realidad es que los compañeros ni siquiera pueden reunirse durante el recreo. Los hostigan y amenazan. Esto se vive a diario en colegios como el Amunátegui, Cervantes, Liceo 4 y Barros Borgoño”. Incluso, indica que “en algunos establecimientos los dirigentes de los Centros de Alumnos han sido designados. Esto no puede seguir pasando”. Gabriel González, presidente provvisorio de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONEs) critica a los alcaldes de Providencia y Ñuñoa –Cristián Labbé y Pedro Sabat, respectivamente–, que en las últimas semanas han impedido el reintegro de alumnos en colegios de estas comunas, pese a un juicio de la Corte de Apelaciones que ordenó el reintegro inmediato. El joven representante estudiantil considera que “la intención de los alcaldes es descabezear el movimiento estudiantil, porque dentro de los liceos Carmela Carvajal, en Providencia, y en el Augusto D’Halmar, en Ñuñoa, no están existiendo presidentes ni centros de alumnos. Llamamos a movilizarnos”. “Esto no ha terminado y las movilizaciones estudiantiles tienen que continuar”, insiste. La concentración cuenta también con la presencia de la vicepresidenta y el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), Camila Vallejo y Gabriel Boric, quienes expresan su apoyo a las demandas de sus compañeros secundarios. Respecto al alcalde de Providencia, Cristian Labbé, el presidente de la FECH señala: “Tenemos a un alcalde en Providencia que nos recuerda de los tiempos más oscuros de este país”, refiriéndose a la dictadura militar.

Un grupo de censistas (encuestadores) de Conchalí opta por paralizar indefinidamente sus labores, luego de denunciar rebajas en el sueldo prometido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El INE responde en un comunicado que las condiciones no han cambiado, y que la confusión se produjo cuando el encargado técnico comunal de una comuna de Santiago “elaboró y difundió un

papel sin autorización del INE, basado en un documento no oficial que contenía un error de tipeo, a los censistas durante el período de capacitación”. Ante esta situación, el instituto sostiene que desvincula del proyecto Censo al responsable de la elaboración del mencionado documento, “al tomarse atribuciones que están más allá de su cargo, comprometiendo la imagen de la institución”. Posteriormente, se suman a las movilizaciones las comunas de Cerro Navia, Huechuraba, Puente Alto y Ñuñoa, agregando nuevas acusaciones relacionadas al seguro del trabajo, horas extras y más de un mes sin contratación formal.

Un helicóptero para el combate de incendios forestales que esta posado al interior del campamento forestal La Granja, propiedad de la empresa Mininco, es el blanco inicial del ataque incendiario ejecutado por al menos cinco encapuchados, que llegan a la zona, ubicada a 5 kilómetros al norte de Collipulli. La presencia de carabineros los alerta de seguir avanzando hasta la máquina. Finalmente, los sujetos optan por quemar un camión aljibe y otro más pequeño para el transporte de personal. Luego huyen hacia predios vecinos. Se trata del tercer atentado en la zona mapuche contra forestales en menos de cinco meses, y el segundo contra el helicóptero para combatir incendios.

La Comunidad Autónoma de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, es allanada por alrededor de doscientos efectivos policial de Fuerzas Especiales de Carabineros, los cuales fuertemente armados irrumpen en el territorio de Temucuicui para registrar y llevarse nuevamente distintas especies de propiedades de los miembros de la comunidad. En este procedimiento, se informa también que carabineros le disparan al *lonco* –máxima autoridad– Víctor Queipul Huaiquil, quien se encuentra en lugar del allanamiento, y a otros comuneros que se encuentran heridos. Entre ellos, el menor de 16 años Lautaro Nain, el cual resulta herido por al menos diez impactos de balines metálicos en distintas partes de su cuerpo, siendo trasladado al hospital de la ciudad de Victoria. Víctor Queipul manifiesta que “Carabineros ingresa e irrumpie violentamente a la comunidad, sin exhibir orden del procedimiento. Yo, al ver a carabineros disparando a nuestra gente, trate de identificarme, pero estos sin mediar palabra me disparan, teniendo que lanzarme a una zanja para no ser alcanzado por las municiones. Esta situación de violencia por parte de carabinero no la voy aceptar, no permitiré que nuestra gente siga soportando estas graves agresiones que se cometen en nuestra propia tierra. Exijo que las autoridades se pronuncien”.

Martes 24

En la Región Metropolitana, un grupo de manifestantes instala barricadas bloqueando distintos puntos de Vespucio Sur debido a demandas habitacionales de la Federación de Pobladores de Chile. Los principales problemas se registran en Vespucio con José Arrieta, Florida con Departamental, Vicuña Mackenna con Departamental, Las Condes con Huechuraba, Vespucio con Santa Rosa, Vespucio con Orientales y Vespucio con Eduardo Castillo Velasco, donde los dirigentes del Comité de Allegados de Peñalolén se movilizan para pedir al presidente Sebastián Piñera que permita la compra de terrenos para instalar sus viviendas. “El presidente sabe el problema que tenemos, por eso queremos una solución ya que sólo luchamos por una casa digna. Estamos luchando para que el presidente compre los terrenos, porque terrenos hay y dinero también”, señala Carlos Mondaca, presidente del Comité de Allegados. Asimismo, los manifestantes solicitan ser recibidos por el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, para que se dé continuidad a un compromiso que tendrían desde el 2010 con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Posteriormente, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros llega hasta los focos de protesta para restablecer el tránsito. Finalmente, los manifestantes se repliegan de forma pacífica y continúan realizando la protesta sin

bloquear la calle, según indica el comandante Roberto Saldivia, de la Prefectura Oriente, quien destaca la buena disposición del Comité de Allegados.

Un grupo de representantes de las asambleas populares, que mantenía tomado el Instituto Libertad, ubicado en calle Galvarino Gallardo 2509, en Providencia, levanta la toma que mantenía en dichas dependencias después de dos horas. Sostiene una reunión con el director del Instituto Libertad, Roberto Ossandón, quien se compromete a mediar en el conflicto de los manifestantes con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), en cuanto a los problemas habitacionales, prometiendo una reunión con los vecinos. La vocera, Catalina Castillo, había manifestado previamente a la radio *BioBio* que los vecinos de las poblaciones de Independencia, Maipú y Puente Alto esperan que el gobierno dé respuesta a una serie de demandas relacionadas con las mesas de negociación que, según manifiesta, no se ha cumplido. En este sentido, señala que el subsecretario de Vivienda, Juan Carlos Jobet, se había comprometido a dar una solución y a instalar una mesa de trabajo, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.

Miércoles 25

Se reactiva el movimiento estudiantil con la marcha nacional convocada por los dirigentes universitarios y secundarios para este miércoles en Santiago. Los estudiantes se toman la calzada norte de la Alameda para marchar desde la Plaza Baquedano al poniente, y finalizar en el sector de Estación Mapocho. Los dirigentes estudiantiles Gabriel Boric y Camila Vallejo encabezan la manifestación junto a Eloísa González, vocera de la ACES, quienes se muestran muy satisfechos por la convocatoria a esta primera marcha masiva del 2012, cifrando en más de 80 mil las personas asistentes a la manifestación. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, afirma: “los estudiantes que marchan hoy es para enterrar de manera definitiva la verdadera herencia de la dictadura militar en materia educacional, que es la reforma de 1981 en el ámbito universitario y la desmunicipalización de los liceos”. Emplaza además al gobierno a dialogar en base a requisitos mínimos, como la reintegración de los estudiantes expulsados por participar de movilizaciones y que no van a discutir “en los márgenes” de la propuesta de financiamiento estudiantil presentado por el Ministerio de Educación. Una vez finalizada la multitudinaria manifestación, grupos de jóvenes se dirigen hacia la Alameda para interrumpir el tránsito, interviniendo personal de carabineros. Los hechos de mayor gravedad se registran en las inmediaciones del Mercado Central, donde un grupo incendia una caseta de seguridad de la municipalidad de Santiago. Los dirigentes estudiantiles condenan los hechos de violencia y llamaron al gobierno a que ojalá “destaque lo positivo de la marcha”.

Detienen a nueve estudiantes tras desalojar el liceo que es tomado ilegalmente durante media hora en Santiago. El incidente ocurre en el Liceo “Arturo Alessandri” de la comuna de Providencia. Hasta el lugar llega personal de fuerzas especiales y demás efectivos policiales, quienes dan a conocer que el desalojo se realiza sin problemas ni resistencia, por lo que se detiene a los menores de edad que más tarde son trasladados hasta 19^a Comisaría. Cabe recordar que durante la jornada del martes se dio a conocer un fallo unánime de la Corte Suprema que favoreció al alcalde de Providencia, Cristián Labbé, en torno las medidas de “no renovación de matrículas”, que afecta a los alumnos de liceos de la comuna, entre ellos a 30 estudiantes del Liceo “Arturo Alessandri”.

Jueves 26

Agrupaciones de Derechos Humanos realizan una manifestación pacífica en las afueras del Fuerte Aguayo, en Concón, rechazando la instalación de las dependencias de entrenamiento que fueron construidas al interior del recinto con recursos norteamericanos. Aún cuando la Armada ha insistido en que se trata sólo de una cancha de entrenamiento para operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), rechaza la intervención norteamericana. Eduardo Morris, de la Agrupación de Derechos Humanos de Valparaíso, se suma a las críticas que ya han hecho parlamentarios sobre estas instalaciones, en el sentido de que aseguran se trata de una base militar disfrazada de una cancha de entrenamiento. Los manifestantes llegan hasta el frontis del Fuerte Aguayo con pancartas alusivas a este rechazo y a la violación a los derechos humanos ante la atenta mirada de la guardia del fuerte, que cobija a la Infantería de Marina y a los carabineros, que llegan a las inmediaciones de la instalación militar.

Un grupo de siete encapuchados quema dos casas de veraneo ubicadas a 37 km al sur de Cañete, en la VIII Región del Bío Bío. Tan sólo 45 minutos más tarde, un grupo similar y con el mismo método quema siete contenedores y dos camiones-guía de una empresa forestal, a 30 km de distancia.

Viernes 27

La localidad de Freirina –en la Provincia del Huasco– se encuentra bajo estado de alerta. Dirigentes del lugar informan que, tras la reunión con la intendenta regional de Atacama, no se llega a soluciones reales para terminar con las pestilencias que deben vivir los pobladores por la actividad de la planta de Agrosuper. La intendenta, Ximena Matas, tras no dar soluciones reales, “literalmente arrancó del lugar”, según cuentan los dirigentes sociales. Sin embargo, otras informaciones señalan que la primera autoridad regional habría quedado atrapada en el taco que se forma por las barricadas realizadas por los habitantes. Los pobladores se encuentran indignados por la falta de soluciones, salen espontáneamente a las calles y mantienen cortada la carretera. Hay al menos seis focos de resistencia y carabineros despacha contingentes de fuerzas especiales a la zona para poner fin a la protesta.

En el camino que une Alto Antiquina con la ruta Cañete - Tirúa –a 35 km de Cañete–, un grupo de ocho encapuchados quema la camioneta de seis brigadistas forestales. Este ataque, más el registrado este jueves, eleva a 13 los atentados incendiarios que han sucedido en la Región del Biobío desde junio de 2011. Los delitos son investigados por un equipo especial de la fiscalía, pero aún no hay detenidos.

Gran atochamiento vehicular genera una manifestación en el kilómetro 61 de la Ruta 5 Norte, en el sector Rungue de la Región Metropolitana. La acción ciudadana se inicia cuando cerca de 20 personas instalan barricadas, impidiendo el tránsito normal de los automóviles. Se trata de un grupo de pobladores que reclama la presencia de la autoridad sanitaria por la contaminación del agua potable. Asimismo, también se registran dificultades para el desplazamiento en la Ruta 5 en dirección hacia el sur, a la altura del puente Río Maipo, ya que colisionaron por alcance tres vehículos a causa del pavimento resbaladizo.

La municipalidad de Providencia pierde nuevamente en tribunales ante recursos emprendidos por alumnos sin matrículas que participaron en tomas. La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma unánime, ordena reintegrar a diecisésis estudiantes del liceo Arturo Alesandri que habían sido expulsados por participar en las movilizaciones ocurridas el año pasado. El fallo establece que se vulneró el derecho de igualdad ante la ley con la decisión de la dirección del liceo de cancelarles la matrícula para el presente año, y que se violó la Convención de los Derechos de los Niños con esa decisión. Esta resolución se suma a los recursos de protección acogidos a favor de alumnos expulsados de los liceos José Victorino Lastarria y Carmela Carvajal, dictámenes que fueron apelados por el municipio y que se encuentran pendientes en la Corte Suprema, situación que impide que los estudiantes se reintegren a clases.

Sábado 28

En plena venta nocturna del mall Alto Las Condes en Santiago, los trabajadores de la multitienda Ripley deciden manifestarse al interior del centro comercial para protestar por sus bajos sueldos y la falta de reajustes por parte de la empresa. Los empleados llevan carteles con frases como “11 años y nunca un aumento de sueldo” o “Señores accionistas: ¿tomarían vacaciones con un bono de 34 mil pesos?”, los cuales grafican la situación por la que atraviesan.

Domingo 29

Trabajadores del la Posta Central realizan un paro de actividades por cerca de dos horas. Esto luego de que carabineros, en medio de un operativo policial, detuvieran a uno de los funcionarios del recinto hospitalario, identificado como Miguel Barahona Baeza, de 55 años, por no querer identificarse como trabajador de la posta. Tras esto es derivado a una comisaría del sector, lo que da pasó a que los trabajadores iniciaran un paro en solidaridad a su compañero de labores, razón por la cual generan una notoria molestia a los pacientes que se encontraban en el lugar. Hasta la comisaría concurre el director de la Posta Central, Emilio Villalón, quien intercede para que dejen en libertad al funcionario. Posterior a esto concluye la movilización, y Barahona queda citado a la fiscalía Centro Norte tras el incidente.

Con una marcha desde el cruce Pidima, en la carretera 5 Sur, hasta las cercanías del fundo Centenario, para luego dirigirse a la comunidad Wente Winkul Mapu, dirigentes y comuneros de las comunidades en resistencia de la ribera del lago Lleu Lleu acuden a expresar su apoyo concreto a la lucha que llevan adelante los hermanos de esta comunidad emblemática del Lof Chechenco. La iniciativa, que se concreta junto a grupos de apoyo de Temuco y Concepción, responde a la preocupación que se manifiesta tanto en la zona del lago Lleu lleu, como en el resto de *Wallmapu*, por la situación de represión, atropellos y persecución por parte de la ocupación chilena, en que viven actualmente los comuneros de Wente Winkul Mapu. Recordemos que la comunidad Wente Winkul Mapu lleva adelante un proceso de recuperación de su territorio histórico desde el año 2008, el cual se encuentra usurpado por varias empresas forestales y particulares, entre ellos Bosques Arauco, Forestal Mininco y el particular Juan De Dios Fuentes. En el predio de este último, el fundo Centenario, es donde se han llevado a cabo las situaciones de mayor enfrentamiento, ya que el gobierno ha sido intransigente a entregar las 200 hectáreas que ocupa y que forman parte del territorio de Wente Winkul Mapu.

Lunes 30

En el salón O'Higgins de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera firma –junto a los ministros de Hacienda y Educación– el proyecto de ley que establece una reforma tributaria. Este considera un aumento de la cobertura preescolar –incluyendo cobertura universal de kínder y prekinder para el 60% más vulnerable de la población–, un aumento sustantivo en las subvenciones con el objetivo de avanzar en la duplicación del aporte estatal por alumno, y mayores recursos para becas y créditos. La iniciativa legal, que eleva la recaudación fiscal anual entre 700 y 1000 millones de dólares y contempla un aumento en el impuesto de primera categoría de 17% a 20% y la reducción de los impuestos a las personas, también disminuye el costo de financiamiento de las personas y las pequeñas y medianas empresas, perfecciona los mecanismos para combatir la elusión y otorga incentivos a la vida sana y la protección del medio ambiente. En la oportunidad, el primer mandatario destaca que este proyecto permitirá cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los chilenos, pues la reforma tributaria significará un incremento en la recaudación fiscal que irá íntegramente a la educación. Durante su discurso, el presidente Piñera expresa que esta reforma, tanto educacional como tributaria, se puede hacer hoy “porque hemos tenido una conducción macroeconómica seria y responsable. En un mundo golpeado por las recesiones, Chile crece con una fuerza que es envidiada en muchos países del mundo”. Tras la ceremonia, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expresa su confianza en la tramitación del proyecto de ley y destaca que la rebaja de entre el 10 y 15% en las tasas de impuesto a las personas –más alta para los primeros tramos del impuesto–, “permitirá reducir la brecha que hay entre el gravamen a las empresas y los de las personas, cuya tasa máxima baja de 40% a 36%, lo que contribuye primero a reducir los incentivos a la formación de sociedades con el solo objeto de bajar la carga tributaria, y adicionalmente otorga un alivio importante a las personas ubicadas en los menores tramos de este impuesto”.

Glosario de siglas

ACES	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
AFEP	Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
AFP	Administradoras de Fondos de Pensiones
ANEF	Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
CENDA	Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
CONES	Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
CTC	Confederación de Trabajadores del Cobre
FECH	Federación de Estudiantes de Chile
FONDENOR	Fondo de Desarrollo del Norte
GOPE	Grupo de Operaciones Policiales Especiales
INE	Instituto Nacional de Estadística
ONEMI	Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PDI	Policía de Investigaciones
SERVIU	Servicio de Vivienda y Urbanismo
UFRO	Universidad de La Frontera

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización a cargo de Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo y Punto Final; páginas web biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Mayo de 2012

Editada en noviembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 114^c

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Juan Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez.

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera. Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile

Cronología del conflicto social

Mayo de 2012

Martes 1

En Santiago miles de personas se reúnen en la Alameda tras la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el Día Internacional de los Trabajadores. La marcha se inicia desde la Estación Central y culmina con un acto central en la intersección de Alameda con la avenida Brasil, donde el presidente de la CUT, Arturo Martínez, realiza un discurso en el que resalta las necesidades de los trabajadores de un nuevo código laboral, mejor salud, educación sin lucro y un sistema de pensiones estatal al tiempo que el monto que se requiere de salario mínimo. Paralelamente, tanto en Santiago como en las principales ciudades del país la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) se hace presente con sus propias demandas: fin al lucro en la salud y que se establezca el derecho a ella en la Constitución, el término de las concesiones en el sector, más inversión del Estado y servicios de calidad para toda la población. El vicepresidente del gremio, Mario Villanueva, indica que la conformación de la Mesa Social de Salud que ha convocado a un plebiscito nacional pretende hacer participar a la ciudadanía –tal y como lo hacen países como Brasil y Suecia– para que se exprese sobre los temas del sector que preocupan a la mayoría de los chilenos, como es el lucro.

Miércoles 2

Organizaciones sociales de Freirina declaran rotas las conversaciones con las autoridades regionales ante el traslado de la mesa de diálogo a la ciudad de Vallenar. El malestar de los vecinos del valle del Huasco se debe a la instalación de una serie de obras y proyectos contaminantes, siendo los malos olores producidos por una planta de Agrosuper la cuestión que colmó sus ánimos. Ante la inacción de las instituciones estatales, las agrupaciones se han tomado en dos ocasiones la carretera adyacente a Freirina. Según voceros vecinales, en estos momentos la localidad de la III Región de Atacama, se encuentra “sitiada” por Fuerzas Especiales de Carabineros, por lo que llaman a mantener la calma para evitar los enfrentamientos. Los dirigentes sociales del Valle del Huasco, representando a la comunidad frente a las autoridades por los conflictos socioambientales suscitados en este territorio, han invalidado la invitación a establecer la mesa de diálogo con el gobierno por no haber sido abiertos los espacios de diálogo en la comuna de Freirina, ya que es en esta comuna en donde se encuentra la problemática, al trasladarse la mesa de diálogo a la comuna de Vallenar, y por la inoperancia del gobierno frente a la comunidad en dar respuestas concretas a la contaminación arrasadora provocada en el Valle del Huasco por años y que se ha visto profundizada en los conflictos por los olores emanados de la planta de Agrosuper.

Alrededor de 40 isleños de Isla de Pascua realizan una protesta pacífica en las afueras del Hotel Hanga Roa tras una reivindicación de tierras ancestrales que ha ocupado el Estado chileno durante años sin dar ningún tipo de compensación económica. Los manifestantes, con carteles y gritos, dan a conocer su molestia a los turistas “por financiar un hotel que se construyó sobre el despojo de su tierra”. Según relatan, los visitantes se esconden en los patios interiores del hotel para evitar toparse con quienes protestan, aunque igual la familia Hito consigue entregarles folletos y explicarles los

fundamentos de su lucha. “Cabe tener presente que el citado hotel se construyó sobre el Ahu Makere (altar familiar de los Hitorangi). Por lo mismo, los Hito invocan a sus ancestros (matamúas) pidiéndoles que los ayuden en su lucha por recuperar su tierra”, explican en un comunicado.

Luego de meses de intensas acciones entre las organizaciones ciudadanas y mapuche de Carahue, estas logran que la empresa Copper Capital Minera La Montaña Ltda. desista de realizar el proyecto minero “Explotación lavadero de oro, segunda presentación” en el sector Río Colico, comuna de Carahue, IX Región de La Araucanía. Así se reporta desde el municipio local, indicando que los representantes ciudadanos de la zona advirtieron que esta extracción minera produciría un inminente daño ambiental en la zona calificada como “patrimonio natural comunal”. Cabe destacar que la ciudadanía recibió el respaldo de la municipalidad de Carahue y de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).

Jueves 3

Unos 50 habitantes del Cajón del Maipo, Región Metropolitana de Santiago de Chile, se toman el camino que une la ruta G-25 con la localidad de Maitenes. Los manifestantes apelan en contra del Proyecto Hidroeléctrico AltoMaipo de la empresa transnacional estadounidense Aes-Gener. Los fundamentos de la toma se resumen en que la empresa ya está construyendo y cortando arboles nativos en el Valle del Maipo sin los permisos para realizarlo, ya que todavía tienen que resolver juicios que tienen en su contra. La protesta protagonizada principalmente por lugareños y trabajadores del turismo termina con cinco detenidos tras la llegada de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Denuncian manifestantes que los carabineros llegaron rápidamente y con mucha violencia. Los manifestantes señalan la falta de conocimiento y de interés que la población de la región metropolitana tiene del proyecto, ya que incluso afectaría el abastecimiento de agua potable de toda la urbe de Santiago, las plantaciones agrícolas, los áridos que generan los sedimentos de los ríos afectados y el turismo en general. En resumen, se construirían 70 kilómetros de túneles que secarían los tres afluentes más importantes del río Maipo, que son los ríos Yeso, Volcán y Colorado, dejando al Maipo prácticamente sin agua del río Colorado hacia arriba.

Viernes 4

En Calama se realiza una marcha con la asistencia de unas 50 personas por la Plaza Colón, a la que se suman siete de los nueve alcaldes de la II Región de Antofagasta, contra el proyecto de ley ingresado al congreso para crear el Fondo de Desarrollo para el Norte (FONDENOR), que destinaría 266 millones de dólares a cuarenta municipios hasta el año 2025. Agrupados en la Asociación de Municipalidades del Norte, exigen al gobierno que retire el proyecto por estimarlo insuficiente.

Sábado 5

En el marco de la marcha mundial por la despenalización del *cannabis*, en Santiago la consigna “Cultiva tus Derechos, no más presos por plantar” congrega a unas 20 mil personas en Plaza “Los Héroes” con el fin de marchar por la despenalización de su tenencia y uso. Según los participantes, el autocultivo es la mejor manera de combatir el problema del tráfico de drogas. La marcha se

realiza en Santiago desde hace ocho años y este se realiza también en Iquique, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia. Nicolás Espinoza, de Movimental, uno de los grupos organizadores de la marcha, indica que este año los diversos colectivos de usuarios de cannabis entregarán un petitorio a las autoridades políticas y parlamentarios en el que argumentan las razones para la despenalización. La marcha culmina en un acto artístico donde se presentan diversos cantantes. La actual legislación sobre drogas, la Ley 20.000, promulgada por Ricardo Lagos, penaliza el porte y consumo de *cannabis* y de varias otras sustancias declaradas ilícitas. Además, en Chile la reglamentación de la ley de drogas tiene a la marihuana entre las drogas más peligrosas. “El actual enfoque prohibicionista en materia de drogas ha fracasado en su intento por abordar distintos fenómenos asociados a las sustancias psicoactivas, tanto en Chile como en el mundo. La producción y tráfico de drogas ha aumentado, al igual que los niveles de consumo”, acusan los antiprohibicionistas en el documento que se entregara a los parlamentarios y al gobierno.

Lunes 7

Trabajadores portuarios de Talcahuano inician una marcha hacia Santiago en demanda por la creación de una red de protección social para los afectados por el terremoto-tsunami de 2010. Además, denuncian que la licitación a privados de los terminales portuarios estatales solo ha significado beneficios para los particulares y para los altos cargos de la empresa pública, dejando de lado a los trabajadores. En un comunicado público indican: “Nuestra organización sindical, que representa a 180 trabajadores, demanda al Estado una red de protección social, por el impacto socio-económico que hemos sufrido producto del terremoto y privatización del puerto. Esta red que proponemos, que es un derecho adquirido en todos los puertos privatizados de Chile, consiste en pensiones para los más antiguos y quienes arrastran secuelas de enfermedades y accidentes laborales. También demandamos indemnizaciones justas que permitan compensar los 20 meses de cesantía y los años de trabajo en el puerto. El gobierno tiene el deber de responder con propuestas y buscar soluciones junto a los trabajadores y hasta el momento hemos sido derivados a interminables reuniones, siendo la única respuesta recibida de que la solución a nuestra situación pasa sólo por la reconstrucción del Terminal Portuario, y que ésta pasa solamente por la licitación. Hemos agotado todas las instancias de comunicación –ministros de Transporte, del Trabajo, de Hacienda y sus asesores, seremis regionales, intendentes, gobernadores, Alcalde, parlamentarios y Presidente de la República– y hasta el momento no hemos conseguido ninguna solución, aunque ya el Terminal ha sido licitado. La Empresa Portuaria de Chile, empresa mandante, tiene una responsabilidad frente a este impacto social y hasta el momento no nos ha entregado ninguna respuesta concreta. Su función solo ha sido la de trabajar por licitar a los privados el terminal, negocio redondo para los privados, pues se adjudican por 30 años el puerto sin responder al costo social que producen. Esta transacción fue realizada por el ex presidente del directorio de la empresa portuaria, el señor Eugenio Cantuarias, con 208 millones de pesos en su alcancía, y el gerente de la Empresa Portuaria de Talcahuano, el señor Luis Rosemberg, quien ha podido embolsarse otra buena cantidad de dinero por realizar este negocio. Ellos se reparten los bonos de gestión, mientras que fueron los trabajadores quienes generaron todas las utilidades trabajando con temporales, lluvias, calores y a la intemperie o en los embarques de pescado congelados con -20°”.

Martes 8

La Cámara de Diputados aprueba por 90 votos a favor un proyecto de ley que establece medidas

contra la discriminación, con todas las mejorías propuestas por organizaciones de minorías sexuales. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) aplaude el avance y se mantiene expectante frente a la aprobación definitiva de la ley en el Senado. La discusión cuenta con las exposiciones de los diputados Hosain Sabag, del partido Democracia Cristiana (DC), Gonzalo Arenas, del partido Unión Democrática Independiente (UDI), y Marta Isasi, independiente, quienes se manifiestan en contra, y de los parlamentarios María Antonieta Saa, por el Partido por la Democracia (PPD), Alberto Cardemil, del partido Renovación Nacional (RN), Marcelo Díaz, del Partido Socialista (PS), Aldo Cornejo (DC) y Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista (PC), así como el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, quienes apoyan la norma. Al respecto el MOVILH sostiene que “estamos cerrando positivamente una historia que iniciamos siete años atrás, cuando junto al gobierno de Ricardo Lagos nuestra organización creó y redactó esta ley. Sin duda, y paradojalmente, fue la homofobia de algunos sectores la que impidió que esta ley avanzara con mayor rapidez. La homofobia y otras formas de discriminación, están siendo felizmente vencidas desde el Parlamento”. Sin embargo, consideran que esta ley no contiene todos los elementos que quisieran. “Es tímida, por ejemplo cuando impide expresamente impugnar normas discriminatorias o cuando no indemniza a las víctimas, pero es un avance, que contribuirá a paliar la impunidad y los atropellos”, agregan.

Tras dos días de emprendida una marcha desde Talcahuano, los dirigentes de la Unión Portuaria del Bío Bío informan que el gobierno respondió a las demandas exigidas relacionadas con las precarias condiciones de vida de los trabajadores tras el terremoto del 27-F mediante la promesa de instalar una mesa de diálogo en los próximos días. En concreto, se establece un cronograma de trabajo para una mesa que abordará la mitigación tras la privatización del puerto de Talcahuano ocurrida el año pasado para cerca de 180 trabajadores, además de pensiones para los trabajadores en edad de jubilación, un plan de capacitación e indemnizaciones monetarias. Según el dirigente Eric Yévenes, la marcha “es un triunfo de los trabajadores movilizados, que con decisión y lucha lograron visibilizarse y ser finalmente escuchados. Esta movilización contó con el apoyo muy importante de estudiantes, trabajadores de Astilleros y Maestranzas de la Armada y otros portuarios de distintos puntos del país quienes se encontraban en estado de alerta”. Sin embargo, llama a seguir en estado de alerta, pues “no hay nada en la mano todavía”, por lo que hay una posibilidad de que esta sea una maniobra del gobierno para neutralizar a la movilización, pues si no había solución, este miércoles comenzaba un paro portuario indefinido. El proceso de privatización del puerto de Talcahuano se suma a muchos otros emprendidos en los últimos años y, según los dirigentes, en estos debe primar el principio de la responsabilidad del Estado en la protección a los trabajadores de acuerdo a lo establecido en convenios internacionales suscritos por Chile y a disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otros puertos donde se han entregado indemnizaciones a los trabajadores son los de Coquimbo, San Antonio y Valparaíso.

Alrededor de 20 manifestantes protestan contra la vivisección –experimentación con animales vivos– en el centro de Santiago. En pleno silencio y con imágenes de experimentación en animales, mantienen informados a las y los transeúntes sobre esta práctica antiética, según sus convicciones. Esta jornada se realiza en más de ochenta ciudades y en veinticinco países alrededor del mundo. “Esta actividad es para que la gente se informe del tema. Por ejemplo, en Europa, se pudo ver diferentes acciones colectivas contra el criadero Green Hill”, manifiesta Felipe, activista de Animal Libre. Parte del público se muestra en favor de la intervención de la organización en el centro de Santiago. En Italia, Claudio Pomo, portavoz de Cerremos Green Hill, asegura que cada año 900 mil animales son utilizados en laboratorios italianos para investigaciones científicas de diverso tipo. Esta situación podría modificar la ley tramitada en el senado italiano, la cual contempla la

prohibición de la cría de perros, gatos y primates para la experimentación, además del uso obligatorio de antestesia en este tipo de prácticas. En tanto, en Madrid, España, medio centenar de personas se activan por los derechos animales, protestando frente a la embajada italiana en ese país, exigiendo el cierre de Green Hill.

Miércoles 9

Los territorios Mawizache, Xapilwe y Wilkilko son allanados por un fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros producto de una acción de protesta que desconocidos realizan en la ruta 5 Sur contra un aeropuerto que se pretende construir en Quepe, que estaría emplazado en tierras ancestrales. Los comuneros indican en una declaración pública que “este asalto de la policía militarizada hacia nuestras familias fue alejado totalmente de toda la legalidad que supuestamente defienden. Se ingresó ilegalmente a nuestras propiedades rompiendo cercos y portones, golpeando a nuestra gente e insultando en términos racistas por el solo hecho de ser familias que se han declarado públicamente contra este nefasto proyecto de aeropuerto. Sin tener pruebas que demuestren la participación de nuestra gente en la manifestación, se procede a invadir selectivamente y sitiar algunas familias. En una clara acción intimidatoria, con sus helicópteros realizan vuelos rasantes a menos de 30 metros de altura de nuestras viviendas con tres helicópteros; dos en Mawizache, y uno entre Xapilwe y Wilkilko. Paralelo a eso cientos de efectivos invaden las comunidades por tierra, deteniendo selectivamente a nuestros integrantes, lo que nos parece injustificado pues no hay ninguna prueba que relacione a nuestro territorio como responsable de las manifestaciones”.

Lunes 14

Un grupo de activistas de Greenpeace despliega el mensaje “Castilla es ilegal” en la fachada del edificio corporativo de la empresa Parque Sur, ubicado en la calle Cerro “El Plomo”, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, que impulsa el proyecto termoeléctrico en la III Región de Atacama. Con ello afirman que la tramitación del proyecto se hizo al margen de la ley, tal como lo señala desde hace algunas semanas la Corte de Apelaciones de Antofagasta al considerar ilegal el proceder del entonces secretario regional del ministerio de Salud, Nicolás Baeza, quien intentó minimizar la condición de contaminante de la central. El proyecto se encuentra también en la Tercera Sala de la Corte Suprema, que ya se ha pronunciado sobre otros proyectos equivalentes, esperando el veredicto que sancionará definitivamente su destino. Ante el inminente pronunciamiento de la corte, Matías Asun, director ejecutivo de la organización, denuncia que “en su desesperación porque ven que Castilla se desploma, los señores de esta empresa han levantado una campaña comunicacional del terror en los medios, amenazando con un futuro negro para las inversiones en Chile si el proyecto no se materializa. Ante esta situación decimos responsablemente que se trata de falacias y que este proyecto solo existe para concretar un negocio multimillonario y para entregar energía barata a las compañías mineras, sin asumir los costos ambientales y sociales, desperdiando la oportunidad que este escenario ofrece justamente para incentivar la entrada de nuevas centrales renovables y de bajo impacto”. Continua señalando que “a este proyecto no lo necesitamos en Chile” y que la destrucción de playas y ecosistemas costeros de alto valor en la III Región es innecesaria. “El carbón mata: la generación de energía con este insumo es sinónimo de destrucción, y eso lo sabemos todos. No queremos a la termoeléctrica más grande de América Latina y menos si ella es posible gracias a la complicidad de algunos y el silencio de otros”,

concluye.

Miércoles 16

Una masiva manifestación es llevada a cabo por estudiantes universitarios y secundarios en Santiago. La marcha se inicia en Plaza Italia y termina en la Estación Central, pasando por la Alameda. La convocatoria –que suma a alumnos de planteles privados y tradicionales– alcanza, según la intendencia, a las 20 mil personas, cifra muy diferente a la estimación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), que habla de cien mil participantes. En la ocasión, los estudiantes hacen hincapié en reiterar sus exigencias de gratuidad para la educación, de allegar más fondos que los provistos por la reforma tributaria, el fin del lucro en la educación superior y el reintegro de los alumnos expulsados por las tomas de 2011. La actividad, mayormente pacífica, cierra con incidentes aislados. Luego de concluir el acto, un grupo de encapuchados –a rostro cubierto– comienza a agredir a efectivos de las fuerzas especiales en calle Bandera con General Mackenna. Según Carabineros, la jornada termina con setenta detenidos, tres lesionados y un policía herido por recibir un botellazo. Respecto a este último caso y por el porte de elementos incendiarios, la intendencia anuncia querellas contra quienes resulten responsables. En regiones también se realizan actividades, aunque en Valparaíso terminan en bruscos enfrentamientos. Destrozos de los ventanales de la multitienda Ripley, del supermercado Unimarc y del banco BBVA es el saldo en las cercanías de la Plaza Victoria. A eso se suma el saqueo a una farmacia en el sector de Bellavista. En la ciudad puerto son unos 5 mil los manifestantes y se registran 47 detenidos. En tanto, en Concepción la marcha convoca a 4 mil manifestantes y es pacífica. Sin embargo, horas más tarde un grupo de encapuchados levanta barricadas en las inmediaciones de la Universidad de Concepción, lo cual deja una docena de detenidos. La convocatoria es menor en Temuco, donde marchan unas 2 mil personas.

Jueves 17

Activistas del MOVILH protestan en el frontis de la municipalidad de Providencia, región Metropolitana, contra las declaraciones del alcalde Cristián Labbé, quien la semana anterior asoció a la diversidad sexual con los ladrones, se expresó contrario a las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo y cuestionó que Daniel Zamudio fuese asesinado en razón de su orientación sexual. “Estamos aquí para decir al señor Labbé que esta gran comuna es de todas y todos, que los espacios públicos son libres y que nadie puede negar las expresiones de afecto. También estamos aquí para exigirles que pida disculpas públicas a Chile y a la familia Zamudio Vera por cuestionar que el asesinato de Daniel fue un crimen de odio”, sostiene el vocero del MOVILH, Jaime Parada, tras recordar que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. La declaración, leída por megáfono en mano, es acompañada por el despliegue de banderas del arcoíris y por la entrega de una carta de repudio a Labbé redactada por el MOVILH. La misiva es entregada por dos parejas, una gay y una lesbica, quienes ingresan a la municipalidad de la mano y se besan. Por último, y en otro ángulo, el MOVILH califica “como un hito diplomático en Chile que la embajada de Gran Bretaña desplegará en su sede de Santiago la bandera del arcoíris. Este es sin duda un gran respaldo internacional en la lucha contra la homofobia y la transfobia”.

Frerina se encuentra otra vez en estado de alerta, mientras los dirigentes y pobladores se toman la carretera en forma indefinida a la espera de una solución inmediata al problema de los malos olores

originados por las faenas de Agrosuper. Un contingente de fuerzas especiales se encuentra viajando al lugar, mientras otro contingente de policías se aposta en las cercanías de las primeras barricadas en el sector de Maitencillo. Las demandas urgentes van desde el cierre inmediato de las operaciones de Agrosuper, el rechazo al proyecto de la Termoeléctrica de Punta de Alcalde y la finalización del otorgamiento de derechos de agua sobre la cuenca del Huasco. El pasado 27 de abril fracasó una mesa de diálogo con la intendente regional Ximena Matas, al carecer de propuestas para una solución. Entonces los pobladores salieron a las calles y se tomaron la ruta por más de 24 horas, con algunos enfrentamientos con carabineros que trataron de retomar la ciudad. Las barricadas fueron levantadas en esa oportunidad bajo la promesa escrita del gobernador de Copiapó, Nicolás Noman, sobre una nueva reunión, esta vez con carácter resolutivo y con los ministros de Medioambiente, Salud y el director nacional de Aguas. Sin embargo, dicha reunión nunca se concretó en Freirina con los dirigentes de la movilización, al negarse las autoridades a concurrir hasta esa ciudad, rompiéndose así nuevamente el diálogo. En este nuevo escenario, los pobladores y dirigentes de Freirina han mantenido una constante movilización con velatones y marchas, tomándose nuevamente la ruta, pero esta vez cercando alrededor de 30 kilómetros de carretera, dejando entonces aislada la zona entre Vallenar, Huasco y Freirina. Las nuevas barricadas superan en número a las realizadas a fines de abril y esta vez cercaron también las instalaciones de Agrosuper.

Trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) se toman los accesos a las minas Chuquicamata, Gaby, Radomiro Tomic, El Abra, Hales y Andina y realizan asambleas masivas en Ventanas, La Escondida, Las Cenizas, El Soldado, Cerro Negro, Santa Bárbara y El Teniente con el fin de expresar su reclamo por las precarias condiciones de trabajo y los intentos por arrebatar los derechos adquiridos en anteriores luchas sindicales. Los trabajadores indican en un comunicado público que “en el caso de la minería estatal, los intentos de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) por minimizar los alcances de la movilización, de cuyas masivas expresiones existen registros en poder de los medios de comunicación, subrayan la debilidad de la administración frente a la voluntad categórica de los trabajadores de no dejarse avasallar ni despojar de lo ganado en los acuerdos marco de 2007 y 2008, y sigue la línea de negación a lo evidente que ha caracterizado al gobierno de Piñera frente a los movimientos sociales”.

Viernes 18

La ciudad minera de Calama amanece con más de cuarenta barricadas repartidas por sus calles en rechazo a la propuesta del FONDENOR que promueve el gobierno y que ha sido declarada por diversos sectores como insuficiente. Posteriormente, cerca de 8 mil calameños marchan por la ciudad dejando un saldo de doce detenidos. El FONDENOR contempla la entrega de 225 millones de pesos a las cuarenta ciudades mineras entre el 2013 y el 2025, montos que han sido considerados como una burla, considerando las demandas conversadas –durante este y el año pasado– con las autoridades. Según Cristián Cuevas, presidente de la CTC, “una vez develado el contenido del FONDENOR, confirmamos lo que dijimos desde un inicio: que solo es un volador de luces, sin contenido y financiamiento real que permita fondos permanentes para las comunidades mineras”. Los montos exigidos por la Asamblea Ciudadana de Calama y el propio alcalde de la ciudad superan con creces la escuálida propuesta del gobierno. Según la oferta del gobierno, cada comuna podrá recibir como máximo sólo 3 millones de dólares al año, mientras que las utilidades producidas por CODELCO solo en Calama superaron, durante el 2011, los 3 mil 900 millones de dólares. Los habitantes de Calama saben que esta lucha que ha comenzado no termina en el rechazo a la propuesta del gobierno, sino en avanzar hacia la demanda que le quita el sueño a las diversas

localidades mineras: exigir que el 5% de las riquezas del cobre queden en las zonas productoras.

Representantes de las comunidades mapuche williche de Neltume y del Parlamento del Koz Koz concurren a las embajadas de España e Italia en Santiago para solicitar una audiencia con los embajadores respectivos y poder dar a conocer su rechazo al proyecto hidroeléctrico que la empresa transnacional –española e italiana– Endesa Enel, pretende construir en el lago Neltume, provocando desplazamiento de las comunidades, la inundación de un centro ceremonial mapuche y la destrucción de una zona rica en biodiversidad. En la ocasión, don Guido Melinao, de la Comunidad Valerino Cayicul, además hace entrega de una carta en la que esta hace ver el rechazo que tienen hacia este proyecto y denuncia la falta de un proceso de consulta acorde al estándar que el Convenio 169 de la OIT impone al Estado de Chile. Después de entregar los documentos señala: “Nosotros queremos proteger nuestra comunidad, nuestra cultura y territorio. Como pueblo mapuche, queremos que se respeten nuestros derechos y que se nos den una pronta respuesta”.

Sábado 19

En Santiago, con una masiva asistencia de 10 mil personas se realiza la segunda marcha por la “No discriminación” organizada por el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS) - Chile con el apoyo de ACCIONGAY y la Fundación Iguales. El MUMS saluda igualmente el apoyo de organizaciones sociales de diverso tipo en el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, en que se recuerda que la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad de los manuales de enfermedades mentales. La marcha se desarrolla en calma, pero con gran entusiasmo de los miles de manifestantes que demandan más acciones desde el Estado contra la discriminación. La marcha parte desde el parque Bustamante por la Alameda hasta llegar a la Plaza “Los Héroes”, donde el acto de cierre cuenta con la participación de la música de un artista chileno y números de transformismo. En ella participan el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos - Chile, federaciones estudiantiles como la FECh, la Federación de Estudiantes Universidad de Santiago de Chile (FEUSACH), la Federación de Estudiantes de la Universidad “Diego Portales” (FEUDP), las juventudes políticas del PPD, las Juventudes Socialistas (JS), las juventudes comunistas y organizaciones partícipes de Democracia para Chile como Acción Ecológica, Alerta Chile, Vecinos de Yungay, así como la Red Liberal, entre otras.

Una gran congestión en el tránsito se produce entre el kilómetro 260 y el 270 de la ruta 5 Sur, cerca al puente Maule en la ciudad de Talca, producto de manifestaciones por parte de agricultores. El descontento de los trabajadores se debe al fallo de los ministros de la corte suprema en abrir las compuertas de la represa de la laguna El Maule, que permitiría a Endesa obtener aguas estimadas en unos 8 millones de dólares, unos 4 mil millones de pesos. El presidente de la junta vecinal Río Maule, Gustavo Rivera, manifiesta su rechazo absoluto por la medida, que dejaría sin agua a cerca de 13 mil regantes de la zona. “Nos quedamos sin agua para que una multinacional haga uso sin derechos de nuestras aguas”, indica Clemente Guarda, dirigente de los canalistas en el lugar. “Nosotros no vamos a parar hasta que Endesa desista de sacar nuestra agua. Nosotros ahorraremos dos años el 20% de nuestras aguas, y la posamos en la laguna El Maule, y hoy día en cuatro paredes, en dos horas, se está botando al mar”, sentencia el representante.

Domingo 20

Los habitantes de Freirina vuelven a protestar en rechazo a la planta Agrosuper por la contaminación que causa. Unas cien personas están cortando la ruta entre Huasco y Freirina como medida de presión. Carabineros acude al lugar con carros lanza aguas y lanza gases, produciéndose enfrentamientos con los manifestantes, dejando una decena de heridos y dos carros policiales incendiados. Posteriormente los pobladores bloquean el acceso a la planta donde guardan los alimentos para los cerdos, razón por la cual las Fuerzas Especiales de Carabineros intentan desalojarlos. En el lugar los manifestantes indican que continuarán con la medida hasta que se resuelvan los problemas de contaminación de Agrosuper.

Lunes 21

El alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, denuncia que helicópteros de Carabineros han lanzado bolsas que contienen un líquido desconocido al sector Maitencillo, en Freirina. El hecho se produce luego de que la jornada de protestas por los malos olores que emanan de una planta faenadora de cerdos de la empresa Agrosuper, en la zona de Tatara, terminara con decenas de heridos y dos carros policiales incendiados. En un comunicado, el Movimiento Social del Valle de Huasco repudia “el actuar violento, agresivo e intransigente por parte de carabineros, quienes comenzaron con la represión en horas del día anterior, llevando detenidos a nueve vecinos –mujeres, hombres y menores– y posteriormente dar inicio este día a los enfrentamientos con los pobladores de Freirina lanzando bombas lacrimógenas y balines, llegando uno de estos directo al ojo de un vecino, quien es trasladado en primera instancia al Cesfam [Centro de Salud Familiar] de Freirina y, por su gravedad, llevado a Santiago”. El Movimiento Social del Valle del Huasco manifiesta su indignación y preocupación y declara que la responsabilidad total de la compleja situación que viven los habitantes del Huasco es del gobierno de Chile, que a la fecha no ha entregado soluciones concretas a las demandas de la ciudadanía contra la empresa Agrosuper y la contaminación que ha generado en ese territorio.

La penúltima cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera, en el tradicional hito institucional republicano del 21 de mayo, está marcada por el contexto de su gestión: una protesta social nacional y un paliativo con bonos y medidas asistencialistas. En el Salón de Honor del Parlamento, el mandatario reconoce que solo “tres cuartas partes” están listas de toda la reconstrucción que se había comprometido a realizar después del terremoto de febrero de 2010. Entre los anuncios propone un bono de alimento de 40 mil pesos para sectores pobres, como un reconocimiento tácito de que a la gente no le alcanza el ingreso para alimentarse y vivir en un país donde el 75% de los asalariados gana menos de 350 mil pesos mensuales. En lo que el jefe de La Moneda pretende presentar como logros, se presentan proyectos y medidas conocidas, varias de las cuales, por lo demás, venían desde el gobierno anterior y eran promovidas por la oposición. Es el caso del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) Financiero, el llamado “ingreso ético familiar”, la inscripción automática y voto voluntario y la Ley Antidiscriminación, que tuvo votos en contra de parte de la derecha. Por lo demás, varios asistentes al congreso critican, por ejemplo, que Piñera hable de la eliminación del cobro de la cotización previsional para la salud a los pensionados, del 7% de este ingreso, cuando no es universal y el sistema está lleno de trabas que no permiten beneficiar a un alto porcentaje de los jubilados. No hubo nada respecto a reformar el sistema electoral binominal, dar derecho a voto a chilenos en el exterior, garantizar el derecho a plebiscito, un aumento del salario mínimo, establecer nuevo Código del Trabajo, la anulación de

leyes represivas como la antiterrorista, etc. En obras, el mandatario resalta la construcción del puente del Canal de Chacao y la finalización de la Carretera Austral. En el área de educación, reivindica la reforma tributaria que financiaría al sector educativo. Sin embargo, dirigentes estudiantiles y parlamentarios indican que esa medida dará entre 300 y 700 millones de dólares para el sector, cuando se requieren de 7 mil millones. En respuesta a la pobreza que viven los chilenos, Piñera se limita a repetir lo de los bonos y destaca que existe el Ministerio de Desarrollo Social. Nada dice respecto al aumento del salario mínimo, la generación de empleos decentes, una mayor inversión pública en educación y salud y el apoyo concreto a pequeña y mediana empresa. Paralelamente, en las afueras del congreso y tras la marcha que congrega a miles de manifestantes –estudiantes, trabajadores, profesionales, profesores y medio ambientalistas– por las calles de Valparaíso, se plantean reivindicaciones como garantizar la negociación colectiva y el derecho a huelga, un sistema previsional justo y estatal, sueldo mínimo de 250 mil pesos, término del MultiRut y del “despido por necesidad de la empresa”, presupuesto de 7 mil millones de dólares para educación, modificación del sistema electoral binominal e inclusión en la Constitución de la realización de plebiscitos y consultas ciudadanas, cumplir derechos de los pescadores artesanales, respetar y cumplir derechos de los pueblos indígenas y cesar la represión a las comunidades mapuche; realizar una real y profunda reforma tributaria, que lleve a que los multimillonarios y las trasnacionales paguen los impuestos adecuados, como en países europeos; defensa del derecho al uso del agua, consulta, participación y distribución presupuestaria en regiones, terminar con la alta concentración privada de los medios de comunicación y televisión digital para aumentar el pluralismo, anular la Ley de Amnistía pinochetista y la Ley Antiterrorista, mayor inversión para salud pública, masiva y de calidad, apoyos reales a la pequeña y mediana empresa y respeto a los derechos de las minorías.

Sábado 26

Un centenar de automovilistas convocados por Ciudadanos por Castro realiza una inusual manifestación en las calles céntricas de la capital de Chiloé, X Región de Los Lagos. El objetivo es efectuar una simulación de los diversos trastornos que habría en el tránsito cuando el *mall* Paseo de Castro comience a operar, razón por la cual exigen que se lo traslade fuera de la ciudad. La protesta dificulta el flujo vehicular por las calles Serrano y San Martín, en pleno centro castrense. Carabineros tiene que dirigir el tránsito, como ocurre en las horas pico. En la vereda contraria, cerca de cuarenta personas llegan a manifestar su respaldo al proyecto comercial del Grupo Pasmar. Los vecinos, con pancartas y globos, rechazan la acción de los automovilistas. Una de ellas es Orfelina Rain, de la Población “Javiera Carrera”, quien ha apoyado la instalación del *mall* desde el principio del proyecto. “No estoy de acuerdo con los ricos que no quieren que la gente humilde progrese. Quiero que Castro avance”, enfatiza. En tanto, la dirigenta social Doris Chiguay, quien encabeza la contraprotesta de los pobladores, lamenta que este tema siga dividiendo y enfrentando a los chilotas. “No tenemos intereses políticos ni corporativos, no nos interesa la forma. Queremos avanzar. En todas partes donde hay un *mall* hay problemas con el flujo vehicular. Me parece pésimo que estos Ciudadanos por Castro no den su brazo a torcer, porque la ciudadanía ya se manifestó a favor en más de un 95%”. Esta visión se enfrenta con la de quienes salen con sus autos a la calle. “Esto va a hacer que perdamos nuestra calidad de vida. Vivimos en una ciudad chiquitita y amable. Y un taco de esta magnitud todos los días va a ser algo insoportable”, indica Nicol Farga. El vocero de Ciudadanos por Castro, Francisco Urrutia, afirma que este ejercicio demuestra que el *mall* va a generar trastornos en la ciudad. “Había poco más de 100 vehículos dando vueltas y provocaron atochamientos y la necesidad de que Carabineros tuviera que destinar efectivos para ordenar el

tránsito. Esto demuestra que tenemos razón en exigir medidas de mitigación”, insiste el dirigente. La construcción del *mall* está detenida, a la espera de que la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Transportes de Los Lagos evalúe y apruebe el “Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano” que presentó la empresa, y que ya ha sido rechazado en cuatro ocasiones.

En Santiago se realiza una marcha por la Alameda por una “Televisión Digital gratuita, de calidad y por una participación ciudadana más inclusiva”. Los convocantes aseguran que en el congreso se está tramitando una ley corta que no beneficia a las comunidades sino a los grandes canales de televisión. La medida es convocada por la Mesa Ciudadanía y Televisión Digital con el apoyo de la FECh. El coordinador de la mesa, Juan Carlos Berner, explica que el gobierno y los parlamentarios están decididos a llevar adelante un proyecto de ley corta, sin considerar el trabajo de organizaciones ni de los intereses de las comunidades. Al respecto, la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), María Pía Matta, llama a los políticos a legislar pensando en los usuarios de la televisión y no en los intereses de las grandes empresas de comunicaciones. Las organizaciones critican la falta de información sobre la tramitación de la ley de televisión digital, que se mantiene estancada en el congreso y aún no parece tener un futuro claro.

Lunes 28

En un comunicado público la comunidad We Lof del sector Pantano, IX Región de La Araucanía, informa a la opinión pública nacional e internacional, a las comunidades mapuche y a las autoridades competentes que su “comunidad, constituida por cincuenta personas –en su mayoría jóvenes matrimonios allegados–, han tomado la determinación de iniciar el proceso de recuperación territorial, haciendo uso de nuestro derecho a la misma como miembro del pueblo mapuche”. Ingresan al predio fundo Santa Clara, propiedad de la empresa Forestal Masisa del sector El Pantano. Según los manifestantes, la determinación es por la “necesidad de mejorar nuestra situación, ya que en su mayoría nuestros miembros viven allegados a la propiedad de sus padres que han sido beneficiados anteriormente, [pero que] sin embargo esto no ha sido suficiente por la constitución de nuevas familias”. Señalan que “nuestra decisión es continuar hasta el final con la recuperación de nuestro espacio y el uso definitivo para mejorar nuestra situación como comunidad y la reconstrucción de nuestro pueblo-nación mapuche, ya sea económica y social”.

Cerca de cincuenta vecinos de la Villa Aeropuerto Lo Boza, de la comuna de Renca, región Metropolitana, se manifiestan en las calles del sector dado que desde este sábado se encuentran sin suministro eléctrico. Pese a los numerosos reclamos que han realizado, aún no han obtenido respuestas desde la empresa. Según los vecinos, también dieron cuenta de la situación a la municipalidad, desde donde les indicaron que no tenían ningún reporte sobre el corte del suministro. Los manifestantes bloquean calle Brasil y esperan la llegada de alguna autoridad de Chilectra o de la municipalidad de Renca. Hasta el lugar llega Carabineros con el fin de dispersar a los manifestantes, sin registrarse detenidos.

Cerca de 40 estudiantes secundarios y universitarios se toman las dependencias de la SEREMI de Educación Metropolitana en el centro de Santiago. Los jóvenes irrumpen en el edificio y colocan lienzos con la frase “Nosotros exigimos soluciones”. Similar acción se repite en Concepción. El objetivo de la toma es llamar la atención al poder ejecutivo y solicitarle soluciones concretas con respecto al conflicto educacional. En este sentido, el presidente de la Federación de Estudiantes

Mapuches, José Ancalao, indica que la movilización es de carácter pacífico y que solo tiene como objetivo atraer la atención del gobierno. El saldo final de la movilización es de 21 detenidos, 15 hombres y seis mujeres, quienes son llevados a la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago y luego logran su libertad.

Un grupo de encapuchados ataca un bus oruga del Transantiago, el cual es incendiado en la zona del Parque Almagro, en el centro de Santiago. Carabineros informa que una veintena de jóvenes, en su mayoría vestidos de negro, interceptaron en Santa Isabel con San Diego el transporte del recorrido 202, a cuyo conductor intimidaron con elementos contundentes para que descendiera. Una vez en el interior de la máquina, que transita sin pasajeros, los exaltados comenzaron a destruir los implementos y luego lanzaron bombas incendiarias, cuya combustión hizo que las llamas destruyeran por completo el bus. La policía uniformada determina que los involucrados, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 25 años, se dieron a la fuga a pie por la calle San Diego hacia el sur. En la zona se despliega un dispositivo para capturar a los implicados.

Martes 29

En un plazo máximo de seis meses, la empresa Agrosuper debe desalojar a los cerdos que se encuentran en la planta de Freirina. Esto se debe a que la SEREMI de Salud de Atacama ratifica el cierre indefinido de la planta tras haber detectado una serie de irregularidades sanitarias en los sectores de Nicolasa y Maitencillo. La secretaria regional ministerial de Salud de Atacama, Lilian Sandoval, ratifica la sanción y sostiene que los rumores acerca de la extensión del plazo por petición de la empresa no son efectivos debido a que la resolución ya fue entregada. En ese sentido, Sandoval confirma que los animales serán alimentados en Freirina y luego trasladados a otras plantas de la empresa, donde serán faenados para el consumo humano. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostiene que un plazo de seis meses es prudente para vigilar la salud de la población. El anuncio respecto a que los animales serán destinados al consumo humano no le cae bien al presidente de la Asociación de Consumidores, Hernán Calderón, quien exige a la autoridad sanitaria que sea cuidadosa con el destino de los cerdos. Ante este hecho, el gerente general de la Asociación de Productores de Cerdo, Rodrigo Castaño, hace un llamado a la calma debido a que los animales pertenecientes a la planta de Freirina están destinados a la exportación, por lo que no se podrán encontrar para el consumo nacional. Pero este no es el único problema que podría aquejar a la empresa, esto porque el senador Guido Girardi le pide a Agrosuper entregar un completo detalle acerca del destino de los porcinos que actualmente se encuentran en Freirina. El parlamentario afirma que un traslado de los cerdos podría violar la Ley de Protección Animal, debido a que la normativa es clara en señalar que se requiere una autorización especial para dicho proceso. Ante la ratificación del cierre, Agrosuper prefiere mantener el hermetismo, porque solo han conocido detalles del asunto a través de la prensa, por lo que continúan a la espera que desde el poder ejecutivo se contacten directamente para comunicar la sanción.

Miércoles 30

Vecinos protestan camino a Lampa por la falta de pavimentación que existe en el lugar. El presidente de la junta de vecinos indica que esta decisión se tomó tras una reunión entre los afectados. Ellos manifiestan que una constructora dejó los trabajos sin terminar en enero de este año. Además indican que ni la empresa ni la municipalidad han dado una respuesta sobre la

paralización de los trabajos. Los vecinos indican que lo que necesitan es que se entregue una respuesta concreta sobre la reanudación de los trabajos

Sigue la polémica por la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo. Dirigentes de la Coordinadora Ciudadana y ambientalistas exponen ante el Consejo de Transparencia para que la institución permita dar a conocer detalles de un convenio firmado entre Aguas Andinas y Aes Gener. En tanto, los pobladores protestan en las afueras del consejo, repudiando la instalación de la central. La disyuntiva data de junio de 2011, cuando Aguas Andinas y Aes Gener suscribieron un contrato donde se establece un pago mensual de la empresa eléctrica a la sanitaria para utilizar los derechos de agua de Laguna Negra y la laguna Lo Encañado, que abastecen de agua potable a la región Metropolitana. Sin embargo, cuando dirigentes de la Coordinadora Ríos del Maipo, quisieron conocer los detalles del acuerdo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios negó el acceso a la información. Es por eso que los dirigentes decidieron recurrir al consejo para solicitar que se les hicieran entrega de estos antecedentes. Así lo expresa la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien acusa un contrato secreto entre las empresas. En la empresa eléctrica Aes Gener sostienen que el acuerdo con Aguas Andinas es privado, pero no secreto. Por ende, señalan que al ser una empresa privada no son fiscalizados por el Consejo de Transparencia. Las explicaciones no son aceptadas por los pobladores, quienes denuncian una serie de irregularidades ambientales. En la Coordinadora Ríos del Maipo quedan a la espera del fallo del Consejo para la Transparencia, y mientras tanto agandan una gran marcha para este 15 de junio en Puente Alto, donde exigirán que este proyecto no se lleve a cabo.

Incidentes aislados se registran en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago. Se trata de estudiantes secundarios, algunos con el uniforme del Liceo Cervantes, además de otros encapuchados. Según Carabineros, estos disturbios habrían comenzado con el apedreo de automóviles particulares por parte de estos improvisados manifestantes. Los desconocidos levantan barricadas, provocando cortes de tránsito por cerca de una hora, dejando como saldo señales de tránsito y bancas destruidas. De acuerdo a lo señalado por alumnos del Liceo Cervantes, esta manifestación es motivada por la ausencia de profesores en el nivel de cuarto medio, además de cambios repentinos de horarios.

Glosario de siglas

CODELCO	Corporación Nacional del Cobre
CTC	Confederación de Trabajadores del Cobre
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
DC	Democracia Cristiana
FECh	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FENPRUSS	Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
FEUDP	Federación de Estudiantes de la Universidad “Diego Portales”
FEUSACH	Federación de Estudiantes Universidad de Santiago de Chile
FONDENOR	Fondo de Desarrollo para el Norte
INDH	Instituto Nacional de Derechos Humanos
JS	Juventudes Socialistas

MOVILH	Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
MUMS	Movimiento Unificado de Minorías Sexuales
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PC	Partido Comunista
PPD	Partido por la Democracia
PS	Partido Socialista
RADA	Red de Acción por los Derechos Ambientales
RN	Renovación Nacional
SEREMI	Secretaría Regional Ministerial
UDI	Unión Democrática Independiente

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización a cargo de Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Junio de 2012

Editada en noviembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Affers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 116

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Juan Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez.

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera. Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress, Radio Cooperativa, ambitosur y El Diario de Aysén.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile
Cronología del conflicto social
Junio de 2012

Viernes 1

Estudiantes de la Universidad del Mar paralizan sus sedes a lo largo del país. Los alumnos reclaman por las denuncias del renunciado rector Raúl Urrutia, quien afirmó haber sentido presiones para pagar los arriendos a inmobiliarias por sobre los sueldos a los funcionarios. Pese a que ya está alejado de las instituciones, Urrutia hace un llamado a los jóvenes. “Yo los entiendo, pero les quiero pedir que depongan esa actitud y vuelvan a clases, porque esa es su misión con el país”, afirma. Si bien le parece “absurdo” que se prohíba el lucro en las instituciones de educación superior, dice que es necesario que este se regule, porque si no las ganancias terminan siendo más prioritarias que la educación. En tanto, el ministro de Educación, Harald Beyer, anuncia que se iniciará una audiencia en la casa de estudios con el fin de determinar si la institución infringió la ley para que el Consejo Nacional de Educación le quite la licencia que le permite operar. Paralelamente, la contraloría realiza una investigación sobre el proceso de acreditación del plantel. Si se comprueba una irregularidad, la casa de estudio podría perder también su acreditación.

Unas treinta personas a rostro cubierto cortan con barricadas la avenida Grecia antes de llegar a la calle Doctor Johow, comuna de Macul, región Metropolitana. Ante la presencia de carabineros, los manifestantes arrojan unas 60 bombas molotov a la policía y a buses del Transantiago por alrededor de una hora. La protesta, según los policías, no tiene un motivo determinado. No se registran lesionados ni detenidos.

Cerca de 20 personas, entre docentes, apoderados y estudiantes, se toman la escuela de Dichato en Concepción, VIII Región del Bío-Bío, en protesta por el despido de cinco profesores. La presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Jessica Martínez, indicó que no comparten “la abrupta” decisión del municipio de Tomé, porque les deja en la incertidumbre sobre los motivos de las desvinculaciones.

Sábado 2

Con las tomas de las sedes ya paralizadas que la institución tiene a lo largo del país, los estudiantes de la Universidad del Mar buscan radicalizar su movilización para exigir que el plantel sea intervenido por una corporación sin fines de lucro externa, que reoriente su gestión administrativa a los objetivos de calidad de la educación y no al lucro de su junta directiva. Así lo plantea el presidente de la confederación de estudiantes de la universidad, Alejandro Silva, quien asegura que de un total de doce sedes ya están en toma las de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena y Punta Arenas. Los dirigentes esperan reunirse con el ministro de Educación, Harald Beyer, quien anunció que se iniciará una auditoría académica y financiera del plantel. Silva dice que la carta de renuncia del rector Raúl Urrutia revela “que hay malversación de fondos en la junta directiva”, lo que ha concitado consenso con los estamentos de académicos y administrativos para apoyar la decisión del ministro de Educación de intervenir el plantel, pero no a la idea de quitarle el reconocimiento oficial, que perjudicaría a los alumnos. El presidente del sindicato de trabajadores

de la sede La Serena, César Guisado, asevera que otras universidades privadas “funcionan igual y hacen lo mismo. No es algo exclusivo de la Universidad del Mar. Cuando el ministro plantea que va a hacer una auditoría y que le puede quitar el reconocimiento, debería hacer lo mismo con las demás”. Al conflicto lo desató la renuncia del rector Raúl Urrutia, quien relató que hubo presiones de los controladores del plantel para privilegiar el pago a las inmobiliarias ligadas a la junta directiva por sobre sueldos y cotizaciones de funcionarios.

Lunes 4

Diversas organizaciones de la III Región de Atacama llegan con sus demandas locales a manifestar el repudio a diversos proyectos industriales que amenazan sus territorios. Llena de colores, tambores y mucha alegría la marcha se abre paso entre las calles de Vallenar para concluir en la Plaza de Armas con un acto cultural. Las comunidades están actualmente afectadas por la escasez hídrica, además de la contaminación de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales. El caso de Freirina se hace notar por su alegría y creatividad para manifestar su rechazo a Agrosuper, que contempla construir la planta faenadora de chanchos más grande de Latinoamérica y por lo que, producto de la contaminación, el pueblo de 5 mil habitantes cerró la planta tras arduas movilizaciones. También está presente S.O.S. Huasco, que rechaza la instalación de la Termoeléctrica Punta Alcalde debido a que están sufriendo los negativos impactos de Guacolda, la generadora de energía en base a coque de petróleo (*pet coke*) instalada en el Puerto de Huasco. Desde Alto del Carmen, comuna cordillerana de la provincia del Huasco, bajan diversas organizaciones que luchan contra los diversos proyectos mineros que se están instalando en las nacientes del río. “Agua sí, oro no”, es la consigna que unifica al Comité Esperanza y Vida, a los Diaguitas HuascoAltinos, a la Pastoral Salvaguarda de la Creación y a muchos otros, entre ellos la iglesia local, que se hace presente con sus pastores abriendo las calles de Vallenar. También llegan organizaciones de Copiapó, como la Red Ambiental Copayapu, que rechaza la instalación de la termoeléctrica Castilla y la actitud del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que busca hacer una conciliación entre Castilla y el Pueblo de Totoral. Así lo manifiesta Juan Morales, vocero de la Red Ambiental Copayapu desde un camión confeccionado como una termoeléctrica contaminante: “todo este humo es lo que queremos evitar en nuestro pueblo de Totoral, así es que hacemos un llamado a la corte suprema a que falle y no llame a una conciliación, algo sumamente inusual, porque no se le puede poner precio a nuestro territorio”.

El Ministerio de Educación inicia una fiscalización a fondo en la Universidad del Mar. El jefe de la División de Relaciones Institucionales de esa cartera, Benito Barros, encabeza el grupo de especialistas que sostiene el primer encuentro con las autoridades de la universidad para establecer un plan de trabajo. El personero dice que no se trata de una intervención, sino de una fiscalización o auditoría académica, administrativa y financiera al plantel, que estaría a cargo de 12 especialistas, la mitad de ellos asesores externos para garantizar una mayor ecuanimidad. El grupo se retira del lugar para volver y comenzar a examinar una serie de antecedentes que fueron solicitados. “No hay un plazo para este estudio, ya que se trata de una universidad con doce sedes”, dice Barros, quien no descarta revocar el reconocimiento de la institución si se descubren irregularidades graves. La auditoría parte de la hipótesis planteada por el renunciado rector Raúl Urrutia, en cuanto a que los controladores de la Universidad del Mar han privilegiado el pago de arriendo de infraestructura a inmobiliarias –a las cuales estarían vinculados– en vez de pagar los sueldos y las cotizaciones previsionales de los funcionarios. Paralelamente, los estudiantes de la casa central comienzan a votar si continúan con el paro, retoman las actividades académicas o radicalizan el movimiento con

una toma. En tanto, los estudiantes, académicos y profesores del plantel forman una mesa triestamental que busca luchar por la continuidad de la Universidad del Mar y que exige participar en las decisiones sobre el futuro del plantel.

El diputado Hugo Gutiérrez y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) llegan al Palacio de Tribunales para presentar un recurso de protección para impedir que se realice un homenaje a Augusto Pinochet con la exhibición de un documental sobre su legado. La acción judicial está dirigida en contra de la Intendencia Metropolitana, aduciendo que se vería afectado el derecho a la salud física y psíquica de los familiares de las víctimas si se realiza el acto en el teatro Caupolicán el domingo 10 de junio.

Vecinas de Lenga protestan por el prolongado cierre del jardín infantil de la caleta debido a una plaga de ratones. Este año, el jardín infantil familiar “El botecito de Lenga” ofrece una atención intermitente debida a los cierres ocasionados por el hallazgo de defecación de ratón en las aulas y hasta la presencia de roedores en las clases. La presidenta de la junta de vecinos, Susana Velásquez, se une a otras madres para protestar en el exterior del recinto, que hoy cumple un mes cerrado. Además de los ratones, el jardín se encuentra deteriorado porque la ayuda en reparaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la municipalidad de Hualpén es mínima, acusa Blanca Inostroza. Las apoderadas deben financiar algunos arreglos, pero por su condición económica siempre resultan insuficientes. Por su parte, la directora regional de la JUNJI, Patricia Escobar, señala que este año desratizaron siete veces el lugar. Entiende la molestia y angustia de los padres, pero resalta que no puede abrir el jardín mientras haya roedores.

Martes 5

Cerca de 400 estudiantes inician la ocupación de la casa central de la Universidad del Mar y radicalizan el movimiento iniciado hace una semana luego de la crisis que desató la renuncia del rector Raúl Urrutia y de que se hicieran públicas diversas falencias financieras, administrativas y académicas que son investigadas por el Ministerio de Educación. Representantes de la universidad salen al paso de la situación y anuncian que en julio regularizarán las deudas impagadas por sueldos e imposiciones previsionales de académicos y profesores. El presidente de la federación de estudiantes del plantel, Alejandro Silva, explica que la ocupación de la casa central y de seis sedes –otras siete están en paro– busca presionar a los dueños de la universidad para que no sigan interviniendo en la administración y una fórmula para hacer viable al establecimiento. Mientras estudiantes ocupan la casa central en Reñaca, se registra que unos 150 alumnos marchan y cortan el tránsito en Antofagasta y Copiapó.

Un centenar de personas de Coronel, en Concepción, región del Bío-Bío, entre pescadores artesanales, recolectoras de algas y residentes de poblaciones cercanas, protesta en las afueras de la planta termoeléctrica Bocamina II de Endesa por lo que consideran una amenaza para los recursos marinos y su calidad de vida. En medio de la protesta, tres habitantes de la población Aroldo Figueroa escalan hasta lo alto de la chimenea de la planta, de unos 50 metros de altura, advirtiendo que no bajarán hasta recibir noticias de solución a sus demandas. En particular, desde esta villa piden una erradicación digna con un aumento en el avalúo de sus viviendas. Tras transcurrir ocho horas con la medida, la empresa solicita a Carabineros desplegar un operativo para bajar a los manifestantes y así resguardar su integridad, puesto que temía que resultaran afectados por la altura y el frío, con una temperatura que alcanza escasos 2° frente al mar. Personal del Grupo de

Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros no logra un acuerdo con los manifestantes para que desciendan. Por medio de un comunicado, Endesa afirma que mantiene su voluntad de llevar adelante mesas de trabajo con las poblaciones vecinas y con el sindicato de pescadores artesanales de Lo Rojas, Maule y la Ferepa, al tiempo que lamenta “los actos de violencia” ocurridos en la presente jornada.

Miércoles 6

Cada día crecen las acciones y declaraciones de repudio al acto que algunos pinochetistas quieren organizar para el dictador en el Teatro Caupolicán en Santiago. Ya se manifestaron en contra las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), parlamentarios, abogados de derechos humanos, premios Nobel de la paz y dirigentes políticos. La actividad es convocada por la Corporación 11 de Septiembre –que reivindica el golpe de Estado de 1973– para el próximo domingo 10 de junio y espera reunir a toda suerte de simpatizantes pinochetistas, pero sobre todo ex uniformados relacionados con situaciones de violaciones a los derechos humanos, “veteranos” miembros de grupos ultraderechistas, dirigentes políticos ligados a Augusto Pinochet y empresarios que defienden “la obra del gobierno militar”. Además del rechazo a esta actividad, produce molestia en sectores de derechos humanos y democráticos la declaración del vocero del gobierno piñerista, Andrés Chadwick, en el sentido de que “estamos en democracia”, lo que según él permitiría que se pudiera efectuar un evento para recordar y congarciar la figura de Pinochet, acusado él y su régimen de múltiples crímenes de *lesa humanidad*, sistemática violación a los derechos humanos y crímenes contra civiles cometidos por aparatos del Estado.

Tras soportar bajas temperaturas y fuertes vientos durante 40 horas, los tres manifestantes se bajan de la chimenea de la planta termoeléctrica Bocamina II de Endesa, en Coronel, que tiene 115 metros de altura. Lo deciden al lograr un acuerdo con la empresa para erradicar a las familias que viven en las inmediaciones de la central.

Jueves 7

Se produce un nuevo allanamiento de la policía militarizada a la comunidad Wente Winkul Mapu, en el sector Chequenco Alto, comuna de Ercilla, IX Región de la Araucanía, parapetados bajo una orden de la fiscalía que ordena la detención de Erik Montoya, acusado del delito de homicidio frustrado en contra de carabineros y contra el agricultor Juan de Dios Fuentes. Tras el accionar de los operativos de las fuerzas especiales resultan heridos siete comuneros, entre ellos dos menores y un anciano y tres carabineros. Daniel Melinao, *werken* –vocero– de la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu, informa que un contingente de alrededor de cuarenta efectivos ingresó violentamente a la comunidad ante lo que califica como “un ataque y no un enfrentamiento”. Según Melinao, Carabineros utiliza escopetas con balines de acero, no de goma, lo que explicaría las graves heridas que mantienen los comuneros. Entre los lesionados se cuentan dos menores de edad: A.M., de 12 años, quien tendría una fractura en su mano, y A.M., de 15 años, herido con perdigones, junto al *kimche* –guía espiritual– de la comunidad, Venancio Montoya, de 78 años, internado en el servicio de asistencia de Collipulli.

Un análisis a los resultados finales del plebiscito hacen los representantes de la Mesa Social de

Salud –integrada por organizaciones como la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), la Agrupación de Médicos de la Atención Primaria y Voto Ciudadano, entre otras– quienes evalúan como un éxito la iniciativa que pretendió colocar en la agenda pública la opinión de la ciudadanía respecto a los problemas que enfrenta el sector. Se indica que fueron 115 mil personas las que votaron voluntariamente. El 98,6% –114.215 votos–, consideró que la salud debe ser un derecho garantizado por la Constitución. Igual porcentaje –114.111 votos– estuvo de acuerdo con fortalecer el sistema público de salud mediante la entrega de financiamiento, recursos humanos y materiales, mientras que el 88% –101.845 votos– opinó que la salud pública en Chile debería ser financiada por el Estado, directamente a través de impuestos generales. El hecho de que el 93% de los consultados se manifestara a favor de las instituciones de salud sin fines de lucro demuestra que al igual que en la educación, la gente no está de acuerdo con el negocio que generan entidades como las instituciones de salud previsional a costa de la salud de los chilenos. Indican que el plebiscito se desarrolló en 104 comunas y que aquellas regiones donde más participaron fueron la Metropolitana, la VIII del Bío Bío, la VI del Libertador Bernardo O'Higgins, la XI de La Araucanía y la V de Valparaíso.

Por cerca de cuatro horas y para dar una muestra de “solidaridad” a los alumnos de la Universidad del Mar, unos cincuenta estudiantes de la Universidad de Chile se toman la sede de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo encargado de velar por la calidad en la educación superior. El vocero de la toma y presidente del centro de estudiantes de la facultad de Derecho, Esteban Miranda, justifica la acción explicando que “lo sucedido en la Universidad del Mar evidencia lo que ocurre en todo el sistema educativo nacional” y emplaza al gobierno a “admitir esta situación y dar respuesta a las demandas del movimiento”. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Gabriel Boric, no solo respalda esta situación sino que explica que “es parte de una serie de acciones que realizaremos como universidad, ya que la CNA no está cumpliendo el rol que debiera, lo que al final hace que terminen acreditando instituciones que no sirven para otra cosa que lavar dinero”.

La intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, entrega un informe a la Corte de Apelaciones en el que explica que no tiene las facultades para suspender el homenaje a Augusto Pinochet. En el escrito se detalla que la emisión del documental *Pinochet*, que se mostrara en el Teatro Caupolicán, es un acto privado, por lo que “se encuentra fuera del ámbito de las competencias del intendente el prohibir su realización”.

Los trabajadores sindicalizados del Liceo Técnico Femenino de Concepción inician una paralización de sus actividades por falta de acuerdo con las autoridades para, entre otras peticiones, aumentar los salarios. En el frontis del establecimiento, ubicado en calle Víctor Lamas a la altura de Caupolicán, los trabajadores sindicalizados comienzan el paro indefinido para llegar a un consenso en el aumento del salario y mejoras de las condiciones laborales, entre otras demandas. La manifestación tiene a las alumnas sin clases.

Viernes 8

Con 97% de aprobación los trabajadores sindicalizados votaron por la paralización de las actividades el pasado 31 de mayo. Después de cinco días hábiles y tras no llegar a un acuerdo, los

trabajadores se toman la entrada de la empresa Cultivos Marinos de Ancud, en la X Región de Los Lagos, en un paro de actividades de carácter indefinido. Según John Hurtado, presidente del sindicato Unión es Fuerza, ante la negativa de la empresa a seguir con el dialogo por 5 días más, “tomamos la determinación hoy día organizadamente de irnos a paro indefinido”. La principal demanda de los trabajadores apunta a un incremento en sus sueldos. “Nosotros estamos pidiendo un reajuste de un 10% más o menos, podríamos llegar a un 8% o un 7%, pero la empresa nos está dando solamente el 1,5%, el 2013 no está dando nada, el 2014 tampoco y el 2015 igual. Ellos tienen la negociación colectiva proyectada a 4 años, nosotros la estamos pidiendo a tres”, indica Hurtado.

Dirigentes y líderes mapuche entregan una carta al presidente Piñera solicitando explicación al ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter por la violencia ejercida por carabineros en el allanamiento sucedido a la comunidad Wente Winkul Mapu en Ercilla. “Con esta carta repudiamos públicamente los violentos allanamientos y también queremos pedirle una explicación al ministro Hinzpeter por la grave situación que vive la comunidad. Nosotros presentamos un recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco para evitar allanamientos con violencia, pero fue revocado en la Corte Suprema luego de que Carabineros apelara”, indica Daniel Melinao, *werkén* de la comunidad, quien enfatiza que se encuentran diez mapuche heridos, entre ancianos y niños, más un comunero detenido. Agrega que esta situación de violencia es responsabilidad del gobierno y también de la Corte Suprema. “Hemos agotado todas las instancias. Siempre hemos estado dispuestos a conversar y no hemos sido escuchados, porque son ellos [los] que no han tenido la capacidad política de responder a nuestras demandas de tierras que son de nuestros antepasados... solo nos queda resistir”, recalca el *werkén*, quien aclara que estos actos violentistas por parte de la policía se han intensificado sobre todo en este último año, puntualizando que existe una “tremenda preocupación en la comunidad. La gente no puede salir de sus casas, pues existe un temor por la vulneración constante de nuestros derechos”.

Sábado 9

Una treintena de dirigentes estudiantiles de todo el país se reúne en la casa central de la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, en una convocatoria en que la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) tiene como una de sus principales materias de análisis la situación de la Universidad del Mar. La reunión es encabezada por Gabriel Boric, presidente de la FECh, y Noam Titelman, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). Tras 7 horas de intenso debate entre los estudiantes hubo dos acuerdos que destacan. El primero es adelantar la convocatoria a una movilización nacional para el 28 de junio, la que en principio estaba programada para el 11 de julio. Será la segunda marcha que realicen en el año. A esto se suma una nueva ofensiva para “cuestionar el lucro en la educación”, en que los estudiantes emplazan al gobierno “a juzgar” a quienes realizan estas prácticas. “Luego de lo ocurrido con la Universidad del Mar ha quedado claro que hay universidades que lucran. Ya nadie lo puede negar, tenemos los aranceles más caros del mundo y eso se debe en gran medida al lucro y abuso que están cometiendo los empresarios”, dice Titelman. Boric, en tanto, cuestiona las reformas al sistema que impulsan las autoridades. “Hemos visto cómo desde 2011 hasta la fecha las autoridades han hecho la vista gorda a las demandas legítimamente presentadas por los estudiantes de todo Chile, aprobando de manera arbitraria leyes que actúan en completo desmedro de los estudiantes y de sus familias”, afirma el presidente de la federación. Junto con ello, en la reunión se acuerda que por primera vez se reúna la CONFECH en universidades privadas, lo que ocurrirá luego de la marcha convocada para fines de junio.

Domingo 10

Unos mil 500 adherentes homenajean al general Augusto Pinochet en el Teatro Caupolicán. Los asistentes aplauden cada una de sus apariciones. Paralelamente, fuertes incidentes en las inmediaciones del teatro se desarrollan mientras transcurre el homenaje. Los primeros altercados se registran horas antes de que comience el acto, donde manifestantes intentan impedir el ingreso de los asistentes. Sin embargo, los detractores son contenidos por carabineros, quienes impiden su avance con carros lanza agua y gases lacrimógenos. “En la medida en que va aumentando la violencia hay que proceder con agua y los vehículos lanza gases a fin de mantener la seguridad de la gente que concurre a este lugar”, indica el coronel de carabineros Hugo Insulza. Según el balance policial, se registraron 64 detenidos y 20 carabineros lesionados, y dos miembros de la prensa recibieron golpes. Entre los principales daños se encuentran el ataque de un grupo de encapuchados a una automotora ubicada en el cruce de las calles San Francisco y Santa Isabel, siendo quince los vehículos dañados. También hubo un incendio que afectó a una obra en construcción en Santa Isabel y la rotura de ventanales de una sucursal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) en la avenida Matta.

El gremio de transporte de Arica inicia un paro indefinido en protesta por multas que desde 2008 les ha cursado la Superintendencia de Aduana y Administración Tributaria (SUNAT) de Perú en ese país, las que con intereses suman cerca de 4 mil 600 millones de pesos en total. Los camiones comienzan a apostarse en las cercanías del paso fronterizo Chacalluta con sus máquinas, junto a los taxis internacionales chilenos que cubren el tramo entre Arica y Tacna, quienes exigen que se reduzca el tiempo de los trámites aduaneros en Perú. Al paro se suman los camioneros de Tacna, quienes hacen lo mismo junto al complejo aduanero Santa Rosa en esa ciudad. “Tenemos asociados con multas que alcanzan los 25 millones, a las que se les aplican intereses que superan el 110%. Con este paro impedimos una amnistía y la eliminación de ese sistema de aplicación de multas”, dice el presidente del gremio en Arica, Jorge Araya. Las multas cursadas por la SUNAT obedecen a discrepancias en los datos o en los montos de carga transportada, lo que infringiría el manifiesto internacional de cargo. Los camioneros reclaman que solo trasladan contenedores sellados y que no tiene responsabilidad si lo que transportan efectivamente no corresponde a lo declarado. El tema ha sido abordado por la Cancillería con las autoridades peruanas, y será tratado en una reunión bilateral de Aduanas y Transportes que se realizará los días 21 y 22 de junio en Lima, a la que fueron invitados representantes de los transportistas de Arica.

Dos ataques con armas a carabineros y un atentado a una vivienda incrementa la tensión en Ercilla. En el sector de Santa Ramón un vehículo policial recibe múltiples disparos de bala y perdigones. En Chequeno, otra patrulla es atacada con perdigones. A los ataques se suma el incendio de la casa patronal del fundo Santa Catalina, propiedad de Forestal Mininco. Allí se encuentran lienzos alusivos a la recuperación de tierras y apoyo a mapuches que cumplen condenas por incendios y ataques incendiarios. El prefecto de Malleco, Iván Vega, asume que sus efectivos buscarán estrategias para no quedar expuestos. “Vamos a maximizar nuestras medidas de seguridad y vamos a adoptar otras medidas que van en beneficio de la seguridad de nuestros carabineros. Hemos sido víctimas y vamos a seguir siendo víctimas. Pero vamos a brindar justicia cualquiera sea el costo”.

Lunes 11

Trabajadores de Tur Bus inician una movilización en las afueras de su terminal de buses en la comuna de Estación Central. A la paralización de actividades se unen 850 integrantes del Sindicato Número 1 de la empresa, tras una fallida negociación colectiva en la que pidieron un reajuste del 5%, que la empresa rechazó. Miguel Caicedo, presidente del sindicato, explica a la radio *Cooperativa* que a raíz de la protesta la empresa debe paralizar doscientas salidas a nivel nacional. El sindicato N° 1 es el más grande de los cuatro que hay en la empresa y está conformado por conductores, auxiliares, mecánicos y cajeros, entre otros, a nivel nacional. En tanto, la empresa informa a través de un comunicado que dispuso todas las medidas necesarias para que esta situación no afecte los viajes que diariamente realizan los usuarios, desde Arica a Puerto Montt.

A pesar de estar fijada una reunión entre el presidente Piñera y el sindicato de Cultivos Marinos de Ancud, la cita no se concreta, generando molestia en los dirigentes de los trabajadores en paro. Se había agendado la reunión entre la primera autoridad y los dirigentes del sindicato Unión es Fuerza de la salmonera Cultivos Marinos, quienes se encuentran en su cuarto día de movilización. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera no se presentó a la reunión. Los trabajadores pretendían expresar la situación que viven actualmente, como también hacer entrega de una carta a Piñera en la cual exponían distintos puntos de relevancia en lo que respecta a la industria salmonera. Visiblemente molestos se retiran los sindicalistas de Cultivos Marinos, cuyo presidente, John Hurtado, expresa: “La reunión fue un fracaso. El presidente de todos los chilenos nos dejó solos, no nos quiso atender porque él andaba muy apurado”, agregando que “es una muestra que ellos están con los empresarios y no con los trabajadores, con la gente humilde y sencilla de acá de Chiloé”. En el documento, que también es entregado en el senado y a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, y que se supone será respondido por el presidente de la república, se argumenta que el estatuto laboral salmonero “fue un acuerdo suscrito en la discusión de las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura en marzo de 2010. Para ello se propuso un procedimiento que consideraba la consulta a los trabajadores y un plazo de 4 meses para su formulación. Hasta la fecha no se ha avanzado en nada. No hay Reglamento Específico a las Relaciones Laborales en la Industria Acuícola, lo que ha permitido la desregulación general de las condiciones laborales, contractuales y de seguridad en el sector”.

En medio del bloqueo que durante 14 horas realizaron camioneros y taxis internacionales de Arica en la ruta internacional al paso de Chacalluta, representantes de Chile y Perú se reúnen en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa y firman un acuerdo que logra acelerar la resolución del conflicto. En el documento las autoridades peruanas acogen las demandas de los transportistas chilenos para mejorar el tránsito de carga y de pasajeros, y otorgan facilidades inmediatas para el desplazamiento fronterizo. Alrededor de 40 personas, entre autoridades, representantes diplomáticos, funcionarios y dirigentes gremiales, encabezados por el intendente de Arica y Parinacota, José Durana, y la gobernadora de Tacna, Dora Quihue, participan en el acta que sella el acuerdo, que da por finalizada la movilización. Como parte del protocolo se decide instalar una mesa de trabajo binacional, que se reunirá una vez al mes, alternando su sede entre Chacalluta y Santa Rosa, para abordar “temas de facilitación fronteriza”. El presidente de los camiones de Arica, Jorge Araya, firma el documento y se muestra tranquilo con el compromiso de la cancillería de Perú, que informa que los vehículos no serán requisados por deudas impagadas y que no se aplicarán nuevas multas en el período previo a la octava reunión bilateral de aduana y transporte, que se realizará en Lima entre el 21 y el 22 de junio.

Unas 150 personas bloquean la ruta 160, única conexión entre Concepción y Arauco, contra el plan

especial para sacar del rezago a esta última provincia. La protesta es organizada por la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Arauco, una nueva entidad que desde hace dos meses reclama por demandas en diversas áreas. Leonardo Lucero, vocero de la coordinadora, dice que ellos buscan soluciones en áreas que no incluye el plan Arauco Avanza dado a conocer por el presidente de la república, Sebastián Piñera, tales como los derechos de pesca o la contratación permanente para trabajadores de empleos de emergencia.

Martes 12

El Movimiento de Pobladores Ukamau se manifiesta en Estación Central bloqueando la terminal ferroviaria Las Rejas, a la altura de la Autopista del Sol. Exigen el fin a las trabas impuestas por el Ministerio de Vivienda, que está dejando a la mitad de las familias sin casa afuera de la posibilidad de postular a ellas. En un comunicado público indican que han iniciado un proceso de movilización producto de la desesperada situación de muchas familias sin casa a lo largo del país, que en estos momentos están viendo cómo el esfuerzo de años se esfuma por no cumplir con los requisitos impuestos por el Decreto N° 49, que regula la vivienda social desde hace algunos meses, agregando que la realidad de hacinamiento y allegamiento de miles de familias de sectores populares no ha sido reflejada adecuadamente por instrumentos como la Ficha de Protección Social.

Tras horas de incertidumbre de estudiantes, profesores y trabajadores, las autoridades de la Universidad del Mar confirman la renuncia de dos de los miembros de su junta directiva. Según detalla el director Sergio Vera, se trata de Alejandro Leiva y Patricio Baeza. Con la salida de ambos, el rector Mauricio Villaseñor afirma que llamará a una reunión extraordinaria de los miembros de la corporación educacional para elegir una nueva junta. Por la tarde, el plantel emite un comunicado afirmando que las denuncias del ex rector Raúl Urrutia son “infundadas” y “erradas”. Agrega que en 70 días estará saldada la deuda previsional con los trabajadores y que el nuevo rector se elegirá por concurso público. Asimismo, afirma que no es posible que otros actores del plantel sean parte de la toma de decisiones. Esto último provoca la indignación de los estudiantes y funcionarios. Mientras los primeros llaman a más tomas y marchas, los segundos afirman que se “radicalizará” el movimiento.

Dos camiones para transporte de madera que prestan servicios para Forestal Arauco son destruidos tras un ataque incendiario perpetrado en el camino interior que une a la comuna de Lumaco con Los Sauces, en la IX Región de La Araucanía. El ataque es realizado, según los conductores, por tres encapuchados, los cuales portan armas. Hacen disparos al aire con una escopeta y rocían con bencina la cabina de los dos camiones, pidiendo a los conductores que bajen de los vehículos. El perfecto de Carabineros de Malleco, Iván Vega, indica que en el lugar se encuentra escrito en el pavimento la sigla CAM, de la Coordinadora Arauco Malleco.

Miércoles 13

Pobladores del sector La Colonia de Coronel protestan contra la termoeléctrica Bocamina, de Endesa, obstaculizando sus accesos. Exigen una millonaria indemnización por los efectos nocivos del uso del carbón como combustible. Los manifestantes indican que representan a más de cuatrocientas familias, cada una de las cuales reclama 60 millones de pesos chilenos, según una solicitud entregada por escrito a la empresa el lunes, tal como apunta el dirigente René Baquedano.

El polvo en suspensión de los desechos de carbón y el ruido interminable en la noche impulsó la manifestación, agrega Marcelo Solar, otro dirigente. Se registra que alrededor de 200 vecinos protestan en los dos accesos de la termoeléctrica impidiendo el ingreso del turno de trabajadores de las 8 de la mañana. Una hora y media después, Fuerzas Especiales de Carabineros dispersa a los manifestantes y detiene a ocho de ellos. En tanto, Endesa informa desde Santiago que mantiene vigente una mesa de trabajo con los pobladores de La Colonia, sin precisar su posición frente a la solicitud de los manifestantes.

Jueves 14

Con un saldo de seis detenidos culmina en Temuco la marcha convocada en rechazo al violento actuar policial ejercido durante los últimos días sobre la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu. La marcha circula normalmente por las principales calles de la ciudad, siendo luego violentamente reprimida por personal de carabineros al llegar al centro para desarrollar allí una manifestación pacífica. Personal policial apoyado con dos carros lanza agua, un carro lanza gases y un micro la disuelve. Testigos de los hechos denuncian lo injusto de las detenciones ocurridas. Por otro lado, se espera la formalización por “desordenes públicos” de aquellos.

Con sus cabinas quemadas, aunque con su carga intacta, quedan dos camiones madereros en el sector de Tranaquepe Alto, en Tirúa, región del Bío-Bío. Los vehículos, pertenecientes a una empresa contratista de Forestal Mininco, se encontraban cargando madera cuando según indica la fiscalía un grupo de cuatro encapuchados amenazó con un arma a sus ocupantes, obligándolos a abandonar el lugar. Los encapuchados procedieron entonces a rociar las cabinas de los camiones con combustible y prender fuego. El hecho no deja lesionados. Al lugar concurren carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). La gobernación de Arauco confirma que en los próximos días interpondrá acciones legales por este hecho. En tanto, en Ercilla, región de La Araucanía, una camioneta de la empresa Movistar es obligada a detenerse por un grupo de encapuchados, quienes posteriormente prenden fuego al vehículo. Según Carabineros, el hecho ocurre en la ruta que une a la comunidad Temucuicui con la Ruta 5.

Cuatro jóvenes de la sede Reñaca de la Universidad del Mar inician una huelga de hambre en protesta por la falta de respuesta de las autoridades del plantel tras las denuncias de irregularidades. Alejandro Silva, presidente de la confederación de estudiantes, explica además que se iniciarán en distintas ciudades demandas colectivas contra el plantel por incumplimiento de contratos en la calidad de la enseñanza.

Viernes 15

Alrededor de 2 mil 500 personas se manifiestan en contra del proyecto Alto Maipo de la empresa AES Gener, convocados por más de diez organizaciones ciudadanas, niños, jóvenes y adultos. Muestran su descontento a esta empresa hidroeléctrica, que pretende entubar en 70 kilómetros el 80% del caudal del Cajón del Maipo –fuente de agua para 700 mil personas en Santiago–. La marcha que parte desde la estación de metro Elisa Correa cuenta con la compañía de arte circense Circo Chico, quienes comienzan el desfile alegremente. Luego se suma la banda de bronces Sambaigo, la que hace bailar a gran parte de los asistentes. Pese la hostilidad de las fuerzas especiales de carabineros, la jornada se caracteriza por ser totalmente pacífica. Tomás González, del

seleccionado nacional de Rafting, comenta a *El Ciudadano* que “como selección nacional de rafting entrenamos y vivimos en el Cajón del Maipo. De concretarse Alto Maipo, el río se secaría y la selección nacional se acabaría. Somos quintos a nivel mundial y campeones en la modalidad cuatro”. Esta causa también está apoyada por la cámara de comercio de San José de Maipo y Pirque, quienes también se ven afectados directamente con este proyecto, ya que el turismo es la fuente laboral de la gran mayoría de los habitantes de la zona. Las organizaciones participantes están a la espera del resultado a las denuncias de una serie de irregularidades que guardan relación a la calificación ambiental, la tramitación del permiso y el contrato “secreto” entre Aguas Andinas y AES Gener, por lo que se encuentran movilizados. “La idea es hacer presente la urgencia de dar solución al tema y que el gobierno deje de beneficiar a privados en desmedro de la ciudadanía [...] todavía estamos a tiempo para detener esto”, comenta un dirigente de la Coordinadora Ríos del Maipo.

Pobladores del sector La Colonia de Coronel protagonizan incidentes con carabineros en el marco de las peticiones de indemnización para 500 familias, acusando daños a la salud por el complejo termoeléctrico Bocamina de Endesa. Mientras algunos manifestantes protestan en el acceso principal de la termoeléctrica, otro grupo de jóvenes se enfrenta con Carabineros en la subida de la calle 18 de Septiembre, la que lleva a La Colonia, en el cerro. Con el fin de disolver la manifestación, Carabineros usa el carro lanza aguas y gases lacrimógenos. Algunos vecinos lamentan el uso de bombas lacrimógenas por los niños que se encuentran en el lugar. Personal policial detiene a dos personas por lanzar piedras a dos buses que transportaban trabajadores de la planta generadora, mientras que una vecina es trasladada al hospital tras recibir una pedrada en la cabeza, lanzada desde el interior de la termoeléctrica, acusan los manifestantes. Los pobladores reclaman por los perjuicios a la salud provocados por las cenizas del carbón usado por la termoeléctrica y los ruidos nocturnos, solicitando 60 millones de pesos chilenos por cada una de las cuatrocientas familias reclamantes.

Domingo 17

Residentes de El Recodo y de Pedro de Valdivia Sur, de San Pedro de la Paz, en Concepción, bloquean el acceso y la salida del Puente Chacabuco con una extensa caravana de vehículos. La medida es para denunciar la autorización del municipio para la extracción de áridos a menos de un kilómetro de sus viviendas, reclamando la realización de un Estudio de Impacto Ambiental que acredite si se verán o no perjudicados con este proyecto. Fernando Fontaine, vecino de la Villa “El Recodo”, indica que en la última reunión que sostuvieron con el asesor jurídico de la municipalidad, este no estaba enterado de los pormenores del proyecto y tampoco presentó documentos que justifiquen la aprobación. Asimismo, dicen que aumentará considerablemente el flujo vehicular con los camiones que transportarán el material, situación que agravará los problemas de circulación en el lugar. Los vecinos intertran con carteles y gritos al alcalde de la comuna, Audito Retamal, quien públicamente asegura que la empresa Sierra Leona a cargo de los trabajos cuenta con todos los papeles al día para funcionar. Esta declaración se contrapone a la de Vialidad, desde donde aseguraron que no tienen solicitud alguna en carpeta para habilitar un acceso al predio que se ubica a 800 metros del ingreso al Puente Chacabuco.

Lunes 18

Ante la Corte de Apelaciones de Temuco se presenta una acción contra carabineros de la prefectura de Malleco respecto de los hechos acaecidos en la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu de la comuna de Ercilla, asegurando que constituyen una amenaza a la libertad personal y a la seguridad individual de los amparados. La Defensoría Penal Mapuche recurre al amparo constitucional en representación de los comuneros Venancio Montoya, Segundo Montoya, Gabriel Valenzuela, Alvaro Valenzuela Montoya, Adrián Montoya, Erick Montoya y Teresa Montoya, los cuales resultan con lesiones tras el allanamiento.

Martes 19

En Coronel, efectivos de las Fuerzas Especiales de Carabineros reprimen a pescadores artesanales que se manifiestan en las cercanías de la central termoeléctrica Bocamina II, frente a la nula respuesta que Endesa les ha dado respecto a la solución de los daños provocados por la contaminación. Carabineros desplaza a los manifestantes, quienes responden con barricadas en el cruce Carlos Prat y en la calle Manuel Montt, en el sector de Villa Mora. Ante la arremetida policial se trasladan a la población Nuevo Amanecer, donde se agudizan los enfrentamientos luego de que los efectivos policiales detuvieran sin razón a un menor, hijo de Cintia García, presidenta del Sindicato Algueras de Coronel. Se informa de al menos cinco detenidos. Los manifestantes concuerdan en que si no hay respuesta de la empresa continuarán con las movilizaciones. Los pescadores artesanales, por su parte, han denunciado la contaminación del recurso marino, ya que el agua que la planta ocupa pasa por el mar para los procesos de enfriamiento de las calderas, lo que desestabiliza las condiciones para un desarrollo normal de la biodiversidad. Los pescadores no tienen peces ni los coronelinos acceso a la playa. Por su parte, los algueros recolectores de luga también han sido afectados por la contaminación y por el cierre de la playa: antes caminaban cinco minutos; hoy deben caminar una hora para llegar a su lugar de trabajo.

Miércoles 20

Escasa convocatoria marca la movilización de la Federación de Estudiantes Secundarios en Concepción. Pese a ello, los dirigentes insisten en que las demandas estudiantiles siguen vigentes. La marcha de los estudiantes secundarios comienza en la Plaza Perú y finaliza con una protesta afuera de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Educación. Se registra que cerca de 200 personas responden al llamado. La vicepresidenta de la federación, Valentina Vargas, le resta importancia a la baja convocatoria. Una educación gratuita y la desmunicipalización de colegios y liceos son las demandas que una vez más se escuchan en la calle. La movilización termina sin detenidos.

Jueves 21

Con un arnés y con su traje de buzo mariscador, tres representantes de los pescadores artesanales se cuelgan en el sector donde están las tuberías de abducción y canales de evacuación de la central termoeléctrica Bocamina II, reclamando por la contaminación del borde costero, tema que ha quedado en evidencia en una serie de videos, según señalan los manifestantes. A raíz de una

descompensación, uno de los hombres abandona el lugar, siendo atendido por personal del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU). Ellos representan a cinco sindicatos de la caleta Lo Rojas, que por los daños generados en el borde costero llevan meses sin trabajar. Marisol Ortega es la presidenta del sindicato de las algueras y recuerda que son cerca de 700 las personas afectadas. Los manifestantes permanecen colgando por más de 5 horas y al no tener respuesta deponen la medida. Eso sí, anuncian nuevas movilizaciones. En Endesa, el gerente de Obras y Proyectos Marcelo Álvarez dice que en estas condiciones no hay diálogo y que la planta no entrega indemnizaciones si la justicia no lo ordena. Recalca además que las algueras y pescadores piden 800 mil pesos mensuales por 25 años, la mitad de lo que costó el proyecto. Está en curso la investigación que inició por oficio la fiscalía por el daño ambiental que generaría la termoeléctrica en Coronel, mientras que la empresa asegura que los estudios ya se realizaron.

Los estudiantes salen a la calle nuevamente. Esta vez la movilización es convocada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) y, según sus organizadores, participan más de 10 mil. Según carabineros llegan a 5 mil. A través del lienzo con la consigna “A un año de lucha, aún no se escucha”, los estudiantes dan cuenta de que pese a haber estado movilizados durante casi todo el 2011 y realizar manifestaciones este año, las políticas educativas neoliberales de los gobiernos posteriores a la dictadura no han cambiado. Las marchas se registran en Viña del Mar, Concepción, Antofagasta y Copiapó. En Santiago los estudiantes parten en Plaza Italia en dirección a la Estación Mapocho. El trayecto es por la Alameda. Los gritos y consignas apuntan al ministro de Educación, Harald Beyer, y al presidente Sebastián Piñera, criticando su ineficiencia y falta de interés en avanzar hacia una educación pública de calidad y gratuita. Luego del desalojo del espacio por parte de la policía, la protesta se extiende en la capital por distintos puntos de la ciudad. En el centro de Santiago, en el sector de República y en las cercanías de recintos estudiantiles se producen incidentes. Según la policía hay 35 detenidos, entre ellos un reportero gráfico de *El Mercurio* y un observador de derechos humanos. El petitorio de algunos dirigentes es tener incidencia en la organización que tendrá el sistema educativo por la desmunicipalización y por una valoración de la educación técnica y profesional. Además, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional “José Miguel Carrera” indica que el ministro Beyer “no ha dado el ancho” y que “no es el más apto para su cargo”.

Dirigentes mapuche huilliche de la provincia de Osorno marchan por más de 2 horas rechazando la entrega de derechos de aprovechamiento de agua en diversos ríos de la provincia, solicitados por particulares y empresas ajenas a la zona a la Dirección General de Aguas (DGA), presumiblemente para fines hidroeléctricos. Al respecto, el vocero del comité por la defensa del agua del Futahuillimapu, Jaime Lefian, advierte que las comunidades están dispuestas a dejar la vida por proteger su territorio. “Se está demostrando que el pueblo mapuche está unido y hoy, en vísperas del año nuevo mapuche, ratificamos una vez más que está defendiendo sus derechos ancestrales. Estamos dispuestos a todo. A dar nuestras vidas si fuese necesario por nuestros territorios ancestrales”, sostiene. En la actualidad, las solicitudes de derechos de agua en la DGA se encuentran suspendidas por un plazo de 90 días, mientras la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) propone la creación de Reservas de Agua para Indígenas. Sin embargo, Lefian deja en claro que dicha propuesta no les interesa. “Nosotros lo rechazamos categóricamente, porque aquí no tan solo es el agua. Tenemos todos los elementos de nuestra cultura mapuche, toda nuestra *fillmogen*, nuestra biodiversidad”, señala. Por lo mismo, informa que continuarán movilizándose hasta que su territorio deje de estar amenazado por mega proyectos. “Aquí no se trata solamente del agua, aquí vemos a las minerías que están acechando fuertemente al territorio y, por eso, para nosotros, cuando se habla de reserva, se habla de reserva en plenitud”.

Viernes 22

Dos de los cuatro miembros en funciones de la junta directiva de la Universidad del Mar deciden renunciar a sus cargos para facilitar una solución a la crisis que enfrenta el plantel, que es investigado por el Ministerio de Educación ante presuntas anomalías académicas y financieras. El alejamiento permite deponer la paralización de más de un mes que llevan a cabo los estudiantes, que volverán a clases este lunes. Así se decide tras un acuerdo suscrito entre representantes de los estudiantes, trabajadores y docentes con la junta directiva. Mauricio Villaseñor, presidente del grupo administrador, y Raúl Baeza, otro de los controladores, deciden alejarse de sus cargos, sumándose así a las renuncias presentadas durante la semana por otros dos miembros de la junta: Alejandro Leiva y Patricio Baeza. Ahora sólo quedan dos miembros del grupo administrativo. En el documento también se establece la designación de un rector interino con la aprobación de los trabajadores, alumnos y profesores. Este acuerdo también pone término a la huelga de hambre que cinco alumnos de la universidad iniciaron hace una semana.

Sábado 23

Un centenar de personas se toma el turístico camino que une Ensenada con Puerto Varas, región de Los Lagos, en protesta por lo que ellos consideran “la nula respuesta” que han tenido sus demandas de reparación de la vía, luego de que los trabajos de ampliación que se estaban realizando fueran abandonados por la constructora Kodama en el mes de febrero pasado. Los manifestantes encienden fogatas con neumáticos e interrumpen el tránsito frente a la tenencia de carabineros, sector donde convergen los caminos que conducen a los sectores de Cascada, el volcán Osorno, Petrohué y Ralún.

Lunes 25

Una veintena de habitantes del sector de La Colina, de Coronel, aledaño a la central termoeléctrica Bocamina II, se entierra en la cancha de acopio de cenizas de la empresa para presionar por indemnizaciones que buscan por parte de Endesa. Piden 60 millones de pesos chilenos para cada una de las quinientas cuarenta familias que allí viven, pues acusan daño ambiental, algo que la firma niega.

Trabajadores de la concesionaria Acciona, que construye la ruta 160, paralizan las faenas y se toman las instalaciones en Carampangue, comuna de Arauco. Piden a la empresa mejorar sus condiciones laborales y de remuneraciones. Exigen un aumento de un 10% líquido, un bono de término de faenas, un seguro de vida y un bono de escolaridad, precisa el dirigente de los trabajadores, Alex Oliva. Acciona asegura que, de momento, las obras de construcción de la nueva Ruta 160 no se han visto interrumpidas debido al paro, puesto que a la protesta la llevan a cabo unos ciento cincuenta de un total de quinientos trabajadores.

Una treintena de trabajadores asociados al Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Obras Civiles y Actividades Anexas (SINAMI) exige al gobierno mejores condiciones laborales y salariales. Estos acuden a la SEREMI del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ubicada en la calle Prat, de Concepción, donde realizan una bulliciosa protesta con banderas y tambores. Ante el escenario acude Carabineros. Acto seguido los trabajadores ingresan

al edificio público y con una simbólica cinta de género cierran las puertas tomándose las oficinas. El secretario regional ministerial Arnaldo Recabarren no se encuentra en el lugar, ya que estaba con el ministro Golborne de gira por Ñuble. Por lo tanto solo el diálogo entre los dirigentes y la fuerza pública logra terminar con el áspero momento de confrontación con los efectivos de las fuerzas especiales. Robert Salgado, presidente nacional del SINAMI, explica el conflicto, señalando que hay una negativa por parte de la empresa contratista para llegar a algún acuerdo con los trabajadores. Los trabajadores actualmente mantienen las obras públicas en los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y en el proyecto La Poza de Talcahuano, ambas que agrupan a cerca de mil trabajadores provenientes de distintos puntos del país que actualmente buscan un diálogo con las autoridades, para plantear las necesidades que tienen.

Se rechaza del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde con ocho votos en contra y solo dos a favor en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama, el cual es, sin ninguna duda, resultado del largo trabajo del movimiento socioambiental del Valle del Huasco y particularmente de la Brigada “S.O.S. Huasco”, quienes denunciaron las irregularidades durante todo el tiempo que duró la tramitación del proyecto. Este proyecto termoeléctrico a base de carbón bituminoso de la transnacional Endesa pretendía instalarse a 2 kilómetros hacia el norte de Huasco, localidad que tras años de lucha ha sido recientemente declarada *zona de latencia*. Una de las primeras irregularidades fue que el proyecto de mil 400 millones de dólares se presentó de forma disgregada: por un lado las unidades de generación eléctrica y; por otro lado, la construcción del puerto. El SEA solicitó cinco veces información complementaria a Endesa por considerar insuficiente la que la transnacional presentaba. Varios servicios presentaron observaciones en relación a la información que la empresa ponía a disposición. Incluso cuando se efectuaron los procesos de predicción de impactos respecto al cumplimiento de la débil norma de emisiones de termoeléctricas, hicieron mal los procedimientos y no se presentaron los datos que dieran respaldo a los cálculos elaborados por la empresa. Pese a todas esas denuncias realizadas en su momento, la empresa consiguió que todos los servicios del gobierno involucrados en su evaluación visaran el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del proyecto, permitiendo que este ingresara al comité de evaluación de la región.

Martes 26

Después de permanecer 40 horas enterrados hasta los hombros en las cenizas de la central termoeléctrica Bocamina II, en el puerto de Coronel, los 12 manifestantes y vecinos de la planta deciden terminar su protesta. Así lo determinan tras acordar una reunión con la empresa propietaria de la planta, Endesa.

Los operarios de la empresa Acciona que paralizaron la megaobra vial que se extiende desde el paso de Coronel hasta Tres Pinos, comuna de Los Álamos, reclamando un aumento salarial, bonos y seguros, entre otras mejoras, al no obtener aún una respuesta desde la gerencia de la compañía española inician una maratónica marcha desde Coronel hasta las oficinas ubicadas en el cruce de Carampangue, es decir, un trayecto de 40 kilómetros. El dirigente de los movilizados, Rubén Durán, pide voluntad a la empresa extranjera para responder a sus demandas.

El subsecretario Luis Castillo llega a presentar lo que será el nuevo recinto asistencial de la comuna de Penco, pero esto pasa a segundo plano cuando una marcha de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) interrumpe la actividad. Los funcionarios exigen mejorar sus condiciones laborales. Se reunieron solo unos minutos con él, sin tener una respuesta concreta, según

señala el presidente de la FENATS del Hospital Regional de Concepción, Adolfo Becar. La manifestación se extiende por cerca de media hora y el subsecretario tiene que ser escoltado por carabineros. La maqueta del Hospital Penco Lirquén presentada por Luis Castillo se trata de la segunda etapa que comenzará a construirse a fin de año, terminando con los problemas que ocasionó el incendio que en febrero del 2008 destruyó el 60% del recinto. Este pretende el aumento del número de profesionales: a los 240 que existen, se sumarían cerca de cien. También habrá más especialistas, evitando que los pacientes deban trasladarse al Hospital “Las Higueras”, de Talcahuano, para ser atendidos.

Miércoles 27

Aprovechando la alta afluencia de público al *Costanera Center*, la CONFECH hace su primera protesta en el recién inaugurado recinto comercial. Un grupo de universitarios encabezado por los dirigentes de la FECH, Gabriel Boric, y de la Universidad Central, Daniela López, despliega una bandera con la consigna “Educación pública gratuita y de calidad”.

En Santiago un grupo de deudores habitacionales de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha) - Chile a Luchar intenta protestar en las cercanías de la casa del presidente Sebastián Piñera, lo que termina con una treintena de detenciones. Posteriormente, intentan manifestarse frente a La Moneda, lo que es frustrado por carabineros.

La secretaría regional ministerial interina de Medio Ambiente en el Bío-Bío pide el cierre de la cancha de acopio de cenizas de la planta Bocamina en Coronel, luego de una inspección realizada tras las protestas de vecinos. Recordemos que decenas de residentes del sector protestaron por el impacto ambiental de la generadora de Endesa enterrándose por más de 40 horas en las cenizas que desecha la planta. La secretaría Andrea Flies concreta la séptima fiscalización en terreno a la Resolución de Calificación Ambiental de la ampliación del vertedero de la empresa, donde indica que la cancha de acopio donde se enterraron los pobladores debe ser cerrada a la brevedad. La autoridad explica que los informes del vertedero no han ingresado al sector de evaluación ambiental del ministerio y que este solo tiene autorización del de Salud, puesto que al abrir no existía el Ministerio de Medio Ambiente, y que no se ajusta a la actual normativa. Los diferentes servicios que participan de la fiscalización deberán enviar sus observaciones a la Comisión Evaluadora Regional.

Hasta el Segundo Juzgado de Letras de la comuna llegan vecinos de Villa “Estero el Manco” y la población Alborada para interponer una demanda contra la termoeléctrica Santa María de Colbún y la compañía Puerto de Coronel. En su etapa final de pruebas está la termoeléctrica Santa María y quienes viven a su alrededor dicen sufrir las consecuencias. La contaminación ambiental y especialmente la acústica han empeorado su calidad de vida, por eso llevaron el problema a la justicia. La acción legal tiene como objeto lograr la reparación de los daños ocasionados por la instalación y puesta en marcha de la central generadora a carbón y el suministro de petróleo que le entrega Puerto de Coronel. Son más de 300 personas que conforman 93 familias que viven en el sector aledaño a la generadora y son representadas en esta demanda. Piden una indemnización por 15 millones de pesos chilenos, según explica el abogado Carlos Samur. Los pobladores quieren trasladarse del sector y es que señalan que la termoeléctrica es un vecino que no quisieran tener. La termoeléctrica de Colbún comenzó hace unas semanas su marcha blanca y es la tercera generadora de este tipo que se instala en la comuna de Coronel, junto a Bocamina y Bocamina II de Endesa.

Jueves 28

Estudiantes realizan marchas en Santiago y en las regiones, las cuales son catalogadas por las autoridades como las marchas más violentas vistas en los últimos años. La movilización con que la CONFECH reivindica demandas como la educación pública, gratuita y de calidad –la primera de 2012 que la Intendencia Metropolitana autoriza por la Alameda–, deja 250 detenidos y 20 carabineros y dos gendarmes lesionados –estos últimos de gravedad–. Encapuchados saquean locales comerciales y destruyen la propiedad pública y privada, provocando grandes pérdidas. De todos los incidentes, hay tres que por su dramatismo terminan marcando la jornada. En Alameda con Bascuñán, la cabo de carabineros María Acevedo es golpeada en el rostro por encapuchados. Mientras es auxiliada en un negocio, el sargento Luis Muñoz saca su arma y la exhibe ante los encapuchados. Más al oriente, en Alameda con Brasil, un camión de gendarmería choca con un poste. Encapuchados aprovechan para apedrearlo e intentar incendiárselo. Allí son heridos los gendarmes. A la altura del cerro Santa Lucía, un carro de las fuerzas especiales es acorralado por cincuenta encapuchados en plena Alameda. Los efectivos deben huir, disparando al aire. Los estudiantes cifran en 150 mil los asistentes a la marcha. La intendencia, en 40 mil. Paralelamente, de las regiones, con 5 mil asistentes y 58 detenidos tras incidentes, la marcha de Valparaíso es la más masiva. En Antofagasta, Concepción y Valdivia participan mil personas, respectivamente.

Viernes 29

Ante la negativa de Endesa de responder a las pretensiones de más de 744 trabajadores del mar de la caleta Lo Rojas en Coronel, entre algueñas y pescadores deciden seguir manifestando su molestia. Esta vez con una acción judicial por la contaminación que genera la central termoeléctrica Bomina II en la zona, según explica Hernán Cortés, pescador artesanal. La querella incluye evidencias del daño provocado a los recursos marinos tal como se informó hace algunos días cuando se mostraron las decenas de toneladas de crustáceos, peces y microalgas succionadas a diario en el proceso. El senador Alejandro Navarro, quien acompaña en esta presentación a las algueñas y pescadores, asegura que los trabajadores no bajarán los brazos y que ésta es solo una de las acciones que deberá enfrentar la empresa. Navarro critica además que Endesa proponga como alternativa única de solución al conflicto los tribunales de justicia, lo que asegura da a entender que están equivocados porque eso solo empeoraría la situación. Paralelamente, vecinos del sector Schwager de Coronel cortan en tránsito vehicular en el área manifestándose en contra de la termoeléctrica Bocamina de Endesa. A pesar de que sus viviendas no se encuentran cerca de la central, protestan por la contaminación ambiental que provocan las empresas Cabo Froward, Endesa, y una planta de cemento que tiene la portuaria a menos de 300 metros de las casas.

Glosario de siglas

AFDD	Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Andha	Asociación Nacional de Deudores Habitacionales
CAM	Coordinadora Arauco Malleco
CODEPU	Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo
CONES	Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios

CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFUSAM	Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada
FECh	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FENATS	Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FENPRUSS	Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud
FEUC	Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
SEREMI	Secretaría Regional Ministerial
SINAMI	Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Obras Civiles y Actividades Anexas

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización a cargo de Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo, Punto Final; páginas electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress y Radio Cooperativa.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Julio de 2012

Editada en noviembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 118²

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera. Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo y Punto Final; páginas electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, emol.com, Fortín Mapocho, La Opinión, Mapuexpress, olca.cl, Radio Cooperativa, radiodelmar.cl, radio.uchile.cl y terra.cl.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile
Cronología del conflicto social
Julio de 2012

Lunes 2

Una pequeña parcela, ubicada a unos 20 kilómetros de Ercilla, en el sector de Chiguaihue, IX Región de La Araucanía, es atacada por desconocidos los cuales incendian una casa ubicada en su interior. La propiedad pertenece a José Sánchez Martínez, quien hace dos semanas abandonara el inmueble, junto a su familia, a raíz de las constantes amenazas presuntamente dirigidas en contra de Luis Quiroz, otro residente del sector. Se registra que algunos propietarios de predios en Angol, Ercilla y Collipulli se agruparon en un Comité de Vigilancia Rural.

Martes 3

Dos mujeres llegan hasta la sede del partido Renovación Nacional (RN), ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana, aludiendo que tienen una reunión, sin especificar con quién. Una vez que les abren las puertas, ambas las sostienen y llaman a otro grupo de personas –en total 17, todas pertenecientes a la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha) «Chile a Luchar»– iniciando una protesta al interior de la principal instalación de la colectividad. Luego de pequeños forcejeos, las manifestantes, que son todas mujeres, suben hasta el segundo y tercer piso de la sede y salen por las ventanas para colgarse con unos arnés desde allí. Tras dos horas de manifestación llegan carabineros, desplegando un operativo para desalojarlas.

La Comisión Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero acusa al gobierno de Sebastián Piñera de actuar con violenta represión en contra de los pescadores artesanales que se movilizan a nivel nacional en contra las modificaciones a la Ley de Pesca que intenta imponer el ministro de Economía, Pablo Longueira, y que tienden a privatizar las pesquerías nacionales. Las manifestaciones que se realizan en diversas ciudades costeras del país son reprimidas con violencia por la policía militarizada. El hecho más preocupante y que evidencia la dura represión policial ocurre en Dalcahue, donde en medio de las protestas un carabinero con pistola en mano enfrenta a los pescadores artesanales movilizados. Frente a esta acción, el diputado Gabriel Ascencio presenta un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en favor de Sergio Mayorga, dirigente de los pescadores de Dalcahue y otros detenidos en Chiloé. Nelson Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, organización que agrupa a más de 50 mil hombres y mujeres del mar, indica a *Ecoceanos News* que el único camino para defender los derechos de la pesca artesanal es la movilización, luego de que el ministro de Economía Pablo Longueira hubiera fijado para el 12 de julio la aprobación del proyecto de Ley de Pesca que privatiza los recursos del mar. En Quellón los pescadores artesanales también se suman al llamado nacional de protesta en contra de la Ley de Pesca y mantienen por 2 horas bloqueada la ruta 5 Sur a la altura del cruce San Antonio. En el lugar se queman neumáticos provocando el cierre de la carretera. Pescadores artesanales de la comuna de Coronel, en la VIII Región del Biobío, también son reprimidos por las Fuerzas Especiales de Carabineros. Los manifestantes levantan barricadas y bloquean el tránsito en la ruta 160 y en la intersección de la avenida General Prat con la calle Pedro Aguirre Cerda, frente a la caleta Lo Rojas, donde intervienen carabineros con fuerzas especiales. En

el lugar, un carro de un tren que trasporta celulosa es desenganchado y quemado.

Vecinos de Villa Francia, en la comuna capitalina de Estación Central, se congregan en las afueras del Centro de Salud Comunitario para realizar una protesta. Según la vocera de los manifestantes, Ana Baeza, exigen un médico permanente en dicho recinto de atención primaria, además de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y otros que están postrados. “Los médicos que vienen son del consultorio de San José de Chuchunco y vienen según la disposición que tengan ellos”, asegura Baeza. De acuerdo a lo que denuncian, se atiende a entre doce y seis pacientes de los treinta que acuden en promedio al consultorio, lo que es justificado por las autoridades del recinto con que los vecinos deben pedir un médico permanente. Ante la precaria situación que viven desde hace unos 4 meses, la vocera anuncia que no descartan efectuar otras medidas de presión, amenazando incluso con tomarse el centro de salud.

Un grupo de locatarios del centro de Santiago recurre a la justicia para impedir marchas estudiantiles por la Alameda y propone alternar su paso por otras comunas. El libelo, dirigido contra la intendenta metropolitana Cecilia Pérez, denuncia la violación de los derechos de propiedad de los vecinos y a la vida e integridad física y psíquica de todos los habitantes del sector. En el escrito se quejan por las pérdidas económicas que les significa cada marcha y los destrozos de que fueron objeto en la última movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Zacarias Alarcón, vocero del grupo, pide a la autoridad que se consideren otros lugares para realizar estas movilizaciones. Marcelo Brunet, abogado de los comerciantes, asegura que la intendenta Pérez tiene las facultades para proteger a los vecinos de la zona expuesta a estas manifestaciones. Al recurso de protección lo interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Miércoles 4

Más de 5 horas continuas dura la reunión que sostiene la nueva directiva de la Universidad del Mar para buscar una salida a la crisis que afecta a esa casa de estudios. Sin embargo, y a pesar de que en el encuentro también reciben a algunos dirigentes estudiantiles, la entidad no logra desatrancar el conflicto. Tampoco logran la elección de un presidente ni concretar la nominación del nuevo rector. El ex vicerrector de Comunicaciones, Pedro Avendaño, quien ha oficiado de vocero, indica que “la prioridad ha sido escuchar a los distintos estamentos de la universidad”, por eso la junta recibió a los representantes de la carrera de Medicina, quienes entregaron un petitorio en que solicitan restablecer los campos clínicos para sus prácticas profesionales, que les han sido negados. En tanto, el presidente de la confederación de estudiantes, Alejandro Silva, sostiene respecto de la nueva junta: “Ha sido nombrada por los controladores –dueños– de la universidad y es más de lo mismo”. Y añade: “Esta junta ha recibido a estudiantes elegidos por ella y que son proclives a sus planes, pero la confederación sigue esperando una respuesta a nuestra peticiones de ser recibida”. El dirigente precisa que se mantendrán las movilizaciones.

Jueves 5

El psicólogo Patricio Galleguillos es elegido rector de la Universidad del Mar por la junta directiva del plantel. Galleguillos afirma que su gestión estará orientada por el respeto y la tolerancia. La junta queda presidida por el abogado Mauricio Cordaro, y la conforman Pedro Avendaño, vicepresidente, Carlos Jélvez, secretario, Juan Sánchez, Jorge Troncoso y Patricio Galleguillos,

directores. Mauricio Cordaro asegura que los integrantes de la junta no tienen vínculos económicos con miembros de la Corporación Educacional Universidad del Mar.

Una casa que permanece desocupada hace más de un año y una bodega en la que se guarda una máquina para regadío son quemadas por desconocidos que ingresan al fundo La Montaña – de 139 hectáreas–, propiedad de una empresa agroforestal ubicada a 28 kilómetros de Vilcún, región de La Araucanía. Según el administrador del predio, Patricio Hormazábal, no existe amenaza alguna y no se han registrado episodios de violencia en la zona. Sin embargo, a un costado de la bodega se encuentra un lienzo alusivo a grupos mapuches con la sigla CAM, correspondiente a la Coordinadora Arauco Malleco.

Vecinos de la villa Don Domingo II, de Puente Alto, región Metropolitana, protestan en las afueras de los talleres de la empresa ferroviaria Metro de Santiago exigiendo medidas de mitigación, pues alegan que los trabajos en el establecimiento, ubicado contiguamente a la población, afectan su calidad de vida. La protesta, registrada entre las calles Domingo Tocornal y Nemesio Vicuña, se hace en rechazo a los ruidos, las pruebas de velocidad y los constantes movimientos de los vagones en la maestranza, según denuncian, que incluso hacen que se quiebren algunos vidrios de sus viviendas. En este contexto, se informa que los habitantes de la citada villa ya interpusieron acciones legales con el fin de que Metro de Santiago presente medidas para mitigar las molestias, o bien les proporcione algún tipo de indemnización para compensarlos por las fallas estructurales que han presentado algunas de sus casas.

Se realiza una marcha no autorizada por la Alameda durante la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en demanda por un alza en el sueldo mínimo a 250 mil pesos. Pese a que no existe autorización por parte de la Intendencia Metropolitana, manifestantes intentan marchar por la vía, provocando el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros. Haciendo uso de los carros lanza agua y lanza gases la policía intenta contener a los manifestantes, registrándose al menos 10 detenidos.

Viernes 6

Comuneros del *lof* Llamuco se toman el fundo El Natre, en Vilcún, contiguo al latifundio Santa Margarita –antigua propiedad del agricultor Jorge Luchsinger y que fue comprada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y entregada a comunidades locales–. Carabineros llega al lugar e inicia el desalojo con vehículos blindados y un helicóptero, registrándose disparos y persecución a los comuneros que se refugian en los alrededores y en el fundo. Tras el violento desalojo y la persecución se detiene a Ernesto Chachallao Painemil, Mario José Cheque Sandoval y Bernardo Carrillán Trupán. Además se registra la detención de Millacheo Marín, preso político mapuche que estuvo en la huelga de hambre del año 2010, cuando estaba recluido en la cárcel de Angol. Posteriormente había sido absuelto.

Unas diez personas de rostro cubierto que porta armas de fuego ingresan al campamento de trabajadores de la empresa forestal Bosque Arauco, ubicado en la periferia del pueblo de Pidima, comuna de Ercilla, para quemar cinco contenedores que eran utilizados de dormitorio y dos casas destinadas a oficinas y servicios. También destruyen un camión de carga, al que minutos antes su chofer lo hubo estacionado en el lugar. Al momento del ataque el campamento permanecía deshabilitado. Según carabineros, los incendiarios amenazaron al cuidador, realizaron disparos al

aire y prendieron fuego a las instalaciones y al camión. Luego escaparon a pie. No se encontraron panfletos, pero carabineros investiga si el hecho está vinculado con la detención de un líder indígena en Vilcún.

El nombre de nuevas autoridades provoca un quiebre en los controles y en la junta directiva de la Universidad del Mar, agregando un nuevo capítulo a la crisis que vive el plantel –donde estudian 18 mil alumnos y trabajan unas 4 mil personas– desde la renuncia del rector Raúl Urrutia. Carlos Zelada, fiscal del plantel y representante del empresario Sergio Vera, uno de los tres dueños de la universidad, señala que el nombramiento de los miembros de la junta es ilegal, ya que contradice los estatutos de la corporación en cuanto a que para ser miembro de la entidad es requisito ser miembro fundador o activo de la corporación que la creó. Con ello, explica que también el nombramiento del rector es ilegal. Mauricio Cordaro indica que la Universidad del Mar requiere normalizar sus actividades a la brevedad y que por lo tanto los nombramientos hechos por la junta directiva –que incorporó a dos suplentes y está conformada por sies y no ocho miembros como antes– era urgente e indispensable.

En Santiago, trabajadores de un *call center* realizan una protesta en las calles Alameda con Vicuña Mackenna exigiendo un reajuste en sus salarios. En cuanto a esto, Jessica Ardiles, secretaria del Sindicato Konecta, indica que la empresa española no quiere ceder en un aumento real de sueldo. “Hace 4 años esperamos la negociación. Se compró un edificio nuevo y a nosotros nos están ofreciendo 5 mil pesos de aumento de sueldo, ni siquiera un aumento real en la locomoción o colación”. Además, sostiene que con estas protestas buscan masificar la información y así ser escuchados por la empresa. “Nosotros buscamos por lo menos un 10% de aumento y vamos a seguir protestando hasta que la empresa se manifieste”. Carabineros se dirige al lugar para vigilar la situación y mantener un acuerdo con los manifestantes, que solo pueden interrumpir con lienzos y carteles la calle cuando el semáforo está en luz roja.

Sábado 7

Cerca de quinientos manifestantes de la Andha «Chile a Luchar» realizan una protesta afuera del domicilio del presidente de la república, Sebastián Piñera, donde exigen una solución a sus problemas de deuda, lo que señalan fue una de las promesas de campaña. Ante esto, carabineros tiene que actuar con carros lanza agua y según fuentes policiales hay más de 100 detenidos.

Lunes 9

Se registra un corte de energía entre la Línea 1 y 5 del tren metropolitano y se informa que hay personas protestando en la vía, impidiendo el normal servicio de la compañía Metro de Santiago. Los manifestantes se encuentran encadenados, por lo cual la empresa de transportes decide cortar la energía eléctrica para evitar algún accidente. Aquellos pertenecen a la empresa de *call center* Konecta Chile, quienes protestan portando diferentes lienzos y banderas solicitando diversas mejoras salariales. Esto provoca un colapso, por lo que se debe evacuar a los pasajeros desde los vagones, quienes deben salir a los paraderos del Transantiago. Personal de Fuerzas Especiales de Carabineros llega hasta el lugar para intentar controlar la situación, bajando a los trabajadores y así normalizar el servicio de transporte. Producto de esta protesta, personal policial detiene a tres hombres y a una mujer.

En la región del Biobío, pescadores artesanales bloquean con sus embarcaciones el puerto de Coronel. Desde Puerto Montt, Jorge Bustos, presidente del Consejo Regional de Pescadores Artesanales (COREPA) y vocero de la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, informa a *Ecoceanos News* que “de los 25 mil pescadores de la región de Los Lagos, el 80% se encuentra movilizado en al menos cinco focos de protestas, con bloqueo de carreras, en rechazo a la aprobación del proyecto de Ley de Pesca”. En Valparaíso, los pescadores artesanales instalan barricadas y se enfrentan con carabineros en la avenida España frente a la Caleta Portales.

Martes 10

Estudiantes pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) junto a trabajadores del *call center* Konecta Chile se toman las dependencias de la empresa. Recordemos que estos mismos trabajadores se subieron a las vías del tren metropolitano obligando a cortar la electricidad, lo que causó una gran congestión y la molestia de los usuarios. En tanto, los secundarios señalan que se encuentran en el lugar junto a algunos universitarios de distintas federaciones dado que entienden que hay muchos estudiantes “que trabajan en estas mismas condiciones para poder pagar su educación”. La vocera de la ACES indica que son alrededor de 20 los estudiantes que se encuentran en el lugar. Paralelamente, los ejecutivos de Metro de Santiago, encabezados por el gerente de Asuntos Corporativos Álvaro Caballero, interponen una acción judicial en el décimocuarto juzgado de garantía por desórdenes graves e interrupción del libre tránsito de las personas. Según Caballero, esta acción judicial va en paralelo con las civiles, donde incluso se podría hacer responsable de los daños económicos que pudo haber tenido el tren metropolitano producto de esta interrupción de casi una hora del servicio. Por último, indica que esta medida pretende dar un ejemplo claro de que las personas no pueden afectar a más de 50 mil pasajeros por situaciones de orden particular y privada.

Pescadores artesanales de diferentes regiones chilenas han ocupado las carreteras y algunos puertos pesqueros para protestar contra el intento del ministro de Economía y candidato presidencial, Pablo Longueira, para hacer aprobar rápidamente esta semana en la Cámara de Diputados las modificaciones a la Ley de Pesca que tienden a privatizar las zonas pesqueras. Longueira ordenó que la Comisión de Pesca y Acuicultura de la cámara despache el proyecto de ley, sin una discusión seria de las más de 800 indicaciones que se le formularan. En Chiloé, Puerto Montt, la región del BíoBío y Valparaíso, los pescadores han ocupado las calles aledañas a sus caletas y se han enfrentado a la policía. Pescadores artesanales de la provincia de Llanquihue mantienen bloqueadas dos importantes rutas de la zona. La Carretera Austral se mantiene con tránsito suspendido en el kilómetro 35 a la altura del sector rural de Chaicas, donde se han quemando neumáticos. También está bloqueada la ruta 5, en el área del cruce para ingresar a Maullín. En tanto, en Chiloé, los pescadores protestan en Quellón, donde han ocupado el puerto local y han impedido todo tipo de faenas.

Miércoles 11

Cerca del paradero 28 de Gran Avenida y en la Alameda, a la altura de Las Rejas, región Metropolitana, varios grupos de manifestantes pertenecientes a Andha «Chile a Luchar» se toman las vías en plena hora punta. Con barricadas y grandes pancartas, las personas interrumpen el tránsito, atocando el flujo vehicular. Carabineros llega hasta los puntos tomados para dispersarlos,

y tras la negativa de dos manifestantes de abandonar las vías, les detienen.

Universitarios, secundarios y trabajadores intentan marchar en pleno centro de la capital en el marco de un nuevo aniversario de la nacionalización del cobre. La encargada del departamento de Derechos Humanos de la CUT, María Eugenia Puelma, denuncia “la violencia desatada por Carabineros” en momentos en que distintas organizaciones sociales recordaban los 41 años de la nacionalización del cobre por el parlamento en 1971. La dirigente de la central dice que “no se puede reprimir a ciudadanos que celebraban la nacionalización del cobre durante el gobierno del presidente Salvador Allende, hecho que entregó plena potestad al pueblo chileno sobre su principal riqueza”. “La marcha por el Paseo Ahumada fue autorizada, pero Carabineros no permite el avance de cientos de ciudadanos. Esto demuestra una vez más la política gubernamental sobre los legítimos derechos de los chilenos a manifestarse en forma pacífica”, sostiene Puelma. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, define que esto es una “abierta provocación” que obedece a la “actitud represiva” que ha tenido el actual gobierno con los movimientos sociales. El dirigente universitario detalla además que solo un pequeño grupo de dirigentes pudo llegar hasta el Ministerio de Minería y a las oficinas centrales de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) para hacer entrega de una misiva en la que exigen la renacionalización de los recursos naturales del país, entre ellos el cobre. “Creemos que si el cobre fuera efectivamente chileno y no se lo llevaran las grandes transnacionales al extranjero para enriquecer los bolsillos de unos pocos, podríamos avanzar por una educación gratuita y además financiar otras demandas que está exigiendo la gente movilizada”, afirma el presidente de la FECh. El hecho ha dejado varios detenidos, y la fuerza policial usa gases lacrimógenos para controlarlos.

Dos vías se toman en una nueva jornada de protestas de pescadores que rechazan el trámite de la Ley de Pesca en el congreso. Por un lado, los trabajadores de la región de Los Lagos aceptan dialogar con el gobierno en Santiago, mientras que otra fracción radicaliza sus manifestaciones con tomas de camino y ataques a carabineros. El hecho más violento se registra en Constitución, donde pescadores artesanales toman por la fuerza un camión cargado con petróleo para impedir el acceso a la ciudad. Los manifestantes desinflan los neumáticos para que el transporte no pueda ser movido. Después de 12 horas, carabineros desbloquea la ruta y detiene a una treintena de personas. Francisco Reveco, presidente de los pescadores del Maule, asegura que no depondrán las movilizaciones hasta que el gobierno introduzca modificaciones a la Ley de Pesca. En la provincia de Arauco, la ruta que une Tirúa con Cañete se mantiene bloqueada. Sin embargo, los armadores de Lota e Isla María deponen el bloqueo marítimo que afecta hace tres días al puerto de Coronel ante la promesa del gobierno regional de gestionar una entrevista con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Jueves 12

En Santiago el sindicato de trabajadores del centro de abastecimiento de combustible Terpel cumple 24 horas de paro de actividades. Exigen un aumento salarial del 5% sobre el sueldo mínimo y que se dupliquen los bonos de colación y locomoción. Además, piden un incentivo de antigüedad para las personas que trabajan hace 5 y 10 años, aparte de un bono de término de conflicto de 300 mil pesos. Por este, las dependencias de Terpel en Portugal, Monterrey, Huechuraba, La Dehesa, Domínica, América, Pedro de Valdivia, Trinidad y Rinconada de Maipú, además de Temuco, están paralizadas. Según la vocera del sindicato, se emplazó a la empresa a que se pronuncie respecto a la movilización, afirmando que no bajarán el paro hasta que reciban una respuesta satisfactoria por

parte de la compañía.

En Santiago se realiza una marcha en contra de la denominada “Ley Hinzpeter”. Se inicia en Plaza Italia y se registran incidentes en el cruce de la Alameda con Santa Rosa, lugar donde un grupo de manifestantes protagoniza disturbios. Carabineros de fuerzas especiales llegan al lugar para controlar la situación con el carro lanza aguas.

Sábado 14

Alrededor de 100 personas de la comuna de Freirina, III Región de Atacama, se toman durante 3 horas la ruta que lleva a la ciudad en protesta por el cierre de la planta de cerdo de la empresa Agrosuper. Yahir Rojas, uno de los dirigentes del movimiento, dice que la protesta es organizada por los vecinos porque “toda la gente está molesta, ya que las autoridades sanitarias no nos entregan información sobre el plan de cierre de la planta”. Este conflicto comenzó en abril de este año, cuando habitantes de Freirina se tomaron la carretera que une Vallenar y Huasco para protestar por los malos olores que emanaban desde la planta de cerdo de Agrosuper. Actualmente, la empresa está trasladando los animales a otras zonas, como parte de su plan de cierre.

Lunes 16

Cerca de trescientos trabajadores del sindicato de la empresa contratista Gardilcic Andina se toman el terminal de buses JM, ubicado en el Camino Internacional, para impedir el traslado del personal que debe ingresar a cumplir sus labores en esa división de la CODELCO. El presidente de la organización, Guillermo Candia, dice que es una movilización de advertencia y explica que a tres días del inicio de la paralización de actividades la empresa no ha hecho oferta alguna al sindicato. En el pliego de peticiones se está solicitando un incremento de 140 mil pesos en las remuneraciones. Se registra que posteriormente termina la toma y el tránsito por el Camino Internacional se normaliza por completo.

La Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (OCAS) junto a vecinos de Caimanes, IV Región de Coquimbo, se toman el acceso a la mina Los Pelambres, del grupo Luksisc, en protesta por la contaminación de la zona. La minera espera depositar mil 700 millones de toneladas de relaves tóxicos en el tranque, deshechos mineros que contienen estroncio, arsénico, óxido de silicio, plomo y otras sustancias contaminantes asociadas a la explotación de cobre. En caso de derrumbe, las toneladas de desechos tóxicos caerían sobre el pueblo de Caimanes, cuyos habitantes sufren ya la contaminación de sus aguas y de su aire. El grupo Luksic es uno de los más ricos de Chile, figurando en la revista *Forbes* desde hace ya años. Además de intereses mineros desarrollados a través de su filial Antofagasta Minerales, es dueño del Banco de Chile, tiene parte de la propiedad de Aguas Antofagasta y de la Compañía Cerveceras Unidas, entre varios otros negocios. Solo en el periodo enero a mayo de este año, el Banco de Chile obtuvo ganancias por 194 mil 380 millones de pesos –unos 388,76 millones de dólares– y una rentabilidad sobre el patrimonio del 26,14%. En Caimanes viven cerca de mil 600 personas, en su mayoría dedicados a la agricultura y a la pequeña minería. A sólo 8 kilómetros de sus casas la minera Los Pelambres construye un muro de contención de 240 metros de alto para trancar doce estanques donde se sedimentan los desechos tóxicos de la mina de cobre Los Pelambres. El Mauro es el relave más grande de Sudamérica y el tercero del mundo. Para su construcción la minera del grupo Luksic destruyó patrimonio

arqueológico y dejó incendiar el último bosque de canelos de la región.

Martes 17

Alrededor de cuatro encapuchados ingresan a un recinto de la empresa forestal Bosque Cautín, en la comuna de Lumaco, región de La Araucanía, y prenden fuego a tres máquinas de faena, las que resultan quemadas, y una de ellas queda totalmente destruida. El atentado se registra en el sector Los Sauces, a 3 kilómetros de la localidad Lumaco, en la parcela 17 del fundo Saboya, muy cerca de donde hace un mes y medio fueron atacados dos camiones forestales. Se registra que los encapuchados huyen rápidamente por los predios cercanos. En tanto, la empresa evalúa las pérdidas en 650 millones de pesos.

Miércoles 18

Trabajadores de la salud de la región de La Araucanía protestan en repudio a la Ley de Resguardo Público o también denominada “Ley Hinzpeter”. Recordemos que a nivel nacional la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) llamó a esta movilización, señalando que no afectará el normal funcionamiento de los establecimientos ya que las protestas consistirán en la realización de asambleas y la entrega de información de esta polémica ley. Alejandra Correa, presidenta regional de la CONFUSAM, señala que este repudio se produce porque el gobierno quiere prohibir manifestaciones válidas, por su incapacidad de controlar los desórdenes en las marchas. Durante esta jornada, los trabajadores de la salud atienden a las personas vestidos completamente de negro y reiteran que la atención a los pacientes se realiza en completa normalidad.

Viernes 20

En Santiago, un grupo de cerca de treinta estudiantes secundarios llega hasta las afueras del Ministerio de Educación con la finalidad de protestar por las condiciones, a su juicio “paupérrimas”, en las que estudian en el país. La dirigenta de la ACES, Eloíza González, dice que convocan a una marcha para el próximo 8 de agosto en atención a la demora de respuestas concretas por parte de la autoridad a sus petitorios. Además indica que “ha sido la clase política completa la que no ha querido dar respuestas a nuestras demandas”.

Parejas infériles de la agrupación “Queremos ser padres” inician una marcha con coches vacíos desde el Ministerio de Salud, con el objetivo de pasar por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Ministerio de Hacienda y el palacio de La Moneda, donde entregan una carta para exigir la codificación de los tratamientos de fertilidad. La presidenta de la agrupación, Patricia Ramírez, expresa que “queremos que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, cumpla lo prometido en diciembre de 2011 en cuanto a aumentar este año en doscientos cupos para casos de alta complejidad, pero esto no se ha concretado”. “Lo único que esperamos las más de 350 mil parejas que sufrimos de infertilidad en Chile es la codificación, el aumento de cupos Fonasa para alta y baja complejidad y por último la aprobación de la guías clínicas de tratamiento, lo que permitirá derivar pacientes de los consultorios de atención primaria a centros especializados”, agrega.

Una particular protesta realizan activistas de Greenpeace. Estos se caracterizan de osos polares y llegan hasta la estación Shell, ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana, para manifestarse contra las actividades que realiza dicha compañía en el Ártico, las que según la organización pretenden extraer petróleo poniendo en peligro a la fauna que allí habita. El director nacional de Greenpeace, Matías Asun, expresa su preocupación por las actividades de exploración que realiza la empresa con el fin de perforar el Ártico para extraer este recurso. Según explica, este sector del planeta es uno de los últimos “refrigeradores” de la tierra, el que también alberga a una importante comunidad de osos polares, especie que quedaría en extinción si su hábitat fuese invadido. Lo complejo de esta situación es que si se continúan las actividades de perforación en el Ártico, el lugar podría quedarse por primera vez sin hielo, lo que pondría en peligro la vida de todo el planeta, asegura Asun. Durante la iniciativa que afecta a la estación Shell, llegan personalidades de la televisión a entregar su apoyo.

Domingo 22

Un grupo de encapuchados dispara contra la vivienda de José Araneda Carrillo, ubicada en el sector Chiguayhue, en Ercilla, y luego incendian el lugar. El gobernador de Malleco, Erich Bauman, informa que Araneda fue intimidado y obligado a salir de la propiedad, que es rociada con acelerante y luego incendiada. Por ser de material ligero queda destruida por completo. Los últimos ataques ocurridos en la zona de conflicto mapuche han gatillado la convocatoria a una cumbre de seguridad que se realizará en La Moneda. Paralelamente, mientras unas 60 personas asisten a un culto religioso donde se encuentran algunos dueños de camiones, encapuchados encienden fuego a los vehículos. Los asistentes intentan salir y apagar las llamas, pero los disparos de los atacantes los atemorizan. Carabineros tarda en llegar al lugar, ya que en el camino son atacados con disparos.

Lunes 23

Hasta La Moneda arriban unos treinta agricultores de la zona de Malleco junto al alcalde de la comuna de Ercilla, José Vilugrón, quienes exigen ser recibidos por el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, esto último para entregar antecedentes en torno a los últimos ataques incendiarios realizados por encapuchados, que han afectado a fundos y camiones forestales. Uno de los representantes de los agricultores, José Ovalle, hace un llamado a los propietarios de terrenos a armarse y defender sus tierras. “Voy a seguir insistiendo que sigan comprando armas y apenas entren los delincuentes, que le coloquen los balazos y tiene que aplicarse la ley de legítima defensa”, agrega. Por otro lado, el alcalde Vilugrón exige al gobierno que se les pague una indemnización a las víctimas de los ataques incendiarios, asegurando que “hay mucho miedo” entre los vecinos ante los hechos de violencia.

La comunidad mapuche Ignacio Queipul, de Temucuicui, reinicia la recuperación productiva de los fundos Monte Negro y La Romana, propiedad de René Urban. Inician un trabajo productivo ingresando a los predios de modo totalmente pacífico. En un nuevo plazo que se autoimpuso el gobierno, se indicó que en marzo de este año se devolverían estos predios a sus dueños mapuche, pero sin embargo “ello no está pasando de ser un nuevo volador de luces, y por eso reiniciamos el trabajo productivo que hace años intentamos al interior de nuestro territorio ancestral y de modo totalmente pacífico,” indica el werken de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone Queipul. Al lugar llega Carabineros y desaloja a los comuneros de forma violenta. La Alianza Territorial

Mapuche señala en un comunicado que alrededor de 200 policías usaron gases lacrimógenos y dispararon a quemarropa a niños, bebés, mujeres y ancianos. Se registran doce detenidos, entre ellos tres menores de edad. Según relatan los apresados, sufrieron durante el trayecto todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros. Según el comunicado “producto de la violencia policial resultaron heridos el menor A.M., con herida de perdigones en una pierna, y un adulto no identificado con fractura en una mano y que se encontraba esposado”. Los comuneros acusan que la represión policial continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli. En la ocasión carabineros dispararon contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes hubieron concurrido a certificar las lesiones. Entre las víctimas de este episodio figuran la menor F.M., de 12 años, que recibió perdigones en la columna; F.L., de 16 años, herido en una pierna, y otra persona que recibió un impacto de perdigón en la sien.

Un nuevo ataque incendiario contra un agricultor de Ercilla engrosa la estadística de atentados en la zona. En esta ocasión la víctima es Dionisio Torres, cuya parcela, ubicada en el sector de San Ramón, comuna de Ercilla, es atacada por desconocidos. Su casa resulta destruida por un incendio. Carabineros logra llegar al lugar, pero los bomberos no logran trasladarse al sector al ser cortados los caminos con troncos. Cifras de la Multigremial de La Araucanía indican que desde enero a la fecha se han registrado 127 ataques contra forestales o agricultores.

Martes 24

Se cumplen 12 días de paro de actividades por parte de los trabajadores de la empresa de combustible Terpel, quienes todavía esperan una respuesta favorable en relación a sus demandas. Las exigencias de los trabajadores corresponden a elevar en un 5% el sueldo mínimo, un bono de conflicto de 300 mil pesos y un contrato colectivo con la empresa de 24 meses. Según explica el presidente del sindicato de trabajadores de la compañía, Luciano Pardo, después de la reunión que sostuvieron con el presidente de la empresa, Álvaro Restrepo, solo quedan con la sensación de que aún no los toman en cuenta, pues la respuesta que les dieron es la de que les presenten nuevamente su petitorio para analizar la situación. Las dependencias de Terpel en paro son cuatro: una en la comuna Santiago Centro, dos en Maipú y una en Huechuraba, además de lo que ocurre en la ciudad de Temuco, donde hay 120 trabajadores comprometidos con este paro.

Cinco encapuchados armados prenden fuego a tres vehículos forestales en el sector de Tranaquepe, comuna de Tirúa, VIII Región del Biobío. Minutos más tarde, y a unos metros del predio anterior, igual número de personas con el rostro cubierto y armados llegan al fundo Paillaco, de la forestal Volterra. Allí intimidan a un guardaparque e incendian un automóvil y la casa del trabajador. Unas horas más tarde, en el sector de Peleco, en las cercanías de Cañete, igual número de atacantes encapuchados también armados amenazan a dos guardias y queman un contenedor habilitado como oficina, una garita y un baño. En los tres lugares se encuentran mensajes –panfletos y lienzos– alusivos a la CAM.

Miércoles 25

Se realiza por parte de gendarmería un violento allanamiento en el módulo de los pesos políticos mapuche de la cárcel de Angol. En un comunicado indican: “Cabe señalar que estas acciones coinciden con la llamada «Cumbre de seguridad por el conflicto mapuche», convocada por el

ejecutivo, y encabezada por el presidente de la república y el ministro del interior, antesala de las medidas acordadas en tal encuentro que apuntan a continuar con la militarización, la represión y la persecución política en contra de comunidades mapuche en procesos de recuperación. En este escenario, al contexto actual de lucha y a los diversos escenarios jurídicos, políticos y represivos asumidos por las instituciones de gobierno, que han atentado al debido proceso y los derechos humanos fundamentales en desmedro del pueblo nación mapuche, existe la clara y fundada desconfianza ante esta situación, y los posibles montajes jurídicos, y las que vendrán, que seguirán siendo respuesta de una institución política y económica preocupada de perpetuar el modelo económico capitalista y resguardar sus intereses de inversión y usurpación, por tanto más represión y más cárcel. Pero a pesar de esto, como mapuche conscientes del camino hacia nuestra liberación, seguiremos dando cara a las políticas de persecución y violencias de los gobiernos de turno. Hacemos un llamado a solidarizar, difundir y denunciar estos graves hechos, ya que lo entendemos como una nueva etapa de recrudecimiento de la política del Terrorismo de Estado, dando continuidad al amedrentamiento, hostigamiento y persecución política, en contra de *pu cona ka pu weichafe* consecuentes que hoy se encuentran en la cárcel”.

En Santiago, vecinos y apoderados de la escuela especial Edmundo de Amicis, ubicada en las calles Edmundo Escala con Libertad, del Barrio Yungay, realizan una toma en el sector, porque comienza la demolición del establecimiento para la futura construcción de un consultorio. Un total de 170 alumnos formaban parte del centro educacional y el problema es que no todos los niños, con capacidades diferenciadas, tienen los recursos para estudiar en otros colegios. Esto último ha concluido en que muchos tengan que permanecer en casa junto a sus padres, sin poder estudiar. El ex presidente del centro de padres, Eduardo Arias, dice que “aquí no solo se está demoliendo un colegio, sino también un centro arquitectónico del barrio Yungay. Además, ha culminado con un lamentable éxito una operación de segregación contra los niños con necesidades educativas especiales”. Según Arias, el alcalde Pablo Zalaquett dijo que todos los niños podían matricularse en la escuela Juan Sandoval. Sin embargo, lo que molesta a los padres es que el proyecto educativo que se les había prometido se destruyó totalmente. Si bien esta situación es irreversible, los apoderados han creado una cruzada que pone de relieve la necesidad para que se preserven los espacios para acoger a niños con necesidades educativas especiales, ya que no existen lugares en los cuales ellos sean acogidos.

Carabineros realiza nuevamente un allanamiento en la comunidad mapuche de Temucuicui en Ercilla. Usando carros lanza gases, balines de goma y bombas lacrimógenas la policía ingresa a los predios de los comuneros que desde hace unos días mantienen la toma del fundo La Romana en reclamo a sus derechos territoriales. “En estos momentos tres zorrillos y una micro con contingente armado se encuentran disparando todo tipo de proyectiles al interior de la comunidad Ignacio Queipul. Hay gritos y confusión de niños y mujeres [...] la situación es sofocante, con unas veinte bombas de gas y los disparos”, acusa un comunicado de la Alianza Territorial Mapuche. La acción es la primera andanada policial tras el anuncio del gobierno de aumentar la dotación carabinera en la zona de disputa entre comuneros mapuches que reclaman sus derechos sobre tierras que pertenecieron a sus antepasados y que hoy están en manos de latifundistas. La Comunidad Autónoma de Temucuicui, de Ercilla, reclama unas 600 hectáreas que hoy están en poder de las familias Seinz, Valenzuela, Urban y Martin Ruff y de la empresa Bosques Arauco. El uso forestal de dichos predios ha empobrecido la calidad de sus suelos y secado las vertientes que riegan los cultivos agrícolas. El lonco Mijael Carbone indica que “no nos movemos de él hasta que estas tierras sean devueltas a la comunidad. Las reclamamos incluso por derecho histórico de manera pacífica”.

Jueves 26

Nueve miembros de la Andha «Chile a Luchar» suben a los andamios instalados en el *frontis* del Ministerio de Obras Públicas, a un costado del palacio de La Moneda, en demanda de la condonación de sus deudas habitacionales. Los activistas señalan que la manifestación busca llamar la atención de las autoridades para que den cumplimiento a los compromisos tendientes a lograr una solución al tema que les aqueja. Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros llegan al lugar y piden a las ocho mujeres y a un hombre que bajen de los andamios para evitar un accidente. Sin embargo, los miembros de la Andha despliegan carteles, los cuales exhiben desde el piso 7 de la estructura. Recordemos que tras haber recibido viviendas básicas las deudas fueron traspasadas al sistema financiero privado, provocando que el monto de ellas se incrementara excesivamente.

Una treintena de personas de la Alianza Territorial Mapuche protesta de forma pacífica en las afueras de la sede de la Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Santiago, solicitando que se realice una conferencia de prensa para denunciar la violencia de la que han sido víctima los niños y niñas de las distintas comunidades en los allanamientos policiales. Según informa la UNICEF, esta comunidad está invitada a una reunión en las dependencias de este organismo, que ha manifestado públicamente su «enérgico rechazo y condena» a los actos de violencia que involucran a niños mapuche. Al realizarse la reunión deciden tomarse la sede al ver que su visión es demasiada pasiva y contemplativa. Meulen Huenchu, una de las mujeres que realizan esta protesta, les informa acerca «de la brutal violencia» ejercida a las comunidades y a los niños, y les señala que «este organismo debería ser más duro con sus declaraciones, porque el Estado chileno está siendo demasiado duro con nuestra gente y nuestros niños». Afirma que esta protesta se originó luego de que carabineros hubiera reprimido brutalmente a las comunidades que ejercían una ocupación productiva de un territorio que reclaman en la comuna de Ercilla. En esa ocasión fueron detenidos y heridos varios comuneros mapuche. Luego, en el hospital, carabineros siguió golpeando a las indígenas y disparó perdigones a varios niños que ahora se encuentran heridos en recintos hospitalarios o fueron derivados a sus casas. El UNICEF informa que no procederá a desalojar a las mujeres del lugar, pero manifiesta su rechazo a la ocupación «ya que ésta constituye una forma de presión que no compartimos y nos obliga a suspender nuestro trabajo habitual en defensa de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de Chile, incluidos los pertenecientes al pueblo mapuche», enfatiza el organismo internacional.

Domingo 29

Por medio de un comunicado el presidente del Sindicato de Trabajadores Terpel, Luciano Pardo, informa que el paro que se extendió por 20 días en cuatro sucursales de Santiago y una en Temuco finaliza a causa de una constante presión y amenazas aplicadas por parte de la compañía. En esta línea, el dirigente sostiene que uno de los gerentes de Terpel, Vicente Pino, logró firmar con los trabajadores un contrato colectivo, el que a juicio de Pardo no tiene ningún tipo de beneficio y además una extensión de cuatro años. El presidente del sindicato emplaza al Ministerio del Trabajo a preocuparse por las condiciones laborales de los obreros de este rubro, ya que hasta el momento nadie del gobierno se acercó a ellos durante las movilizaciones. Las protestas tenían como fin lograr un aumento en un 5% sobre el sueldo mínimo, equivalente a 10 mil pesos, más un bono por término de conflicto de 300 mil pesos chilenos, entre otras demandas que no fueron entregadas a los más de 170 trabajadores de Terpel.

Integrantes de la comunidad Mateo Ñirripil Autónoma, de la comuna de Lautaro, se toman el fundo Los Pilos de Muko, el cual reclaman como territorio ancestral mapuche. Según el vocero Rodrigo Millán, la ocupación se mantendrá indefinidamente, sin que hasta ahora se hayan hecho presentes carabineros para desalojar el lugar. El predio de 140 hectáreas es propiedad del empresario Pablo Guedel y se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad de Lautaro.

Lunes 30

Tras cuatro días de ocupación pacífica que mantienen las comuneras mapuche en la sede del UNICEF en Santiago, se realiza una reunión con el máximo representante del organismo en Chile, Tom Olsen, con el fin de “denunciar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado hacia su pueblo”. Tras la reunión, las mujeres, que son encabezadas por la *werkén* de la Alianza Territorial Mapuche Mewlen Huencho, indican que Olsen les plantea que está de manos atadas, ya que él no puede gestionar ninguna petición debido a la ocupación del organismo. En tanto, la propuesta del UNICEF es hacer un nuevo informe sobre las violaciones de los derechos de los niños mapuche. La *werkén* Meulen Huencho señala que “es por eso que nos hemos dado cuenta de que este organismo ve pasivamente la violencia hacia nuestros niños”. “No desistiremos de la ocupación hasta que la UNICEF cumpla realmente su rol de proteger los derechos de nuestros niños”, agrega. Finalmente, la mujer hace un llamado a “todos los movimientos sociales, políticos y culturales, de igual forma a la Iglesia, a pronunciarse sobre la responsabilidad que les cabe a Naciones Unidad en promover y defender los derechos humanos y por la responsabilidad que recae en el Estado chileno por militarizar la zona de conflicto”.

Martes 31

Un llamado a rechazar el Proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público hacen los organismos ciudadanos internacionales. Organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace piden sensatez a los parlamentarios que este miércoles votarán la denominada Ley Hinzpeter en el congreso. Llaman además a que la ciudadanía participe en la recolección de firmas en contra de la iniciativa legal, que busca mayores recursos y atribuciones para perseguir y penalizar con mayores cargos a las manifestaciones de carácter violento. El director nacional de Greenpeace, Matías Asun, afirma que “es una equivocación incorporar reformas legales que no discriminan entre el legítimo derecho a la libre expresión, la violencia y el delito”. El proyecto elaborado por el Ministerio del Interior no cuenta con los votos de la oposición y en RN condicionaron su apoyo a ciertas modificaciones.

En Santiago, con un 70% de apoyo, los estudiantes del Liceo “Confederación Suiza” votan la toma del establecimiento en protesta por la posible aprobación de la llamada “Ley Hinzpeter”, o de resguardo del orden público, que ingresa este miércoles nuevamente a discusión en el parlamento. Los estudiantes señalan que esta normativa “busca criminalizar las manifestaciones sociales que arremeten contra el orden económico y político establecido”. El vocero de los estudiantes, Sergio Urzúa, señala que quieren “volver a lo que éramos el año pasado para tomar nuevas decisiones”. Precisa, además, que con esta medida pretenden lograr cambios en el recinto como la llegada de nuevos profesores y la reparación del mobiliario que se mantiene en mal estado desde el año pasado. Se registra que son alrededor de 250 los estudiantes que se suman a la medida, haciendo un llamado a incrementar la fuerza del movimiento sumando a otros sectores y participando de la

marcha programada para el próximo miércoles 8 de agosto. Agregan que “a las problemáticas ya todos las conocen: educación, salud, vivienda, transporte, trabajo, abuso del Estado contra los pueblos originarios, entre muchas otras”.

Las comunidades mapuche lafkenche que habitan la zona limítrofe entre las comunas de Carahue y Tirúa, y que son parte de las organizaciones Pu Lafkenche y Newen Pu Lafkenche, comunican que han tomado la decisión de continuar el proceso de recuperación del Fundo “La Suerte”, ocupado por Forestal Mininco, en el límite de las comunas de Carahue y Tirúa. Señalan: “Reivindicamos este predio de 2 mil hectáreas para 80 de nuestras familias, avalados por documentos que desde 1880 establecen que estos terrenos indígenas no podrán ser comprados ni enajenados por algún particular. Sin embargo, estos desde las últimas décadas pasaron a manos de Forestal Mininco, siendo nuestras comunidades marginadas de ancestrales actividades productivas y religiosas”. Agregan: “Tal como lo hemos venido realizando, mantendremos la ocupación de este predio hasta que nuestro legítimo reclamo consiga una respuesta concreta por parte de las autoridades correspondientes”.

Glosario de siglas

ACES	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
Andha	Asociación Nacional de Deudores Habitacionales
CAM	Coordinadora Arauco Malleco
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre de Chile
CONFECHE	Confederación de Estudiantes de Chile
CONFUSAM	Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada
COREPA	Consejo Regional de Pescadores Artesanales
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FECh	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
OCAS	Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca
RN	Renovación Nacional

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización a cargo de Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS)

Fuentes principales: Diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo y Punto Final; fuentes electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, Fortín Mapocho, Mapuexpress y Radio Cooperativa.

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

Chile

Agosto de 2012

Editada en noviembre de 2012



Agencia Sueca
de Desarrollo Internacional



Agencia Noruega para la
Cooperación al Desarrollo



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració
Direcció General de Cooperació

El Observatorio Social de América Latina [OSAL] cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional [ASDI], la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo [NORAD] y la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares [ACIB].

Documento de trabajo N° 120

*Realizado por el Comité de Seguimiento y Análisis
del Conflicto Social y la Coyuntura de
Chile*



Integrantes

Carlos Gómez Leyton
Rocío Silva Suárez

Fuentes

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera. Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo y Punto Final; páginas electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, emol.com, Fortín Mapocho, La Opinión, Mapuexpress, olca.cl, Radio Cooperativa, radiodelmar.cl, radio.uchile.cl y terra.cl.

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en el documento incumbe exclusivamente al autor o a los autores firmantes y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina** (OSAL) constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinada a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de los movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado es uno de los resultados de este trabajo de relevo y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un escrito en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social y las medidas políticas llevadas a cabo durante el mes indicado en el país referido.

La cronología presentada ha sido elaborada por uno de los **Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación del equipo de investigación mexicano, que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana

PAÍS	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	Maria Celia Cotarelo
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Brasil	LPP - UERJ	Roberto Leher
Chile	DI - UARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Montoya
Costa Rica	IIS - FCS - UCR	Sindy Mora Solano
Ecuador	Centro de Investigaciones CIUDAD	Mario Unda
Guatemala	FLACSO Guatemala	Simona Yagenova
México	FCPS - UNAM	Massimo Modonesi Lucio Fernando Oliver Costilla
Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras	CELA "Justo Arosemena" (Panamá)	Marco A. Gandásegui (h)
Paraguay	Centro de Documentación y Estudios	Quintín Riquelme
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo Teves
República Dominicana y Puerto Rico	CES "Padre Juan Montalvo" (Rep. Dominicana)	Octavio Figueroa
Venezuela	PROVEA	Marco Antonio Ponce

Chile

Cronología del conflicto social

Agosto de 2012

Miércoles 1

A casi 24 horas de iniciarse la toma del Liceo Industrial de San Fernando, el presidente del centro de alumnos, Guillermo Horta, es apuñalado en la zona glútea, lo que lo mantiene grave, pero estable, en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital de Rancagua. Esto fue a causa de que un grupo de desconocidos comenzó a apedrear el liceo, lo cual provocó que varios estudiantes salieran a calmar a los agresores. Los estudiantes detuvieron a dos menores, pero apareció otro grupo que golpeó y apuñaló a Horta. Así lo informa el comisario de Carabineros de San Fernando, mayor Nelson Vilches.

Con cinco detenidos termina el desalojo del Seminario Mayor “San Fidel”, perteneciente a la Iglesia católica. Es ejecutado por carabineros luego de que poco más de 20 miembros de agrupaciones mapuches irrumpieran en el centro de estudios y obligaran a los seminaristas a abandonar el edificio. Luego cerraron la reja con un candado. Los manifestantes reclamaban la “propiedad ancestral” del terreno y de otros que pertenecen al Obispado de Villarrica, además del fundo particular Santa Lucía, todos ubicados en el sector Licanco de la comunidad de Padre Las Casas, IX Región de la Araucanía. El obispo de Temuco, monseñor Manuel Camilo Vial, condena el hecho, indicando que es una iniciativa violenta.

Viernes 3

Ocho días cumple la toma de mujeres mapuche en la sede chilena del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Santiago. El UNICEF aclara que las tres mujeres mapuche pertenecientes a la Alianza Territorial Mapuche disponen de todos los elementos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En una reunión sostenida entre las mujeres y la UNICEF, ellas reiteran al organismo internacional que la única condición para terminar con la ocupación y abandonar el lugar es que el UNICEF y el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos soliciten al Ministerio del Interior el retiro de las fuerzas policiales de las comunidades mapuche de la región de La Araucanía.

Sábado 4

Por más de una hora se ha extendido el “cacerolazo” que ha congregado a cerca de 250 personas en la Plaza Italia de Santiago. La actividad se desarrolla sin incidentes y entre los asistentes se encuentran adultos, jóvenes y niños que han llegado hasta el lugar para manifestar su descontento hacia el gobierno por su manejo en materia educacional. Carabineros resguarda que las personas se mantengan en la vereda para no interrumpir el tránsito en la calzada sur de la Alameda.

Lunes 6

Denunciando la nula vocación de diálogo del gobierno, los miembros del directorio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) encabezados por su presidente, Raúl de la Puente, se toman las dependencias del Ministerio de Hacienda. “El gobierno no tiene vocación de negociación ni de diálogo. Ve a la ANEF como una piedra en el zapato”, señala De la Puente. El dirigente indica que decidieron realizar esta acción de fuerza al no recibir respuesta alguna de las autoridades respecto a su propuesta sobre el incentivo al retiro de 6 mil trabajadores públicos que no pueden jubilarse. “Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta a pesar de que enviamos una carta reiterando nuestra molestia”, explica el presidente de la ANEF. Raúl de la Puente dice que “nos hemos encontrado con la negativa de los negociadores de la Dirección de Presupuestos, quienes dijeron que no iban a recibir a la ANEF. Igualmente el dirigente sindical asegura que “es un gallito innecesario que hacen con los trabajadores. Las cosas se hacen dialogando, conversando, convenciendo. Ellos no tienen esa voluntad. Tienen una voluntad de imponer más que de convencer y de dialogar”.

En Santiago la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) hacen un llamado a radicalizar el movimiento estudiantil para el segundo semestre. Los líderes llaman a todos los colegios y universidades a ser partícipes de la marcha de este miércoles, la que aún no tiene un trazado definido en la capital. Asimismo, animan a los secundarios a tomarse sus establecimientos y sumarse a los colegios ya ocupados por sus alumnos, como el Darío Salas, el Confederación Suiza, el Betsabé Hormazábal, el Cervantes y el Industrial de San Fernando. En esa línea, el presidente del Centro de Estudiantes del Liceo A-111 de La Cisterna, Gonzalo Rojas, explica que decidieron tomarse su municipalidad porque no han recibido respuesta ante el petitorio emanado en junio de 2011.

Martes 7

Carabineros, en una nueva señal de hostigamiento, detiene a un grupo de comuneros, entre ellos al *peñi* –hermano– Pascual Pichún Collonao, hijo del *lonko* –máxima autoridad– de Temulemu, Pascual Pichún Paillalao. La detención se produce cuando los *peñis* acompañaban a periodistas del canal internacional *Al Jazeera*, luego de que este realizara un trabajo audiovisual acerca del conflicto que mantienen las comunidades en resistencia del Pilmaiquenn, VIII Región del Biobio, contra los proyectos hidroeléctricos que intentan invadir la zona, en especial la empresa Pilmaiquen S.A. con su proyecto de central hidroeléctrica Rutacayo. La zona, al igual que otras, se encuentra con protección de carabineros, luego de que las comunidades decidieran iniciar la recuperación y defensa del espacio sagrado mapuche-williche *Ngen Mapu Kintuante*, y la del río Pilmaiquen. Es en este contexto que la policía, al ver gente en el lugar, les practica un control de identidad, quedando solo el *peñi* Pichún detenido. La explicación de su detención se debería a las cinco órdenes de aprehensión pendientes en Traiguén, por lo que es trasladado hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en La Unión, donde le verifican sus antecedentes penales. Al finalizar la tarde el *peñi* queda en libertad sin mayores lesiones.

Unos 100 dirigentes integran la delegación mapuche-lafkenche que llega al congreso para reunirse con el presidente del senado, Camilo Escalona, en el contexto del proyecto de la nueva Ley de Pesca. Este encuentro viene a concretarse luego de que la semana pasada una comisión de la organización Identidad Territorial Lafkenche (ITL) se presentara en el senado logrando el

compromiso de las autoridades para conocer y analizar la situación de los pueblos originarios en la nueva legislación. Vale recordar que en los meses pasados la ITL ha acudido a diversas instancias del Estado para lograr la inclusión de los pueblos originarios en el proyecto de Ley de Pesca, que son respaldados por la aplicación vigente de instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resultando infructuosas estas acciones, principalmente por el silencio e indiferencia del gobierno y de la cámara de diputados. En un ambiente de cordialidad y respeto, el senador Escalona dialoga largamente con los dirigentes, quienes exponen su preocupación por que el proyecto de ley hasta el momento no incluye a los pueblos indígenas que viven en el borde costero del país. El senador Escalona afirma que “la inclusión de los pueblos indígenas en la Ley de Pesca es un desafío institucional decisivo para Chile”. “Espero que, en el caso del senado, la autoridad nos permita tener el tiempo necesario para que todas las opiniones sean escuchadas y para que se incluyan en el trámite los derechos de todos los actores que tienen que estar presentes en la aprobación del proyecto, incluidos los pueblos originarios”, declara. En tanto, Adolfo Millabur, máximo representante de la ITL, a nombre de los dirigentes mapuches asistentes a la reunión valora positivamente la recepción otorgada por el presidente del recinto a sus planteamientos, indicando que “es importante mencionar que venimos a plantear al senado que se declare inconstitucional la discusión de la ley de pesca, porque los pueblos originarios no han sido consultados, lo que es un derecho que tienen garantizado en un tratado internacional que el propio senado lo ratificó”. “Si un mapuche viola ley, se le aplica la ley antiterrorista. Pero, en este caso, uno de los poderes del Estado no puede violar de manera colectiva un derecho básico de un pueblo. Desde esa lógica, lo más razonable es que el senado tenga que detener la discusión, tenga que hacer la consulta y, enseguida, poder seguir discutiendo la Ley de Pesca, incluyendo, naturalmente, a los pueblos originarios. De lo contrario, estaríamos entrando en una grave falta del Estado chileno, lo que nos llevaría a poner la situación nuestra ante los tribunales internacionales”, plantea.

Interponen un recurso de amparo en favor de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol por allanamiento y posible montaje. El recurso es presentado por la Defensoría Penal Mapuche, la cual solicita una audiencia donde Gendarmería entregue los antecedentes sobre el hallazgo de un croquis y un mapa con diferentes puntos marcados de la VIII Región del Biobío en el módulo de la Cárcel de Angol, donde permanecen recluidos los mapuches. El 23 de julio y en el marco de la Cumbre de Seguridad, el modulo de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol fue allanado por un equipo especial de gendarmería. De acuerdo a lo informado en el momento, no se había encontrado nada. Sin embargo, como ya es costumbre, desde el diario *El Mercurio* se comenzó a gestar el montaje, señalando que se habría encontrado un croquis y un mapa de la ruta de la industria maderera.

Un grupo de 35 estudiantes secundarios organizados en la ACES intenta ingresar a la sede gremialista de la Unión Democrática Independiente (UDI) ubicada en la comuna de Providencia, región Metropolitana. Sin embargo, al interior ya habían sido alertados de la acción y solicitan la presencia de carabineros. Efectivos policiales toman detenidos a cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer. Según la vecera de la ACES, Eloísa González, “mañana puede ser el PS [Partido Socialista] e incluso el PC [Partido Comunista], ya que ellos también son responsables de la institucionalidad política que hoy tiene en crisis la educación”. A su vez, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, indica que esto es la antesala a la marcha anunciada para este miércoles 8 y responsabiliza al ministro de Educación, Harald Beyer, de las actitudes violentas.

Tras permanecer tomado por cerca de ocho horas, carabineros desaloja a los alumnos del Liceo Arturo Alessandri, ubicado en Providencia. Al respecto el vocero de los estudiantes, Moisés Parada, comenta que la policía uniformada ingresa con violencia al establecimiento y que luego, sin presentar la orden de desalojo, los obligaron a salir indicándoles que tenían permiso del alcalde Cristián Labbé. Al cabo de unos minutos, carabineros toma detenidos a cerca de veinte estudiantes, quienes son trasladados hasta la 19º Comisaría de Providencia situada en Miguel Claro. Cabe indicar, que el Liceo Arturo Alessandri se había sumado a las tomas, luego de una votación democrática en la que el 62,9% de la comunidad escolar optó por la medida.

Miércoles 8

Estudiantes secundarios y universitarios protagonizan una nueva marcha por las calles de la capital en el marco del llamado a radicalizar el movimiento durante este segundo semestre. Los jóvenes agrupados en la ACES, a los cuales se suman federaciones de alumnos universitarios, inician la caminata desde la Plaza Italia, pese a no contar con la autorización de la Intendencia Metropolitana. La movilización tiene la intención de avanzar por la Alameda hasta Los Héroes, pero el gobierno regional no autorizó este trayecto debido a los incidentes que se registraron en la última manifestación masiva por esa avenida, el 28 de junio pasado. La intendencia les propuso realizar la marcha por avenida Grecia o concentrarse en el Parque O'Higgins, lo que no fue aceptado por los secundarios. Debido a la no existencia de acuerdo, un nutrido contingente de fuerzas especiales de carabineros evita el avance de la columna, generándose los incidentes en el cruce de la calle Providencia con Vicuña Mackenna, y extendiéndose a la Alameda y a otros puntos del centro de Santiago. Un importante número de jóvenes es detenido y se registran personas heridas por el accionar de los carabineros, quienes con efectivos montados a caballo, carros lanza aguas y bombas lacrimógenas hacen frente a las pedradas y al destrozo de mobiliario público y privado que es utilizado para barricadas. Luego de no poder concretar la manifestación, los dirigentes secundarios llaman a reagruparse en distintos puntos de la Alameda y marchar por calles aledañas hasta el sector Los Héroes. En tanto, siguen los enfrentamientos y tres buses del Transantiago son incendiados en medio de los disturbios. Al finalizar la jornada, a la Plaza Italia llegan alrededor de cien personas para realizar un cacerolazo. La convocatoria es realizada por la ACES. Se registra además que alrededor de 40 secundarios y universitarios intentaron tomarse las dependencias del canal *Chilevisión*, ubicado en Inés Mate Urrejola, con el fin de interrumpir las transmisiones de la señal, ya que pretenden ingresar a la sala de prensa para que sean escuchadas sus demandas.

Jueves 9

A quince días de la toma de la sede del UNICEF en Santiago por parte de mujeres mapuche y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Alianza Territorial Mapuche hace un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a establecer una mesa de trabajo para resolver la situación de violencia hacia la infancia mapuche. “La brutalidad de la acción de la policía militar contra nuestros hijos, en nuestros territorios, motivó un actuar urgente y que diera cuenta de la gravedad de los hechos, por lo que decidimos ocupar pacíficamente las dependencias de UNICEF Chile. Sin duda dicha acción fue motivada por la extrema violencia en que ha concurrido el Estado chileno. Sabemos que esta situación es conocida por la comunidad internacional y tenemos la certeza de que las instituciones agrupadas en el sistema Naciones Unidas conocen la «violencia estructural» en la que vive nuestro pueblo, planteada en el estudio realizado

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es por esto que recurrimos, en esta situación apremiante, al papel interlocutor de ONU, frente a un Estado chileno que profundizaba su ensañamiento con nuestros hijos”, señala la organización mapuche en una carta enviada al Alto Comisionado de Naciones Unidas y a la CEPAL. Cabe consignar, indica el UNICEF, que actualmente se encuentran en la ocupación del organismo internacional Sandra del Rosario Meza Huencho y su hija Kimwn. Inicialmente formaron también parte de la ocupación María Isabel Paillán Huenchuqueo, quien abandonó la oficina del UNICEF la noche del lunes 6 de agosto, Fanny Meza Huencho, quien dejó el lugar el viernes 3 de agosto, Marino del Canto, observador de derechos humanos, y Gloria Pulquillanca, quienes abandonaron la ocupación el sábado 28 de julio y el viernes 27 de julio, respectivamente.

Un grupo cercano a los cien alumnos del Liceo “Manuel Barros Borgoño”, ubicado en Santiago, llega hasta las dependencias del establecimiento para iniciar una toma pacífica del lugar, respondiendo de esta forma al llamado de los dirigentes estudiantiles a expresar su descontento con lo que califica de nula respuesta por parte del gobierno a sus demandas. Javier Delgado, alumno del cuarto año, sostiene que la movilización es para apoyar las demandas sociales que plantea el movimiento estudiantil, y asimismo para expresar su rechazo a lo que consideran la criminalización del movimiento por medio de la denominada Ley Hinzpeter, “que nos trata a todos como delincuentes”. También explica que por medio de una votación democrática, “a diferencia del gobierno”, consideraron a la mayoría y optaron por iniciar la medida. Si bien no tienen plazo para abandonar el recinto, aseguran que cada semana analizarán la situación por medio de votaciones con sus compañeros.

Una media agua que ha sido construida por miembros de la comunidad mapuche tradicional de Temucuicui al interior del fundo La Romana, propiedad del agricultor René Urban, es desmantelada por Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes ingresan al predio. El fundo La Romana, ubicado en Ercilla, IX Región de la Araucanía, se encuentra tomado desde hace diez días por dicha comunidad, quienes además de levantar la vivienda ingresaron animales y trabajaron la tierra. Tanto La Romana como Montenegro, también de Urban, son reclamados por la comunidad, cuyas extensiones superan las 2 mil hectáreas. La mediagua desmantelada era ocupada por las personas que mantenían activa la toma. Según carabineros, no hay enfrentamientos ni detenidos por este hecho.

Viernes 10

Las fuerzas especiales de carabineros proceden al desalojo del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) de Santiago luego de haber sido tomado por una treintena de estudiantes. La medida de presión fue hecha por los alumnos en el marco de un nuevo proceso de ocupación de establecimientos a que ha convocado el movimiento estudiantil y que ha tenido eco en distintos liceos de la capital. La dirección del INSUCO N° 2 solicita el desalojo del recinto, argumentando que los manifestantes tomaron la decisión sin mayor consulta entre el alumnado y sin llegar a un acuerdo al intentar dialogar con los movilizados. Los efectivos policiales llegan hasta el establecimiento de avenida España, y tras no lograr un trato con los estudiantes proceden a sacarlos por medio de gases lacrimógenos, a lo que respondieron con piedras, pintura y huevos. Los jóvenes huyen y se refugian en el Liceo “Darío Salas”, ubicado enfrente, que también permanece en toma, sin que se registren detenidos. Posteriormente se registra que un piquete de fuerzas especiales quedó apostado en el exterior del INSUCO, resguardando el lugar.

Un grupo de alumnos del Liceo “Arturo Alessandri Palma”, de Providencia, marcha a la municipalidad para solicitar al alcalde, Cristian Labbé, que impida una nueva ocupación del establecimiento. El edil asegura que van “a cumplir el derecho constitucional de garantizar la educación. Estos niños van a tener educación sí o sí en Providencia”. En el Liceo “Lastarria”, la mayoría opta por mantener las clases.

Sábado 11

La CONFECH se reúne en la comunidad *Wente Winkul Mapu*, en la localidad de Ercilla, reitera su disposición al diálogo y llama a recuperar el “carácter ciudadano” del movimiento estudiantil. El encuentro es organizado por la Federación Mapuche de Estudiantes (FAMAE) con el fin de expresar el respaldo de los estudiantes al pueblo mapuche y en particular a las comunidades de la zona donde se registraron violentos incidentes con carabineros en las últimas semanas. Luego de una ceremonia tradicional, los representantes estudiantiles inician la evaluación de la frustrada marcha del pasado 8 de agosto y delinean los próximos pasos de las organizaciones universitarias. El presidente de la FECH, Gabriel Boric, sostiene que para el movimiento “es fundamental recuperar su amplitud, su alegría y el carácter ciudadano. Nuestras formas de movilizarnos tienen que mostrar ese espíritu”. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Noam Titelman, considera que es “necesario volver a la amplitud del movimiento social por la educación” para “no poner en riesgo” el respaldo ciudadano. En ese sentido, indica que los estudiantes deben utilizar “todos los medios de movilización que permitan recuperar los principios básicos que sustentan nuestro movimiento, como la no violencia, la creatividad y el apoyo de la familia”. Por otra parte, Gabriel Boric enfatiza que “nosotros estamos por el diálogo, pero nos tienen que asegurar que vamos a llegar a alguna parte”. En esa línea, cuestiona a la oposición parlamentaria por llegar a acuerdo con los estudiantes y luego no ser “capaz de cumplirlos”. “Se comprometieron a apoyar los temas que hemos planteado. Sin embargo, cuando había que rechazar el informe del lucro, sencillamente no fueron capaces de ordenar sus filas”, recalca.

Alrededor de siete liceos ya han sido tomados por los estudiantes en la región Metropolitana: el Barros Borgoño, el Darío Salas, las sedes de Santiago y La Reina del Confederación Suiza, el Abdón Cifuentes, el Cervantes y el Arturo Alessandri Palma. En ese escenario, la ACES realiza una nueva reunión en el Colegio Latinoamericano de Integración para definir los pasos a seguir en las próximas movilizaciones. Las tomas de los liceos y los serios incidentes en la marcha del pasado 8 de agosto forman parte de la discusión, en la que participan dirigentes estudiantiles de diez regiones del país. La vocera de la ACES, Eloisa González, señala que la primera resolución fundamental a la que llegaron es el rechazo a la reforma tributaria que impulsa el gobierno, argumentando que aquello sepultaría a la educación chilena. Además, hace un llamado a mantener las tomas y a un paro nacional para el próximo 23 de agosto. En tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), Christopher Saravia, responde a las palabras del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien aseguró que tienen hasta el próximo martes para desalojar los cuatro establecimientos de la comuna que están en toma. Saravia descarta desalojar los liceos y señala que el llamado a paro nacional para el próximo jueves 23 de agosto se enmarca en lo que los propios estudiantes han catalogado como un mes de movilizaciones, que contempla jornadas reflexivas, paros y tomas de establecimientos mientras el gobierno guarde silencio ante sus peticiones.

Cerca de quince activistas de la agrupación Elige Veganismo permanecerán encerrados durante 12 horas en la Plaza de Armas, emulando así la situación de los terneros en la industria láctea. En cajones individuales y con muy poco espacio, los activistas pretenden “ponerse en el lugar” de los animales que son explotados, durante esta jornada, esto para realizar un llamado a la sociedad para que las personas tengan en cuenta la vida y sufrimiento del resto de las especies. “Luego de habernos adentrado en el padecimiento de las vacas y sus hijos, queremos enseñar durante una jornada como es el día a día, durante meses, de todos los terneros”, tal como indica el conjunto a través de un comunicado. La idea del acto es llamar a empatizar con los animales y considerar lo que es la privación de libertad, así como el estrés que puedan sentir otros seres vivos que están cautivos.

Domingo 12

En conmemoración del tercer aniversario de la muerte de Jaime Mendoza Collío, integrantes de su comunidad, la Requem Pillán, ingresan al fundo San Sebastián en las cercanías de Collipulli, IX Región de la Araucanía, para hacer una rogativa de recuerdo y para reclamar por los incumplimientos de la autoridad para comprar dicho predio. Recordemos que Mendoza Collío fue muerto a manos de un efectivo de las fuerzas especiales de carabineros, en medio de una acción reivindicativa. Según Aliwén Mendoza Collío, hermano del comunero asesinado y *werkén* –mensajero– de la comunidad, la idea no es solo recordar a Jaime sino presionar al gobierno para hacer efectiva la compra del terreno. Manifiesta la intención de mantenerse en el lugar “hasta lograr el objetivo que dejó nuestro hermano Jaime. Él tenía el anhelo de recuperar sus tierras ancestrales, junto a todos los *peñis* que estamos acá y junto a él vamos a dar la lucha de aquí en adelante”. La madre Rosa Collío señala entristecida que aún no existe justicia, ya que el funcionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Patricio Jara Muñoz, no recibió una condena efectiva y sigue en servicio activo.

Exigiendo principalmente sus demandas internas, los estudiantes deciden tomarse las dependencias del Internado Nacional “Barros Arana” (INBA) en la comuna de Santiago. El vicepresidente de los alumnos, Diego Mellado, señala que la medida de presión busca poner en discusión las problemáticas que viven al interior del establecimiento, además de sumarse a la movilización nacional por las reivindicaciones en educación pública y en rechazo a la denominada Ley Hinzpeter. Son cerca de 150 los jóvenes que protagonizan la ocupación, quienes piden la intervención de la Municipalidad de Santiago en la aplazada reconstrucción de las dependencias, de acuerdo a lo indicado por los dirigentes. Mellado advierte que de ser desalojados por carabineros volverán a tomarse el edificio, puesto que fue una decisión tomada en asamblea, asevera, agregando que el próximo viernes evaluarán la continuidad de la medida. El dirigente estudiantil indica que el llamado del alcalde Pablo Zalaquett a mantener tomas “reflexivas”, permitiendo clases a otros alumnos que no adhieren el movimiento, es una “actividad represiva y condicional” del jefe comunal. “Las jornadas de reflexión las tenemos que evaluar y no ser gestionadas desde un ente administrativo. Las gestionamos nosotros mismos y se hace dentro de un espacio ocupado, que es la toma”, afirma Diego Mellado. Los carabineros llegan al lugar para proceder a un desalojo pacífico de las dependencias. Así lo confirma el vicepresidente del Centro de Alumnos, Diego Mellado, quien señala que dejaron el establecimiento de manera pacífica luego de que fuesen “sitiados” por las fuerzas especiales. Los secundarios acusan presiones del alcalde Pablo Zalaquett, señalando que hubo ordenado el desalojo.

Lunes 13

La comunidad José Guiñon, del sector Chequenco, Ercilla, concurre masivamente a dejar una carta a La Moneda con la intención de dejar en claro al gobierno cual es su demanda, con sólidos argumentos históricos que evidencian el despojo de su territorio y el por qué es necesaria y justa su reivindicación. La delegación es conformada por las familias que componen este *lof*, en un número superior a las 30 personas. Freddy Marileo, *werken* de la delegación, reafirma que “somos hombres, mujeres y niños los que venimos a enrostrarle al Estado que no somos terroristas, y que nuestra demanda es justa, porque nuestra historia así lo indica, y necesaria para asegurar nuestro futuro”. Por parte de las autoridades, no hay ninguna disposición de recibirlas ni aun menos de escucharles, por lo que la comunidad convoca a todos quienes se solidarizan con la causa mapuche a acompañarlos a intentar nuevamente ser escuchados en el palacio de gobierno.

Cerca de 200 estudiantes del INBA vuelven a tomarse el establecimiento. Cabe destacar que esta es la segunda toma que realizan los estudiantes, quienes efectuaron la primera la tarde de este domingo y que culminó con la desocupación pacífica por parte de los alumnos. En este contexto, Diego Mellado, vicepresidente del Centro de Alumnos del INBA, explica que esta nueva toma representa “una medida radical que se toma como consecuencia de la inoperancia administrativa por parte de la municipalidad de Santiago, la falta de diálogo por parte de ellos mismos”. “Principalmente, queremos dar a conocer al público cuáles son nuestras principales problemáticas internas, que tienen que ver con la reconstrucción. A nosotros se nos ha pasado a llevar muchas veces con incumplimientos de plazos, pero ahora se nos acabó la paciencia”, agrega el dirigente. Para llegar a esta instancia, los estudiantes realizaron una “votación democrática”, en la que cerca del 55% aprobó la toma. Posteriormente los estudiantes desalojan pacíficamente el recinto y alrededor de 500 marchan por la calle Compañía, en dirección a la municipalidad de Santiago.

Carabineros desaloja el Instituto Nacional luego de que un grupo de alumnos ocupara sus dependencias. Un centenar de alumnos del establecimiento sale de forma pacífica cuando llega el personal policial, tras lo cual marchan por la calle Huérfanos hasta la avenida Brasil. En dicha intersección, un carro lanza agua dispersa a la multitud, terminando detenidos 32, entre ellos el vocero Álvaro Arancibia, quienes son trasladados hasta la Tercera Comisaría de Santiago. A su vez, alumnos del Liceo de Aplicación han vuelto a tomarse las dependencias del establecimiento durante la tarde, luego de que éste fuera desalojado al mediodía. El presidente del centro de alumnos, Felipe Villegas, declara que el desalojo fue bastante violento. En tanto, los estudiantes detenidos durante el incidente continúan en la 48^a Comisaría de Menores, en Santiago.

Martes 14

Un grupo de siete mujeres provenientes de Freire, región de la Araucanía, se encadenan durante 15 minutos a la puerta principal de la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), desplegando algunos lienzos alusivos a las demandas mapuche. La manifestación es protagonizada principalmente por mapuche del sector Trapilhue-Mahuidache, quienes solicitan la restitución de tierras y se oponen a la construcción del aeropuerto en el lugar, entre otras demandas.

Pese al llamado al diálogo que realizó el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, a reunirse este martes con los dirigentes del INBA, alrededor de cien alumnos nuevamente se toman el recinto. Lo

anterior, de acuerdo a los propios estudiantes, como una forma de presionar al municipio por los retrasos en la reconstrucción de varios establecimientos emblemáticos y, a su vez, para dar cuenta a las autoridades de las reales condiciones de la educación pública en Chile. Al respecto, Simón Gómez, presidente del Centro de Alumnos del INBA, indica que esa es una toma pacífica y que ellos no pretenden enfrentarse con carabineros. Incluso admiten que si la policía decide ingresar al recinto saldrían de forma pacífica nuevamente. Los dirigentes reiteran que la reunión de Zalaquett debe incluir propuestas concretas, de lo contrario las manifestaciones se prolongarían durante esta semana. Posteriormente, un grupo de 200 estudiantes abandonan las dependencias del recinto educacional para marchar por la Alameda. Al no ser autorizada la marcha por la intendencia, arriban efectivos de fuerzas especiales de carabineros, los cuales detienen a cuatro estudiantes.

Estudiantes representantes de los liceos Barros Borgoño, Aplicación, INBA, Darío Salas, Instituto Nacional, Confederación Suiza, Cervantes y Teresa Prats se reúnen con del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Los estudiantes secundarios rechazan la propuesta del alcalde, la cual consiste en que sigan las tomas pero con clases dentro del establecimiento. En tanto, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, anuncia que a partir de la noche del miércoles podría desalojarse a cuatro establecimientos que rechazaron la propuesta que les planteó. “No comparto el procedimiento que los estudiantes están llevando a cabo en cuanto a usar las tomas de los establecimientos escolares como la medida de presión para conseguir que el gobierno y el parlamento los escuchen. Hay otras formas más creativas y quizás más relevantes para este momento histórico, y que permitirían conciliar los intereses de los jóvenes con los intereses de una gran mayoría silenciosa que sí quiere estudiar en el colegios, en sus aulas, con su profesor”, dice Zalaquett. El jefe municipal indica que la toma de un colegio es ilegal, agregando que no se puede permitir que nuevamente cerca de un 40% de los alumnos repitan de curso, como ocurrió en 2011. Asimismo, sostiene que los universitarios se movilizan pero sin ocupar sus casas de estudio.

Miércoles 15

Con un menor detenido terminan los incidentes registrados en las inmediaciones del Liceo Darío Salas, en Santiago, donde los estudiantes, tras conocer la propuesta del alcalde Pablo Zalaquett, protagonizan desórdenes y enfrentan a los carabineros encapuchados. A su vez, las alumnas del Liceo Carmela Carvajal de Prat votan a favor de la toma indefinida del establecimiento, y realizarán una asamblea general para establecer cuánto es el tiempo en que se prolongará la movilización y la estructura que tendrá. Entre tanto, de acuerdo al último balance, se mantienen tomados los liceos Miguel de Cervantes, Darío Salas, Manuel Barros Borgoño, Confederación Suiza de Santiago, Confederación Suiza de La Reina, el de Aplicación y el Liceo 7 de Niñas de Santiago.

En una audiencia de menos de 7 minutos y con un procedimiento del GOPE y Gendarmería, por un aviso dado al Centro de Justicia el juez Mauricio Olave comunica la condena que Luciano Pitronello deberá cumplir por haber colocado una bomba en una sucursal bancaria en junio de 2011. El joven anarquista perdió una de sus manos y la visión de uno de sus ojos al estallarle encima el artefacto explosivo. Hace más de una semana que tiene permiso de estar bajo arresto en la casa de su madre, luego de que el veredicto del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal lo absolviera del delito terrorista y en cambio lo condenara solo por la tenencia ilegal del artefacto explosivo, por daños y por adulteración de una placa de patente. Por estos tres ilícitos el juzgado le dicta una condena de 4 años y 6 meses de presidio. En atención a la irreprochable conducta y a un informe favorable de Gendarmería, el tribunal concede a Pitronello el beneficio de la libertad vigilada durante 6 años.

Pitronello abandona el Centro de Justicia a bordo de un furgón de carabineros.

Jueves 16

Un fuerte contingente policial desaloja a primera hora las dependencias de los liceos céntricos capitalinos Darío Salas, Miguel de Cervantes y Confederación Suiza, que permanecían ocupados desde hacía una semana, tras una orden del alcalde de la comuna, Pablo Zalaquett. En el Liceo Cervantes la desocupación se realiza en relativo orden, dejando a 38 estudiantes detenidos, mientras que en el Darío Salas se registran enfrentamientos entre agentes policiales y estudiantes, que oponen resistencia al operativo, con un total de 40 detenidos. En el liceo Confederación Suiza, en tanto, también se registran enfrentamientos, sin que la policía entregara el número oficial de detenidos. Los desalojos fueron ordenados por el alcalde Zalaquett luego de fracasar una reunión con los representantes de los estudiantes, destinada a mantener operativos los colegios. El jefe de la prefectura de Santiago, coronel Víctor Tapia, da a conocer la cantidad total de detenidos, que suma 139, de los cuales 94 son menores de edad y 39 adultos. Estos últimos son trasladados hasta la Tercera Comisaría de Santiago. No obstante, los secundarios anunciaron que tras el retiro de los efectivos policiales apostados en los establecimientos volverán a ocupar sus colegios, mientras que la policía indica que desplegará un fuerte operativo para evitar nuevas ocupaciones. El coronel Tapia sostiene que todo se ajusta al procedimiento normal, instando a los estudiantes a abandonar pacíficamente los colegios, pero como hicieron caso omiso se procede a los desalojos, los que se efectúan sin exceso de la fuerza, precisa. Además, el oficial resalta que los funcionarios fueron atacados con piedras.

Un grupo de estudiantes del liceo Amunátegui de Santiago inicia una ocupación improvisada del establecimiento, bloqueando los accesos con algunas mesas y sillas. Sin embargo, deciden salir del establecimiento tras la llegada de la directora y los carabineros, e inician una marcha que termina con tres personas detenidas. Paralelamente, alumnas del Liceo 7, ubicado en la comuna de Providencia, deciden tomarse el edificio tras una votación que cuenta con el apoyo de 470 estudiantes. Sin embargo, llega personal de Fuerzas Especiales de Carabineros y procede a desalojar la toma. Por otra parte, en una acción casi simultánea, carabineros desalojan a las alumnas del liceo Carmela Carvajal. Se informa que son 43 las detenidas en ambos operativos, las que son llevadas hasta la Décimo Novena Comisaría de Carabineros para su control de identidad.

Viernes 17

La Corte Marcial determina revocar la condena de presidio dictada contra Miguel Patricio Jara Muñoz, cabo primero de carabineros acusado de ser el autor del disparo que en 2009 dio muerte al comunero Jaime Mendoza Collío durante un desalojo. El tribunal de Segunda Instancia determina que el actuar de Jara fue “en legítima defensa” y bajo ese argumento el uniformado es absuelto de los cargos que lo mantenían cumpliendo desde el 11 de noviembre de 2011 la pena de cinco años y un día de prisión. “¿Qué otra defensa cabía a un carabinero que, sólo como estaba, se ve atacado por un grupo indeterminado de personas que le lanzan piedras y le disparan con escopeta en dos oportunidades?”, cuestionan los jueces Juan Cristóbal Mera, Joaquín Billard, Felipe Cunich, Juan Hargous y Juan Carlos Gutierrez. El 12 de agosto de 2009 funcionarios de las fuerzas especiales y del GOPE de carabineros desalojaron la toma al fundo San Sebastián en Ercilla por orden de fiscalía de Angol. Fue durante ese procedimiento que el cabo Jara percutió cuatro disparos al aire mientras

perseguía a un grupo de personas que momentos antes le habían lanzado objetos contundentes, según relata el fallo. Un quinto disparo impactó por la espalda a Jaime Mendoza y salió por el pecho, causándole la muerte en el lugar al comunero que participaba de la toma al predio. Con este fallo, la Corte Marcial desestima las versiones de otros mapuches que aseguraron que ninguno de ellos estaba armado. En cambio, el tribunal consideró que Jara “fue víctima de una emboscada”.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile se toma la Casa Central, ubicada a pocos metros del palacio de La Moneda en la Alameda. Es así como esta emblemática manifestación se suma a la serie de tomas que se han desarrollado en establecimientos secundarios de educación, los que han sido desalojados por carabineros dejando decenas de detenidos. Si bien no ha existido un pronunciamiento oficial respecto de las motivaciones para iniciar la ocupación del edificio, la tónica se ha relacionado al rechazo de la denominada “Ley Hinzpeter”, la reforma tributaria, la solicitud de terminar con la administración municipal de la educación primaria y secundaria y la gratuidad de la educación, entre otras peticiones.

Estudiantes del liceo José Victorino Lastarria, de la comuna de Providencia, deciden tomarse el establecimiento luego de una votación llevada a cabo que contó con el apoyo cercano al 70% de los liceanos. A su vez, las fuerzas especiales de carabineros nuevamente desalojan el liceo Carmela Carvajal tras haberlo retomado las alumnas. Las estudiantes denuncian una excesiva violencia por parte de personal policial. Paralelamente, con un total de siete detenidos –según estimaciones de los mismos estudiantes– finaliza una marcha y velatón pacífica realizada por los alumnos del INSUCO N° 2 en el centro de Santiago. La finalidad del acto es prender velas en molestia por el actuar de las autoridades del establecimiento educacional, quienes determinaron la expulsión de ocho alumnos por el intento –según ellos– de toma del establecimiento, además de “revolucionar a sus compañeros”.

Sábado 18

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, critica la ocupación de la Casa Central del plantel y pide a los dirigentes estudiantiles devolver el inmueble que es monumento histórico. “Lamento mucho que un grupo de estudiantes se haya tomado la Casa Central. Les hemos dicho a los dirigentes estudiantiles que depongan la toma, sobre todo porque estamos actualmente llevando a cabo un proyecto de restauración y remodelación de la Casa Central para celebrar bien nuestros 170 años, y esta situación claramente complica el proyecto”, dice Víctor. En 2011, la Casa Central estuvo ocupada cerca de siete meses y solo hace poco tiempo se terminó de restaurar la fachada del plantel, que quedó dañada después de dicha toma. Debido a la condición especial del recinto, el rector nunca ha pedido que haya un desalojo cuando se han producido tomas.

Cerca de 200 representantes de organizaciones mapuches –de desde la región Metropolitana hasta Los Lagos– se reúnen en el fundo La Romana, de Ercilla, propiedad del agricultor René Urban, el que está ocupado ilegalmente por miembros de la comunidad indígena de Temucuicui desde hace casi un mes. La jornada se inicia con un desalojo del predio por parte de carabineros, lo que deriva en incidentes. Poco más tarde, un grupo ataca a efectivos policiales que custodiaban el vecino fundo Montenegro –también de Urban–, donde uno de los carabineros resulta herido con perdigón en una mano. Tras los incidentes el fundo La Romana vuelve a ser ocupado por los mapuches, y se da inicio a la reunión de dos días convocada en el lugar. Según el dirigente de la llamada Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, en la cita se discuten temas de organización mapuche, entre

ellos la relación con el gobierno y un eventual proceso de movilización por la reivindicación de tierras. Héctor Urban, hijo del propietario del predio, critica que se permita la realización del encuentro en los terrenos que considera suyos y que no se concrete un desalojo definitivo. “Carabineros cumple una orden de desalojo y esta gente vuelve a ingresar, y vuelve a ingresar. No hay cómo sacarlos. Así es cuando se sobrepasan todos los límites y se pierde el Estado de Derecho en una zona”, dice.

Domingo 19

Nuevamente se registran incidentes en el fundo La Romana de Ercilla, en medio de la jornada de encuentro de dirigentes mapuches del país. Dos carabineros resultaron lesionados con impactos de perdigones mientras cumplían funciones de protección al interior del mismo. El hecho ocurrió cuando personas se acercaron al lugar donde los carabineros custodiaban el fundo Montenegro –vecino a La Romana– y les dispararon con una escopeta. Ante esto, los efectivos intentaron detener a los atacantes, momentos en que los mapuches que participaban del encuentro en La Romana se abalanzaron sobre los carabineros lanzando todo tipo de elementos y utilizando armas de fuego. Esto derivó en el uso de bombas lacrimógenas, prolongándose los disturbios por tres horas. No se registraron detenidos.

Lunes 20

En diversos puntos del territorio ancestral mapuche, comunidades haciendo uso del legítimo derecho de manifestarse, movilizarse y protestar ante la incapacidad del gobierno de resolver, han reiniciado las movilizaciones para recuperar tierras ancestrales. Tres comunidades ingresan al fundo Santa Catalina del sector Palihue de Padre las Casas, donde personal de las fuerzas especiales de carabineros se encontraba custodiando el lugar. Asimismo, miembros de la comunidad Liempi Colipi ingresan a un campo en el sector de Curacautín, reclamando un fundo de al menos 500 hectáreas. A su vez, comunidades de Carahue-Tirua se toman las oficinas de Forestal Mininco en Temuco, con el objeto de denunciar a la opinión pública la intransigencia por parte de esta empresa sobre las legítimas demandas territoriales que tienen estas comunidades sobre el fundo La Suerte, del sector Casa Piedra, que tradicionalmente les han pertenecido. Por su parte la empresa solicita la acción de las fuerzas especiales de carabineros para desalojar las oficinas. Indican: “Reivindicamos este predio de 2 mil hectáreas para ochenta de nuestras familias, avalados por documentos que desde 1880 establecen que estos terrenos indígenas no podrán ser comprados ni enajenados por algún particular. Sin embargo, estos desde las últimas décadas pasaron a manos de Forestal Mininco, siendo nuestras comunidades marginadas de ancestrales actividades productivas y religiosas”. Agregan: “Tal como lo hemos venido realizando, mantendremos la ocupación de este predio hasta que nuestro legítimo reclamo consiga una respuesta concreta por parte de las autoridades correspondientes”.

Efectivos de las fuerzas especiales de carabineros desalojan a un grupo de alumnos que nuevamente se tomó el liceo Confederación Suiza, en el sector céntrico sur de la capital. La policía intervino de inmediato con la finalidad de expulsar a los jóvenes, quienes se resistieron y atacaron con piedras a los uniformados. Los muchachos acusarán que los policías procedieron con violencia excesiva durante el operativo que dejó una cantidad indeterminada de detenidos. A su vez, estudiantes del Instituto Nacional vuelven a tomarse el establecimiento en repudio por la presencia de un bus

policial al interior del recinto, lo cual es calificado como una “ocupación” de los uniformados, situación que no se registraba desde los tiempos de la dictadura. Por lo anterior, efectivos de las fuerzas especiales, con la orden del alcalde Pablo Zalaquett, proceden al desalojo. El operativo culmina con cerca de cien alumnos detenidos. Se registra además que alumnas del liceo 7 de Providencia, junto a estudiantes del liceo Lastarria, marchan por la avenida Providencia rumbo a la Corporación Educacional Municipal de esta comuna en repudio por los desalojos ordenados por el alcalde Cristián Labbé. A la improvisada marcha se suman alumnos de los liceos Carmela Carvajal y Jorge Pedro Alessandri, en una manifestación donde destacan jóvenes con el torso desnudo y en ropa interior, como una forma de demostrar que están “desnudos ante la represión de carabineros”, según indican leyendas escritas en sus cuerpos. La caminata se realiza en completa calma, siendo custodiada por personal policial hasta el edificio de la Corporación Municipal, donde se reúnen con la directora de Educación, con quien fijan una nueva cita con la eventual presencia del alcalde Labbé. Paralelamente, la CONES presenta un compendio con sus demandas al gobierno. El documento fue elaborado en los últimos meses en discusiones realizadas en diversos establecimientos educacionales, donde la principal exigencia tiene que ver con la desmunicipalización de la educación pública. Básicamente los secundarios proponen y demandan la creación de un sistema nacional articulado de educación estatal y gratuita, coincidiendo con la propuesta presentada hace unos meses por la ACES.

Tras cuatro días de toma, alumnas del liceo Carmela Carvajal vuelven a clases. No obstante, este retorno está marcado por las protestas de un grupo de apoderados, quienes manifestaron su descontento en contra de las ocupaciones hechas por los menores. En una manifestación realizada en el frontis de la municipalidad de Providencia, los apoderados exigen al alcalde Cristián Labbé el resguardo de la educación de sus hijos ante una eventual toma del establecimiento.

La Ley Longueira que se discute en el senado está generando la oposición generalizada de diferentes sectores de la ciudadanía chilena y los pueblos originarios. Esta iniciativa, que entrega de manera gratuita y a perpetuidad el patrimonio pesquero a 7 familias industriales está cerrando la libre competencia de las pequeñas y medianas empresas pesqueras, las cuales serían expulsadas del sector pesquero si se aprueban las cuotas individuales transferibles de pesca. Por esta razón, pescadores artesanales, pequeñas y medianas empresas pesqueras, estudiantes, sindicatos, organizaciones de medioambiente, de consumidores y pueblos originarios conforman la Alianza Ciudadana por la Defensa del Mar y contra la Ley Longueira. En el lanzamiento de la alianza se plantea como principal exigencia el reconocimiento de la propiedad del Estado sobre los recursos hidrobiológicos. “El Estado debe reconocer su dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción”, señalan en una declaración pública. El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, afirma que “no podemos seguir luchando aisladamente. Nuestra sociedad necesita de la más amplia alianza de los sectores sociales para avanzar en los cambios que implican profundas reformas. El intento gubernamental, altamente ideologizado, liderado por el ministro de Economía Pablo Longueira de entregar de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces a siete de las familias más ricas del país, las cuales controlan a través de cuatro de los conglomerados industriales el 92% de las cuotas de pesca, significará la apropiación monopólica de la renta de 743 millones de dólares que generan anualmente las pesquerías chilenas”. “Este nuevo subsidio al gran empresariado y al segmento más rico del país constituye una burla a las demandas de aumento del salario mínimo, las exigencias de educación gratuita y de calidad, de salud pública decente, el derecho a la vivienda digna o el mejoramiento de las jubilaciones”, señala el director de Ecoceanos.

Martes 21

El Centro de Alumnas del Liceo 1 de Santiago “Javiera Carrera” y la Corporación de Padres y Apoderados (CORPADE) anuncian la presentación de una querella contra los y las funcionarios de las fuerzas especiales que –acusan– agredieron sin razón a un grupo de estudiantes cuando volvía de la marcha desde la Plaza de Armas a su colegio, en la calle Compañía, Santiago. Romina Altamirano, presidenta del centro de alumnas, acusa que la policía detuvo a catorce jóvenes, de las cuales dos sufrieron lesiones por golpes, una de ellas una fractura dental y golpes en la cabeza. La dirigente asegura que las estudiantes afectadas no cometieron desorden alguno al ser abordadas por carabineros, y señala que muchas de ellas ni siquiera tienen 14 años “Esperamos que las autoridades se hagan presentes en lo que respecta al accionar de carabineros. Es una vergüenza que en este momento tengamos que tener alumnas en estas condiciones para poder recién dejar encargo a las autoridades de lo que está sucediendo”, dice Altamirano. Las jóvenes sobre las que versa el presunto abuso policial son detenidas junto a la apoderada de una alumna de octavo básico, Lumi Urra, quien denuncia humillaciones y actos impropios de connotación sexual por parte de la policía. “A mí junto a las niñas mayores de 18 años se nos hace desnudar. Las niñas van tranquilas, sin piedras, sin capucha, y son igual violentadas y abusadas por carabineros de Chile”, relata Urra, señalando que “las mujeres de fuerzas especiales son bastante violentas con las niñas”. “Te dan vuelta y después te dicen que te saques el sostén y se los pases a ellas directamente. Es una intención de humillar a las alumnas y a los apoderados que estaban ahí en ese momento. Es una agresión humillante y sexual, de todas maneras”, comenta la madre.

Ángel Muñoz y Marcelo Carreño, ex alumnos del INSUCO Nº 2 que fueron expulsados junto a seis compañeros por un supuesto intento de toma violento del establecimiento, inician una huelga de hambre en el acceso principal del liceo. En concreto ellos exigen ser reintegrados al liceo luego de haber sido expulsados en medio de enfrentamientos durante una toma, además de la suspensión de la condicionalidad a otros 200 sancionados tras el mismo episodio. A su vez, estudiantes intentan tomarse nuevamente el edificio del Instituto Nacional, ubicado en el sector céntrico de la comuna de Santiago, produciéndose enfrentamientos con carabineros. En Providencia, secundarios se reúnen en la Plaza de La Aviación para marchar rumbo a la municipalidad. Se trata de alrededor de 700 alumnos de los cinco liceos emblemáticos José Victorino Lastarria, Carmela Cavajal, 7 de Niñas, Jorge Pedro Alessandri y Tajamar. Los movilizados entregan una carta al alcalde de la comuna, Cristián Labbé, pese a que la intención de los secundarios era sostener una reunión con el edil en medio del conflicto por los desalojos que la autoridad ha ordenado. La marcha concluye con disturbios aislados en esquina de Carlos Antúnez con Pedro de Valdivia, donde un grupo de estudiantes intenta tomarse la vía, siendo dispersados rápidamente por carabineros.

La FECH ratifica con un 74% de aprobación la toma de la Casa Central y su presidente, Gabriel Boric, llama a los universitarios del país a sumarse a las movilizaciones. Gabriel Boric señala que esta determinación democrática ayuda en el respaldo a los secundarios y confirma que 21 carreras han paralizado sus actividades. En esa línea, el dirigente estudiantil llama a los universitarios del país a sumarse a las movilizaciones. Respecto a los secundarios, el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, confirma que se retirarán los efectivos de carabineros que permanecen al interior de los colegios de la comuna. El presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, Gabriel González, califica al anuncio del edil como un triunfo del movimiento estudiantil y adelanta que se tomarán el establecimiento una vez que sea entregado por la policía uniformada.

Miércoles 22

Los padres del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío llegan hasta la corte suprema para entregar una carta donde piden que el proceso judicial por la muerte del joven de 24 años se revise cuanto antes, ser absuelto el único condenado por su asesinato el 12 de agosto de 2009, en la comuna de Ercilla. Esto ante la decisión unánime de la corte marcial de revocar la condena a 5 años y un día en contra del cabo de carabineros, Miguel Patricio Jara Muñoz, acusado de disparar contra el comunero mapuche por la espalda. Sin embargo, los jueces del tribunal de alzada castrense consideran que “Jara fue víctima de una emboscada” por parte del grupo de comuneros que ese día ocupaban el fundo San Sebastián. Los jueces en el fallo aseguran que tras una serie de disparos del cabo Jara, la quinta ráfaga de su escopeta produjo la muerte del comunero y aluden a estudios de derechos respecto a la “agresión inminente” que permite “impedirla u repelerla” y destacan que el Ministerio Público había dado la orden para desalojar el fundo y detener a los autores, no teniendo otra opción que hacer uso de su arma de servicio. Por estos razonamientos es que el abogado de la familia Mendoza Collío, Lorenzo Morales, estima que “esos requisitos de legítima defensa no tienen parangón alguno en la justicia chilena y por eso mismo creemos que es un fallo forzado, donde la corte marcial solo acoge las pretensiones y declaraciones del cabo Jara, que son contradictorias en sí mismas, y por eso creemos que la corte suprema va a remediar esta situación”, dice el jurista. Por su parte, la madre de Jaime Mendoza, María Collío, llega junto a sus familiares hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia vestida a la usanza mapuche y pide “justicia para mi hijo”. María Collío enfatiza que “el cabo Jara no puede no cumplir una condena, porque a mi hijo me lo mataron. El no hizo nada y me lo mataron”, resalta la mujer. La familia del comunero Jaime Mendoza Collío tiene 15 días de plazo para presentar ante la corte suprema un recurso de casación en contra de la sentencia de la corte marcial.

Personal de carabineros que resguarda el Instituto Nacional en Santiago se retira del establecimiento tras firmar un acta con rectoría. Cerca de una hora más tarde los alumnos reinician una nueva jornada de ocupación. El rector de la institución, Jorge Toro, señala que se retomará la jornada de manera normal, dejando horas para la reflexión y el análisis de la situación, en busca de una respuesta en conjunto con los alumnos. Asimismo, Toro indica que se conversaría de manera interna el tema de la mantención o no de la toma por parte de los alumnos.

Un grupo de estudiantes secundarios y universitarios llega hasta el Ministerio de Hacienda. Cinco secundarios se encadenan en las afueras exigiendo que se analice la reforma tributaria que propuso el gobierno. Camila Hernández, vocera de la CONES, señala que los “estudiantes secundarios nos vemos obligados a encadenarnos en las dependencias del Ministerio de Hacienda para hacerle un llamado al gobierno a que se pronuncie frente a las demandas del movimiento estudiantil y las demandas sociales”. A juicio de Hernández, esta reforma solo beneficia a una minoría del país y no “a todo el pueblo chileno”. Además llama al ministro de Educación para que “se haga cargo de las demandas del movimiento estudiantil, porque no estamos de acuerdo con el lucro en las instituciones y es por eso que estamos presentes”. Hasta el lugar llega personal de carabineros, para dialogar con los estudiantes y que salgan de forma pacífica.

Unos 50 estudiantes, tanto secundarios como universitarios, se toman la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Educación de Santiago. Un grupo de manifestantes se queda en el interior del edificio, mientras que otros tres se encadenan en las afueras de este. Uno de los dirigentes lee un comunicado en donde explican el por qué de sus manifestaciones. Allí se señala que ven “que los ricos y poderosos de este país no nos dejan otra alternativa. Denunciamos el circo sostenido por las

dos derechas gobernantes, que impulsan una serie de iniciativas legislativas elaboradas a espaldas de la sociedad que no hacen sino profundizar el modelo de la desigualdad”. A lo que se añade: “lo manifestamos el año pasado y hoy ante el tímido reajuste tributario que proponen los poderosos. Las y los estudiantes demandamos la renacionalización de todos los recursos naturales de nuestro territorio para financiar los derechos de nuestro pueblo”.

Alumnos del Instituto Nacional encabezados por el presidente de centro de estudiantes, Gabriel González, se toman la sede capitalina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los jóvenes llegan pacíficamente hasta el recinto, ubicado en Enrique Delpiano 2058, sin que los funcionarios del lugar les impidieran el ingreso. Al respecto, González dice que “entramos en forma pacífica para que el organismo internacional sea un vehículo para emplazar a las autoridades de gobierno, a de una vez por todas buscar una solución definitiva a los problemas de la educación en Chile, que tienen movilizados a los estudiantes tanto de la enseñanza media como universitaria”. Agrega que todos conocen los detalles de las movilizaciones, como lo es una educación municipalizada de calidad y gratuidad total para la enseñanza superior e igualitaria para todos.

La CORPADE y alumnas del Liceo 1 llegan hasta La Moneda para denunciar, a través de una carta, agresiones y vejaciones sexuales en contra de estudiantes de varios establecimientos educacionales. Las acusaciones se dan en el marco de las movilizaciones llevadas a cabo por parte del estudiantado durante la jornada del pasado martes 21. La vocera de CORPADE, Dafne Concha, denuncia además que durante el desalojo del Liceo Betzabe Hormazabal de Alarcón, comuna de San Miguel, realizado hace dos semanas, un grupo de alumnas fue sometido a toques por parte de carabineros.

Jueves 23

En Temuco es detenido José Huenchunao, uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Estaba en libertad condicional desde julio de 2011, luego de cumplir gran parte de una pena de diez años por el caso Poluco-Pidenco. La PDI lo arresta porque mantenía una orden de detención vigente desde 2005, emitida por la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta lo requiere por la Ley de Seguridad del Estado, por un ataque incendiario en la hacienda de LLeu LLeu en 2001.

Estudiantes concretan una nueva jornada de manifestaciones, dispersas en varias comunas, y que culminan con 139 detenidos en la capital. La idea es “descentralizar las marchas”, convocando a manifestaciones en 17 comunas de Santiago. Según carabineros, solo se concretaron doce. De este modo, secundarios y universitarios buscan insistir en sus demandas de desmunicipalización directamente a las puertas de los edificios consistoriales. Según estimaciones policiales, se registra una convocatoria total de 10 mil personas. Si bien no contaban con autorización de la Intendencia Metropolitana, en todos los casos los carabineros no intentan dispersar a los manifestantes, sino que los encauzan para que el tránsito no se vea afectado. Sin embargo, en Santiago, Providencia y Ñuñoa se generan enfrentamientos entre grupos de manifestantes y carabineros. También se producen daños al inmobiliario público en los alrededores de la municipalidad de Providencia. En total, 18 uniformados resultan lesionados. En las regiones se registran marchas en Antofagasta, La Serena, Talca, Valdivia y Concepción. Todas, salvo la primera, derivan en disturbios. El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dice que la convocatoria muestra la “falta de representatividad” de las manifestaciones”, ya que el número de manifestantes es bajo. En esa línea, el presidente de la

república, Sebastián Piñera, señala que “hay nueve instituciones que están en tomas, menos del 0,1%. Y si bien escuchamos con mucha atención a ese 0,1% también oímos a ese 99% que quiere volver a clases”. La vocera de la ACES, Eloísa González, replica que “suena bastante paradójico que quienes deciden en minoría nos tilden de minoría, cuando lo que vimos en las calles es que este movimiento no está muerto” y califica a la convocatoria como un triunfo. El presidente de la FECH, Gabriel Boric, dice que mientras el gobierno “sigue apostando a la división, a la deslegitimación y al desgaste del movimiento, universitarios y secundarios le respondemos con unidad y movilización”. En tanto, la ACES califica a los disturbios como “aislados”.

Viernes 24

Se realiza en el centro de Santiago una manifestación en conmemoración del primer aniversario de la muerte del joven Manuel Gutiérrez. La columna de personas se traslada hasta la casa central de la Universidad de Chile en un acto cultural, donde hay música, baile y una velatón. Posteriormente, se decide continuar con una marcha hasta la calle Londres 38, continuando con los actos. Es en ese lugar donde el hermano de la víctima, Gerson Gutiérrez, se dirige a los presentes para agradecer el apoyo y critica la acción de carabineros tras la muerte de su hermano, ya que el funcionario policial que habría disparado el arma mortal aún no ha sido investigado. A su vez, se registran barricadas e incidentes en el cruce de las calles Errázuriz y 5 de Abril, en Villa Francia, y en el de Macul con Grecia, lugar donde está ubicada la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. En ese punto se registraron fuertes incidentes debido a que los manifestantes lanzaron piedras y otros proyectiles a transeúntes y autos en movimiento. Carabineros detuvo ahí a tres personas, trasladadas hasta la 18° Comisaría. Además, en Talca también se unen a la conmemoración de la muerte de Manuel Gutiérrez con una marcha por las principales arterias de la ciudad, la que finaliza con incidentes menores. Recordemos que hace un año, el joven, que atravesaba por un sector donde ocurrieron incidentes entre estudiantes y carabineros tras una jornada de paro convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), murió luego de recibir un disparo realizado por un funcionario de la institución.

Sábado 25

Las y los mapuches que se encuentran en la toma de la sede chilena del UNICEF inician una huelga de hambre a 30 días de la ocupación del organismo internacional. Según Mawlén Huenchu, una de las mujeres que se encuentra en la toma junto a su hija, la medida extrema busca visibilizar “la indolencia de este organismo, UNICEF, hacia las urgencias y necesidades del pueblo mapuche. Hemos sido inflexibles con nuestras demandas hacia el sistema Naciones Unidas, estando en conocimiento de que el Estado tiene una guerra desigual con nosotros, ya que ellos usan sus armas en contra de nuestros niños ancianos y mujeres”. La vocera, integrante de la Alianza Territorial Mapuche, explica que se tomarían acciones más radicales en protesta para denunciar la criminalización de la demanda mapuche. Cabe destacar que cuatro personas adultas y una niña se encuentran en la toma.

Nuevamente se registran disturbios entre fuerzas especiales y estudiantes del Instituto Nacional, lugar en donde los alumnos tomaron la calzada y encendieron barricadas. Respecto a esto mismo, los jóvenes al interior del Instituto Nacional y en la casa central de la Universidad de Chile señalan que los carabineros atacaron a los estudiantes sin provocación alguna. El lugar es rodeado por

carabineros, miembros de las fuerzas especiales, quienes deben utilizar el carro lanza aguas para dispersar a los jóvenes. Por su parte, el vocero metropolitano de la ACES, Pablo Toro, repudia el actuar de la policía uniformada, afirmando que carabineros habría actuado con violencia y arrojado bombas lacrimógenas sin mediar provocación.

Domingo 26

Estudiantes que mantienen tomada la casa central de la Universidad de Chile despliegan una bandera chilena gigante en el frontis de esta sede. Sobre ella escriben la frase: “Educación pública gratuita y de calidad”. Esto se suma a la manifestación llevada a cabo por estudiantes en junio pasado, cuando extendieron el pabellón patrio con la frase “Educación gratuita y de calidad” en el edificio Costanera Center. Además, en octubre de 2011 diputados de oposición desplegaron una bandera en el Congreso Nacional con la leyenda “Educación libre, digna y gratuita”, una acción rodeada de polémica.

A tres días de llevarse a cabo el paro comunal en Calama demandando recursos permanentes del cobre como compensación por los daños sociales y medioambientales que provoca en esa ciudad la actividad minera, los habitantes de la Tierra de Sol y Cobre optan por radicalizar las protestas y tomar en forma indefinida la vía ferrea que saca el cobre de la ciudad. Los bloqueos se extienden en diversos puntos del ferrocarril, donde los habitantes colocan elementos contundentes con el fin de impedir el paso del tren, aumentando la presión al gobierno para que conceda las demandas exigidas por los calameños, algunas de las cuales incluso formaron parte de las promesas de campaña de Sebastián Piñera, quien en el marco de su visita a la ciudad reconoció que la capital loína merece “trato especial”. “Invito a todos los chilenos a entender que en Calama hay cerca de 30 mil trabajadores de otros puntos de el país. Que ellos mismos le cuenten cómo es Calama, cómo encuentran nuestra ciudad. Somos el patito feo de Chile, dando tanta riqueza al país. No estamos pidiendo limosnas, pedimos lo que es justo”, señala el dirigente de la Asamblea Ciudadana, Luis Rozas. A los diversos puntos tomados por los ciudadanos acude un fuerte contingente de carabineros, registrándose una cifra aún no confirmada de detenidos, incluyéndose el dirigente sindical de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y recientemente electo miembro del directorio nacional de la CUT, Jedry Véliz, el dirigente estudiantil Marco Rudolffi y el candidato a concejal Darío Quiroga, quienes fueron derivados hasta la comisaría ubicada en la calle Granaderos.

Lunes 27

Con la intención de adherirse a las movilizaciones estudiantiles, alumnos del Liceo “Santiago Bueras y Avaria”, de la comuna de Maipú, se toman el establecimiento ubicado en Capellán Benavides 2321. De acuerdo a informaciones policiales, una veintena de jóvenes ingresó al local para proceder a su ocupación en forma pacífica. Los jóvenes de esta forma se sumaron al conocido petitorio, en el que se pide la desmunicipalización de la educación y que esta sea de calidad y gratuita.

Un grupo de trabajadores de la educación, específicamente docentes agrupados en la Escuela Sindical Permanente, se toman la SEREMI de Educación Metropolitana en el centro de la capital. Con diversas consignas, los manifestantes ocupan en forma pacífica el edificio ubicado en San Martín 642 en apoyo al movimiento estudiantil. La vocera de los manifestantes, Rocío Herrera,

señala que son cerca de 50 trabajadores de la educación, entre profesores y funcionarios administrativos, los que realizan esta acción para “demostrar que los estudiantes secundarios no están solos en su lucha”. Además, Herrera realiza una fuerte crítica a la forma en que el gobierno se toma las manifestaciones, con “represión y violencia, e incluso abusos sexuales por parte de la policía”, y agrega que han demostrado por todos los medios ser un movimiento fuerte. Luego de una hora de ocupación pacífica y de un previo acuerdo con carabineros, termina la toma, para luego iniciarse una marcha por la calle San Martín, que continua por Paseo Huérfanos y el Paseo Ahumada, donde los manifestantes se trasladan hasta la casa central de la Universidad de Chile.

Vecinos de la Villa Portales, de Estación Central, Región Metropolitana, inician una protesta en la carretera General Velásquez por demoras en la reconstrucción de departamentos tras el terremoto de 2010. En el lugar arman barricadas, en la primera pista de circulación que dirige al sector norte de la capital. Gonzalo Órdenes, vocero de los vecinos, señala que han tenido problemas desde el terremoto ocurrido en 2010. Se trata de cinco edificios que quedaron con daño estructural, y pese a los fondos entregados por el gobierno para repararlos, la solución se ha quedado entrampada por problemas administrativos. Incluso el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) aumentó en un tercio el total del dinero destinado a la reconstrucción de estos departamentos. Sin embargo, hace dos años que no se han realizado las gestiones para llevar a cabo esta tarea. Los vecinos reclaman que el municipio ha declarado desierta la licitación para la reparación de las estructuras, trámite que se podría demorar incluso seis meses más. Son más de quinientas las familias afectadas por este problema, que se mantienen en la incertidumbre y con el miedo de que sus edificios sufran más daños, ya que aún se sienten vibraciones y crujidos con el paso de los vehículos o la ocurrencia de sismos menores.

Los usuarios del transporte público realizan una manifestación espontánea por causa de la falta de buses en la comuna de Providencia. Un centenar de personas se toma la calle y bloquea el tránsito por avenida 11 de Septiembre, a la altura de Luis Thayer Ojeda, durante la hora punta matinal. El hecho provoca la falta de buses –por espacio de 20 minutos– del recorrido C10, que cubre el trayecto expreso desde Tobalaba a Lo Barnechea, y que durante el horario de punta matinal debe mantener una frecuencia de un bus cada cinco minutos. Según la empresa, el retraso se debe al alto grado de congestión que se vive a esa hora en Los Conquistadores, atochamiento que tiene, al menos, a dos buses del recorrido literalmente “atrapados”. A eso se suma el hecho de que la manifestación complica aún más a los buses que se dirigen al sector, generando más retrasos. Consultado al respecto, el coordinador del Transantiago, Patricio Pérez, indica que independiente de que se trate de imponderables, “lo importante es que la empresa debe tener capacidad de reaccionar frente a situaciones inesperadas como ésta”. Añade que Transantiago se encuentra negociando con los municipios de Providencia y Las Condes la generación de “bahías de espera” para aparcar buses que estén destinados a responder a episodios de congestión.

Para manifestar su repudio a la construcción de la Central Hidroeléctrica “Alto Maipo”, alrededor de 300 personas marchan por el paseo Bulnes hasta la Alameda. Principalmente sindicatos de areneros y organizaciones sociales en contra del megaproyecto encabezan la jornada, que culmina con la entrega de una carta en La Moneda dirigida al presidente de la república, Sebastián Piñera. Se trata de una comitiva de representantes de los sindicatos areneros de Río Maipo, Puente Alto, Buin y San Bernardo, y de la Coordinadora Ciudadana de los Ríos de Maipo, quienes marchan con el apoyo de la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas. En ese contexto, el secretario general de todos los sindicatos de areneros del Maipo, y representante del Centro Cultural y Social Pro Defensa del Río Maipo, Renato Becerra, explica que de concretarse la cuestionada central se puede

provocar el desabastecimiento de agua para gran parte de la región.

Areneros del río Maipo llegan hasta el palacio de La Moneda para manifestar su rechazo al proyecto de la transnacional norteamericana AES Gener, que pretende entubar dicho afluente. A través de una carta entregada en distintos ministerios que tienen que ver con la aprobación del proyecto, piden su anulación. La construcción de la Central Hidroeléctrica “Alto Maipo”, desarrollada por AES Gener, contempla introducir los tres afluentes del río Maipo –los ríos El Yeso, El Volcán y el Colorado– en un túnel de 67 kilómetros que pasaría por debajo del Parque Nacional “El Morado” e iría a devolver las aguas al río a la altura de El Manzano. La inversión considerada es de 700 millones de dólares, cifra que incluye al túnel y habilitar a las centrales Alfalfal II y Las Lajas. Si bien se dice que en su conjunto aportarían 531 MW al Sistema Interconectado Central, el promedio del caudal mensual que lleva el río permitiría que solo aporte 128,61 MW de electricidad. Juan Sáez, presidente del sindicato de areneros de la ribera sur del río Maipo, cuenta que se “oponen porque va a modificar el arrastre de sedimentos. El material va a quedar estancado arriba y nuestra fuente de trabajo va a ser fuertemente afectada”. Para que la central funcione tendrán que haber 2 millones de metros cúbicos de agua dentro del túnel, o sea, el equivalente a tres veces el Estadio Nacional.

Representantes de Amnistía Internacional, la red de organizaciones no gubernamentales Acción, Greenpeace, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), voceros de la CONFECH y de los trabajadores del Cobre se reúnen en la Plaza de Armas de Santiago para continuar con las actividades de rechazo a la “Ley Hinzpeter”, que con orígenes en el ex subsecretario de Bachelet, Felipe Harboe, y potenciada por el actual Ministro del Interior, establece un aumento de las penas para quienes ocupen instituciones, corten calles o marchen sin autorización. El proyecto de ley fue recientemente aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas del Parlamento –donde se le hicieron algunas modificaciones aún desconocidas para la ciudadanía– y ahora deberá verse en la sala de la Cámara de Diputados. Como el gobierno le quitó la urgencia hace un par de semanas, es probable que su tramitación se dilate mucho más de lo que podría haber demorado mientras estuvo con carácter de “suma urgencia”. Felipe Ramírez, secretario general de la FECH, indica que es necesario recalcar que esta ley “apunta a combatir la movilización ciudadana y sobre todo a los sectores más radicalizados, como el movimiento estudiantil secundario, los subcontratistas del cobre, trabajadores de la construcción, la Unión Portuaria, entre otros. Ellos serán los principales afectados, ya que han salido a la calle y generado un ambiente de conflicto para imponer sus demandas”. Para el presidente de la CTC, Cristián Cuevas, esta ley solo busca restringir la acción de protesta social ciudadana, que en un país construido sobre la desigualdad social es legítimo. “Lo único que genera derechos, democracia, participación es que el pueblo se movilice. Yo interpelo a la oposición a actuar con grandeza, ya que esta ley pone más candados a la democracia que quiere entrar en curso y eso los trabajadores lo rechazamos”, señala.

Los dirigentes de la comunidad Wente Winkul Mapu, de Ercilla, señalan que cinco de sus miembros recluidos en la cárcel de Angol, entre ellos Daniel Levinao y Paulino Levipán, inician una huelga de hambre en la cárcel de Angol. Levinao y Levipán, condenados por homicidio frustrado y porte ilegal de armas de fuego, exigen la rebaja de condena para uno y la anulación del juicio para otro. Ambos fueron imputados por hechos ocurridos en noviembre de 2011, cuando fue atacada una caravana forestal y luego un helicóptero donde se trasladaba una unidad del GOPE junto al general jefe de la novena zona de carabineros, Iván Bezmalinovic. Luego del juicio oral, los comuneros fueron sentenciados a más de 11 años de prisión, por lo que decidieron iniciar esta huelga de hambre. La información es confirmada por el *werkén* de la comunidad Wente Winkul

Mapu, Luis Melinao, quien añade que a las exigencias se suma la petición de desmilitarizar las comunidades mapuche, además de las demandas de reivindicación de tierras.

Martes 28

El aumento de la convocatoria de las marchas estudiantiles respecto de las últimas ediciones se destaca en la jornada de movilización convocada por la CONFECH, los secundarios, el Colegio de Profesores y la CUT, en el marco de las movilizaciones que se han realizado en las últimas semanas. Sin embargo, grupos de exaltados provocan desmanes en las calles luego de los actos. Según cifras de carabineros, hay 171 detenidos a lo largo del país. El mayor número de ellos se registra en Temuco. Allí son 59 los aprendidos, tras la marcha que convoca a unas 800 personas. En Valparaíso, 6 mil personas integran una caravana desde la Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia, donde se desarrolla un acto artístico. Cuando la jornada termina, un grupo lanza piedras, bombas de pintura y una bomba molotov a los carabineros. Hay 28 arrestados y tres policías lesionados. Un panorama similar se vive en Concepción. Tres mil personas marchan hasta la Plaza de la Independencia. Una vez que termina la actividad, hay desmanes afuera de la Universidad de Concepción, donde se detiene a 30 jóvenes. Además, un carabinero resulta con fractura de rodilla. En Puerto Montt, donde no son habituales los disturbios, hay 31 detenidos luego de que la marcha –en la que participan estudiantes y pescadores– concluyera en la Plaza de Armas, con 3 mil 500 participantes. En Talca, 200 escolares lanzan piedras a la policía, la que arresta a doce. Dos carabineros quedan con lesiones. También hay disturbios en Punta Arenas. Allí exaltados arrojan pintura a la intendencia, lo que deja seis detenidos. En Antofagasta, hay tres aprendidos y se lanzan botellas de pintura a vehículos policiales. En La Serena se registran barricadas y los desordenes duran dos horas, con un saldo de tres arrestados. En Valdivia, la marcha de 3 mil manifestantes termina con dos detenidos. Noam Titelman, presidente de la FEUC, dice que al menos 130 mil personas participarían en la marcha y asegura que “el movimiento sigue vivo, porque nuestras convicciones siguen intactas”, añadiendo que “la ciudadanía no volverá a la pasividad”. Aprovecha la oportunidad para criticar al presidente de la república, Sebastián Piñera, por su silencio ante las demandas estudiantiles, asegurando que las dos veces que ha intervenido públicamente al respecto ha sido “para atacar al movimiento”.

La Alianza por la Defensa del Mar se une a la masiva marcha ciudadana por los derechos a la educación pública, gratuita y de calidad realizada en Santiago y en todas las ciudades chilenas. Frente a la tramitación que se realiza en el Senado, el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero Artesanal y miembro de la Alianza por la Defensa del Mar, Nelson Estrada, indica que “con los 700 millones de dólares que el gobierno de Piñera está regalando a siete familias de la industria pesquera se solucionaría en gran parte el problema de la educación en Chile, en forma más eficaz que con la reforma tributaria”. Patricio Olivares, presidente de estos pescadores de Queule, sostiene que “solidarizan con los estudiantes, ya que si el Estado administrara las cuotas de pesca en Chile se podrían generar dineros para cubrir temas en educación”. Las organizaciones de la alianza recorren las calles de Santiago junto a los miembros de la Secretaría de Medio Ambiente de la FECH y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de Chile, con un lienzo donde se señala: “Los Peces son de todos los chilenos. El Mar nos puede dar salud, vivienda y educación gratis. No a la privatización de las pesquerías. No a la Ley Longueira”. En tanto, en La Araucanía, dirigentes del Sindicato de Pescadores y Buzos Artesanales de Queule asisten a la marcha que congrega a profesores, estudiantes secundarios y universitarios en Temuco.

Un fallo sin precedentes arroja la Tercera Sala de la Corte Suprema, reconociendo que la autoridad de la salud de Atacama había procedido de manera ilegal al calificar al proyecto Castilla de solo “molesto” y no de “contaminante”. La decisión supone la inviabilidad de la termoeléctrica más grande de América Latina, y de su puerto asociado, proyectos que pretendían emplazarse en la región de Atacama, a kilómetros del pueblo de Totoral, comprometiendo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud y a la autodeterminación de los habitantes del territorio. El fallo es histórico en tanto aplica preventivamente la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, reconociendo que el actuar ilegal, motivado por presiones del poder ejecutivo y de la empresa alemana brasilera EON-MPX, titular del proyecto, generó dictámenes que comprometían derechos fundamentales de la ciudadanía. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización que patrocinó la causa que originó este fallo, señala: “Antes que nada debemos felicitar la convicción y la valentía de la comunidad de Totoral, que se mantuvo unida pese a las presiones de múltiples sectores, y de los pescadores que rechazaron las ofertas de negociación, contrato en mano, que les ofrecieron los abogados Soto, Tapia y Poblete, pagados por la empresa. Sin duda esta actitud fue la que posibilitó que hoy estemos festejando la decisión de la corte suprema”. En tanto, en Copiapó y en la comunidad de Totoral se vive un espíritu de fiesta, que celebra la vida, la fuerza de los valores y de las convicciones comunitarias, y sobre todo el espíritu de dar la pelea aunque todas las condiciones estén en contra.

Cerca de 500 agricultores de distintas comunas de La Araucanía afectados por hechos de violencia se reúnen en Victoria para iniciar una marcha hasta la plaza de Temuco, cuyo principal objetivo es pedir al gobierno el fin de los atentados en la zona. En el trayecto de 71 kilómetros llevan en camiones maquinaria agrícola quemada en ataques para graficar las pérdidas por este tipo de hechos, las que estiman en 5 mil 500 millones. Una vez en Temuco, el presidente de la Asociación Gremial de Agricultores de Victoria, Nicolás Danze, entrega al gobernador de Cautín e intendente de La Araucanía, Miguel Mellado, una carta dirigida al presidente de la república, Sebastián Piñera. En la misiva de tres carillas y siete puntos se plantea la obligación del gobierno de garantizar la seguridad de los habitantes de la región, y que el Estado debe responder económicamente por las pérdidas derivadas de los ataques, ya que ante la situación en la zona las empresas no aceptan asegurar sus bienes, afirma. La vocera de los agricultores, María Gloria Neveillán, afirma que las pérdidas que han dejado los atacantes en la región no solo se cuantifican en maquinaria destruida, sino en terrenos que no pueden producir por las tomas y en gente que ha dejado de trabajar la tierra, o que la abandonó por temor a represalias.

Un operativo policial violento deja a tres comuneros mapuche heridos tras ser desalojados por la fuerza desde el ex fundo La Suerte, predio de Forestal Mininco que reivindican comunidades mapuche de Carahue y Tirúa como tierras indígenas por legítimo derecho. Según informa Moisés Vilches, dirigente de la Asociación Newen Pu Lafkenche, un enorme contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó al predio mientras familias mapuches se encontraban pacíficamente en el lugar, siendo violentamente amedrentados con balines de metal y perdigones. Como resultado de este brutal ataque, tres comuneros sufrieron heridas de diversa consideración; en tanto otros tres –uno de ellos, menor de edad– permanecen detenidos en la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial sin conocer los delitos que se les imputan. Cabe señalar que durante el mismo procedimiento los carabineros destruyeron completamente una *ruka* mapuche, destinada a uso religioso comunitario. El ex fundo La Suerte es reclamado por ochenta familias pertenecientes a las asociaciones Newen Pu Lafkenche y Pu Lafkenche, cuyos dirigentes han accedido a instancias de diálogo con representantes de Forestal Mininco sin recibir respuestas concretas que den término a la

marginación productiva y religiosa a que han sido sometidos por décadas. “Con fusil en manos es muy difícil que logremos conversar. Esto nos obliga a tomar otros caminos, porque a la lucha por nuestras tierras la mantendremos”, dice el dirigente Moisés Vilches.

Miércoles 29

Unos 40 miembros de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha) “Chile a Luchar” nuevamente se toman las dependencias de la UDI en Santiago reclamando “promesas incumplidas”. Desde la sede gremialista de Suecia 286 –en la comuna Providencia–, el dirigente Benedicto Cuello dice que durante su campaña en ese mismo lugar el presidente de la república se comprometió a entregar soluciones a todos los deudores habitacionales del país. Con esta medida de presión piden que desde la UDI gestionen la llegada de alguna autoridad para dialogar y así deponer la toma; la novena que contabilizan los representantes del partido. Pese a la ruidosa protesta y a las pancartas instaladas desde balcones y ventanas, el trabajo al interior del inmueble no se ve mayormente alterado. El grupo es vigilado atentamente por carabineros, que finalmente proceden a desalojarlos, deteniendo a 22 mujeres y cinco hombres, quienes son trasladados a la 19º Comisaría de Santiago.

En Santiago, la directiva nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG) junto a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) y las directivas provinciales de Valparaíso, Rancagua y Santiago se trasladan hasta la ex penitenciaría en representación de todas las ramas de la institución, para protestar y exigir el cumplimiento de tres puntos solicitados para mejoras en la gendarmería. El primero es la asignación de riesgos con mayores beneficios para los funcionarios, el segundo la obtención de una mayor capacitación para los gendarmes y el tercero la profesionalización en la institución, tres compromisos que fueron firmados por el presidente Piñera el 10 de enero de 2010, y que, según denuncian, se han mantenido en constantes tramitaciones. Es por esto que los funcionarios y oficiales anuncian que de no resolverse los problemas iniciarán una escalada que los podría llevar a un paro nacional.

Un grupo de encapuchados protagoniza enfrentamientos con carabineros de las fuerzas especiales en la Universidad Católica “Silva Henríquez”, que se encuentra en pleno centro de Santiago. La situación se inicia luego de que los manifestantes instalaran barricadas en la intersección de las calles Carmen con Tarapacá, a metros de un servicentro Copec, siendo contenidos por personal uniformado. Luego los sujetos queman una bandera chilena y lanzan una bomba molotov contra carabineros, lo que los lleva a ingresar a la casa de estudios utilizando un carro lanza aguas y lanza gases. La situación es controlada luego de aproximadamente un hora, resultando producto de la acción policial dos personas detenidas.

Que se resguarde su derecho de educarse es lo que un grupo de 40 estudiantes de los liceos Carmela Carvajal, Lastarria, Siete y Alessandri piden a la directora de la Corporación de Educación de Providencia, Karla Frauenber. La funcionaria asegura que se les dará una pronta solución. Para los secundarios la protesta “vulnera la democracia interna” de los colegios, pues las tomas se validaron con votación, afirma Tamara Castro, presidenta del centro de alumnos del Carmela Carvajal.

Los presos políticos de la comunidad Wente Winkul Mapu, del Lof Chekenco Paulino Levipan Coyán, quienes son Daniel Levinao Montoya, Héctor Ricardo Nahuelqueo Nahuelqueo y Rodrigo Montoya Melinao, y su vocero Eric Montoya Montoya, comunican a opinión pública nacional e

internacional lo siguiente: “Cumpliéndose el tercer día de huelga de hambre, manifestamos con fuerza nuestro descontento por la injusta condena de nuestros *peñis* Daniel Levinao y Paulino Levipan, lo que consideramos un fallo discriminatorio, racista y político, con que el Estado busca arrancar la idea de recuperación de nuestro territorio y bajar nuestra justa lucha. Nosotros como presos políticos mapuche seguiremos resistiendo y luchando contra el sistema capitalista opresor e inhumano, seguiremos luchando contra quienes tienen usurpado el territorio y llegaremos hasta las últimas consecuencias para lograr justicia y verdad para nuestra causa, demostrando con ello nuestra inocencia. Por tanto solicitamos: La anulación del juicio de Paulino Levipan y Daniel Levinao. La aplicación del Convenio 169 y convenios internacionales que Chile ha suscrito. Fin a la utilización de testigos protegidos en causas mapuche. No más allanamientos en comunidades mapuche y poner fin de inmediato a la violencia policial ejercida sobre niños, mujeres y ancianos. Queremos la desmilitarización del territorio mapuche. Libertad a todos los presos políticos mapuche y la devolución del territorio a nuestras comunidades. Hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche, a todos los pueblos hermanos, a las personas conscientes, a las organizaciones sociales y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales a que apoyen nuestra justa causa. Porque ni el encarcelamiento, ni la muerte detendrán nuestra lucha por la libertad y territorio de nuestro pueblo nación mapuche”.

Menor convocatoria y más hechos de violencia caracterizan al paro comunal de Calama, el tercero en 14 meses, organizado por la Asamblea de Ciudadanos, que reclama recursos permanentes para la comuna de 150 mil habitantes por causa de la extracción de cobre. Los incidentes comienzan durante la marcha de 10 kilómetros entre el centro de Calama y la carretera a la mina de Chuquicamata, vía que es cortada por más de dos horas. Los manifestantes, 3 mil para los organizadores y mil 500 para carabineros, colocan rocas, piedras, neumáticos encendidos, carros de supermercados y señaléticas para hacer las barricadas. La columna es encabezada por el alcalde Esteban Velásquez y el diputado Marcos Espinosa, e integrada por estudiantes, comerciantes, profesores, mineros y dirigentes vecinales, entre otros. Incluso durante una hora se sientan sobre la vía, provocando una congestión vehicular de varios kilómetros de extensión. La protesta no altera la producción de Chuquicamata debido a un plan de contingencia de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). Los trabajadores son escoltados por carabineros. Velásquez califica la manifestación como “un éxito” pese a que la convocatoria es menor a los paros de 24 horas del 31 de junio y el 31 de agosto de 2011 –10 mil y 5 mil participantes, respectivamente–. Los servicios públicos, la locomoción y el comercio operan con normalidad. “En los colegios municipales la inasistencia llega al 70%”, dice Luis Garrido, gobernador de Lota.

Jueves 30

El *lof* –clan– Rofwe Weke Che Ñi Aunkinko, mediante un comunicado, denuncia el hostigamiento que la policía chilena le aplica, y particularmente la persecución hacia el *machi* –líder espiritual– Fidel Tranamil. Indica que la policía civil llegó hasta el domicilio de la autoridad tradicional amedrentando a él y su familia con helicópteros que sobrevolaron la comunidad mientras vehículos de la policía de civil ingresaban al interior en busca del *machi* y de varios integrantes de esta, señalando que seguían órdenes de los tribunales sin especificar nada más, en el marco de una investigación que no dejaron en claro, y que se asume más bien como una conducta amedrentadora, “lo que ha sido la tónica en los procedimientos que se realizan criminalizando a dirigentes de las comunidades mapuche que se encuentran en resistencia”. Por todo ello es que manifiestan su “apoyo a nuestros *peñi* en huelga de hambre, y repudiamos su condena injusta, como también a

nuestros *peñi* –hermanos– y *lamgen* –hermanas– que se encuentran judicializados, cumpliendo cárcel o en la clandestinidad por la nula voluntad del Estado por resolver el fondo de nuestras demandas, que es la restitución del territorio ancestral. Y hacemos un llamado a nuestros hermanos a movilizarse ante lo sucedido, y no esperemos que la huelga avance más días y la salud de nuestros hermanos se deteriore para repudiar su injusta condena y a no olvidar que la resistencia está en las comunidades y que es deber de cada mapuche denunciar las graves vulneraciones que allí ocurren. La lucha por el territorio y la reconstrucción de nuestra Nación no cesará por más militarización, encarcelamiento y represión que el Estado aplique contra nuestra gente, porque no somos delincuentes y nuestra lucha es justa. La resistencia no termina”.

Estudiantes del Liceo de Aplicación protagonizan incidentes con personal de carabineros en el cruce de las calles Cumming y Alameda, en la comuna de Santiago. Según los dirigentes estudiantiles, se trata de cerca de 600 alumnos que sacan parte del mobiliario del edificio ubicado en Huérfanos, donde están de manera temporal asistiendo a clases. La protesta tiene como objetivo repudiar el estado de las dependencias de la sede Ricardo Cumming, que fueron reparadas tras los derrumbes que sufrieron en 2008, a lo que se suman los daños tras el terremoto de 2010. Al lugar arriba personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes hacen uso del carro lanza agua para dispersar la manifestación de los secundarios. Cabe recordar que el Liceo de Aplicación originalmente iba a estar listo en marzo de este año, pero debido a los daños provocados por el terremoto y el incendio en diciembre pasado la fecha de entrega se aplazó al 5 de junio, a excepción del sector quemado, que estaría listo este 30 de agosto, lo que finalmente no ocurrió.

Estudiantes del Internado Nacional “Barros Arana” realizan una marcha pacífica y no autorizada desde el cruce de las calles Matucana y Santo Domingo en Quinta Normal, región Metropolitana. Pese a que la manifestación se desarrolla con tranquilidad, los secundarios son dispersados por fuerzas especiales al llegar a la Alameda, en la calzada de norte a sur. Según un informe preliminar de carabineros, hay seis menores detenidos de los cerca de 200 alumnos que participaron de la protesta, quienes fueron trasladados a la Tercera Comisaría de Estación Central.

Viernes 31

Utilizando el carro lanza agua, carabineros dispersa una manifestación en las afueras de la Universidad de Santiago, luego de que un grupo de estudiantes se tomara la calzada de la Alameda. Según confirma el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH), Sebastián Donoso, unos 200 estudiantes realizan una protesta interna en contra de una nueva política de seguridad que quiere implementar la universidad y que incorpora cámaras de vigilancia. De este modo, un grupo sale del establecimiento y se toma la calzada por unos 10 minutos, por lo que los carabineros actúan dispersando a la gente, la que ingresa nuevamente al recinto de educación superior. Asimismo, el dirigente estudiantil se refiere al motivo de la protesta, diciendo que “los alumnos repudian la instalación de estas cámaras, ya que no estarían ubicadas en lugares susceptibles de robos, sino que se presume que son para vigilar manifestaciones de los estudiantes”. En tanto, tras la intervención de los carabineros, no se registran detenidos, según confirma el dirigente.

Violentos disturbios se registran en las proximidades del Instituto Nacional, precisamente en la intersección de Arturo Prat con la Alameda. Allí, personal de las fuerzas especiales se enfrenta con un grupo de manifestantes. En el lugar se encuentra operando el carro lanza aguas, que intenta

disipar a los desconocidos y apagar las barricadas, instaladas en la calle y la misma vereda de la Alameda. Según los últimos reportes, los manifestantes derriban un poste y lo sitúan en la mitad de la calle Arturo Prat. Testigos de los hechos señalan que todo comenzó tras la aglomeración producto de un acto cultural realizado frente a la Casa Central de la universidad de Chile. Los asistentes a la actividad reclaman un accionar injustificado por parte de carabineros.

Glosario de siglas

ACES	Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios
ANEF	Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
ANOP	Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios
ANSOG	Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes
CAM	Coordinadora Arauco Malleco
CODELCO	Corporación Nacional del Cobre de Chile
CONES	Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
CONFECH	Confederación de Estudiantes de Chile
CORPADE	Corporación de Padres y Apoderados
CTC	Confederación de Trabajadores del Cobre
CUT	Central Unitaria de Trabajadores
FAMAE	Federación Mapuche de Estudiantes
FECH	Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FEUC	Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
FEUSACH	Federación de Estudiante de la Universidad de Santiago
GOPE	Grupo de Operaciones Policiales Especiales
INBA	Internado Nacional “Barros Arana”
INSUCO	Instituto Superior de Comercio
ITL	Identidad Territorial Lafkenche
MOVILH	Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
OLCA	Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
PDI	Policía de Investigaciones
SEREMI	Secretaría Regional Ministerial
UDI	Unión Democrática Independiente
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Chile del Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO).

Coordinador: Juan Carlos Gómez Leyton.

Relevamiento y sistematización a cargo de Roccio Silva Suárez. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS)

Fuentes principales: diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera.

Fuentes secundarias: periódicos Azkintuwe, El Ciudadano, El Siglo y Punto Final; páginas

electrónicas biobiochile, El Ciudadano, El Clarín, El Mercurio, emol.com, Fortín Mapocho, La Opinión, Mapuexpress, olca.cl, Radio Cooperativa, radiodelmar.cl, radio.uchile.cl y terra.cl.